

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y NIVELES DE VICTIMIZACIÓN EN ANTIOQUIA

Informe final

Elaborado por:
Centro de Análisis Político
Universidad EAFIT

Fecha:
21 de abril de 2014



UNIVERSIDAD
EAFIT

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Sergio Fajardo Valderrama – Gobernador de Antioquia

Santiago Londoño – Secretario de Gobierno

Esteban Mesa – Subsecretario de Gobierno

UNIVERSIDAD EAFIT

Centro de Análisis Político - CAP

Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo – CICE

Juan Luis Mejía Arango – Rector

Jorge Giraldo Ramírez – Decano, Escuela de Ciencias y Humanidades

Adriana García Grasso – Directora, CICE

Andrés Casas Casas - Investigador Principal

Nathalie Méndez Méndez - coordinación Metodológica

Santiago Silva- Asistente de Investigación

Con el apoyo de Andrés Preciado

EQUIPO ENCUESTA

INVAMER S.A.S



1. Contenido

Introducción	5
1. Tendencias regionales, nacionales y locales sobre seguridad y convivencia.....	9
1.1. Aproximaciones teóricas sobre la seguridad, convivencia y percepciones ciudadanas	9
1.2. Aproximaciones metodológicas desde las encuestas de victimización y percepción de seguridad	18
1.3. La seguridad en el contexto latinoamericano.....	30
1.4. Seguridad y victimización en el contexto colombiano.....	52
1.5. Seguridad, convivencia y victimización en Antioquia	66
1.5.1 Diagnóstico de Antioquia	66
1.5.2 Diagnóstico de Medellín.....	99
2. Hallazgos de la Encuesta de percepción de la seguridad, la convivencia y los niveles de victimización en Antioquia 2013	117
2.1. Diseño metodológico.....	118
2.2. Caracterización socio-demográfica básica	135
2.3. Perfiles de los antioqueños en seguridad y convivencia ciudadana	146
2.4. Percepción de seguridad	151
2.5. Victimización	184
2.6. Confianza institucional	195
2.7. Convivencia ciudadana	224

2.8. Un ejercicio comparado	228
2.9. Análisis de correlaciones	239
3. Conclusiones y retos para la política pública	258
Bibliografía	276

Introducción

El presente documento muestra los hallazgos que para el departamento de Antioquia en el 2013 se identificaron a partir de la aplicación de una encuesta de percepción sobre la seguridad, la convivencia y los niveles de victimización de la población en el departamento. Este estudio responde a una intención de la Gobernación de Antioquia que se plasma en el Plan de Desarrollo del departamento y que señala la importancia de identificar datos como insumo para complementar y fortalecer los sistemas de información, monitoreo, seguimiento y evaluación de la seguridad y la convivencia en las nueve subregiones.

El texto parte de un esquema analítico de comprensión del fenómeno de seguridad a partir de tres elementos: percepción de seguridad, nivel de victimización y confianza institucional. La selección de estos tres elementos es el resultado de la revisión comprensiva de información secundaria relevante para dar un contexto más amplio a la interpretación de los hallazgos. El diseño del instrumento se orienta a la comparación con los datos disponibles para América Latina, el resto del país, así como para el contraste subregional con datos representativos.

Para alcanzar su objetivo el documento se divide en tres grandes secciones generales. La primera, se ocupa de identificar la literatura clave que ofrece tendencias en materia de seguridad y convivencia a nivel regional, nacional y local. Para esto se exploran conceptos clave como “seguridad ciudadana”, “convivencia”, “victimización” y “percepción de seguridad”, entre otros, utilizados por diferentes agencias internacionales y autoridades locales. Adicionalmente, se

hace una revisión de los contextos de seguridad en Latinoamérica, Colombia y el departamento de Antioquia, enfatizando los cambios en las aproximaciones de seguridad de la región. Para tal fin, se retoman datos y análisis de encuestas disponibles sobre victimización, percepción de seguridad; así como de informes cualitativos y cuantitativos sobre dinámicas y fenómenos de delito y violencia. Se incluye una especial atención por los datos disponibles para Medellín y el área metropolitana, dado el peso significativo que tienen para la muestra departamental.

La segunda sección general se ocupa de mostrar el panorama general del departamento de Antioquia en materia de percepciones frente a la seguridad y convivencia ciudadana, nivel de victimización, confianza institucional y demás temáticas relacionadas, que fueron incluidas en la encuesta.

Los datos de la encuesta establecen las tendencias de los delitos contra la propiedad y la integridad física, pero además analizan algunos aspectos clave de los factores psicológicos producto de la experiencia de las víctimas, la confianza que tienen en las autoridades y en las instituciones en general; sus niveles de disposición a denunciar un delito y la caracterización sociodemográfica que permite buscar factores explicativos adicionales para comprender mejor por qué los ciudadanos manifiestan estas percepciones alrededor del tema de seguridad.

Cabe decir, que a diferencia de esfuerzos previos¹, para lograr la representatividad a nivel departamental se realizaron 2.408 encuestas cara a cara a ciudadanos mayores de 15 años, habitantes de zonas urbanas y rurales de las 9 subregiones del departamento de Antioquia pertenecientes a todos los niveles socio-económicos. La modalidad bajo la cual se aplicó este instrumento fue por medio de una entrevista personal usando un cuestionario estructurado de 176 preguntas.

¹ Las tres mediciones que sobre seguridad ciudadana realizó por vía telefónica la firma Cifras & Productos entre finales de 2008 e inicios de 2011.

Dados los importantes esfuerzos que en materia de medición se han realizado en el país, y dada la necesidad de tomarlos como referencia para la comparación, el instrumento de encuesta se basa en: los formularios de la encuesta de Seguridad y Convivencia en sus versiones de 2003 y 2013 que realiza el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en alianza con el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y la Alta consejería presidencial para la seguridad y la convivencia; así como de la inclusión de preguntas provenientes de la Encuesta Quiénes somos los antioqueños. Agradecemos al DANE y a la Universidad EAFIT por la autorizar el uso de los formularios y de algunas de las preguntas que los componen.

Para recoger los hallazgos, esta segunda sección incluye datos generales sobre las características de los encuestados, seguido de un recuento de algunos aspectos metodológicos y de la muestra de la encuesta. Luego se presentan los datos de percepción de seguridad para Antioquia: sensación de seguridad en el barrio o vereda y municipio, y su cambio respecto al año anterior, seguido de los resultados de las preguntas de la encuesta sobre la relación de los antioqueños con la seguridad y la justicia. A continuación, se describen los datos de victimización directa e indirecta en el departamento, para luego detallar los resultados sobre confianza institucional. En esta sección se hace especial énfasis en las percepciones sobre las implicaciones de un posible proceso de paz, la prevención en jóvenes y las nociones y expectativas frente a la justicia. Finalmente en esta sección, se presenta un ejercicio de análisis de correlaciones de los datos y de comparación de datos de la Encuesta Nacional de Seguridad y Convivencia con esta encuesta.

La tercera sección sintetiza los hallazgos, y su utilidad, a través de algunas conclusiones y recomendaciones, que se desarrollan a través del planteamiento de una serie de retos de política pública organizados a través de las áreas temáticas de la Encuesta.



El Centro de Análisis Político – CAP - de la Universidad EAFIT espera que este trabajo sirva de línea de base comparable con otros casos, para construir series de tiempo sobre el tema en los años que vienen. Se espera que la información y las recomendaciones producto del análisis, puedan ser de utilidad para informar a los ciudadanos; además, de fortalecer la toma de decisiones, la evaluación y ajuste de las políticas públicas sobre el tema en el departamento.



1. Tendencias regionales, nacionales y locales sobre seguridad y convivencia

Con el fin de constituir un terreno de aproximación teórica y empírica a la seguridad y la convivencia, este primer subcapítulo se configura como un esfuerzo por establecer dos herramientas iniciales para el análisis: un marco conceptual para el estudio de la relación entre percepción de seguridad, victimización y confianza institucional; así como, la presentación de diagnósticos provenientes de fuentes secundarias en relación a la situación de seguridad y convivencia en Latinoamérica, Colombia, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín.

1.1. Aproximaciones teóricas sobre la seguridad, convivencia y percepciones ciudadanas

Esta primera parte del texto se centra en presentar las discusiones en torno a términos como “seguridad ciudadana”, “convivencia”, “victimización” y “percepción de seguridad” que son utilizados por diferentes agencias internacionales y autoridades locales que resultan clave a la hora de proveer herramientas teóricas iniciales con las cuales analizar y entender los aspectos de contexto reseñados en este capítulo, y luego presentados en la sección de hallazgos.

Seguridad

En primer lugar, cabe decir que los últimos treinta años han supuesto grandes cambios en la concepción teórica y práctica de *la seguridad*. En efecto, las ideas durante la Guerra Fría giraban en torno a su definición como la defensa de los intereses y soberanía de los estados, bajo la lógica de la “seguridad nacional” (PNUD; IIDH, 2011). Las críticas a este enfoque han girado en torno a tres

supuestos problemas: que la seguridad no puede reducirse a seguridad nacional, que las amenazas a la seguridad no son puramente militares y que no se puede olvidar el componente político que las acompaña (PNUD, 2013, pág. 5). Los cambios en la forma de entender la seguridad han estado explicados en buena medida por la evolución en la naturaleza de los fenómenos causales a los que se ha relacionado como producto, particularmente dada la transnacionalización de las causas asociadas como lo son las redes criminales transnacionales.

Una definición alternativa que ha cobrado popularidad en el periodo reciente es la del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- que define la seguridad como seguridad ciudadana, relacionando los conceptos de seguridad humana y desarrollo humano. Entendida así, la seguridad se define como la condición de vivir sin temor y sin necesidad, e incluye un amplio abanico de amenazas a la garantía de esta condición. En efecto, la seguridad ciudadana resulta un concepto menos amplio que el de la seguridad humana, al menos, en tanto al número y diversidad de las amenazas a las personas. Sin embargo, conserva la integralidad dada la preocupación por “abordar los problemas que rodean a la violencia y el crimen [...] e incrementar un sentido de ciudadanía” (Inter-American Development Bank , 2012). Esta mirada se acerca a la noción de la seguridad personal, que está fuertemente relacionada con las amenazas producidas por el delito y la violencia.

Así pues, el PNUD define la seguridad ciudadana como “la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna” (PNUD, 2013, pág. 5). En tanto se enmarca en una visión amplia del desarrollo humano, la seguridad ciudadana, como es entendida por el PNUD, también se preocupa por las amenazas que constituyen “la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades”, en tanto pueden constituir “obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana” (PNUD, 2013, pág. 5).

De esta forma, considera que “el fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende de la construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva, sostenible y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de las personas” (PNUD, 2013, pág. 6). En este sentido, las políticas de seguridad ciudadana no pueden reducirse a la contención del delito y la violencia, sino deben acompañarse por apuestas integrales que promuevan las libertades personales, bajo un enfoque de desarrollo humano.

En el mismo sentido, el Libro Blanco de la Seguridad y la Convivencia de Medellín (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011), sostiene que, en principio, la seguridad ciudadana se puede entender como una apuesta de dos vías por un tipo de seguridad enfocada en los problemas urbanos. En efecto, la seguridad ciudadana combina elementos de prevención (educación, empleo, cultura) con esfuerzos coactivos (represión y judicialización del crimen). Respecto a la prevención, la seguridad ciudadana busca garantizar derechos ciudadanos y protección de las personas de las arbitrariedades, el delito y la inseguridad. Supone entonces, ante todo, un enfoque de seguridad pública holístico, que integra las complejidades de los problemas sociales y busca aproximaciones sustentadas en los esfuerzos coordinados de diferentes actores sociales.

De igual manera, dicho enfoque considera a la seguridad como “un derecho y un deber ciudadano” (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011, pág. 37). En tanto derecho, es una obligación primaria del Estado, pero como deber, supone una responsabilidad de los ciudadanos. Así, la seguridad es en buena medida determinada por las relaciones establecidas entre las personas y las diversas ramas del poder público (corresponsabilidad). De esta forma, el papel de los ciudadanos en el mantenimiento y promoción de la seguridad pasa necesariamente por la calidad de las relaciones sociedad-Estado y en efecto, de las herramientas utilizadas socialmente para mejorar la confianza ciudadana y legitimidad institucional. La responsabilidad ciudadana y la obligatoriedad estatal

en el asunto de la seguridad están entonces condicionadas al “tejido social propicio a la seguridad y la convivencia” de una sociedad (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011, pág. 37). Ante este reto social, se hace necesario retomar la dignidad humana como una categoría transversal a la apuesta de seguridad ciudadana, que es resultado de medidas que trasciendan a la seguridad física, y se concentra en la protección de la integralidad de los derechos de las personas y los grupos.

Ahora bien, en tanto la seguridad ciudadana se puede entender como un enfoque integral de gestión de la seguridad humana y del desarrollo humano, sus particularidades la hacen más compleja que otras apuestas de seguridad. En efecto, “todo examen de la situación de seguridad de una sociedad contempla dos aspectos básicos: los indicadores de percepción [...] y los llamados indicadores objetivos” (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 129). En suma, la seguridad ciudadana busca combinar la preocupación por la capacidad reactiva del Estado en su función de mantenimiento y reproducción del Estado de Derecho, con las intervenciones dirigidas a la prevención del delito y la violencia, la gestión de la convivencia ciudadana, la medición y seguimiento a la percepción de seguridad.

En este sentido, la nueva relación entre seguridad y democracia en el mundo contemporáneo consiste en un íntimo pero fundamental vínculo entre el Estado y los ciudadanos, del que dependen factores relativos a la reproducción del sistema político en el nivel microsociaL. La seguridad importa para la producción y la reproducción de las democracias en el mundo contemporáneo, en la medida en que cada vez más están en juego las orientaciones racionales, afectivas y evaluativas de las personas frente a las dimensiones del sistema político; sus insumos, productos y los efectos resultantes en la valoración. Como se abordará en la subsección de contexto, la seguridad se ha venido convirtiendo en uno de los temas que más preocupa a la opinión pública, y al que los ciudadanos se muestran cada vez más sensibles.

Convivencia

De manera reciente el concepto de seguridad se ha visto complementado y correlacionado con el concepto de *convivencia ciudadana*, de hecho ya constituyen una frase obligada para las política públicas. Sin embargo existe una ambigüedad en cuanto a su significado, definición y medición. Dadas las limitaciones tan solo se hará referencia aquí a un enfoque particular del concepto de convivencia como mecanismo microsocial.

La convivencia puede entenderse como la preocupación por la naturaleza de las relaciones sociales y las interacciones entre individuos que se dan dentro de una comunidad (Mockus, Murraín, & Villa, 2012). En efecto, supone que muchas de las expresiones que afectan la seguridad ciudadana se pueden explicar en la lógica de conflictos sociales no resueltos y que desencadenan hechos violentos o delictivos. Representa también una apuesta por la prevención, en tanto busca abordar las causas de los fenómenos de inseguridad (Lahosa, 2000). Se asume como un concepto “complementario” de muchas apuestas por estudiar la seguridad ciudadana (Mockus, Murraín, & Villa, 2012); (Corpovisionarios, 2011). La principal ventaja del concepto de convivencia en términos de análisis de los fenómenos de inseguridad es la preocupación por la resolución de conflictos sociales, el estudio de los canales la gestión de los conflictos, y la posibilidad de que su fracaso (o ineficiencia) lleve a expresiones violentas.

Sin embargo, un esfuerzo analítico que desee comprender mejor la naturaleza de la convivencia y las posibilidades de dar cuenta de sus dinámicas en el nivel local necesita comprender que seguridad y convivencia son dos problemas gemelos pues suponen las fuentes del orden social en el nivel intra e interpersonal. En este sentido, la convivencia es la expresión de la sociabilidad en cuatro aspectos clave que subyacen la posibilidad de una vida social sostenible en el tiempo: la confianza, la reciprocidad, la tolerancia, y la legitimidad de las convenciones, normas sociales e instituciones formales que regulan e informan las formas de

resolución de los problemas de interacción personal. La convivencia es el mecanismo microsocial que expresa el verdadero funcionamiento del pacto social que funda a una sociedad democrática moderna en el nivel local.

La manera en que los ciudadanos tramitan los problemas de seguridad y convivencia es un termómetro que permite predecir la eficiencia y eficacia institucional, así como el grado de apropiación de la ley, así como los valores de la democracia y el respeto por los derechos humanos. La relación entre seguridad, convivencia en el nivel local a su vez, permite: observar el grado de armonía entre ley, moral y cultura; las cercanía o la distancia entre los ciudadanos y sus gobernantes, así como el grado de legitimidad de los actores que se involucran en la resolución de los problemas, sean estos públicos o privados, legales o ilegales.

De igual forma, la convivencia permite introducir un elemento novedoso al debate sobre la seguridad, el de la corresponsabilidad ciudadana. Como se mencionó arriba, el entendido de que la ciudadanía también juega un papel importante en la promoción de la seguridad ciudadana y que incluso, se le puede considerar responsable en algún grado de participar de esta tarea, ha tomado fuerza en estas tres últimas décadas. Sin embargo, es importante que la corresponsabilidad no se entienda como un fin de producción artificial, sino como la esencia de la resolución colectiva de problemas de seguridad y convivencia. Por esta razón la corresponsabilidad solo deja de ser un discurso cuando se entiende y se vive como la apropiación local ciudadana de la resolución de problemas de seguridad dentro de los marcos normativos y del rechazo a formas de hecho que desdibujan el rol ciudadano con resultados perversos en el tiempo. De hecho la experiencia muestra lo desafortunado de instrumentalizar a las poblaciones en la lucha contra el crimen o en cualquier otro aspecto de la política pública.

Percepción



Teniendo en cuenta lo anterior y antes de dar el tránsito hacia los aspectos metodológicos de este documento, es fundamental analizar el *concepto de percepción* de la seguridad en tanto este se constituye en la unidad de análisis básica de formas crecientemente populares de medición como lo son las encuestas.

La percepción de seguridad puede entenderse entonces como el nivel de seguridad subjetivo de una población en un contexto social específico (Organizaciones de Estados Americanos, 2012). Se refiere a la forma como los ciudadanos se *sienten* respecto a la situación “objetiva” de seguridad en su comunidad, pueblo o ciudad, y mide el efecto que sobre su propia idea de seguridad tienen: las dinámicas de delito y violencia, la resonancia de hechos de inseguridad en medios de comunicación, canales comunitarios e incluso relaciones de familia y vecinos, así como en las preferencias y en las decisiones que las personas toman.

Este supone entonces un nuevo reto para las políticas locales y nacionales de seguridad ciudadana. En efecto, las intervenciones públicas ya no pueden concentrarse únicamente en contener y reprimir los hechos objetivos, aunque tampoco quedarse en las acciones preventivas, sino acompañar sus esfuerzos de estrategias comunicativas inteligentes que logren mejorar los niveles de percepción de la seguridad ciudadana (Gerber, 2006). De esta forma, “si una política de seguridad busca incidir tanto en la reducción de la actividad delictiva como en la percepción que de ella se tenga, las respuestas deben tener en cuenta las diferentes apreciaciones colectivas sobre el conflicto, y ser capaces de modular las intervenciones públicas sobre la base de su construcción social y de los recursos existentes” (Lahosa, 2000, pág. 50).

Ahora bien, un conjunto de factores determina el comportamiento de la percepción de seguridad en un contexto social específico. De acuerdo al PNUD (2013), pueden resumirse en cinco, a saber: (1) la naturaleza de la cobertura noticiosa de

hechos violentos y delito en la comunidad; (2) la llamada “caja de resonancia de la clase media”, que supone que los delitos patrimoniales cometidos en contra de sectores prósperos de la sociedad tienden a sonar más que los delitos violentos en las zonas marginales; (3) los relatos ciudadanos, es decir, las historias, experiencias e incluso especulaciones y exageraciones que constituyen las interacciones de los miembros de una comunidad respecto a la seguridad; (4) los espacios desordenados, sucios y descuidados de una comunidad pueden llevar a incrementar la percepción de inseguridad de sus miembros; y (5) la desconfianza interpersonal y en las instituciones (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Factores que inciden en la percepción de seguridad de los ciudadanos

Los medios de comunicación. La cobertura noticiosa acerca del delito, marcada por el uso de descripciones, imágenes y relatos, inciden en las percepciones de inseguridad. Si bien lo expuesto en los medios generalmente se refiere a un hecho específico, plantea la probabilidad de ocurrencia para cualquiera que se exponga a situaciones similares. La difusión mediática de un hecho real puede llegar a generar alarmas que superen a la misma realidad. Durante la tercera reunión del Consejo Asesor del presente informe en Cancún, México, el profesor de Harvard Jorge I. Domínguez explicó que en América Latina es tanto el ruido mediático que producen el crimen y la violencia, que pareciera que hay autoparlantes en las calles anunciándolos. Las telenovelas que glorifican a los capos de la droga contribuyen a la distorsión.

La caja de resonancia de la clase media. En la medida en que América Latina ha crecido y que nuevos sectores se han incorporado a la clase media, éstos tienden a verse más afectados por los robos y con más frecuencia son víctimas de secuestro “expres” y otros delitos patrimoniales. La repercusión mediática gana más fuerza en comparación con delitos cometidos en zonas marginales. El fenómeno de secuestro y robos a personas de altos ingresos amplía este fenómeno, con casos emblemáticos de gran impacto social.

Los relatos ciudadanos. Se trata de aquellas narrativas o discursos transmitidos de boca en boca que parten de las experiencias del miedo individual y terminan convirtiéndose en miedos colectivos. La incidencia que pueden tener estos relatos se incrementa según la cercanía que pueda tener la historia con la vida de quien la recibe. Así, condiciones como el mismo género, situación social, edad, ser vecino o familiar, o que ocurra en lugares donde se transita, aumenta los niveles de temor de forma significativa.

Los espacios desordenados. Lugares sucios, oscuros o abandonados aumentan notablemente los niveles de temor. Este tipo de espacios incrementa las sensaciones de vulnerabilidad, tanto de ser víctima como de disminución de capacidad de reacción y escape en caso de serlo; esto impacta más a mujeres y a ancianos.

La desconfianza interpersonal y en las instituciones. Aunque no parecen generar efectos tan inmediatos de alarma como las fuentes anteriores, sí ayudan a profundizar los sentimientos de temor. La desconfianza se arraiga en los individuos que perciben bajos niveles de efectividad en la reducción del delito y bajo desempeño en instituciones encargadas de su manejo —policía, organismos judiciales o gobernantes locales—. A la vez, la desconfianza interpersonal, percibida como bajos niveles de efectividad comunitaria e integración social, generan sentimientos crecientes de amenaza e inseguridad.

Fuente: Tomado de (PNUD, 2013, pág. 69).

Por otro lado, de acuerdo con Timaná (2014), la percepción de seguridad se construye con el pronóstico que “por lo general realizan las personas sobre los

riesgos que deben enfrentar”. Este es un ejercicio determinado por lo que Bruce Schneier denomina “patologías generalizadas”, y que son: (1) las personas exageran los riesgos exagerados pero raros, mientras minimizan los riesgos pequeños pero comunes, (2) las personas tienen dificultades al calcular riesgos que no se ajustan a su situación normal, (3) riesgos personificados son más percibidos que riesgos anónimos, (4) las personas desestiman los riesgos que ellos mismos toman voluntariamente pero sobrestiman riesgos en situaciones que no pueden controlar, y (5) las personas sobrestiman riesgos de los que se está hablando y permanecen en el escrutinio público.

Según Timaná necesario atender los riesgos habituales, comunes y reconocidos, porque estos producen más víctimas que los riesgos fuera de lo común donde las medidas de mitigación no alcanzan a ser evaluadas en su efectividad dada su excepcionalidad, que por lo general disponen de generosos recursos para su atención” (Timaná, 2014, pág. 47). Así mismo, Scheneier propone “realizar acciones conducentes a mejorar la seguridad y hacer que las personas se percaten de ello”. De esta forma, las políticas públicas que aborden los problemas gemelos de la seguridad y la percepción de seguridad, deben realizar “acciones que hagan *sentir* a la ciudadanía segura” (Timaná, 2014, pág. 48).

No obstante existen otros factores tradicionalmente relacionados con el sentimiento de inseguridad, que de acuerdo a Timaná, se pueden destacar como “la desconfianza y temor a la policía, la violencia institucional y la insatisfacción con la justicia” (2014, pág. 55). Así,

“la percepción de seguridad resulta central en cualquier política en materia de seguridad, de allí que puede ser atendida desde diversas acciones; al mismo tiempo, la información que arroja sirve para la formulación de políticas [dirigidas a responder preguntas tales como:] ¿Qué puede hacer un gobernante o un gobierno si la percepción de seguridad es baja? ¿Qué se puede hacer si la seguridad mejoró, pero la percepción no lo hizo? ¿Se puede incidir en la percepción sin necesariamente mejorar la seguridad?” (Timaná, 2014, pág. 125).

En una revisión de diferentes estrategias de atención de la percepción de inseguridad en diferentes países, Timaná (2014) rescata las apuestas por: generar comunicación desde la comunidad, en periódicos comunitarios y medios masivos locales que dan cuenta de las actividades delictivas de la zona desde un enfoque de lucha y superación de la inseguridad; reconstruir sectores deprimidos dentro de las ciudades, invirtiendo recursos en la recuperación de edificaciones, la iluminación de calles y la promoción de actividades económicas como el turismo; la constitución de iniciativas públicas de atención integral de víctimas de delitos, utilizando el apoyo de diferentes agencias para brindar servicios de asesoría jurídica y atención psicológica a las víctimas; el fortalecimiento de las relaciones policía-comunidad a través de la profundización de modelos de policía comunitaria y de redes de apoyo mutuo e información calificada entre vecinos y autoridades locales; y el fortalecimiento institucional sustentado en compromisos de transparencia y rendición de cuentas, depuración de las filas de la policía y atención expedita a las denuncias de corrupción oficial y a las víctimas de abusos de funcionarios.

1.2. Aproximaciones metodológicas desde las encuestas de victimización y percepción de seguridad

Partiendo de las claridades conceptuales presentadas en la sección anterior, es necesario entender que los fenómenos que rodean a la preocupación por la seguridad pública (luego “ciudadana” y después por los asuntos de “convivencia”), no solo se han abordado a través de discusiones teóricas sino que han buscado además buscar formas de “medir” apropiadamente las percepciones de los ciudadanos en torno a la seguridad y convivencia ciudadana.

El desarrollo metodológico más claro en esta materia lo constituyen las encuestas de victimización, que por su versatilidad y potencialidad de réplica se han

posicionado a nivel mundial como el instrumento favorito de captura de percepciones. Este tipo de encuestas son un desarrollo tardío de la utilización de métodos estadísticos que permiten a los gobiernos tomar decisiones socialmente relevantes con una información más detallada y confiable acerca de las características y preocupaciones de sus ciudadanos. Así, este tipo de encuestas constituyen una herramienta fundamental en “el diseño de formas modernas de gobierno para comprender su población y su entorno, y para ofrecer una base de evidencia para el desarrollo de intervenciones por medio de políticas” (UNODC, 2009, p. 10).

En un primer momento, durante las experiencias iniciales de mediados de los años sesenta del siglo pasado, las encuestas de victimización se enfocaban en recolectar datos de fuentes policiales y judiciales. Sin embargo, a mediados de la segunda mitad del siglo veinte, nuevos estudios criminalísticos empezaron a dudar de la suficiencia y confiabilidad de las fuentes de información oficiales. Las primeras encuestas de victimización se realizaron en los años sesenta y setenta como una apuesta por superar estos vacíos.

Las encuestas de victimización del delito han tenido desde entonces el objetivo general de “intentar comprender los delitos que no estaban bien identificados en las estadísticas policiales, [y de convertirse en] una herramienta de investigación para ayudar a identificar aspectos del delito y la victimización que las fuentes administrativas no podían capturar fácilmente” (UNODC, 2009, p. 11). Las encuestas de victimización “son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y su público a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos” (UNODC, 2009, p. 9). En efecto, son utilizadas para mejorar la información sobre los fenómenos de delito y violencia de la sociedad y la relación que las personas establecen con estos. Recoge información que también puede ser utilizada para que los tomadores de decisión diseñen políticas de seguridad utilizando información confiable sobre la situación de inseguridad que viven sus

ciudadanos. En efecto, “la naturaleza, grado y consecuencias de la actividad criminal, así como la percepción del público sobre su propia seguridad son cuestiones que tienen una influencia directa e indirecta sobre la calidad de vida de la gente” (UNODC, 2009, p. 13).

Las encuestas de victimización se concentran sobre todo en medir los delitos que más se relacionan con la experiencia vital de los ciudadanos (Ver **Error! Reference source not found.**). En efecto, permite identificar el impacto de delitos contra su propiedad y delitos o violencia contra su integridad física. De igual forma, estas encuestas indagan por la relación del ciudadano con algunos aspectos clave de su seguridad: su experiencia como víctima y los efectos en su percepción acerca de los factores generadores de inseguridad; la confianza que tiene en las autoridades y los efectos que ésta puede tener en su disposición a denunciar un delito; así como la relación entre aspectos sociodemográficos básicos y formas de victimización e incidencia del delito y problemas asociados con la convivencia, con el fin de hacer comparaciones con otras poblaciones (UNODC, 2009, p. 23).

Tabla 1. Enfoques y objetos de medición de las encuestas de victimización

Enfoque		Objeto de medición
Preguntas sobre el miedo		Medir el miedo al delito y la percepción de inseguridad
Experiencia con el delito		Medir los hechos delictivos y violentos, y la victimización
Seguimiento	para las	Medir delitos de cifras desconocidas o no denunciados y conocer el contexto de las víctimas
víctimas		
Preguntas de actitud generales		Medir las actitudes hacia las instituciones públicas relacionadas con la seguridad, la prevención y atención del delito
Prevención, bienestar y seguridad		Valorar las medidas de prevención del delito, los sistemas de seguridad y las políticas públicas.

Fuente: Elaboración libre de acuerdo a UNODC (2009).

Muchas encuestas de victimización se preocupan especialmente por medir la percepción de seguridad de los ciudadanos, esto es, “medir a qué grado se preocupa la gente por su seguridad personal en situaciones cotidianas, a qué grado les impone límites el miedo a sus oportunidades y libertad de movimiento y cómo manejan las amenazas a su seguridad en su vida cotidiana” (UNODC, 2009, p. 84). Otras utilidades de las encuestas de victimización como herramientas de comprensión de los fenómenos de inseguridad son: medir la magnitud y el impacto del delito y la violencia en una sociedad, evaluar herramientas y entramados legales y ayudar a diseñar políticas públicas más sensibles, realistas y enfocadas (UNODC, 2009, p. 256). Así, una encuesta de victimización busca “conocer información sobre aspectos relacionados con la criminalidad y percepción de seguridad que permitieran a las autoridades competentes tomar decisiones, sobre el control y prevención del delito, así como, estimar la criminalidad real y oculta” (DANE, 2013, p. 8).

En Colombia existen varios antecedentes sobre la aplicación de encuestas de victimización y percepción de la seguridad. En Bogotá, la Cámara de Comercio, aplica la encuesta de percepción de seguridad y victimización desde 1998 “con el fin de establecer los índices de victimización y de denuncia, donde se busca evaluar y dar recomendaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá”. En Cali, “el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, creado en 1995, ha venido desarrollando encuestas de victimización en varias ciudades de Colombia y a su vez coordina y ejecuta el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana”.

Desde el 2006 se realiza la encuesta Cómo vamos en varias ciudades de Colombia con el objetivo de construir indicadores de calidad de vida y del clima de opinión en la ciudad y opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de la ciudad. De igual forma, “permite identificar indicadores clave que miden los niveles de satisfacción así como las opiniones sobre el cumplimiento de los puntos básicos

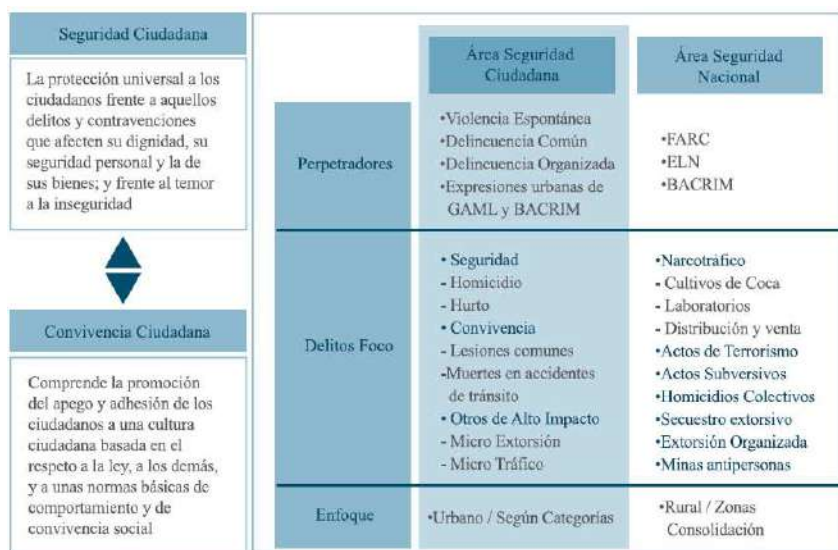
del programa de gobierno de cada alcalde. Actualmente la red hace presencia en 9 ciudades del país y es patrocinada por empresarios, medios de comunicación y academia” (DANE, 2013, p. 18). Así mismo, la Gobernación de Antioquia llevó a cabo tres mediciones sobre percepción de la seguridad en el departamento entre 2008 y 2011.

Las encuestas de victimización parten del entendido de que, aunque tradicionalmente los ciudadanos eran simples receptores de la política de seguridad, “paulatinamente han pasado a ser vistos como poseedores del derecho a ser consultados sobre cuáles son los problemas de criminalidad que más les afectan y los retos a los que el servicio de policía y el sistema de justicia deben poner el énfasis”. Así mismo, en el marco de esta “democratización” de las políticas de seguridad ciudadana, las encuestas de victimización han cambiado el enfoque del criminal al ciudadano, permitiendo “tomar el pulso a la ciudadanía e incorporar sus inquietudes y preocupaciones a las políticas que están destinadas a velar por sus derechos” (DANE, 2013, p. 12).

Así pues, y según el DANE (2013), se puede entender que una victimización se “produce cuando una persona padece de forma directa o mediante amenaza un daño físico, emocional y/o financiero, así, la victimización puede incluir violencia física, violencia sexual, psicológica o el abuso emocional”. De esta forma, se entiende por víctima a la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido un delito del que haya tenido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o vulneración de sus derechos fundamentales. Precisamente en este punto, en la vulneración de derechos fundamentales, es que se “vincula a este sujeto con el Estado, ya que este tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos el goce de sus derechos fundamentales, entre los que se cuenta el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la propiedad, a la seguridad o al libre desarrollo de sus creencias políticas y religiosas” (DANE, 2013, p. 13).

Finalmente, a manera de síntesis es fundamental retomar el enfoque propuesto por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno nacional (PNSC). Para la PNSC, la Seguridad Ciudadana se entiende como “la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad”. Mientras que la Convivencia se entiende como “la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social” (DANE, 2013, p. 14)(Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, pp. 1-2). La gráfica 2 da cuenta del esfuerzo adelantado por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia por describir las áreas de la seguridad y la convivencia que pretende abordar en Colombia.

Gráfica 2. Áreas de la Seguridad y de la Convivencia Ciudadana



Fuente: Tomado de Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (2011).

Por su parte, la Gobernación de Antioquia ha optado por una mirada comprensiva de los diferentes enfoques presentados arriba. En el Plan de Desarrollo 2012-

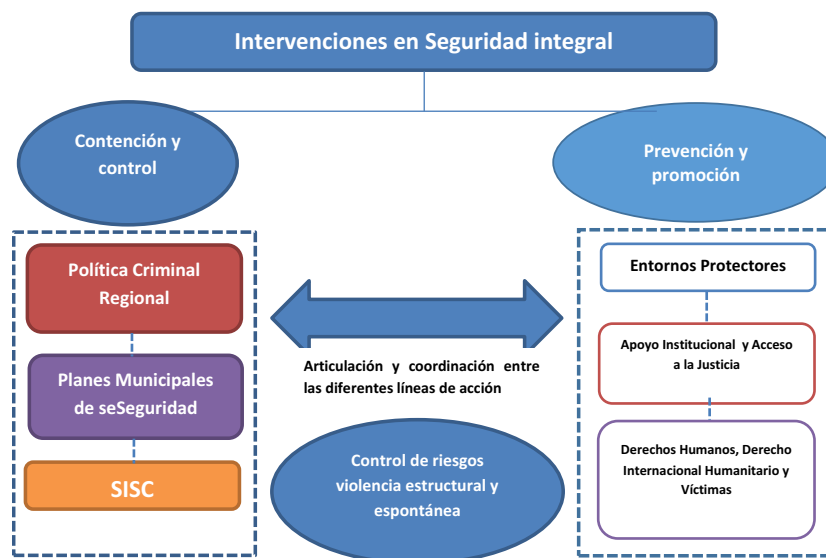
2015: **Antioquia la más educada**, sostiene que su apuesta por la seguridad se sustenta en la “seguridad integral, [que busca abordar las] situaciones relacionadas con la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia (formal y no formal), la profundización de la cultura y el respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la atención integral a las víctimas” (Gobernación de Antioquia, 2012, pág. 1).

Al buscar desarrollar una mirada multidimensional de la seguridad y la convivencia, entiende la seguridad pública como “la producción de condiciones por parte de los agentes estatales (Ejército, Policía, Tribunales, etc.) para mantener el orden público. Es este sentido, el control se ejerce principalmente sobre las dinámicas propias de la confrontación armada, el narcotráfico y el crimen transnacional de alto impacto”. Así, la Gobernación define la seguridad ciudadana como “la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afectan su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad” (Gobernación de Antioquia, 2012, págs. 1-2). La seguridad integral busca entonces soportarse en la prevención de la violencia, la seguridad pública y ciudadana, garantizar el acceso a la justicia, el respeto por los derechos humanos y la reparación a las víctimas.

El Plan de Desarrollo Departamental, **Antioquia la más educada**, en la línea 3 “*Antioquia es segura y previene la violencia*”, se evidencia la integralidad necesaria para las condiciones de seguridad y se propone un trabajo a través de los siguientes componentes:

Imagen 1. Intervenciones en seguridad integral





Fuente: SISC, 2014

La Gobernación ha buscado contener en una misma política pública un eje reactivo y uno de prevención y atención a víctimas, a continuación se enumeran las acciones establecidas en el tema de seguridad:

Imagen 2. Política criminal regional



Fuente: SISC, 2014

La Secretaría de Gobierno con el ánimo de enfrentar la criminalidad y articular las acciones y proyectos, diseñó la Política Criminal Regional (PCR) para priorizar

recursos y esfuerzos en la consecución de objetivos y disminución de las amenazas de seguridad + el fortalecimiento de la institucionalidad local.

Para lograr esto se estableció que era necesario generar procesos en 5 aspectos:

Desde el 2012 se han establecido diferentes espacios de formación y capacitación para los actores de seguridad, administrativos y judiciales municipales como:

- 2 cohortes del Diplomado en Política Criminal dirigido a actores judiciales
- 3 cohortes del Diplomado en Seguridad dirigidos a autoridades de Seguridad en Norte, Nordeste y Oriente. Se tiene proyectado para el segundo semestre de este año realizar la cohorte dirigido a los municipios del Suroeste.
- Foros de microtráfico en el departamento

De la misma manera la Gobernación ha invertido en el fortalecimiento de las capacidades instaladas de la Fuerza pública por medio del Fondo de Seguridad.

Durante estos años la inversión ha estado enfocada en:

- Descentralización y dotación para del GAULA del Ejército en Andes, Segovia y en Yarumal.
- Es esta misma línea fue creado el Gaula Policía Medellín, donde en un trabajo articulado y mancomunado se logró descentralizar sus acciones y sus sedes en Segovia, Santa Rosa de Osos y Cauca.
- Descentralización y dotación de la Fiscalía Anti BACRIM en Urabá
- Dotación para el Batallón de Ingenieros del Oriente con el fin de apoyar la estrategia de desminado humanitario
- Fortalecimiento del parque automotor de la Policía de los diferentes municipios de Antioquia y de la Fuerza Pública – compra de nuevos vehículos y motocicletas y reparación del parque automotor existente
- Suministro de combustible para la Fuerza Pública y la Policía Municipal
- Mejoramiento y adecuación de 5 estaciones y/o subestaciones de Policía en Urabá
- Construcción de nueva infraestructura para la Séptima División del Ejército, la MEVAL y la Fuerza Aérea
- Construcción de un hospital para la rehabilitación de militares víctimas de minas antipersonales

- Fortalecimiento de CCTV en 6 municipios: San Andrés de Cuerquia, Carepa, Chigorodó, Remedios, Segovia y Anorí. Este proceso de fortalecimiento consiste en brindar asesoría y acompañamiento técnico a las administraciones municipales, en la realización de investigaciones y trabajos de campo, formulación de inventarios, construcción de diagnósticos, suministro de información técnica y generación de proyecciones tecnológicas que sirvan de insumo para soportar el proceso de diseño, formulación y gestión de proyectos CCTV. En el proceso de estos 6 municipios se invirtieron \$892'000.000 m.l, sin embargo, a la fecha se ha hecho un acompañamiento sin inversión expresa de recursos a 52 municipios más.
- Como parte del fortalecimiento a las instancias de seguridad y judicialización que plantea la PCR se entregó una dotación cercana a los 800 millones de pesos a la SIJIN de la Policía.

Es así como la PCR ha permitido focalizar los recursos y los esfuerzos en mayores inversiones en Gaulas, Fiscalía y SIJIN que han permitido las capturas y dismantelaciones de estructuras criminales.

Por otro lado con el ánimo de promover y acercar a los ciudadanos las acciones de las instituciones de justicia como Fiscalía, se realizó el programa el Crimen no Paga, el cual se transmitió en 2013 en capítulos de 5 minutos todos los días. El cual permitió contarles a los ciudadanos cómo se logró la captura y judicialización de algunos de los criminales más importantes del Departamento. Además de campañas comunicacionales en contra de la extorsión y el microtráfico.

Se han establecido también espacios de concertación, articulación y seguimiento con la fuerza pública, instituciones de justicia y las administraciones municipales:

- Mañanas de seguridad – todos los miércoles y presidido por el Sr. Gobernador
- Consejos de seguridad – se realiza en los municipios 1 vez a la semana

Conjuntamente se construyó y se implementó el Sistema para la Seguridad y la Convivencia (SISC), que es el sistema encargado de centralizar la información referente a la seguridad y orden público. El propósito de esta herramienta es



fundamentar las decisiones del Gobernador y del Secretario de Gobierno en materia de seguridad, además de permitir avanzar en la consolidación de la política de Seguridad Integral, algunos de sus productos son:

- Informe diario de homicidios (estadístico, chat, tendencias)
- Presentación panorama de seguridad
- Insumos para presentación mañanas de seguridad y consejos de seguridad.
- Trabajos investigativos y establecimiento de estrategias contra el Microtráfico, entre otros.

La Gobernación cuenta también con la “Asesoría en Planes de Seguridad”, con la cual se busca acompañar a los municipios en la formalización de su Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC, el cual consiste en la creación de una ruta de trabajo que debe obedecer a los 5 ejes de la Política de Seguridad Nacional. Por medio de este se busca dejar instaladas cuatro capacidades: el componente de seguridad en el plan de desarrollo municipal, el acuerdo de fondo cuenta municipal actualizado, el decreto del Comité Territorial de Orden Público actualizado y el PISCC vigente u homologado.

A la fecha, 121 municipios tienen su propio componente de seguridad en el Plan de Desarrollo, 115 tienen un fondo cuenta actualizado, 114 un Comité Territorial de Orden Público Actualizado y 113 cuentan con PISCC. De los 125 municipios del Departamento, 70 cuentan con las 4 capacidades instaladas.

Para el año 2014, se aprobaron en el último Comité Territorial de Orden Público inversiones en:

- Mejoramiento de otras 4 estaciones de Policía en Urabá
- Construcción de 5 estaciones y/o subestaciones de Policía en Segovia, Vegachí, Remedios, Olaya y Tarazá
- Contratación de los diseños de otras 9 subestaciones de Policía a construir en diferentes municipios del Departamento
- Co-financiación de proyectos de construcción de subestaciones de Policía en San Carlos y Cañasgordas



- Construcción de infraestructura para la Fuerza Aérea
- Construcción de infraestructura para la Séptima División del Ejército
- Dotaciones para la Armada
- Apoyo en suministro de combustible para la Fuerza Pública y la Policía de los diferentes municipios del Departamento
- Fortalecimiento del parque automotor de la Policía y la Fuerza Pública
- Inversión en un CAI Móvil para el municipio de Yarumal
- Fortalecimiento al programas como Red de Aliados y 123
- Inversiones en tecnología que logren acercar al ciudadano a la Fuerza Pública y la Policía
- Financiación del Sistema de Indicadores para la Seguridad Ciudadana
- Fortalecimiento de CCTV municipales
- Apoyo logístico
- Se tiene presupuestada la cuarta versión del Diplomado en Seguridad Ciudadana que irá dirigido a los municipios del Suroeste Antioqueño. Además de esta actividad, se continuará en el proceso de instalación de las 4 capacidades en los municipios que aún no cuenten con todas y se comenzará el proceso de seguimiento a los PISCC municipales.

Es bajo esta perspectiva amplia de seguridad, que la Gobernación propone el desarrollo de la Encuesta de percepción de seguridad y de victimización como complemento de la información objetiva recopilada y analizada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia del departamento de Antioquia (SISC), adscrito a la Secretaría de Gobierno.

Para resumir los conceptos presentados en las anteriores aproximaciones teóricas y metodológicas, la siguiente tabla expone las definiciones subyacentes a los términos descritos, advirtiendo la integralidad del enfoque de Seguridad y Convivencia propuesto por Antioquia la más educada.

Tabla 2. Resumen conceptual

Concepto	Definición
----------	------------

Seguridad Ciudadana	“la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna” (PNUD, 2013, pág. 5).
Convivencia	La preocupación por la naturaleza de las relaciones sociales y las interacciones entre individuos que se dan dentro de una comunidad y pueden afectar la seguridad de la misma (Mockus, Murraín, & Villa, 2012).
Percepción de Seguridad Ciudadana	Los niveles de seguridad subjetiva de una población en un contexto social específico (Organizaciones de Estados Americanos, 2012). Se refiere a la forma como los ciudadanos se <i>sienten</i> respecto a la situación “objetiva” de seguridad en su comunidad, pueblo o ciudad.
Victimización	Se “produce cuando una persona padece de forma directa o mediante amenaza un daño físico, emocional y/o financiero, así, la victimización puede incluir violencia física, violencia sexual, psicológica o el abuso emocional” (DANE, 2013, p. 13).

1.3. La seguridad en el contexto latinoamericano

Habiendo precisado la complejidad de la interrelación conceptual entre la seguridad, convivencia y la percepción ciudadana, en esta subsección se presentan algunas de las realidades en la región, el país y el departamento. Lo anterior con el fin de establecer un contexto de aproximación empírica a los principales problemas relativos a la seguridad, la convivencia, la percepción de inseguridad y los factores de victimización que en la región lejos de manifestar una profunda diversidad, demuestran que América Latina hoy comparte escenarios muy similares. La sección se nutre de los informes más completos y recientes sobre el tema, y buscan establecer un territorio de contraste y comparación, que será retomado en una de las secciones finales de este informe.

Para iniciar, se debe considerar que América Latina en su conjunto enfrenta un enorme desafío en términos de seguridad ciudadana. En efecto, en la región se presentan unos 100.000 homicidios al año (PNUD, 2013) y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas –ONU- y la Organización de Estados Americanos –OEA- han reconocido este problema, destinando recursos de investigación para realizar diagnósticos y presentar recomendaciones a los países que sufren de estas afectaciones. Se advierte que muchos de los datos que se utilizan aquí para construir el contexto de seguridad y convivencia en América Latina, están limitados por la disponibilidad de la información disponible en las fuentes secundarias analizadas. Por esta razón, los casos por país varían de acuerdo a la disponibilidad de los estudios e informes de investigación utilizados como fuente.

Así pues, la región plantea un desconcertante escenario en el que el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la industrialización parcial de la economía no han supuesto una mejora –todo lo contrario- de los indicadores de seguridad ciudadana. De esta forma, “entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó” (PNUD, 2013, pág. V). Para el PNUD, la violencia y el crimen violan directamente derechos básicos del desarrollo de las personas, al afectar su vida, integridad física y propiedad material.

Por supuesto, el diagnóstico de la región no es completamente homogéneo. El PNUD señala que en algunos países el fenómeno se ha concentrado sobre todo en el aumento de la violencia homicida, mientras en otros, con tasas de homicidio más bajas y estables, se han presentado incrementos exponenciales en otros delitos, particularmente el hurto. Ambas tendencias comparten una consecuencia: han “disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía” (PNUD, 2013, pág. V).

De igual forma, el informe del PNUD (2013) evidencia como los desafíos de seguridad ciudadana de los países latinoamericanos se han encontrado con déficits en la provisión de justicia y seguridad de las autoridades nacionales y locales. Estos problemas se reflejan sobre todo en los altos porcentajes de impunidad de los procesos penales, las crisis de sus sistemas carcelarios y la desconfianza de sus ciudadanos en las instituciones de justicia y de policía.

El Informe de Desarrollo Humano Regional para América Latina 2013 del PNUD parte de la idea de que la inseguridad ciudadana y sus distintas expresiones representan un obstáculo enorme en la región para el goce efectivo de las libertades por parte de la su población. Efectivamente, la percepción de seguridad de la región es comparativamente baja y supone un enorme reto en tanto afecta “la manera como las personas se desarrollan y relacionan con su entorno” (PNUD, 2013, pág. 4).

Las dos amenazas principales para la seguridad ciudadana de los latinoamericanos, de acuerdo al PNUD, son el delito y la violencia. Una diferenciación en tanto no todo delito es violento, ni todas las formas de violencia están asociadas al delito, ya que en que su mayoría, los delitos parecen estar motivados por asuntos económicos, mientras las violencias pueden estarse asociando con otras dinámicas sociales y políticas. Ahora bien, el mencionado informe identifica seis amenazas específicas para la seguridad ciudadana en la región. A saber: (1) el delito callejero, (2) el delito y la violencia ejercidos en contra y por los jóvenes, (3) la violencia de género, (4) la corrupción, (5) la violencia ilegal por parte de actores estatales, y (6) la delincuencia organizada.

En efecto, aunque la delincuencia organizada, particularmente vinculada al narcotráfico, ha sido identificada comúnmente como la principal razón del deterioro de la seguridad ciudadana en América Latina, el PNUD señala que las dinámicas locales, regionales y nacionales de inseguridad son mucho más complejas y requieren de explicaciones más integrales. En efecto, el deterioro de la seguridad

parece ser una combinación e interacción de las amenazas determinadas anteriormente y cuya interrelación explicaría la prevalencia y el incremento de la inseguridad en los países de la región.

Por otro lado, el delito y la violencia pueden generar miedo y desconfianza en las personas que sufren estos hechos, y extensivamente, a las que conocen de los mismos. Así, ambos fenómenos pueden aumentar la sensación de inseguridad de una persona “y hacerla sentirse más vulnerable frente a la posibilidad de ser amenazada en su integridad física o material” (PNUD, 2013, pág. 7). La percepción de seguridad se configura entonces como otro elemento asociado a la seguridad ciudadana que puede afectar las perspectivas de goce de libertades, y por tanto de desarrollo, de las personas. Recientemente Darío Romero (2014) ha demostrado cómo la percepción de inseguridad tiene un mayor efecto en el bienestar de las personas que el que de hecho tiene la ocurrencia efectiva de delitos. En efecto, las víctimas de delitos o violencia –aunque también quienes se enteran de estos hechos- pueden decidir limitar sus movimientos y restringir sus decisiones en tanto se sienten inseguros respecto a algún lugar o actividad. De igual forma, la percepción de inseguridad puede afectar la cohesión social, la confianza de las personas en las instituciones del Estado y promover tendencias de segregación urbana, restringiendo el uso y disfrute del espacio público.

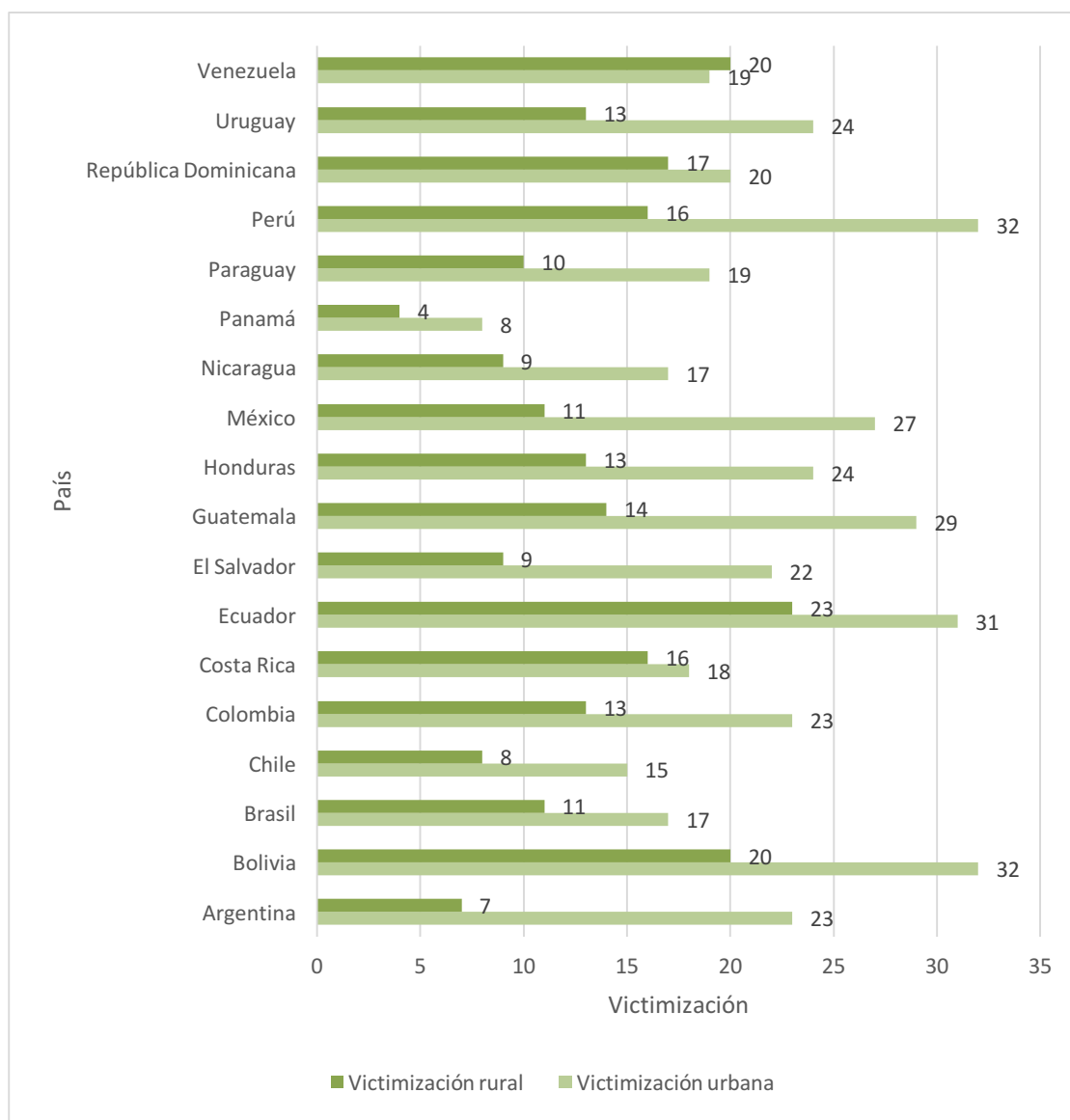
Ahora bien, el PNUD sustenta su estudio de la seguridad ciudadana en América Latina de 2013 sobre tres ideas principales: (1) la seguridad ciudadana y el desarrollo humano mantienen una estrecha relación de retroalimentación, (2) la seguridad ciudadana es un bien público y por tanto corresponde a una responsabilidad principal del Estado, y (3) la seguridad ciudadana requiere una ciudadanía activa que garantice el carácter democrático, incluyente y público de la provisión de seguridad.

La región enfrenta entonces un reto complejo en términos de seguridad ciudadana, ya que de acuerdo al PNUD (2013) América Latina afronta dos

tendencias sostenidas, el crecimiento económico y el incremento de la inseguridad². En efecto, el continuado crecimiento económico de los últimos veinte años en la región ha logrado mejorar sus indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo, aunque sigan siendo altos en la mayoría de países. Sin embargo, se reconoce que, aunque puedan tener relación, los fenómenos de delito y violencia en América Latina superan en su complejidad las meras consideraciones económicas. La Gráfica muestra los porcentajes de victimización por delito y violencia en varios países de América Latina.

² La tasa de cambio del Índice de Desarrollo Humano para Latinoamérica fue en promedio de 5,29 entre los años 2005 y 2012. El valor promedio pasó entonces de 0,683 en 2005 a 0,719 en 2012. Para algunos de los países para los que se tienen datos, delitos como el homicidio y el robo no se han reducido, por lo menos en una proporción similar, a la pobreza. En efecto, de acuerdo al PNUD (2013, pág. 18), mientras la pobreza se redujo a una tasa media anual de 8,76 en Uruguay entre 2004 y 2010, el robo aumentó al 12,7 y el homicidio al 1,17. En Chile, la pobreza se redujo a un ritmo anual de -2,68, pero el robo aumentó al 2,21. En Bolivia, la pobreza se redujo al 5,34 anual, pero el robo aumentó al 2,72 y el homicidio al 7,04. Fenómenos similares se observan en Perú, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.

Gráfica 3. Porcentaje de victimización urbana y rural, América Latina, 2012



Fuente: PNUD (2013).

El informe del PNUD intenta explicar las tendencias delictivas y violentas de la región a partir de cuatro argumentos. El primero sostiene que las mejoras en términos económicos, el ascenso de una nueva clase media y los cambios en los hábitos y expectativas de consumo han chocado con las todavía latentes realidades de pobreza, desigualdad y desempleo, incentivando el “delito aspiracional”. Esto es, “en el contexto de un crecimiento económico fundado en el

consumo surgen individuos o grupos dispuestos a desafiar al orden legítimo y optan por la vía delictiva como forma de vida” (PNUD, 2013, pág. 15). El informe recomienda, para abordar estos riesgos, políticas multisectoriales que atiendan las persistentes desigualdades dentro de las sociedades latinoamericanas. El reto, reconoce, supone la coordinación y la persistencia de las políticas adoptadas.

El segundo, la transformación en las comunidades gracias al crecimiento acelerado y desorganizado de las ciudades. De igual forma, el efecto sobre el riesgo de expresiones criminales asociadas a las fallas en la estructura familiar y el sistema educativo. El informe recomienda atacar los factores de riesgo asociados a la población más joven, con políticas focalizadas para contener la deserción escolar y brindar atención a la descomposición familiar. De igual forma, fortalecer el tejido social, como un espacio de protección y movilidad social, en el que las personas puedan realizarse económica y socialmente por medios convencionales. En este punto es importante recordar que los procesos de desarrollo económico se dan de la mano de procesos cambio cultural, esta es una realidad que muchas políticas sociales desconocen, dejando de lado los procesos de evolución y adaptación en materia de actitudes y valores.

El tercero, el aumento de las condiciones facilitadoras del delito y la violencia, como porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas. El informe clarifica que estas condiciones no se entienden como causales de los fenómenos de inseguridad, pero sí como circunstancias que pueden incentivar algunas de sus expresiones. La contención de los facilitadores de la inseguridad supone el control y la regulación de la tenencia de armas por parte de civiles, junto a campañas que desincentiven su porte y uso. Por otro lado, el abordaje del consumo de alcohol y drogas exige un enfoque de prevención y salud pública por parte de los gobiernos latinoamericanos (Ver Gráfica).

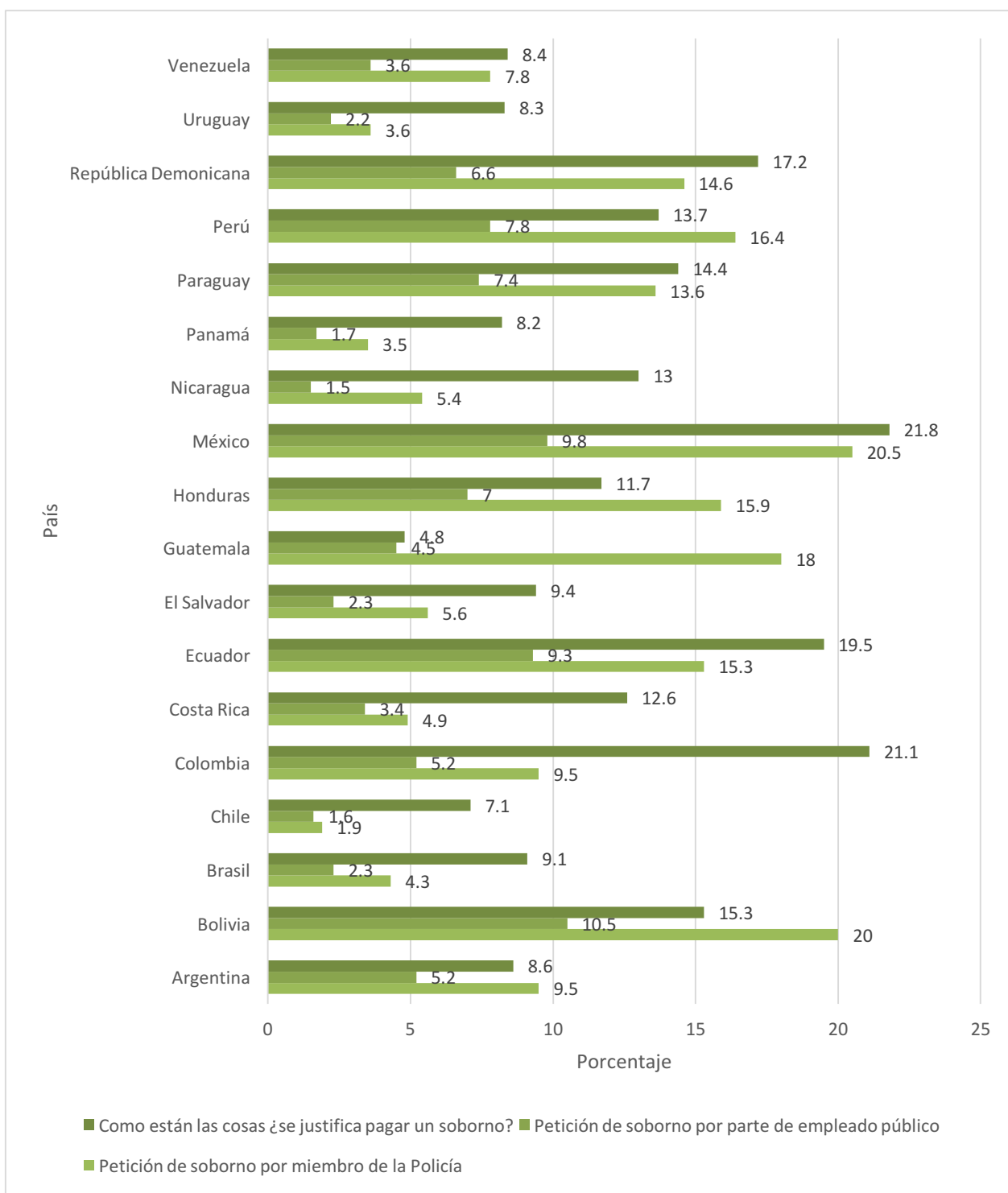
Gráfica 4. Porcentaje de reclusos que afirmaron haber consumido drogas antes de delinquir, 2013

	Argentina	México	Perú	El Salvador	Brasil	Chile
Afirman haber consumido drogas antes de delinquir	30,8	36,0	30,2	15,2	38,3	48,8
Tipo de droga consumida						
Alcohol	62,9	77,3	88,7	79,5	59,4	55,6
Cocaína o “crack”	33,3	18,5	15,7	1,7	50,0	41,5
Marihuana	32,7	13,4	10,5	15,3	22,6	35,4
Pastillas	30,8	8,1	0,8	0,6	0,7	9,5
Inhalantes	0,6	12,1	0,6	2,3	0,3	2,0
Otras drogas	0,6	1,7	0,3	1,7	0,7	1,5

Fuente: PNUD (2013).

El cuarto aspecto tiene que ver con la ocasional incapacidad de los estados latinoamericanos para enfrentar el cambiante escenario de la seguridad ciudadana en sus países. Particularmente, el informe señala fenómenos como la corrupción y la impunidad (Ver Gráfica), igual que la falta de proporcionalidad en algunas penas, asuntos que han minado la confianza y legitimidad de las instituciones públicas, y amenazado su efectividad en la provisión de seguridad. Al respecto, propone adelantar reformas legales que mejores la aplicación de la ley y el establecimiento de políticas que incentiven la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas.

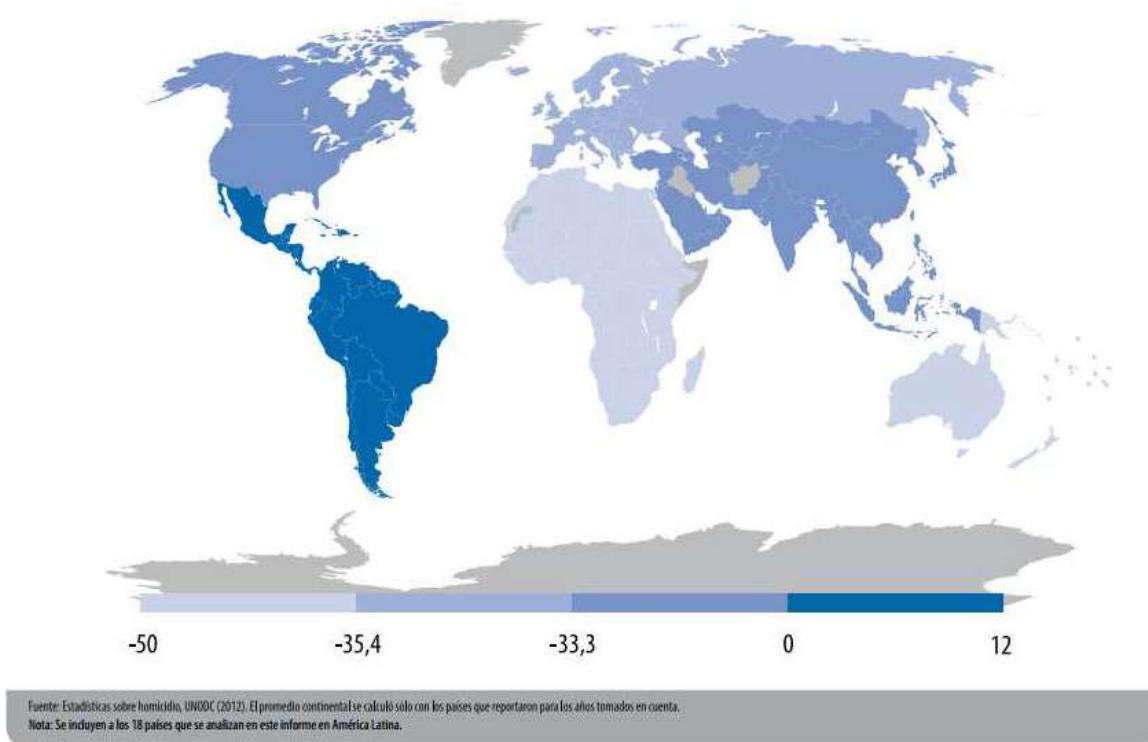
Gráfica 5. Petición de soborno en el último año y su justificación, América Latina, 2012
(Porcentaje que respondió afirmativamente).



Fuente: PNUD (2013).

Finalmente, el informe señala cinco mensajes asociados al “mapa de la seguridad” en América Latina. El primero se refiere a las tendencias en la tasa de homicidio. En efecto, aunque en algunos países se han producido reducciones importantes, muchos otros han sufrido aumentos exponenciales en los últimos años. De hecho, incluso los que han sufrido reducciones y los que tienen tasas comparativamente bajas, cuentan con tasas de homicidio sustancialmente mayores que el promedio mundial y regionalmente, América Latina sigue siendo el lugar del mundo con mayor número de homicidios al año. Esta realidad alimenta la recomendación por parte del informe de seguir priorizando la prevención del homicidio como eje fundamental de las políticas de seguridad ciudadana (Ver Gráfica).

Gráfica 6. Cambio porcentual en la tasa de homicidios por región, 2000-2010



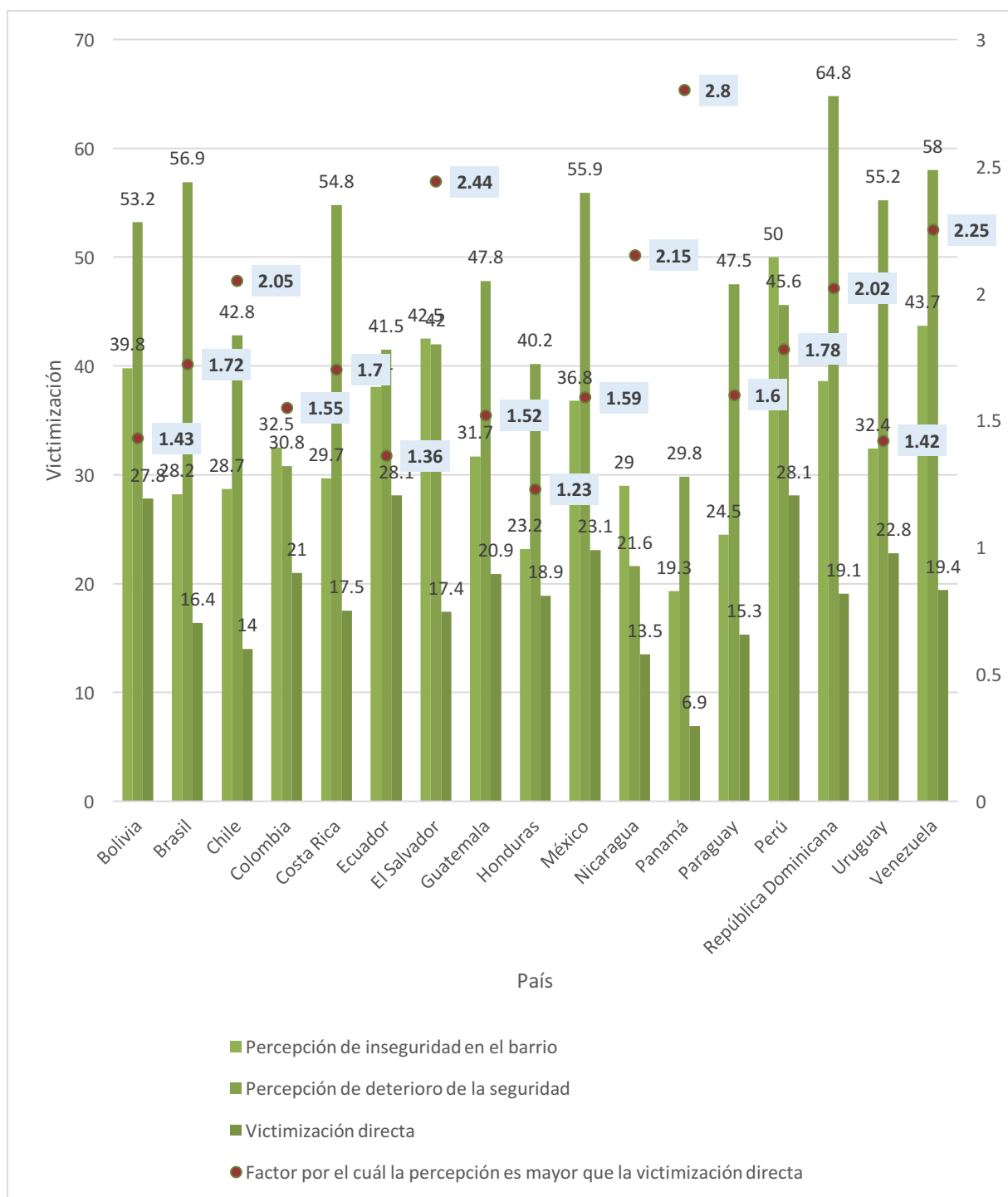
Fuente: Tomado de PNUD (2013).

El segundo mensaje se dirige a manifestar que el hurto se ha convertido en el principal delito que afecta la seguridad ciudadana de los latinoamericanos. En

efecto, las estadísticas nacionales dan cuenta de un incremento sustancial en la incidencia de este delito, convirtiéndose en muchos casos en una circunstancia casi cotidiana para la mayoría de los habitantes de América Latina. De igual forma, se ha presentado un incremento proporcional de los hurtos violentos. Al respecto, el informe recomienda políticas de contención de los mercados ilegales en los cuales se mueven los bienes robados. Así, más que la persecución de los pequeños ladrones, las medidas deben dirigirse a desincentivar los grandes mercados negros que dinamizan y determinan la persistencia de los robos.

El tercero, la prevalencia de la percepción de inseguridad en la mayoría de países de la región (Ver Gráfica). En efecto, aunque las características de la seguridad objetiva puedan ser muy diferentes según el país, la mayoría de los latinoamericanos se sienten inseguros en sus comunidades. Así, en la mayoría de los países de la región, la percepción de inseguridad puede llegar a ser el doble o el triple de la victimización (PNUD, 2013, p. 70). El informe recomienda la mejora de los sistemas de denuncia ciudadana, con esfuerzos por calificar las respuestas locales y la velocidad de las mismas. De igual forma, fortalecer la provisión de justicia, la presencia y contacto ciudadano con autoridades locales y de desempeño cercano como la policía. Las mejoras urbanas (iluminación, aumento del espacio público, entre otros) puede también atenuar el temor ciudadano.

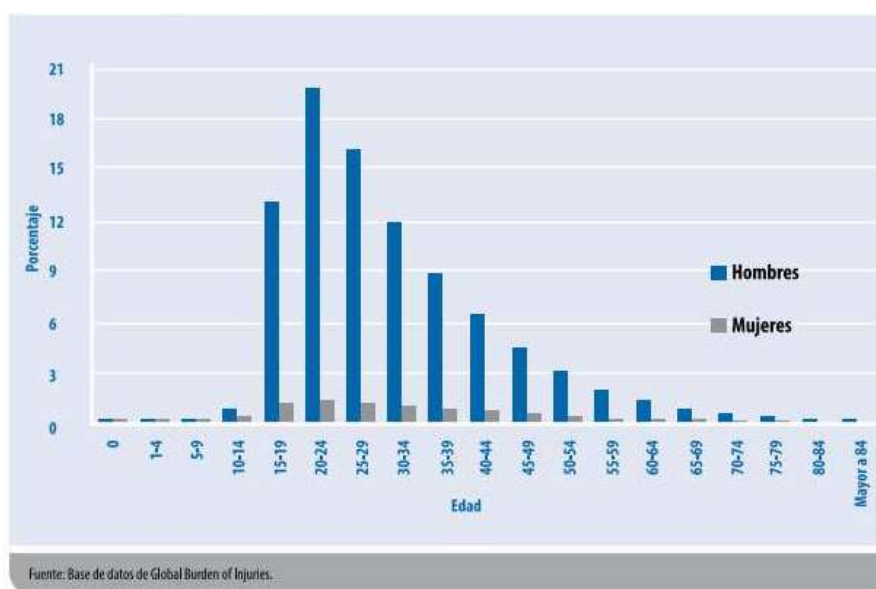
Gráfica 7. Percepción de inseguridad y victimización, América Latina, 2012 (Porcentaje)



Fuente: PNUD (2013).

El cuarto, la concentración del homicidio en la población joven de varones de la región (Ver Gráfica). En efecto, la mayoría de las víctimas de homicidio de la región se encuentran entre los 15-19 y 30-34 años y son hombres. El 20% de todos los homicidios se presentaron en hombres de entre 20 y 24 años entre 1996 y 2009 (PNUD, 2013, pág. 53). Por otro lado y de acuerdo al informe Juventud y Cohesión Social: Un modelo para armar de la CEPAL, “a nivel iberoamericano, los jóvenes de 15 a 19 años de edad tienen una probabilidad 10% mayor que el resto de la población de estar en pobreza, y 6% mayor en el caso de la indigencia” (CEPAL, 2008, pág. 35).

Gráfica 8. América Latina, distribución de las víctimas de homicidio según edad y sexo, 1996-2009 (Porcentajes)



Fuente: Tomado de PNUD (2013)

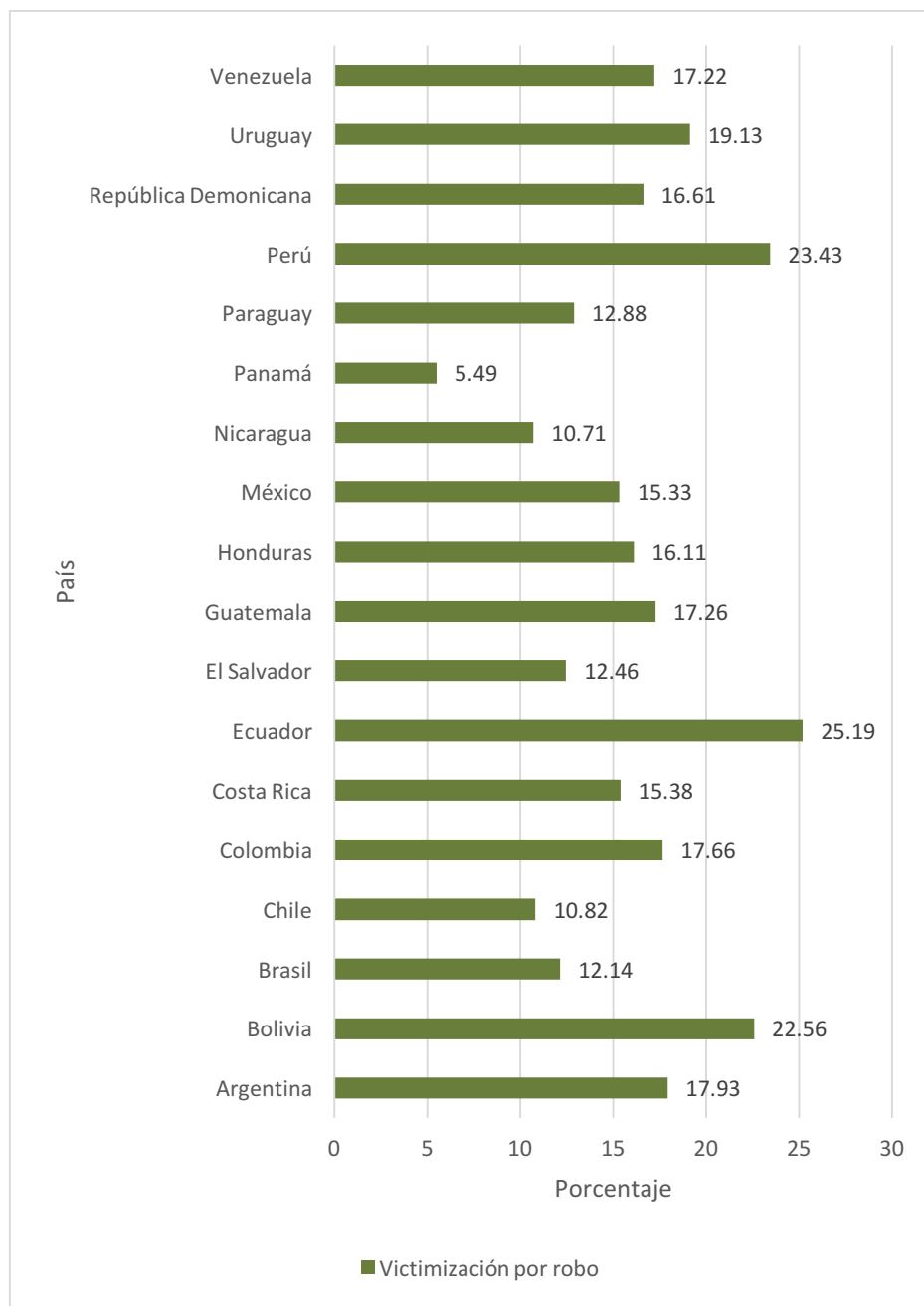
Y el quinto, la necesidad de mejorar los sistemas de recolección y análisis de datos confiables, homogéneos y verificables. En efecto, el informe recomienda la configuración de sistemas de información que permitan el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas, al igual que vinculen y promuevan la retroalimentación y participación de diferentes actores. Así, la intención es “mejorar la capacidad de comparar las estadísticas internacionales sobre el delito en general y de

desarrollar un sistema integrado de colecciones de datos sobre las víctimas junto con las estadísticas policiales, judiciales, de los tribunales y de los servicios correctivos” (UNODC, 2009, p. III).

El informe de Desarrollo Humano para América Latina de 2013 también identifica cuatro amenazas centrales para la seguridad ciudadana en la región. La primera supone entender que, aun cuando el crimen organizado se haya configurado como una de las principales problemáticas de seguridad en muchos países latinoamericanos, el narcotráfico no puede asumirse como la única explicación para la inseguridad latinoamericana. Esta reducción, sostiene el PNUD, implica desconocer las complejidades reales de los fenómenos de delito y violencia del caso latinoamericano. En efecto, los datos recogidos por el PNUD dan cuenta de que para los latinoamericanos, la principal amenaza para su seguridad es la delincuencia común (Ver Gráfica 10). Así, todos los países encuestados la señalan de esta forma, con la excepción de México y Brasil, que culpan a las organizaciones narcotraficantes³ (PNUD, 2013, pág. 76).

³ Las organizaciones consideradas por el informe del PNUD (2013) incluyen: delincuencia común, crimen organizado y narcotráfico y pandillas.

Gráfica 9. Porcentaje de victimización por robo, América Latina, 2012

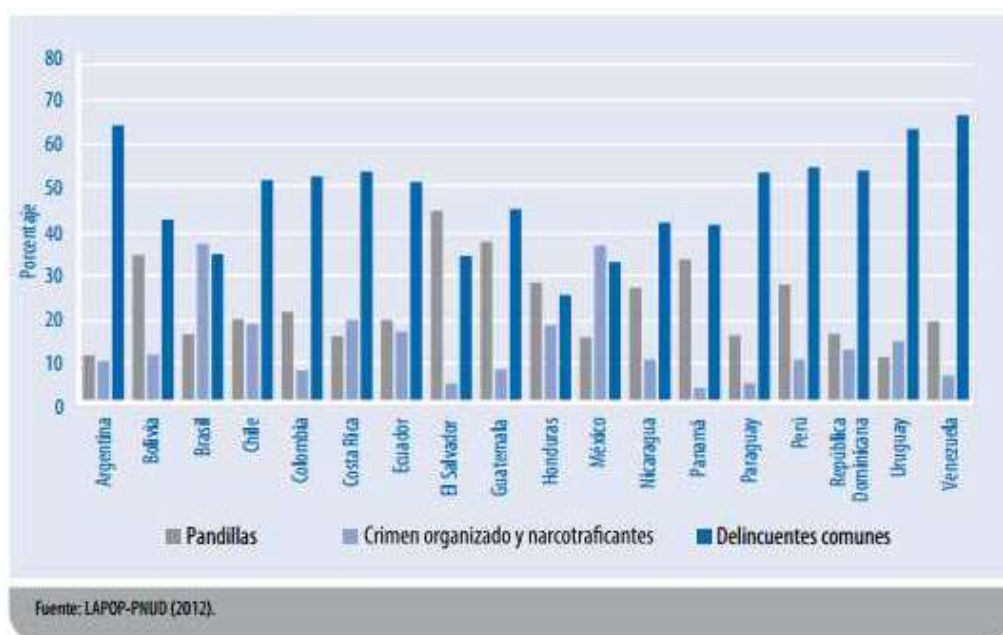


Fuente: PNUD (2013).

El segundo argumento del informe sostiene que la causa de la persistencia y recrudecimiento de la inseguridad es el entrecruce de las distintas amenazas. Al respecto, el informe recomienda que las políticas y medidas adoptadas por los

gobiernos latinoamericanos sean integrales, pero diferenciadas, buscando abordar las complejidades de los fenómenos de delito y violencia que afectan la seguridad ciudadana de sus países. En este sentido, el PNUD señala la importancia de contar con información suficiente y rigurosa sobre cada una de las amenazas y riesgos a la seguridad que serán atendidas. En efecto, aunque las encuestas de victimización se han comenzado a realizar con cierta periodicidad en varios países de América Latina (PNUD, 2013), los vacíos en datos y las dificultades metodológicas representan un problema para la utilización suficiente de la información recolectada, particularmente a la hora de realizar comparaciones internacionales. En este sentido, se pueden rescatar iniciativas como el Manual para Encuestas de Victimización de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, 2009), que busca ofrecer “una fuente exhaustiva de información para desarrollar una encuesta nacional de victimización y sobre las cuestiones clave que deben tomarse en cuenta, incluyendo el enfoque a asumir, los métodos disponibles, algunas cuestiones analíticas y la presentación de resultados” (UNODC, 2009, p. 1).

Gráfica 10. Principal amenaza a la seguridad según los ciudadanos, América Latina, 2012



Fuente: Tomado de PNUD (2013).

En tercer lugar, el informe señala los vacíos de información disponible, en tanto la baja denuncia de algunos delitos como el secuestro, la extorsión, la violencia hacia migrantes, la trata de personas, la violencia sexual y doméstica, la corrupción y la violencia ilegal por parte de actores estatales. En efecto, la naturaleza de muchos de estos delitos desincentiva la denuncia por parte de sus afectados o participantes. El registro objetivo y suficiente por parte de las autoridades resulta un reto enorme para las esporádicas iniciativas de este tipo en muchos de los países latinoamericanos. Así, en ocasiones el cambio porcentual de los delitos entre diferentes mediciones se puede explicar mejor por una recolección de datos juiciosa que por un cambio en la tendencia (PNUD, 2013, pág. 83).

El Informe de Seguridad Ciudadana para las Américas 2012 de la OEA coincide con este diagnóstico, proponiendo la herramienta de las encuestas de victimización como elemento central de la construcción de políticas de seguridad ciudadana. Supone que entender mejor el delito, sus orígenes y dinámicas puede llevar a diseñar medidas y a emprender acciones públicas con mejores probabilidades de éxito (Organizaciones de Estados Americanos, 2012, pág. 144). En efecto, enfatiza la idea según la cual “las encuestas a las víctimas son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y su público a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos” (UNODC, 2009, p. 1).



Gráfica 11. Personal de policía para el último año disponible (total y tasa)

COUNTRY	Latest available year	Police personnel total	Rate per 100,000 inhabitants
Antigua and Barbuda	2009	632	718
Argentina	2007	77,055	195
Bahamas	2010	2,644	764
Barbados	2009	1,414	552
Belize	2010	1,160	371
Bolivia	2010	36,045	357
Brazil	2009	330,940	169
Canada	2010	69,250	202
Chile	2010	36,509	211
Colombia	2010	159,071	339
Costa Rica	2010	11,845	251
Dominica	2009	423	549
Dominican Republic	2006	29,357	299
Ecuador	2006	38,629	290
El Salvador	2007	18,321	299
Grenada	2009	1,000	962
Guatemala	2009	22,655	158
Guyana	2011	2,900	384
Haiti	2012	14,000	138
Honduras	2011	14,500	187
Jamaica	2011	11,152	405
Mexico	2010	420,698	366
Nicaragua	2010	9,749	166
Panama	2004	14,732	457
Paraguay	2010	22,000	335
Peru	2010	100,390	341
Saint Kitts and Nevis	2009	400	769
Saint Lucia	2009	1,039	597
Saint Vincent and the Grenadines	2009	980	899
Suriname	2006	1,200	238
Trinidad and Tobago	2009	6,605	493
United States	2010	705,009	228
Uruguay	2004	16,867	500
Venezuela	2006	69,122	256
AMERICAS (34 countries) (*1)(*2)	2010	2,248,293	246

Fuente: Tomado de OEA (2012).

Si bien la discusión en torno al número de policías como un asunto que mejora la situación de seguridad en las ciudades, no puede ser obviada ni se puede redirigir la conclusión hacia un escenario: el impacto de la presencia de policía en la ciudades, sobre la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos, parece ser un tema sin mayores discusiones. A mayor presencia policial, mayor percepción de seguridad. Sin embargo, según la OEA (2012), la tasa de número de policías por 100.000 habitantes para Colombia, que es de 339, supera considerablemente

el promedio americano de 246 y, para poner un ejemplo ilustrativo, supera también la tasa estadounidense de 228 policías por cada 100.000 habitantes (Ver **Error! Reference source not found.**). Esta situación evidencia que la ecuación número de policías=mejora en la percepción, no puede considerarse como explicación válida por sí misma, sino que debe estar acompañada de factores explicativos en términos contextuales que permitan indicar por qué la situación de percepción de inseguridad se mantiene, aún con un número de policías que supera el promedio americano y estadounidense.

El cuarto argumento del informe habla de cómo en la base de la espiral de violencia que vive la región se encuentra la interacción entre la delincuencia organizada con otras amenazas. Una espiral de violencia puede entenderse como un incremento exponencial en la violencia homicida asociado a un momento de ruptura de un sistema de relaciones delictuales previas (PNUD, 2013, pág. 76). Estas rupturas acaban con equilibrios previos y están acompañadas comúnmente por la dinamización de los fenómenos de delito y violencia⁴. En efecto, el informe propone fortalecer la cooperación entre las autoridades de policía y judiciales; la creación de estructuras autónomas y protegidas que puedan perseguir y procesar a la delincuencia organizada con libertad y seguridad.

Para tener un panorama más completo de la situación de la región se acude al Informe de Seguridad Ciudadana en las Américas de la Organización de Estados Americanos (2012), que señala al crimen transnacional como una de las principales fuentes de inseguridad en la región. Sostiene que el análisis de cualquier situación de crimen organizado en los países latinoamericanos debe pasar por el estudio de seis fenómenos criminales específicos, a saber: (1) el tráfico de estupefacientes, (2) el tráfico de armas, municiones y explosivos, (3) el tráfico de seres humanos, (4) el terrorismo, (5) el tráfico de dinero y (6) el tráfico

⁴ El Informe del PNUD (2013) utiliza como ejemplo el incremento de la violencia homicida en la ciudad de Medellín luego de la extradición de alias Don Berna el 18 de marzo de 2008. En efecto, el “desorden” en los grupos criminales subsiguiente a la extradición llevó a que la tasa de homicidio en la ciudad pasara de 45,6 en 2008 a 94,4 en 2009 y 86,3 en 2010 (Medellín como Vamos, 2013).

de recursos naturales. En efecto, “estos delitos multidimensionales registran hoy niveles preocupantes de violencia e incidencia, que advierten por un lado la tendencia de expansión y una relativa homogenización en las Américas, y por otro la necesidad de concentrar esfuerzos para lograr un efectivo y contundente impacto a sus manifestaciones criminológicas” (Organizaciones de Estados Americanos, 2012, pág. 13).

De igual forma, la incidencia, interacción y codependencia de estos fenómenos criminales, señala la OEA, explican en gran parte las expresiones de crimen organizado de las Américas y su relación con la violencia y el delito que azota a la región (Ver Gráfica 12). De hecho, países como Uruguay y Brasil registraban para el 2012 porcentajes de 44% y 35% -respectivamente-, correspondientes a hogares en los que por lo menos uno de sus miembros había sido víctima de algún crimen durante el último año. El Informe habla de una “criminalidad multidimensional”, capaz de combinar diferentes economías criminales, cooptar y contener la acción del Estado y establecer relaciones de simbiosis en la sociedad. En efecto, su relación con la violencia se explica sobre todo por el mantenimiento de las prerrogativas ilegales de sus negocios. De esta forma, los seis fenómenos específicos de la inseguridad en las Américas establecidos por la OEA se relacionan en tanto expresiones comunes de un mismo ambiente de ilegalidad.

Gráfica 12. Tasa de victimización, último año disponible (Prevalencia)

Indicator definition		
Percentage of households in which at least one member was a victim of crime across the last calendar year/twelve months. As recorded by victimization surveys.		
COUNTRY		
	Lastest available year	Prevalence
Antigua and Barbuda	2009	11.2%
Barbados	2009	10.8%
Brazil	2002	35.0%
Canada	2004	17.2%
Chile	2010	28.2%
Colombia	2008	15.5%
Costa Rica	2008	27.9%
Ecuador	2008	12.7%
El Salvador	2004	13.7%
Guatemala	2007	37.3%
Guyana	2009	7.8%
Jamaica	2009	5.6%
Mexico	2009	13.7%
Panama	2008	8.4%
Paraguay	2008	27.3%
Saint Lucia	2009	10.9%
Suriname	2009	9.7%
Trinidad and Tobago	2009	10.2%
United States	2010	14.9%
Uruguay	2007	44.0%
Venezuela	2006	36.4%
AMERICAS (21 countries) (*2) (*3)	2009	21.1%
Sub-regional data: (*2)		
Caribbean (5 countries) (*4)	2009	7.8%
Central America (4 countries) (*5)	2008	26.9%
North America (3 countries) (*6)	2010	14.8%
South America (9 countries) (*7)	2008	30.5%

Fuente: Tomado de OEA (2012).

A continuación se presentan algunas de las principales tendencias identificadas en los mencionados informes del PNUD y la OEA, que servirán de punto de referencia para las comparaciones con la situación del departamento revelada a través de los resultados de la encuesta de victimización.

Tabla 3. Resumen conceptual situación de seguridad en América Latina

Fenómeno	Incidencia	Fuente
Participación de jóvenes en delito y violencia	Una coincidencia de los desafíos de seguridad ciudadana de la mayoría de los países de la región es la alta participación de la población joven en los fenómenos de violencia y delito. Las alternativas alrededor de este problema social giran en torno a las apuestas preventivas, sobre todo las que abordan las necesidades de satisfacción de reconocimiento y oportunidades de desarrollo de los jóvenes.	PNUD
Relación entre diferentes fenómenos criminales a través de las redes transnacionales del crimen organizado	El crimen organizado en América Latina se encuentra en una etapa de transformación. En efecto, las organizaciones buscan dinamizar sus actividades al coordinar diferentes intereses en negocios ilegales. Estas codependencias han creado nuevos espacios de delito y violencia que por su interconexión y complejidad, suponen un enorme desafío para las políticas de seguridad.	OEA
Delincuencia común y delitos menores	A pesar de la atención recibida por los fenómenos de crimen organizado y narcotráfico, los hechos de inseguridad que más afectan a los latinoamericanos son los delitos menores. De igual forma, el actor generador de inseguridad más reconocido en la región es la delincuencia común. Los hurtos a personas, automotores y viviendas son, al fin de cuentas, los hechos victimizantes con más incidencia y prevalencia en los países de América Latina y los que tienen una mayor influencia en la percepción de seguridad de sus habitantes.	PNUD, OEA
Brecha entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva	De forma curiosa, aunque algunos fenómenos violentos de alto impacto (como el homicidio) se ha reducido en los últimos años en varios países, la percepción de seguridad de estos lugares no ha mejorado sustancialmente. En efecto, existe una brecha importante entre la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva en los países de Latinoamérica: las personas se sienten sustancialmente más inseguras que unos años atrás, incluso cuando algunos delitos están a la baja. El aumento de las expectativas de gobernabilidad y un reciente cambio en las tendencias de los delitos menores podrían explicar este fenómeno.	PNUD
Debilidades en la recolección y estudio de datos objetivos	Ambos informes hacen notar las dificultades de diseñar políticas cuando muchos de los datos que	PNUD, OEA

y subjetivos sobre seguridad	se tienen sobre hechos violentos o delictivos son, en el mejor de los casos, incompletos, o incluso, poco confiables. En efecto, aunque los últimos años ha visto un aumento en esfuerzos de recolección, sistematización, estandarización y estudio de estadísticas descriptivas de la seguridad, algunas de estas iniciativas han sido discontinuas o poco rigurosas.
-------------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia.

1.4. Seguridad y victimización en el contexto colombiano

Considerando el panorama regional presentado en la anterior subsección, a continuación se describirá la situación de seguridad en Colombia, con intención de construir un diagnóstico general. Para esto, en primer lugar, se revisará el contexto descrito por la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana respecto a la seguridad ciudadana y la convivencia en el país. A continuación, se presentan algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización, en sus últimas dos versiones, 2012 y 2013; y finalmente, se recogen algunos datos comparativos de diez ciudades capitales en las que se adelantan capítulos de la “Red Cómo Vamos”.

De acuerdo a la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, construida por el Departamento Nacional de Planeación –DNP- y la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, “entre los desafíos estructurales se encuentran los relacionados con el proceso de urbanización del país y sus complejidades, el incremento del mercado de bienes y servicios y los riesgos que esto implica en cuanto a propiciar el delito, la existencia –aunque menguada– de grupos armados ilegales y de narcotráfico en sus diversas manifestaciones –entre éstas su incidencia en patrones culturales y en grupos etarios, en particular en los jóvenes, y redes delincuenciales y de organización criminal ligados a ese fenómeno–, y la presencia precaria del Estado

en algunos municipios, a pesar de avances significativos en materia de institucionalidad pública y privada, y sus logros en el mejoramiento de la calidad de vida” (Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, p. 2).

Adicionalmente, aunque señala la reducción de la incidencia de los grupos armados ilegales en el delito y la violencia, “persiste su capacidad de adaptación, aprendizaje y transferencia de prácticas criminales, en especial por medio de nuevas modalidades de delincuencia organizada que también se expresa a escala urbana, que oscilan desde acciones de carácter terrorista hasta la operación de diversas actividades legales e ilegales relacionadas con el narcotráfico, como oficinas de cobro, lavado de activos, microtráfico de drogas y venta de armas, piratería terrestre, juegos de suerte y azar, trabajo sexual y préstamos de usura” (Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, p. 3).

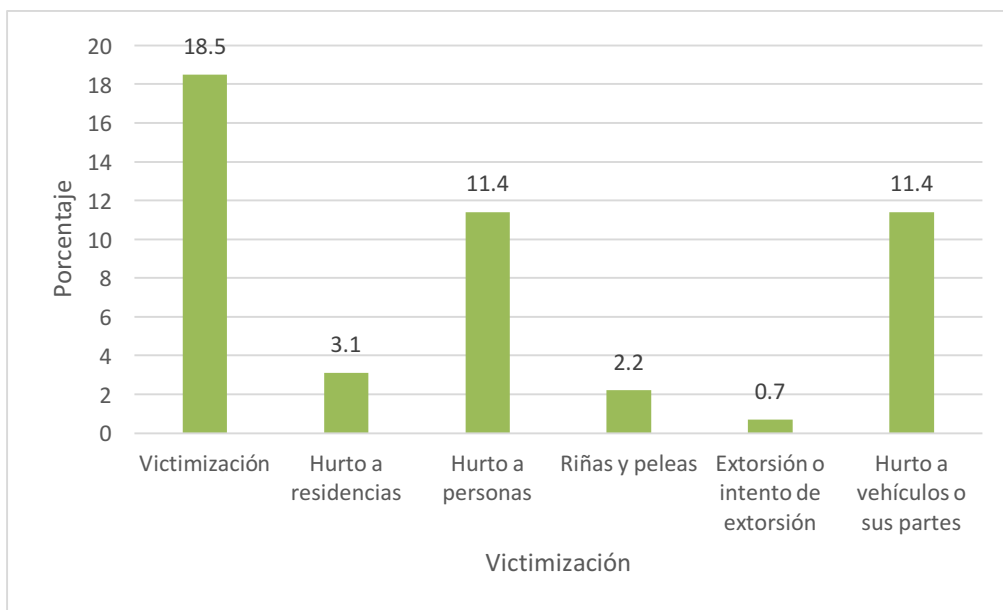
Según el diagnóstico de la Política, existen “una serie de desafíos asociados al comportamiento ciudadano y a la falta de apropiación de los referentes básicos de cultura ciudadana”. En efecto, “entre éstos cabe señalar la condescendencia y, en ocasiones, la complicidad de miembros de la sociedad con actividades ilícitas (por ejemplo, la compra de bienes hurtados, piratas o en sitios de venta ilegal), la comisión de contravenciones, la intolerancia –que parece haber aumentado o por lo menos es más visible- y el incumplimiento de reglas informales de conducta, entre otros, que obligan a una actuación más proactiva del Estado y de la sociedad en este campo” (Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, p. 4). En la tabla no. 3 se observan las conclusiones elaboradas a partir del contexto descrito, basado en la información de la Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana.

Tabla 4. Contexto general de la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Mejoramiento de la seguridad en los últimos ocho años, en especial dada la reducción de los Grupos Armados Ilegales (desmovilización, captura y combate).
Nuevas expresiones criminales, en especial vinculadas al narcotráfico y la organización de nuevas redes criminales que impactan directa o indirectamente las ciudades.
Tendencia a la articulación delictiva y a fenómenos de delincuencia organizada ligados o no al crimen organizado y a las guerrillas.
Alta percepción de inseguridad urbana que contrasta con los reportes de delitos en algunas ciudades, ligada en ocasiones a actos delictivos en sectores de opinión.
Desafíos asociados, al comportamiento ciudadano como compra de bienes hurtados, comisión de contravenciones, alta intolerancia e incumplimiento de reglas informales de conducta.

Fuente: Elaboración propia con base en Alta Consejería de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2011).

Ahora bien, de acuerdo a la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2013, la victimización para Colombia en 2013 fue de 18,5% (Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2013). El 3,1% de los hogares sufrieron hurtos de residencia, mientras el 11,4 de las personas fueron víctimas de hurto, el 2,2 hicieron parte de riñas y peleas y el 0,7 sufrió extorsión. Finalmente, el 11,4% de las personas con vehículos reportaron haber sido víctimas de hurto del vehículo o sus partes (Ver Gráfica 13). En la gráfica 14 se observa que en comparación con los resultados de 2011-2012, los niveles de victimización en Colombia han descendido.

Gráfica 13. Victimización en Colombia 2013

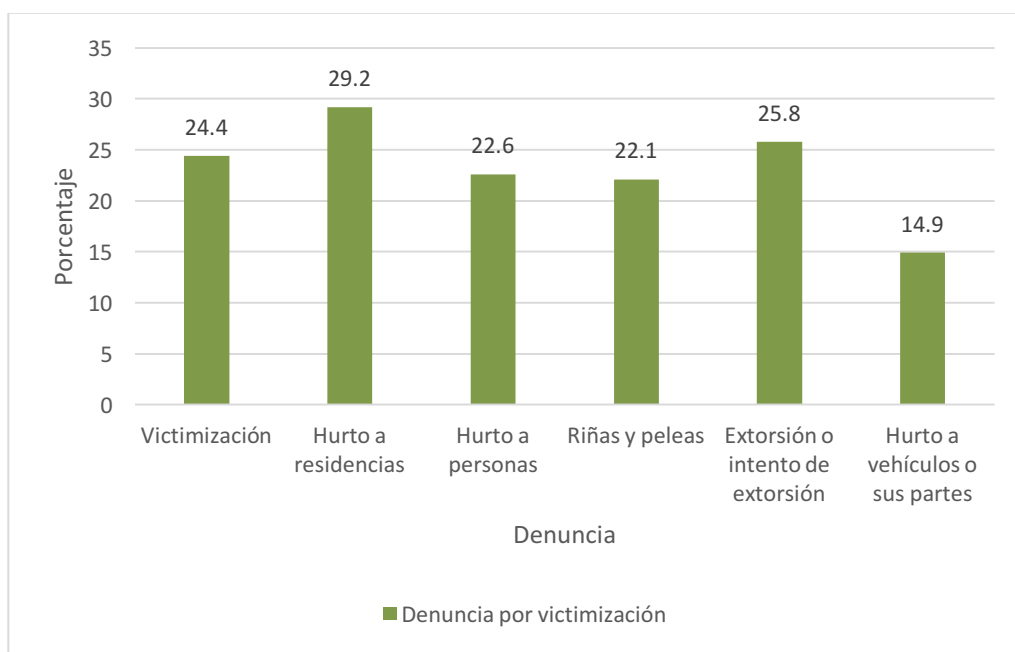
Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2013).

Gráfica 14. Evolución victimización Colombia, 2011-2013

Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2013).

Por otro lado, la Encuesta da cuenta de las denuncias asociadas a cada una de estas victimizaciones (Ver Gráfica 12). En efecto, el total de la denuncia en Colombia fue del 24,4% de los casos victimizantes. El 29,2% de los hogares que sufrieron hurto denunciaron, el 22,6% de las personas a los que les hurtaron sus pertenencias hicieron otro tanto. De igual forma, el 22,1% de las personas involucrados en riñas o peleas denunciaron, mientras el 25,8% de los que fueron extorsionados pusieron una denuncia. Finalmente, el porcentaje de denuncia más bajo de este grupo de victimizaciones fue el robo de vehículos o autopartes, con el 14,9% de los hechos denunciados por los afectados.

Gráfica 12. Denuncia en Colombia 2013

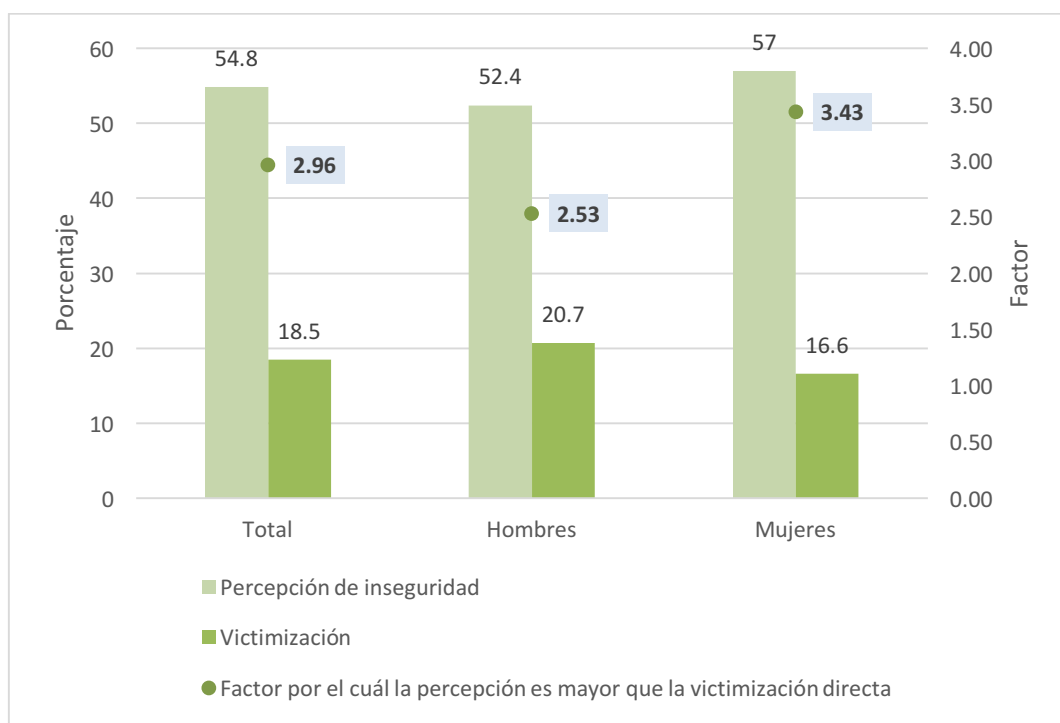


Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2013).

Respecto a la relación entre victimización y percepción de inseguridad, la encuesta señala que el 54,8% de los colombianos se sienten inseguros, mientras el 18,5% ha sido víctima de algún delito o violencia como ya se mencionó (Ver Gráfica 13). Revisando los datos por género, en los hombres la percepción de inseguridad es más baja que el promedio, mientras su victimización es más alta;

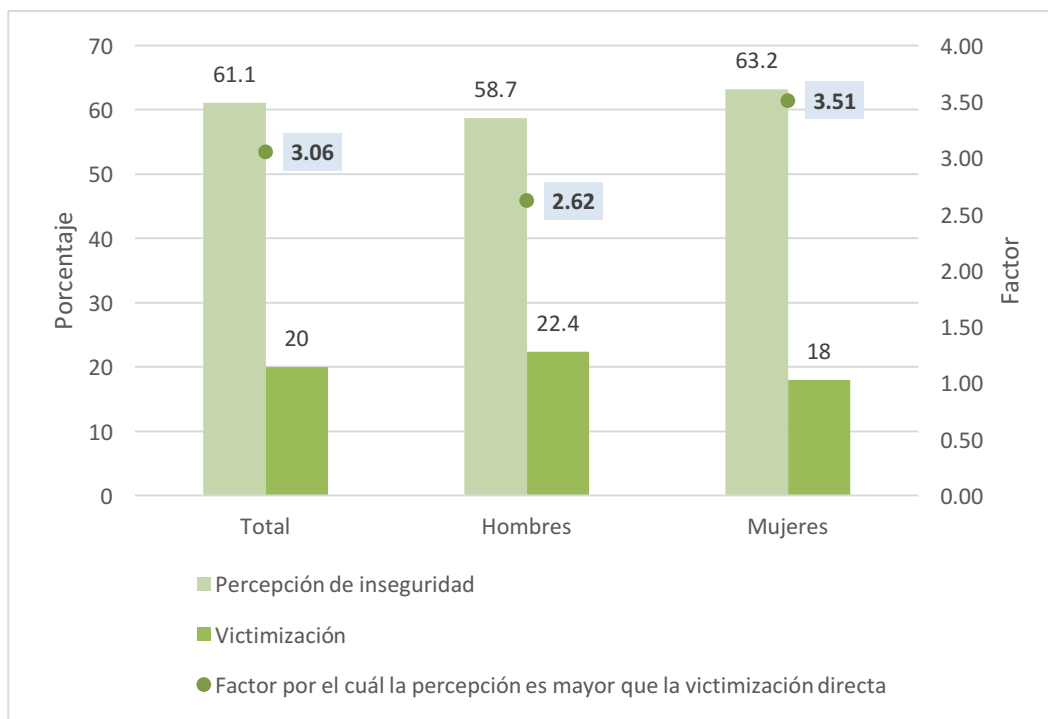
en mujeres, la percepción de inseguridad es más alta que el promedio, pero su victimización es más baja. En efecto, estos datos parecen indicar que en Colombia, los hombres tendrían una mayor “resistencia” a la inseguridad (son más victimizados, pero se sienten menos inseguros), mientras las mujeres parecen ver afectada su sensación de seguridad mucho más por los hechos delictivos (son menos víctimas, pero se sienten más inseguras).

Gráfica 13. Victimización y percepción de inseguridad Colombia 2013



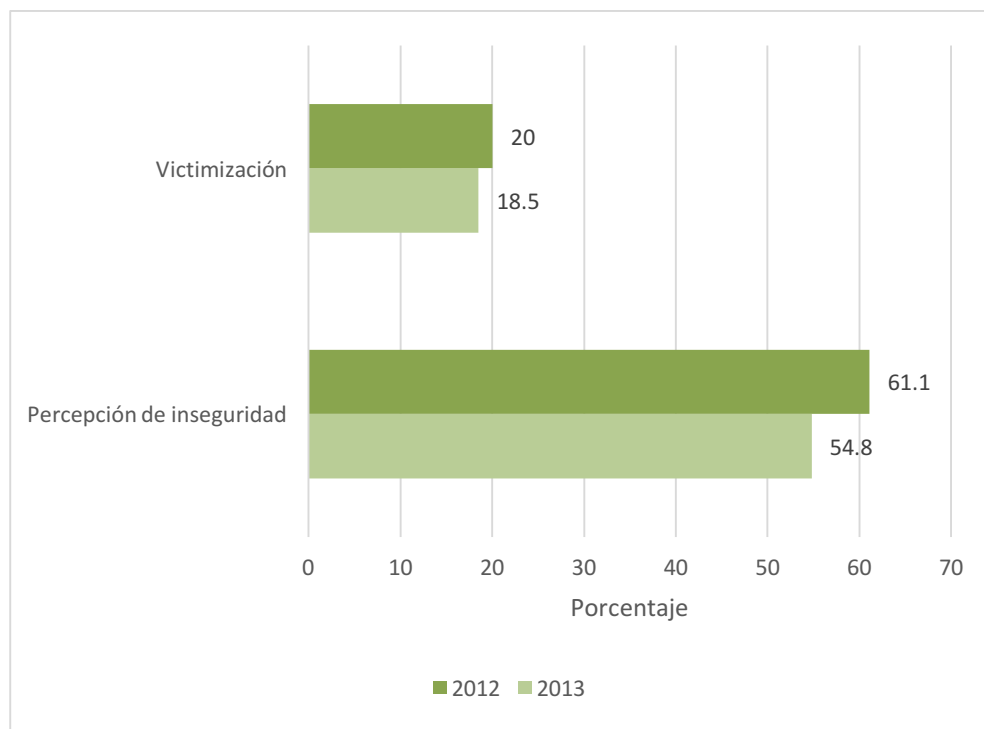
Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2013).

Gráfica 14. Victimización y percepción en Colombia, 2012



Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2012).

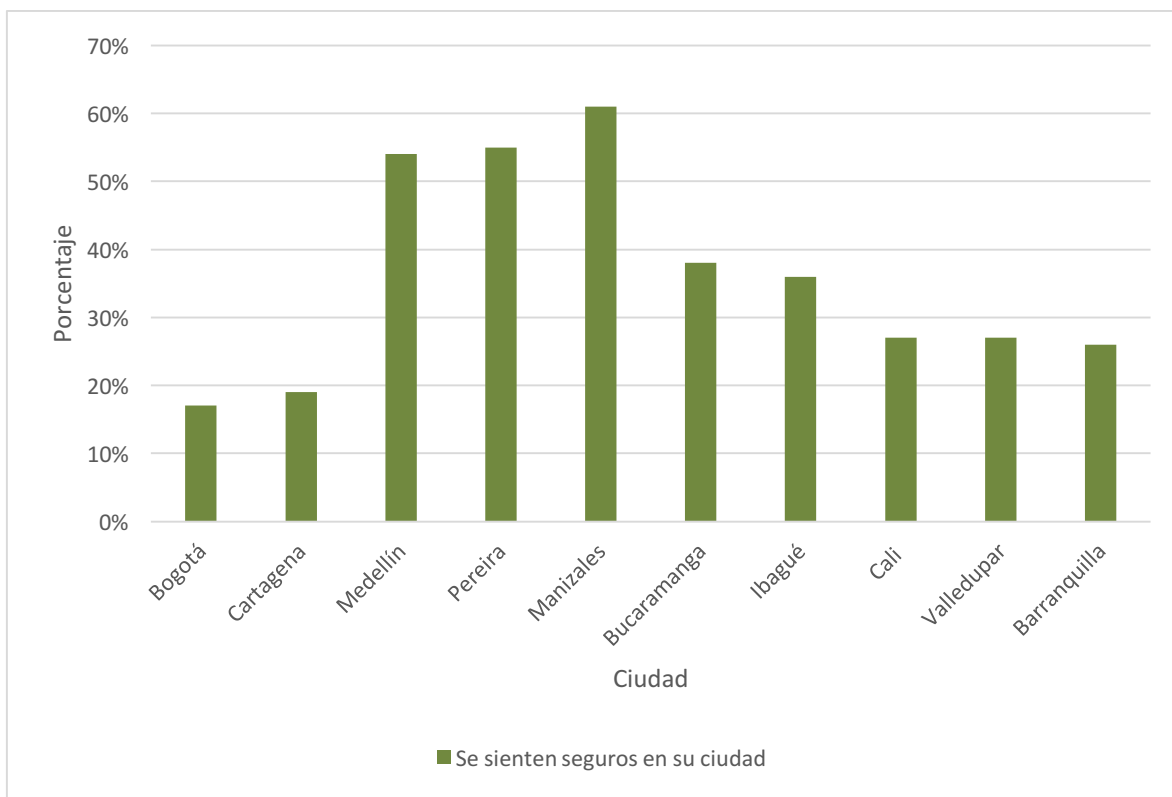
Gráfica 15. Victimización y Percepción de seguridad en Colombia, 2011-2012



Fuente: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2013).

Estas tendencias en la percepción de inseguridad reportadas por la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2013 también pueden evaluarse desde los datos de los ejercicios de la iniciativa Red de Ciudades Cómo Vamos, que reúne información de todos sus capítulos en diez ciudades capitales del país. Así pues, Manizales, Pereira y Medellín fueron las ciudades con la más alta percepción de seguridad en el 2011 con 61%, 55% y 54%, respectivamente. Los puntajes más bajos, comparativamente, fueron los de Barranquilla, con 26%, Cartagena, con el 19%, y Bogotá, con el 17% (Ver Gráfica).

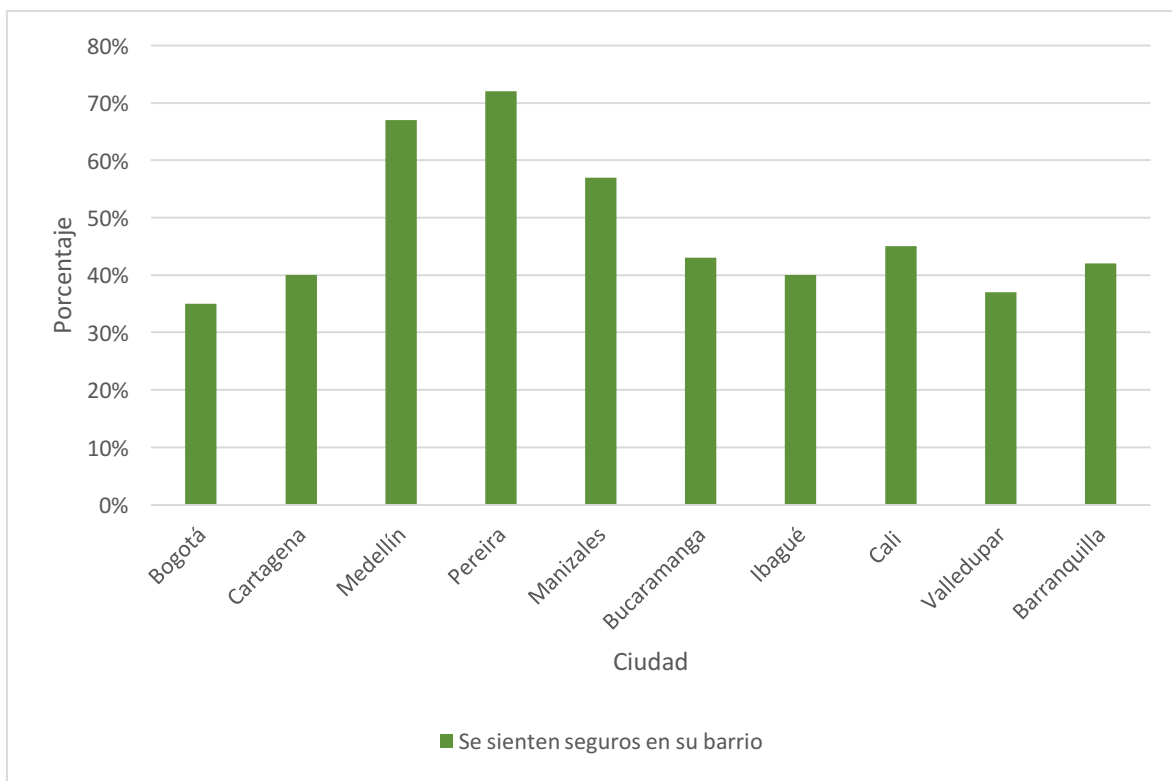
Gráfica 19. Se sienten seguros en su ciudad



Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2012).

Ahora bien, cuando son cuestionados por su sentimiento de seguridad en su barrio, las repuestas varían claramente (Ver Gráfica 20). Por un lado, los encuestados por la Red de Ciudades Cómo Vamos tienden a sentirse sustancialmente más seguros en sus barrios que en sus ciudades. Las respuestas en Bogotá se doblan, pasando del 17% al 35%, igual que en Cartagena, Cali y Barranquilla. Solo en Manizales las personas se sienten más seguras en la ciudad (61%) que en su barrio (57%).

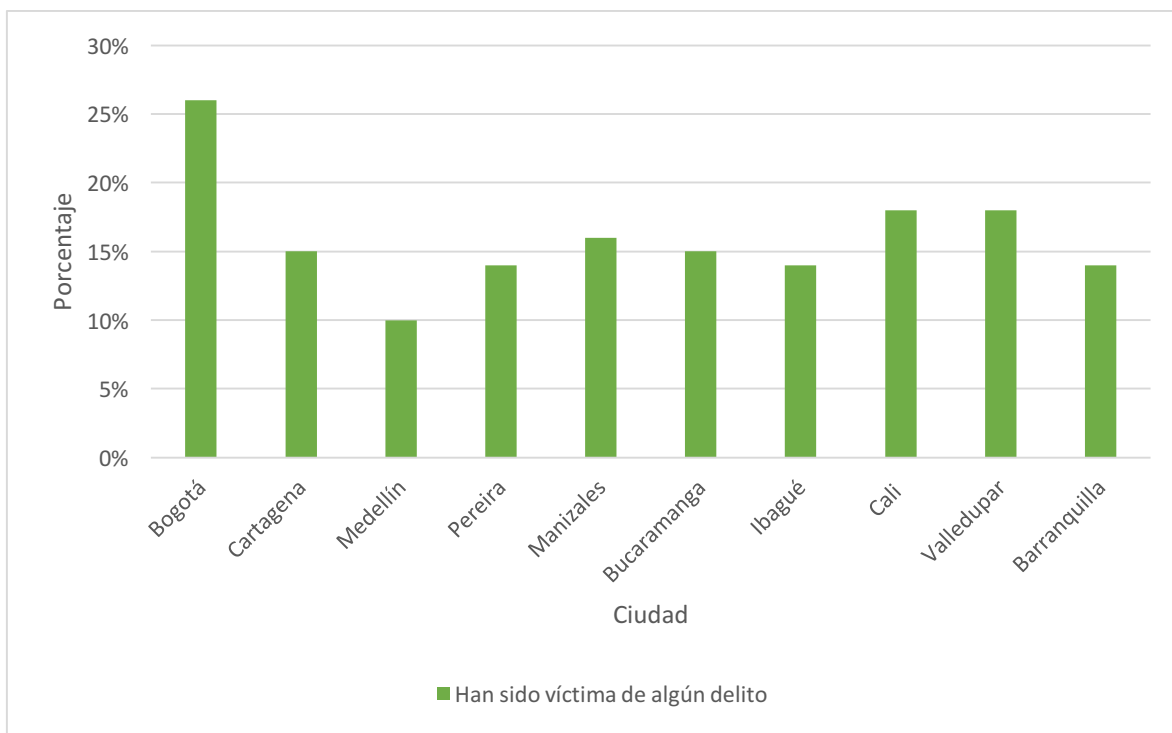
Gráfica 20. Se sienten seguros en su barrio



Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2012).

Los datos de victimización de la Red de Ciudades Cómo Vamos señalan que Bogotá es la ciudad en donde más personas han sufrido por delitos o violencia de la muestra de diez ciudades, con el 26% de los encuestados reportando alguna victimización. La siguen Valledupar y Cali, con el 18% cada una. Medellín fue la ciudad con menor victimización en el 2011 de la muestra, con solo 10% de victimización reportada por los encuestados (Ver Gráfica).

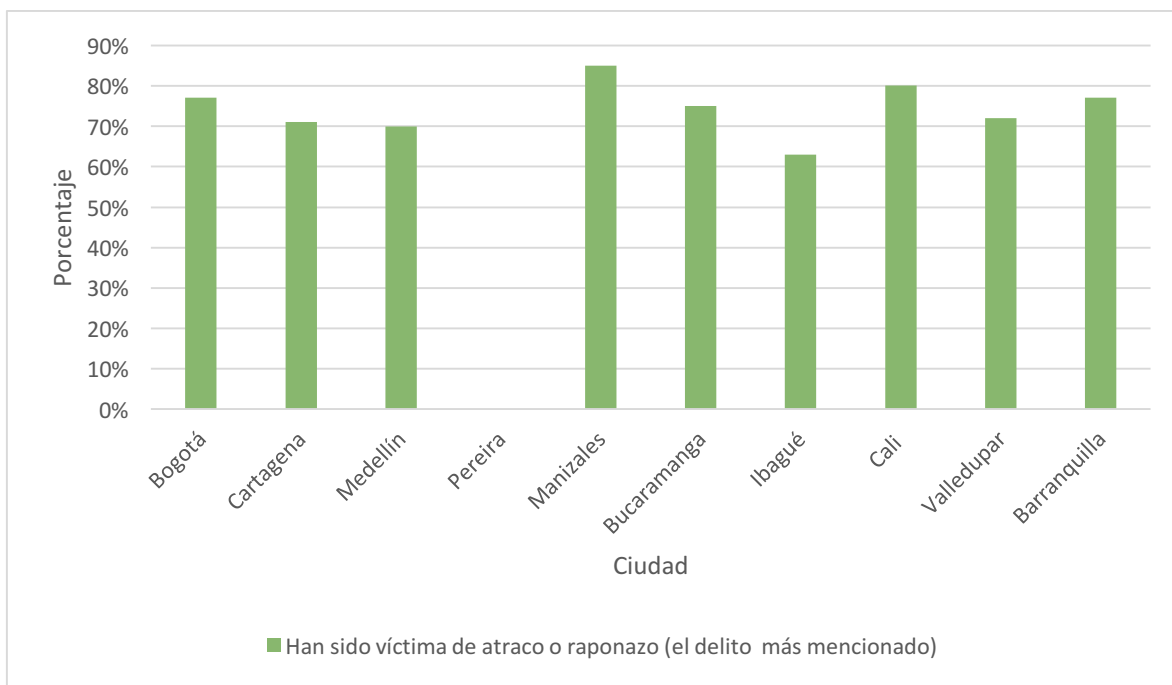
Gráfica 21. Han sido víctima de algún delito



Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2012).

El delito más común en las ciudades colombianas es el atraco o raponazo. En efecto, el 71% de las victimizaciones en Medellín responder al hurto a personas. En Manizales el 85%, en Ibagué el 63% y en Bogotá el 77% de las victimizaciones reportadas por los encuestados también fueron por atracos o raponazos (Ver Gráfica).

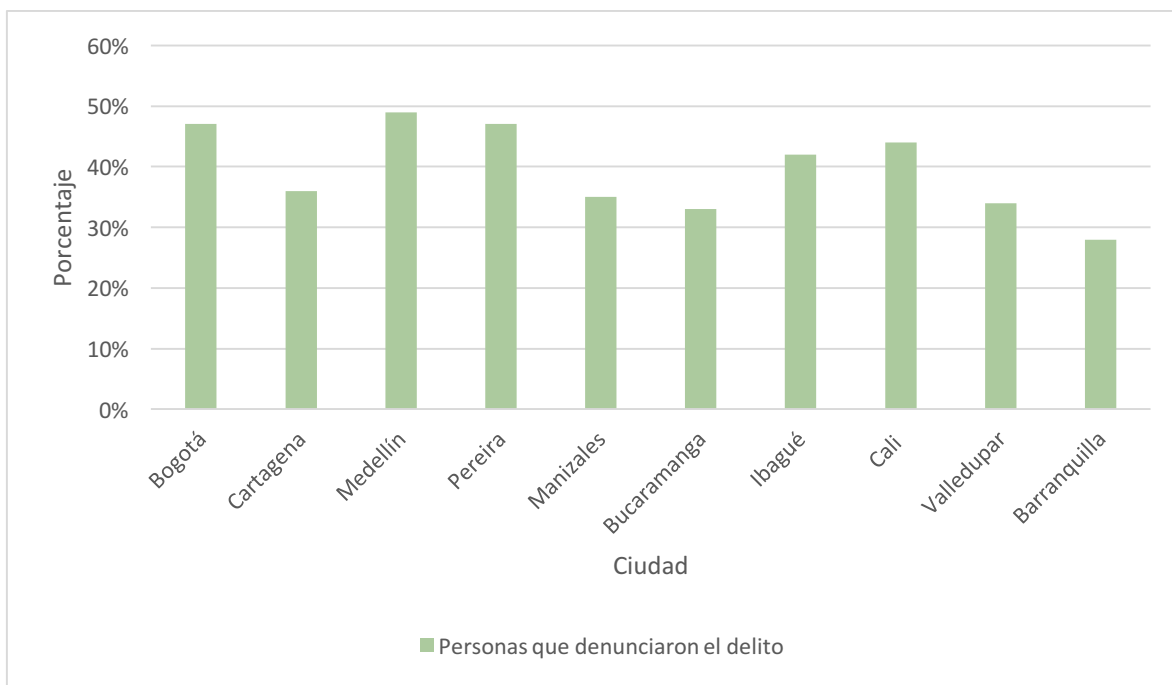
Gráfica 22. Han sido víctima de atraco o raponazo (el delito más mencionado)



Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2012).

Ahora bien, la ciudad de la Red de Ciudades Cómo Vamos con un mayor porcentaje de denuncia de delitos o violencia en 2011 fue Medellín, con el 49% de los hechos denunciados a las autoridades por parte de los afectados. La segunda fue Bogotá con el 47%, seguido por Pereira con el mismo porcentaje. La última fue Barranquilla con el 28% (Ver Gráfica 23).

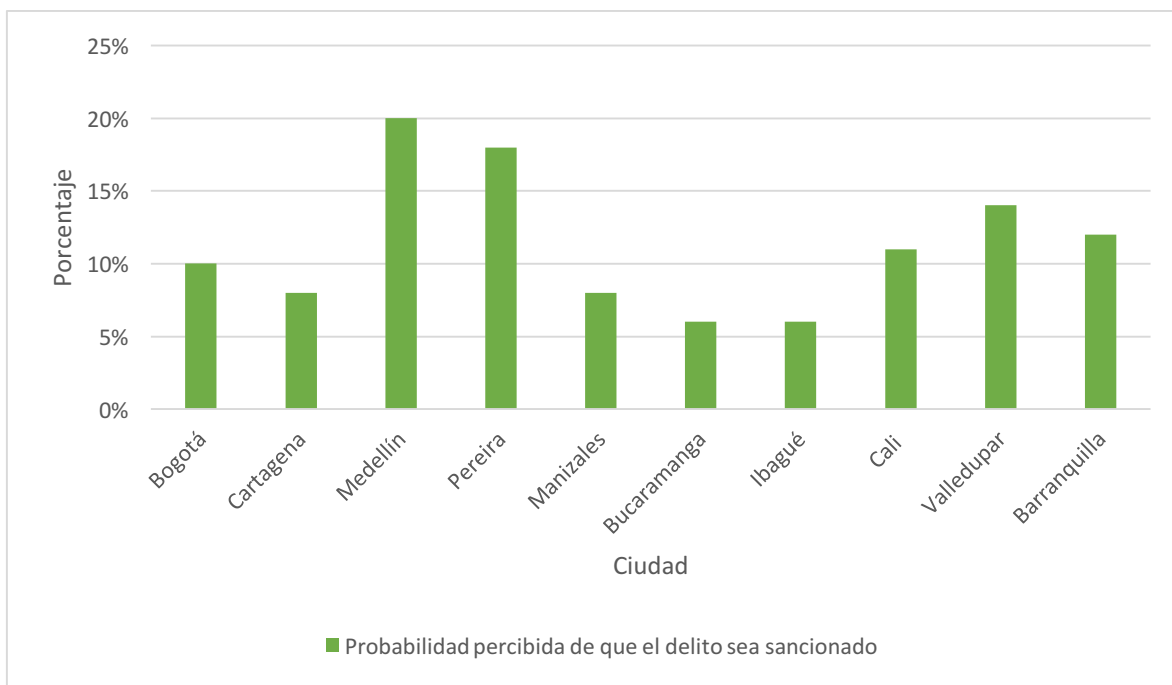
Gráfica 23. Personas que denunciaron el delito



Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2012).

La percepción de que los delitos denunciados fueran sancionados muestra que en Medellín el 20% de los denunciantes tenían buenas esperanzas de que sus denuncias prosperaran, mientras el 18% en Pereira y el 14% en Valledupar también lo esperaban. Las ciudades con menores niveles de probabilidad percibida de sanción del delito denunciado fueron Manizales (8%), Ibagué (6%) y Bucaramanga (6%). Curiosamente, Bogotá, que era segunda en denuncia de hechos victimizantes, baja al puesto sexto en esperanza de sanción del delito.

Gráfica 24. Probabilidad percibida de que el delito sea sancionado



Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2012).

El diagnóstico general de Colombia da cuenta de una serie de desafíos de seguridad ciudadana que cobran importancia en las zonas urbanas del país. En efecto, con la reducción de los retos de seguridad pública en muchos lugares del territorio nacional, la atención de los ciudadanos y las autoridades (e incluso un incremento objetivo de los indicadores) señala a la seguridad ciudadana como el nuevo reto de política de seguridad de Colombia. En este sentido, la percepción de seguridad de los ciudadanos y la victimización por delitos menores (sobre todo hurto) se han configurado como nuevas prioridades públicas de atención para las políticas de seguridad.

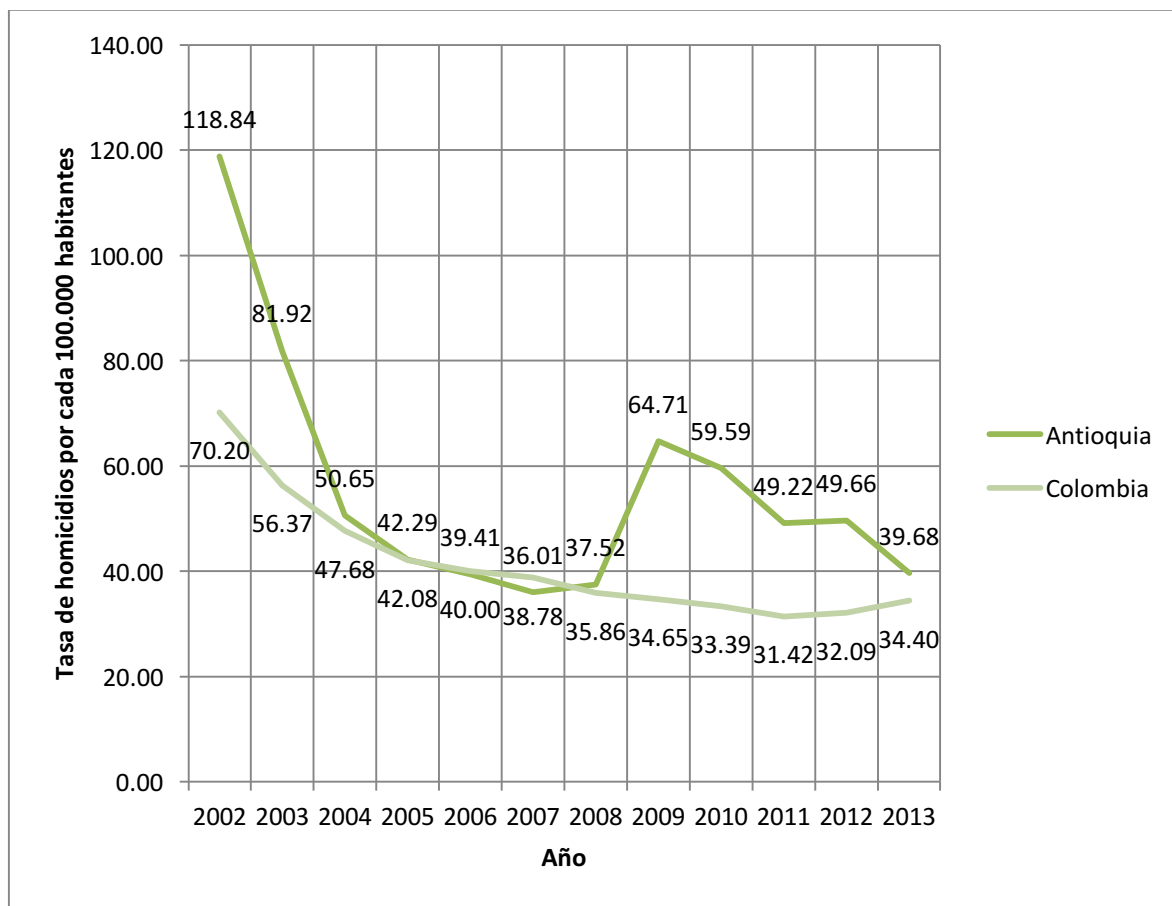
1.5. Seguridad, convivencia y victimización en Antioquia

Esta sección reconstruye el contexto de seguridad ciudadana y victimización en el departamento de Antioquia, con especial énfasis –sobre todo por disponibilidad de información y en particular por su influencia para el departamento- en el Valle de Aburrá y en el Municipio de Medellín.

1.5.1 Diagnóstico de Antioquia

La última década ha significado una reducción sostenida en la tasa de homicidio de Antioquia, sin embargo, continúa siendo uno de los departamentos más violentos del país (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 129). Respecto a las tendencias en el homicidio –de entrada el indicador objetivo más sensible en términos de medición de seguridad-, se puede establecer que el comportamiento del homicidio en los municipios del Valle de Aburrá comúnmente se asocia al de las demás subregiones del departamento. Sin embargo, “el comportamiento de las otras ocho regiones dista de ser homogéneo” (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 130). En efecto, Antioquia es un departamento duramente afectado por fenómenos como el desplazamiento forzado, el secuestro y los eventos con minas antipersona, viviendo bajo los rigores de todas las fases recientes del conflicto armado colombiano y los fenómenos asociados con las nuevas formas de crimen organizado y de múltiples violencias.

Gráfica 25. Tasa de homicidio, 2002-2013 (Antioquia y Colombia)



Fuente: Banco Mundial, Universidad Sergio Arboleda; SISC Departamental.

Si bien la Gráfica da cuenta del comportamiento de los homicidios en el departamento y el país durante la última década, el considerar la situación inmediatamente anterior puede ofrecer una mirada más amplia del asunto. En este sentido, en un estudio realizado por el Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT en 2007 se expresa que:

[...] en el 2001 los homicidios de Antioquia representaban casi una tercera parte de los homicidios de todo el territorio nacional (31,88%); a partir de este año la tasa de homicidios en 2001 para el resto de Colombia creció 6,14%, mientras en el departamento de Antioquia disminuyó 7,87%; de esta manera, para el 2002, los homicidios del departamento disminuyeron la

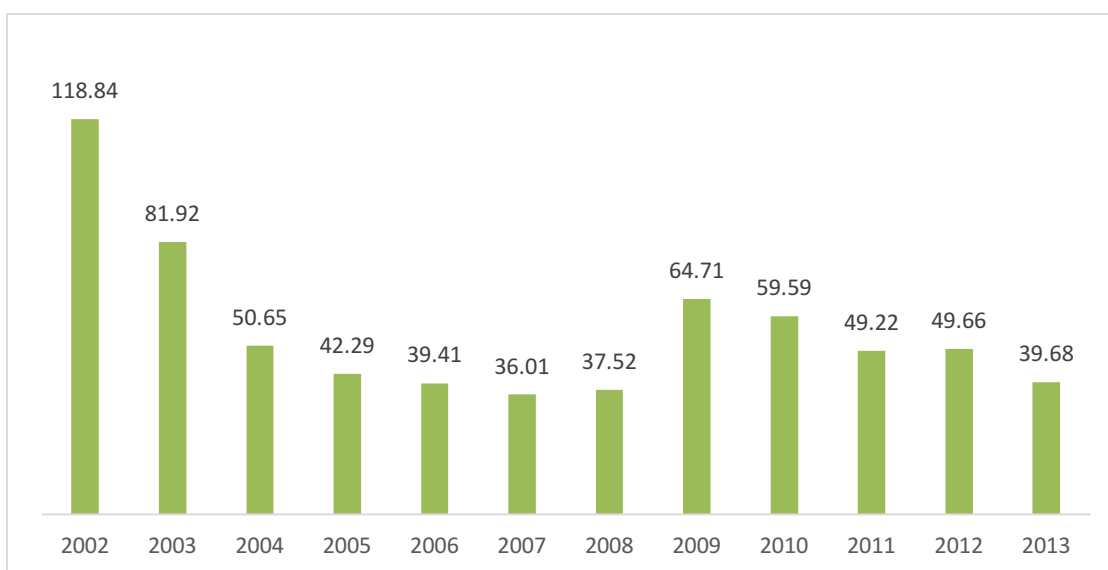
participación en el total nacional a 28,91%. A partir de este año la tasa de homicidios en todos los departamentos de Colombia (sin incluir a Antioquia), tiene una tendencia de disminución sostenida hasta 2006; sin embargo, en Antioquia la tendencia decreciente es más pronunciada que en el resto del país, por lo cual su participación porcentual en el total de homicidios de Colombia decrece hasta 17,03% [...] (Centro de Análisis Político CAP - Universidad EAFIT, 2007, págs. 36-37).

De igual forma, la reducción desde el 2007 al año 2013 siguió siendo sostenida en el departamento en relación a los datos nacionales.

Para profundizar en las particularidades subregionales del departamento, con ocasión de este estudio, se realizó un análisis de la tasa de homicidio de Antioquia entre 2002 y 2013 con base en los datos del SISC-Departamental.

Entre el 2002 y el 2013 se presentaron en el departamento 38.935 casos de homicidio. En cuanto a tasa de homicidios por cien mil habitantes, durante el mismo periodo de 12 años, Antioquia presentó una tasa promedio de 55,79.

Gráfica 26. Tasa de homicidios por cien mil habitantes - Antioquia

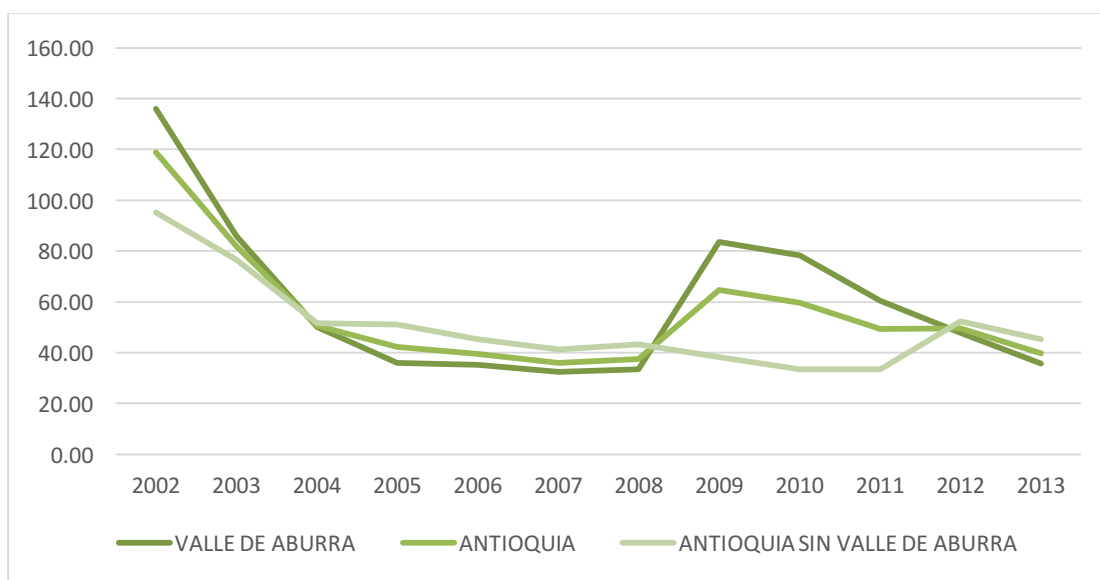


Fuente: SISC-Departamental

Luego de una tasa de 118,84 en 2002, entre ese año y 2008 se presentó un descenso de 69,7%, que coincide con el proceso de desmovilización de las AUC liderado por el gobierno nacional en cabeza del Presidente Álvaro Uribe, y en el que Antioquia cumplió un papel relevante en dos sentidos. Primero, en la administración encargada de Eugenio Prieto y luego en la administración de Aníbal Gaviria. La tendencia a la baja se rompe en 2009 con un aumento en la tasa de 72,5% comparada con el año anterior y aunque no hay una relación proporcional, el contexto indica que el alza de 2009 se da simultánea al reacomodo de las estructuras delincuenciales en el departamento, luego de la extradición de los jefes paramilitares, las luchas que en ellas se dieron y el fraccionamiento de poderes enfrentados. Aunque a partir de 2010 la tasa disminuye, no se recuperaría la cifra de 2007, pese a la tasa de 39,68 en 2013.

Excluyendo al Valle de Aburrá que es una subregión con un peso importante en las estadísticas de homicidio del departamento, la tasa promedio de los 12 años considerados se sitúa en 50,57. Aunque las trayectorias de Antioquia y Valle de Aburrá, incluso de Antioquia sin el Valle, siguen un camino paralelo, especialmente en el descenso entre 2003 y 2008. Parte del alza del 2009 en las tasas del departamento está fuertemente relacionada con el incremento importante de la tasa en el Valle de Aburrá, que se puede explicar, entre otras razones, por las disputas de poder en el seno de la red criminal conocida como “La Oficina”. En el descenso de 2011 vuelven a coincidir las trayectorias.

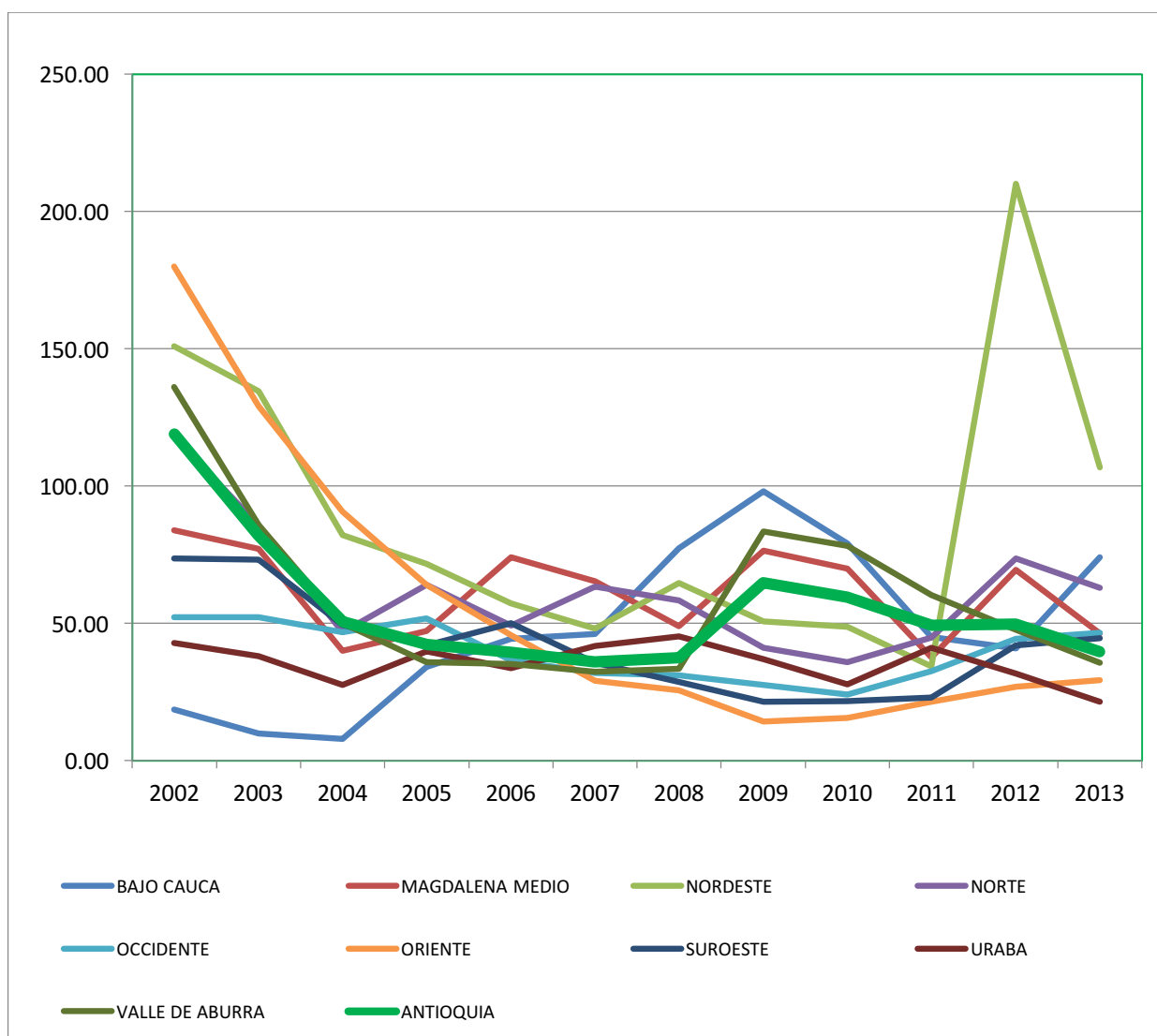
Gráfica 27. Tasa de homicidios comparada



Fuente: SISC-Departamental

Por subregiones hay comportamientos que llaman la atención y vale la pena a detallar: en el Bajo Cauca se presentaron entre 2002 y 2004 tasas muy por debajo de la tasa departamental. En efecto, mientras en Antioquia la tasa de 2002 era de 118,84, en el Bajo Cauca era de 18,57. Así, en Antioquia la tasa de 2003 fue 8,26 veces la tasa de Bajo Cauca (81,92 contra 9,92, respectivamente), finalmente en 2004 la tasa en Antioquia de 50,65, pese al descenso, fue 6,34 veces la tasa de Bajo Cauca, situada en 8,00.

Gráfica 28. Tasas subregionales de homicidio



Fuente: SISC-Departamental.

Ahora bien, los datos para el Bajo Cauca en esos tres años, aunque positivos, dejan algunas dudas, al menos al no ser acordes con la intuición. Habría que verificar la influencia que tiene en esa disminución el proceso de desmovilización paramilitar y el estado de cosas que esto generó en el ámbito subregional de la seguridad, el contexto parecería indicar que la disminución se debió más a la hegemonía paramilitar ilegal que a la acción eficaz por parte del estado. Aunque esto, por supuesto, sea hasta ahora solo una hipótesis.

La mejoría en las cifras del Bajo Cauca, con relación a las tasas de Antioquia, continuó hasta el 2005. En el 2006 comienza a invertirse la tendencia y el Bajo Cauca estuvo hasta el 2010 por encima de las tasas departamentales. Un hecho explicable, en parte, por la configuración de las llamadas BACRIM, reductos ilegales de la desmovilización paramilitar reagrupados en organizaciones delincuenciales que encuentran en la zona las condiciones óptimas para desarrollar el negocio del narcotráfico, otrora bastión paramilitar, y avanzar en procesos extorsivos del comercio y la minería informal.

Algo similar ocurre en el caso de Urabá, entre 2002 y 2004, Antioquia presenta una tasa que es 2.78, 2.16 y 1.83 veces la tasa de Urabá, respectivamente. Las tasas de 42.76, 38.00 y 27.65 para los 3 años en la subregión, no parecen dar cuenta de una situación favorable de seguridad sino, más bien, de una presencia consolidada del paramilitarismo en negociación. Con una diferencia menor, Urabá seguirá manteniéndose por debajo de la tasa departamental hasta el 2006.

La tasa del departamento en el año 2002 estará determinada de manera importante por el comportamiento de las tasas del Nordeste (150,90), Oriente (180,00), y Valle de Aburrá (136,01). Ocurre algo similar para el 2003 cuando las mismas subregiones presentarían un comportamiento por encima de la tasa departamental, cosa que se mantiene en 2004 para las subregiones de Nordeste y Oriente.

Para el 2005, 5 de las 9 subregiones presentan tasas por encima de la tasa departamental de 42,29 de ese año. A saber: Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Oriente y Occidente. Contrario a la intuición, Valle de Aburrá presenta un comportamiento inferior a la tasa departamental en ese mismo año. En 2006 se mantienen las mismas subregiones por encima de la tasa departamental, salvo la salida de Occidente y el ingreso de Suroeste, en este año la subregión de Magdalena Medio por poco dobla la tasa departamental.

La configuración cambia en 2007 y por primera vez Urabá y Bajo Cauca van a estar por encima de la tasa departamental de 36.01, a estas subregiones se suman Magdalena Medio, Norte y Nordeste, lo mismo ocurrirá en 2008. Occidente se comporta de manera similar, manteniéndose sobre el promedio y estando por debajo en varios periodos de los años analizados.

Durante 2009 y 2010, Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Magdalena Medio estuvieron por encima de la tasa departamental. Quizás, lo anterior obedece al proceso de consolidación de las llamadas BACRIM, que provocaría un recrudecimiento de la violencia homicida al entrar a estos espacios disputando el control de las organizaciones delincuenciales asentadas en la zona. El 2011 presenta una situación particular pues únicamente Valle de Aburrá estuvo por encima de la tasa departamental, podría decirse incluso que la situación del Valle frena o impide, en alguna medida, el descenso de la tasa departamental de 59.59 en 2010 a 49.22 en 2011.

Las subregiones por encima de la tasa departamental en 2012 son Magdalena Medio, Nordeste y Norte, que repiten en 2013 acompañadas de Bajo Cauca, Occidente y Suroeste.

En general Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Bajo Cauca son las subregiones que más se encuentran por encima de la tasa departamental durante los 12 años considerados. Occidente, Suroeste y Urabá son las subregiones que menos años han estado por encima de la tasa de Antioquia. Sin embargo, esto no da garantía de unas condiciones de seguridad o presencia estatal eficiente, en especial en el caso de Urabá donde está comprobada la presencia permanente de estructuras ilegales, por esto se debe verificar si las bajas tasas son el producto de la actividad estatal o de un control violento ilegal.

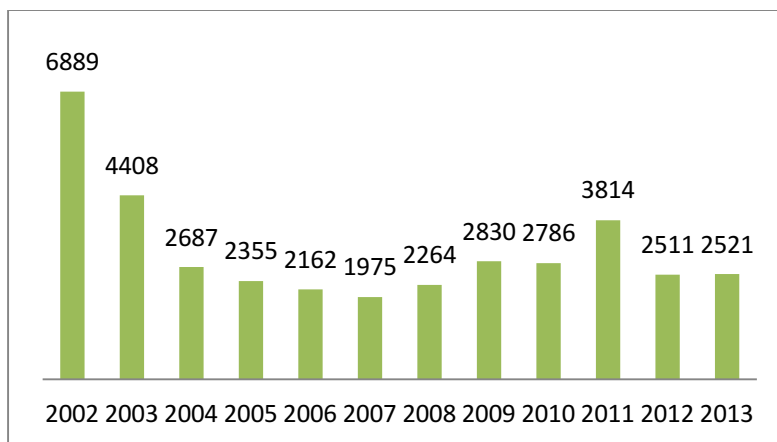
Otros hechos por destacar en lo subregional son el comportamiento de la tasa de homicidios en el Oriente, desde 2007 considerablemente menor que la tasa

departamental. Al igual que Suroeste, que de 2008 a 2013 se mantuvo por debajo del promedio.

Es igualmente necesario señalar que en el plano municipal de los 125 municipios que tiene el departamento, que en 2002 en 6 no se presentaron homicidios, en 2003 en 4, en 2004 en 3, en 2005 en 7, en 2006 en 8, igual que en 2007, para 2008 son 11, 15 en 2009, uno más en 2010, 17 en 2011, 11 y 6 para 2012 y 2013, respectivamente. Esto muestra que si bien el homicidio como problemática de seguridad está concentrado en algunas subregiones especiales que influyen de manera importante en la tasa departamental, como se vio anteriormente, no es ajeno al grueso de municipios de Antioquia. De hecho, solo 4 de los 125 municipios no presentan homicidios al menos en 6 años de los 12 considerados: Vigía, Murindó, San José y Abriaquí.

Con otros datos organizados por Javier Moreno y Alejandro Peláez con base en información de la Policía Nacional entre 1990 y 2013, a excepción de 2011 que los datos son de Medicina Legal⁵. El número total de homicidios en Antioquia entre 2002 y 2013 se sitúa en 37.202.

Gráfica 29. Homicidios en Antioquia 2002-2013



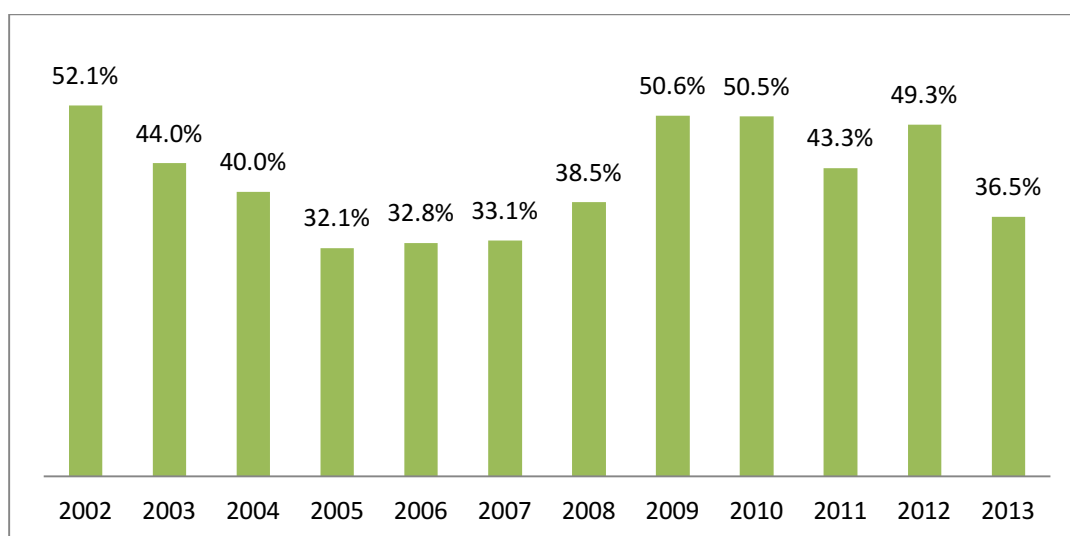
Fuente: Elaboración propia con datos de Moreno y Peláez, 2014

⁵ <http://finiterank.github.io/homicidios/>

Teniendo en cuenta las disparidades de datos, que no son más que evidencia de un problema de país en relación a la metodología empleada para llevar estadísticas de homicidios. La utilización de esta segunda base de datos estará concentrada en un análisis municipal, distinto del realizado anteriormente con alcance subregional.

Medellín es el municipio que más porcentaje de participación tiene durante todos los años, esto se explica por el alto impacto que las dinámicas asociadas a diferentes patrones de violencia criminal y social que como permite ver la gráfica, implican la necesidad de una atención especial a las causas y efectos del homicidio en Medellín.

Gráfica 30. Número de homicidios en Medellín como porcentaje del total departamental



Fuente: Elaboración propia con datos de Moreno y Peláez, 2014

Tomando el número de homicidios de los 125 municipios del Departamento, se puede establecer cuáles son los 12 que para el periodo 2002-2013 que aportaron un mayor número de homicidios al total departamental.

Para el año 2002, los 12 municipios que más porcentaje tienen en el total de homicidios departamental del año, aportan en conjunto el 74.1% de los homicidios. Esto quiere decir que cerca de las tres cuartas partes de los homicidios en

Antioquia ocurrieron en esos municipios. Se observa que para 2003 ese porcentaje era de 67.4%, en 2004 era de 64.5% y 55.9% en el 2005. En 2006 dicho porcentaje fue de 59.2%. Para 2007 los 12 municipios aportaron el 62,4% de los homicidios, en el 2008 64.6%, y un 77.6% en 2009. En el 2010 de cada 10 homicidios que se cometían en Antioquia, cerca de 8 ocurrían en los 12 municipios que más porcentaje aportan al total Antioquia; para ese año el porcentaje fue del 79.6%, y en el 2011 sería de 69%. Finalmente en 2012 y 2013 los 13 municipios que más homicidios reportaban en esos años aportaban el 78.2% y el 61.6%, respectivamente.

Los porcentajes anteriores son llamativos ya que muestran la concentración que los homicidios presentan en algunos municipios del departamento en el lapso considerado. Esto puede estar señalando un patrón que debe ser triangulado con datos de contextos y dinámicas de violencia, ya que queda corroborado al revisar cuáles son esos 12 municipios – 13 en 3 años – que más participación tienen como porcentaje en el total de homicidios departamental.

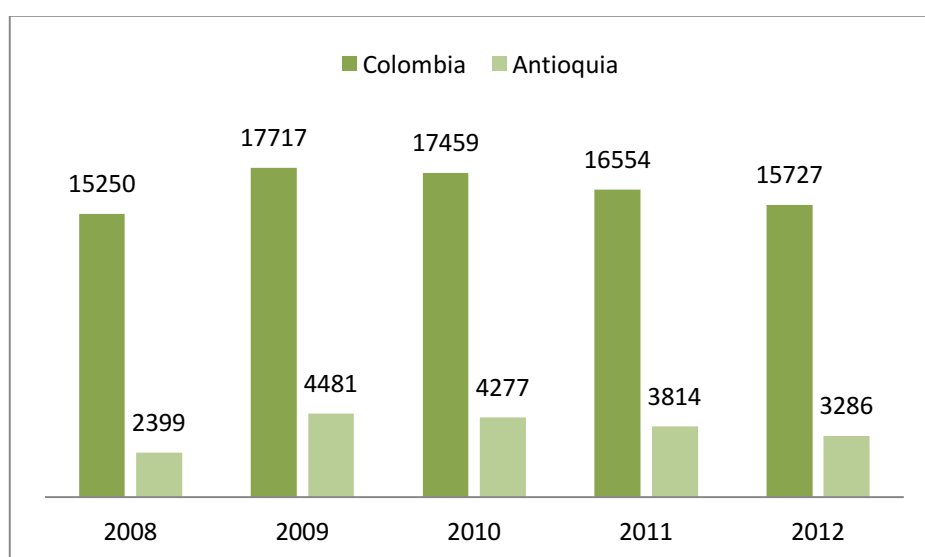
En los años contemplados entre 2002 y 2013, Medellín se destaca dentro del grupo de los 12, al igual que Bello, Itagüí y Turbo. Apartadó está presente en 11 años, Caldas y Envigado en 7, Rionegro y Puerto Berrío en 6, para mencionar los que se encuentran en la mitad o más de años analizados.

Esto llama la atención pues de estos 9 municipios, 5 están ubicados en el Valle de Aburrá y uno más, Rionegro. Se excluyen de esta dinámica, Turbo, Apartadó y Puerto Berrío. Incluso año a año tal fenómeno es muy diciente, en 2002, 5 municipios del Valle de Aburrá estaban dentro del grupo de 12. En 2003, 6 estaban en el grupo que ese año incluía 13 municipios. En 2004 y 2005 se observan 4 municipios del total de 12. Para 2006 serían 6, en 2007 4, 3 en 2008, y de nuevo 4 en 2009. El número aumentaría de nuevo a 5 en 2010, 6 en 2011. Para 2012, el grupo de municipios que concentraban el mayor número de

homicidios fue 13; y el Valle de Aburrá aportaba 7 municipios. Para 2013 del grupo de 13 municipios 7 pertenecen al Valle de Aburrá.

En el panorama de comparación departamental, los datos de Forensi⁶ entre 2008 y 2012 arrojan resultados que vale la pena revisar. Todos los datos empleados a continuación fueron obtenidos a través de la página web, y de la Revista Forensi 2009.

Gráfica 31. Número y tasa de homicidios Colombia/Antioquia

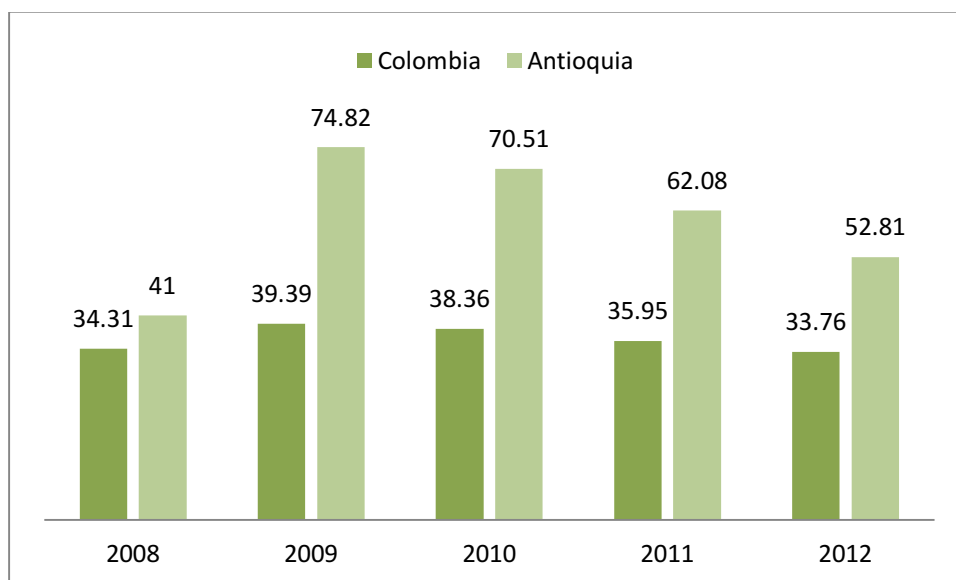


Fuente: Elaboración propia con datos de Forensi, 2013

6

Forensi	2009
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2009/Homicidios.pdf	
Forensi	2009
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2009/Homicidios.pdf	
Forensi	2010
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2010/HOMICIDIO.pdf	
Forensi 2011	http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2011/2-F-11-Homicidios.pdf
Forensi	2012
http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2012/1%20homicidios%20forensi%202012.pdf	

Gráfica 32. Tasa de homicidios Colombia/Antioquia



Fuente: Elaboración propia con datos de Forensis, 2013

En cuanto a la comparación entre departamentos del país, Antioquia representa como el 15.7% de los homicidios nacionales en 2008, el 25.3% en 2009, el 24.5% en 2010, el 23% en 2011 y el 20.9% en 2012. Antioquia y el Valle del Cauca son los únicos departamentos que representan más del 10% del total nacional durante los 5 años, a excepción de 2010 y 2011 en los que Bogotá aporta el 10%. De hecho entre 2009 y 2011 Antioquia es el departamento que más participación tiene en el total nacional.

Tabla 5. Participación departamental en el número total de homicidios a nivel nacional

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012
Amazonas	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Antioquia	15,7%	25,3%	24,5%	23,0%	20,9%
Arauca	2,2%	1,5%	1,4%	0,9%	1,3%
Atlántico	3,2%	3,0%	3,5%	3,2%	3,6%
Bogotá DC	9,6%	9,3%	10,0%	10,0%	8,2%

Bolívar	2,0%	2,2%	2,2%	2,0%	2,6%
Boyacá	1,2%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%
Caldas	2,6%	1,9%	2,0%	1,9%	1,8%
Caquetá	1,0%	0,8%	1,0%	1,0%	1,1%
Casanare	0,6%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%
Cauca	2,6%	2,8%	3,1%	3,6%	3,1%
Cesar	2,2%	1,5%	1,4%	1,5%	1,4%
Chocó	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	1,2%
Córdoba	1,8%	2,1%	1,9%	1,6%	1,5%
Cundinamarca	2,4%	2,3%	2,6%	2,8%	3,2%
Guainía	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guaviare	0,9%	0,6%	0,6%	0,2%	0,4%
Huila	2,0%	1,6%	1,6%	1,6%	1,9%
La Guajira	1,2%	1,2%	1,5%	1,4%	1,6%
Magdalena	2,4%	2,2%	1,9%	2,0%	2,2%
Meta	3,8%	3,3%	2,8%	2,9%	3,1%
Nariño	2,8%	3,5%	2,8%	3,0%	3,3%
Norte de Santander	4,5%	3,6%	3,2%	3,4%	3,9%
Putumayo	0,5%	0,6%	1,2%	1,1%	1,2%
Quindío	2,0%	1,6%	1,6%	1,7%	1,5%
Risaralda	4,9%	3,2%	3,0%	2,4%	2,4%
San Andrés y Providencia	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Santander	3,1%	2,6%	2,0%	1,9%	2,0%
Sucre	0,7%	0,9%	0,6%	0,7%	0,9%
Tolima	2,4%	1,9%	1,7%	2,0%	1,8%
<i>Valle del Cauca</i>	<i>20,4%</i>	<i>18,3%</i>	<i>19,5%</i>	<i>22,0%</i>	<i>22,5%</i>
Vaupés	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vichada	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de Forensis, 2013

Como se observa existen variaciones en los datos objetivos de homicidios que deben ser analizados también en relación a las percepciones que los ciudadanos tienen y que pueden o no corresponder a estas situaciones objetivas de inseguridad.

Es por esto que las condiciones de percepción de inseguridad están sujetas a condiciones reales, por tanto objetivas, de asuntos que comprometen en la cotidianidad la seguridad de los ciudadanos. Si bien el factor de percepción da cuenta de una realidad que solo es subjetiva, en principio, para el ciudadano que siente y percibe las condiciones de seguridad del territorio donde se desenvuelve, las actuaciones que este ciudadano realizará en virtud de ese sentimiento impactan en el tejido social, reproduciendo la percepción insegura, y trasladándola a otros ciudadanos.

En el anterior sentido, la Gobernación de Antioquia (2012) en el informe Seguridad ciudadana en pequeñas ciudades de Antioquia, expresa lo siguiente:

La convergencia de grupos guerrilleros, autodefensas, organizaciones narcotraficantes, y estructuras criminales durante las últimas décadas han sumido al departamento en un sinnúmero de confrontaciones internas por la lucha de territorios y escenarios aptos para su accionar criminal. De otro lado están los intentos por parte de las Fuerzas Militares por recuperar la soberanía y el orden público en la región que han contribuido enormemente a transformar las realidades regionales (Gobernación de Antioquia, 2012, pág. 20).

En efecto, la situación de seguridad del departamento ha atravesado, históricamente, fenómenos complejos que atentan contra la estabilidad y presencia del Estado, y desarticulan los procesos de confianza que tienen lugar entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales que deben estar a su servicio. De allí que la percepción se entienda, sí como un asunto subjetivo, pero que tiene su raíz en condiciones reales de inseguridad.

Aparentemente, la actuación del Estado en materia de seguridad por lo general trae como consecuencia inesperada el deterioro de la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. En este sentido, la Gobernación de Antioquia indica:

Los esfuerzos en materia de seguridad pública, dan como resultado centros poblacionales con acentuadas dificultades para resolver por vías institucionales y pacíficamente sus conflictividades cotidianas. Así, los conflictos que eran

racionalizados por las organizaciones armadas que han desbordado la capacidad institucional de algunos municipios, que han sufrido una exposición de violencias espontáneas y su incremento paulatino relacionadas con los contextos del barrio, la escuela, el hogar, el lugar de trabajo, y las zonas rosas. Tales violencias hacen parte de la categoría de la seguridad ciudadana, cuyas manifestaciones a nivel departamental giran en torno a los temas de: hurto, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, riñas, violencia escolar, delincuencia común, incivildades (Gobernación de Antioquia, 2012, pág. 21).

Así, el deterioro de la percepción de seguridad no solo se explica en condiciones de inseguridad objetivas propiciadas por grupos al margen de la ley, sino también por la acción del Estado para frenar y erradicar tales acciones. En estos escenarios, como indica la Gobernación, la población difícilmente recupera la confianza en las instituciones, y traslada sus conflictividades cotidianas hacia escenarios no institucionales. La paradoja por tanto es complicada: tanto la no intervención, como la intervención tardía (y, por lo general, violenta por parte del Estado) minan la percepción de seguridad.

Por otro lado, la Gobernación de Antioquia presentó en el año 2008 la primera *Medición de la percepción de la comunidad sobre Seguridad Ciudadana* (Secretaría de Gobierno, 2008), que reveló los resultados de un ejercicio con una muestra no representativa y de recolección telefónica de datos sobre percepción de seguridad en el departamento de Antioquia. Así, la encuesta aplicada encontró que para ese año el 31,1% de los antioqueños consideraba que sus municipios eran seguros, mientras el 20,5% que eran inseguros. De igual manera, el 40% de los encuestados sostuvo que la inseguridad disminuyó en su municipio, contra un 28,4% que señaló un incremento. De igual forma, el 77% sostuvo que la posibilidad de ser víctima de un delito era baja, y el 33,5% que esta posibilidad había disminuido en el año inmediatamente anterior a la aplicación de la encuesta. Los siguientes son los datos más relevantes del periodo de medición 2008-2009.

Tabla 6. Resultados de la encuesta 2008-2009

Componentes		Dato 2008-2009
Percepción general	Evaluación en el momento de ser encuestado	31,1% se sentían seguros en su municipio; mientras que 20,5% se sentían inseguros en su municipio.
	Evaluación retrospectiva	36,9% consideraba que la seguridad había disminuido respecto al último año; 28,4% consideró que la seguridad aumentó respecto al último año.
Percepción personal	Evaluación en el momento de ser encuestado	77% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito no era alta.
	Evaluación retrospectiva	33,5% consideraba que la posibilidad de ser víctima de un delito había disminuido respecto al último año; 20,7% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito aumentó respecto al último año.
Experiencia personal	Victimización	El 16,4% de los hogares encuestados fue víctima de algún delito en el último año.
		El 73,2% fue víctima de atraco y robo; 10,1% conocía una víctima de homicidio; 7,3% fue víctima de hurto a residencias.
Imagen institucional	Tasa de denuncia	El 43,9% de los encuestados que sufrió algún delito denunció.
	Imagen de la Policía	Para el periodo el 72,5% tenía una imagen positiva de la Policía.
	Imagen de la Fiscalía	El 70% tenía una imagen positiva de la Fiscalía.
	Imagen del Ejército	83,3% tenía una imagen positiva del Ejército.

Fuente: Secretaría de Gobierno (2008).

En términos de datos objetivos, el 16,4% de los hogares encuestados en el ejercicio de 2008 fue victimizado en ese año (Secretaría de Gobierno, 2008). Revisados de manera subregional, el coeficiente de victimización más alto se encontró en Valle de Aburrá (22,8%) y el más bajo en Suroeste (4,7%). El atraco y el robo fueron los delitos más frecuentes (73,2%), seguido por los homicidios (10,1%), y el hurto a residencias (7,3%).

El nivel de denuncia en el departamento para ese estudio fue de 44%. En términos subregionales, Urabá fue la subregión que más denunció, con el 54,4%, y Magdalena Medio la que menos, con 27,7%.

A nivel subregional, Oriente reportó la favorabilidad más alta hacia la Policía, con el 80,4%, y Norte la más baja, con 65,4%. Respecto a la Fiscalía, el 66,8% de los antioqueños encuestados reportó una imagen favorable, aunque el 20,7% no conocía a la institución. Finalmente, el Ejército a nivel subregional encontró mayor favorabilidad en el Valle de Aburrá y Oriente con 87,6%, mientras que Magdalena Medio mostró la más baja tasa, con un 68,1%.

En el 2010, la Gobernación de Antioquia presentó la segunda *Medición de la seguridad ciudadana en el departamento de Antioquia* (Secretaría de Gobierno, 2010), establecida como continuación de la encuesta de percepción de 2008, y estuvo enfocada a recoger datos sobre percepción de seguridad, victimización y a construir el Índice de Seguridad Ciudadana. La siguiente tabla muestra un resumen de los hallazgos de esa medición.

Tabla 7. Resultados encuesta 2009-2010

Componentes		Dato 2009-2010
Percepción general	Evaluación en el momento de ser encuestado	El 37,9% se sentía seguro en su municipio; 23,9% se sentían inseguros en su municipio.

	Evaluación retrospectiva	El 36,7% consideró que la seguridad disminuyó respecto al último año; 20,5% consideró que la seguridad aumentó respecto al último año.
Percepción personal	Evaluación en el momento de ser encuestado	72,3% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito no era alta.
	Evaluación retrospectiva	18,7% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito disminuyó respecto al último año; 29,6% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito aumentó respecto al último año.
Experiencia personal	Victimización	15,5% de los hogares encuestados fue víctima de algún delito en el último año.
		68,2% fue víctima de atraco y robo; 14,3% conocía una víctima de homicidio, 10% fue víctima de hurto a residencias.
Imagen institucional	Tasa de denuncia	58,4% de los encuestados que sufrieron algún delito denunciaron.
	Imagen de la Policía	73,7% tenía una imagen positiva de la Policía.
	Imagen de la Fiscalía	70,3% tenía una imagen positiva de la Fiscalía.
	Imagen del Ejército	83% tenía una imagen positiva del Ejército.

Fuente: Secretaría de Gobierno (2010).

En 2010 el 37,9% de los antioqueños encuestados consideró a sus municipios como *seguros*, mientras que el 23,9% los consideró *inseguros*. La subregión con la percepción de seguridad más baja fue el Bajo Cauca, con el 24,6% de los encuestados percibiendo sus municipios como seguros, mientras que la subregión con la percepción de seguridad más alta fue Occidente, con el 56,9%.

De igual manera, el 36,7% de los antioqueños encuestados consideró que la seguridad en sus municipios aumentó respecto al año anterior a la encuesta, mientras el 20,5% consideró que se había reducido la seguridad en sus municipios. Las subregiones de Valle de Aburrá y Bajo Cauca fueron las que más aumento presentaron en la percepción de reducción de la seguridad, con 41,5% y 41,3%, respectivamente.

El 72,3% de los antioqueños encuestados consideró que la posibilidad personal de ser víctima de un delito no es alta. El 18,7% piensa que esta posibilidad disminuyó respecto al año pasado, mientras el 29,6% dicha probabilidad aumentó. El Valle de Aburrá y el Nordeste fueron las subregiones en donde la posibilidad percibida por los ciudadanos de ser víctimas de un delito fue mayor en esta medición.

El porcentaje de victimización de hogares fue del 15,5%. Subregionalmente, el Valle de Aburrá fue la de mayor porcentaje de victimización, con el 19,6%, y Occidente la de la menor tasa, con 5,7%. En efecto, a excepción del Valle de Aburrá, todas las subregiones tenían un porcentaje de victimización de hogares por debajo del promedio departamental (Secretaría de Gobierno, 2010).

El atraco o robo fue el delito más frecuente en el departamento, con el 68,2% de los casos de delito, seguido por homicidios o asesinatos con 14,3% y hurto a residencias con 10%. El porcentaje de la denuncia ciudadana fue del 58,4%. A nivel subregional, el Bajo Cauca obtuvo el porcentaje de mayor denuncia, con el 66,2%, y el Norte el de menor, con 44,9%.

Respecto a la imagen institucional, la Policía fue percibida favorablemente por el 73,7% de los antioqueños encuestados, mientras la imagen desfavorable fue de 24,4%. La subregión en donde esta imagen favorable fue más alta es Nordeste, con el 82,4%, y la más baja, Urabá, con el 68,9%. Por otro lado, la imagen favorable de la Fiscalía fue de 70,3% y la desfavorable de 10,6%. La respuesta de “no sabe/no responde” fue de 19,2%. Nordeste fue la subregión con la mayor imagen positiva de la Fiscalía, con 76,7%, mientras la más desfavorable fue Bajo

Cauca, con el 61,7%. A nivel departamental la imagen favorable del Ejército fue del 83% de los encuestados, mientras el 9,6% tuvo una imagen desfavorable. La imagen favorable del Ejército fue más alta en la subregión de Oriente y más baja en Norte.

En el tercer ejercicio de medición de seguridad, realizado en el periodo 2010-2011 y presentado a finales de 2011 (Secretaría de Gobierno, 2011) el departamento reportó una percepción de inseguridad del 23,2%. La percepción de inseguridad más alta se presentó en la subregión de Bajo Cauca, con 33,3%, mientras la más baja fue en Occidente, con 6,4%. En la medición de 2011, el 28,2% de los encuestados del departamento pensaba que la inseguridad en su municipio había aumentado respecto al año anterior.

Tabla 8. Resultados de la encuesta 2010-2011

Componentes		Dato 2010-2011
Percepción general	Evaluación en el momento de ser encuestado	32,8% se sentía seguro en su municipio; 23,2% se sentía inseguro en su municipio.
	Evaluación retrospectiva	26,1% consideró que la seguridad disminuyó respecto al último año; 28,2% consideró que la seguridad aumentó respecto al último año.
Percepción personal	Evaluación en el momento de ser encuestado	72% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito no es alta.
	Evaluación retrospectiva	18,6% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito disminuyó respecto al último año; 26,5% consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito aumentó respecto al último año.
Experiencia personal	Victimización	18,4% de los hogares encuestados fue víctima de algún delito en el último año.

		66,9% fue víctima de atraco y robo; 7,5% conocía una víctima de homicidio; 7,9% fue víctima de hurto a residencias.
Imagen institucional	Tasa de denuncia	53,3% de los encuestados que sufrieron algún delito denunciaron.
	Imagen de la Policía	66,1% tenía una imagen positiva de la Policía.
	Imagen de la Fiscalía	63,5% tenía una imagen positiva de la Fiscalía.
	Imagen del Ejército	75,5% tenía una imagen positiva del Ejército.

Fuente: Secretaría de Gobierno (2011).

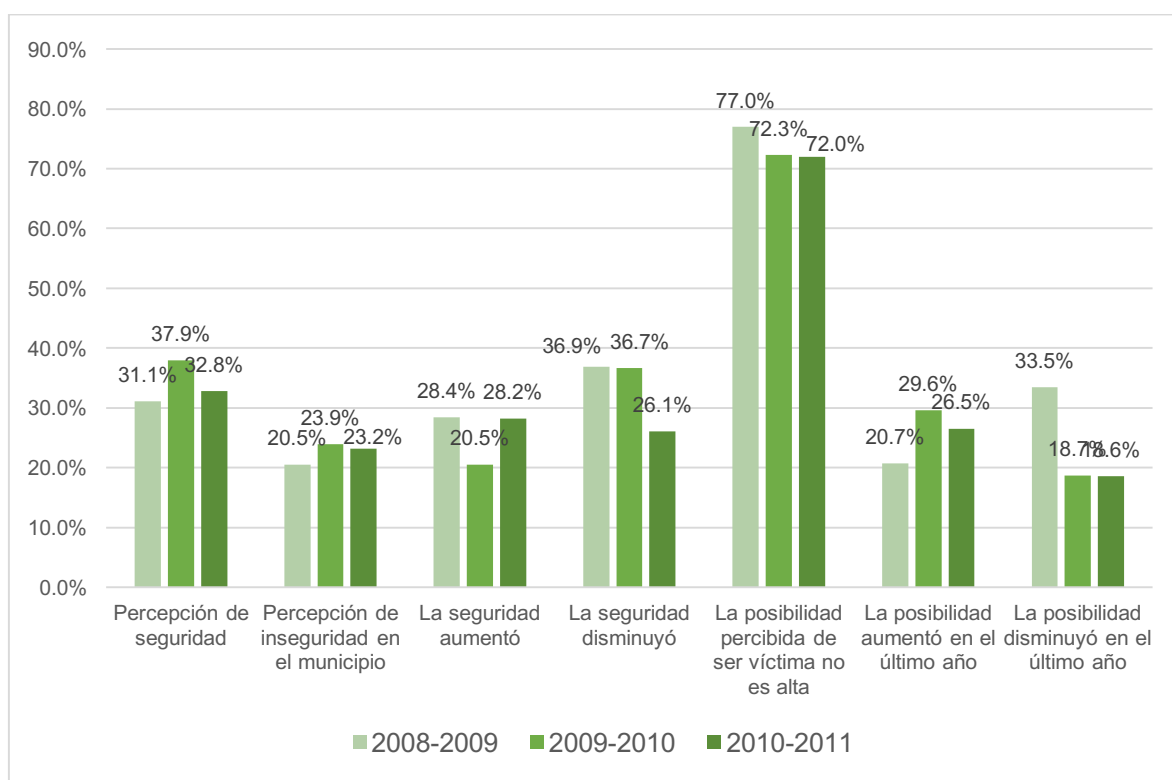
El 26,4% de los encuestados consideró que la posibilidad de ser víctima de un delito en su municipio era alta. El Valle de Aburrá fue la subregión en donde este porcentaje era más alto en todo el departamento. El porcentaje de victimización por hogares para el 2011 fue del 18,4%. El Valle de Aburrá tuvo la mayor tasa de victimización de hogares con 23,4%, mientras el Suroeste tuvo la menor tasa con 7,5%. El Valle de Aburrá fue, de nuevo, la única subregión que superó el promedio departamental en el porcentaje de victimización (Secretaría de Gobierno, 2011, p. 21).

El atraco o robo continuaron siendo los delitos más frecuentes en Antioquia, con el 66,9% del total de los casos de delito, seguidos el por hurto a residencias con 7,9%, y homicidios o asesinatos con 7,5%. El porcentaje de delitos denunciados ante las autoridades en Antioquia fue del 53,3%.

Respecto a la imagen institucional, la Policía tuvo una imagen positiva de 66,1%. A nivel subregional, Occidente presentó la más alta imagen favorable con un 82,5%. Mientras, la subregión del Valle de Aburrá mostró la más baja con 61,7%. La imagen favorable de la Fiscalía fue de 63,5% (aunque el “No sabe/No responde” fue del 25,1%). La subregión con la imagen favorable más alta fue

Nordeste, con 71%, y la más baja Bajo Cauca, con 59,7%. El 75,5% de los antioqueños encuestados en 2011 tenía una imagen positiva del Ejército Nacional. En la subregión de Nordeste se reportó la imagen favorable más alta, con 84.6%, mientras el Norte, con 67.4% tuvo la más baja.

Gráfico 33. Resultados de percepción de seguridad encuestas departamento de Antioquia 2008-2011

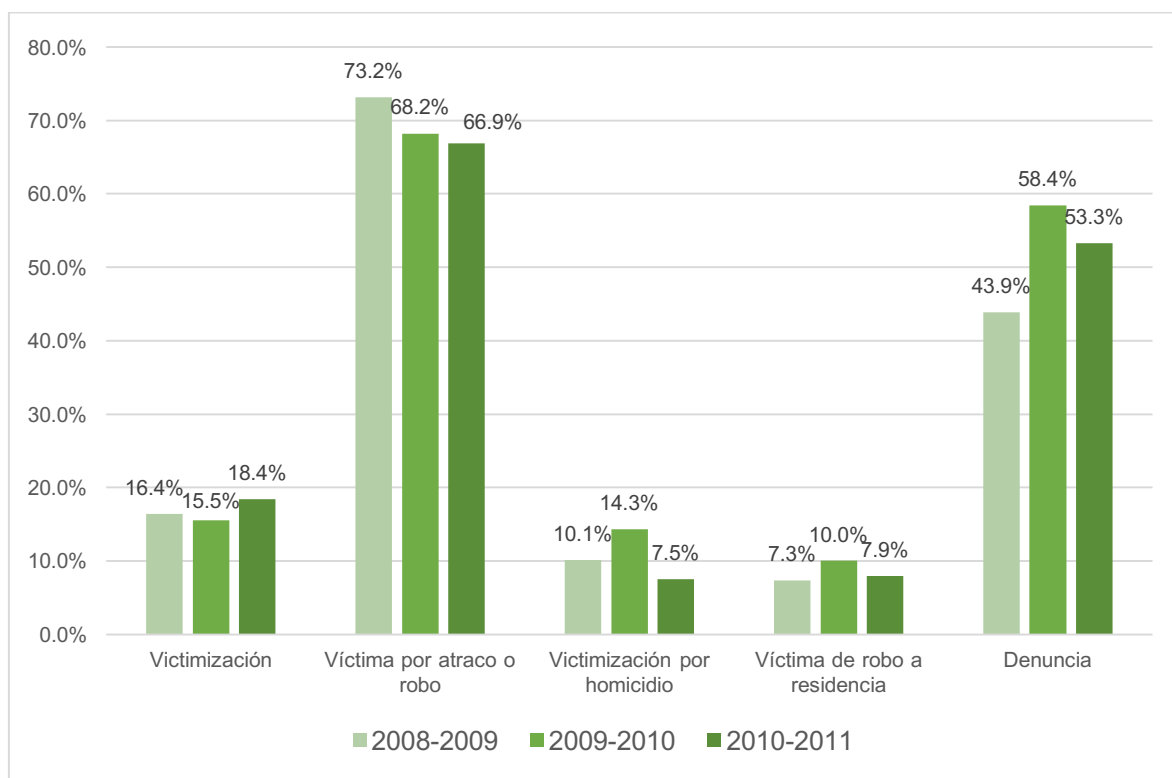


Fuente: Gobernación de Antioquia, 2008, 2010 y 2011.

El Gráfico 33 da cuenta del comportamiento de los indicadores asociados a la percepción general y personal de seguridad en las encuestas realizadas por la Gobernación de Antioquia en los años 2009, 2010 y 2011. La percepción de seguridad en el municipio aumento los dos primeros años de las encuestas, aunque en 2011 se observa una leve caída. Respecto al cambio percibido por los encuestados, los dos primeros años de la encuesta los participantes reportaron una disminución en la seguridad que sin embargo, bajó de 36,7% a 26,1% entre

2010 y 2011. La posibilidad percibida de ser víctima de un delito también se redujo durante todo el periodo de la muestra, pasando de 77% en 2009, a 72,3% en 2010, y a 72% en 2011.

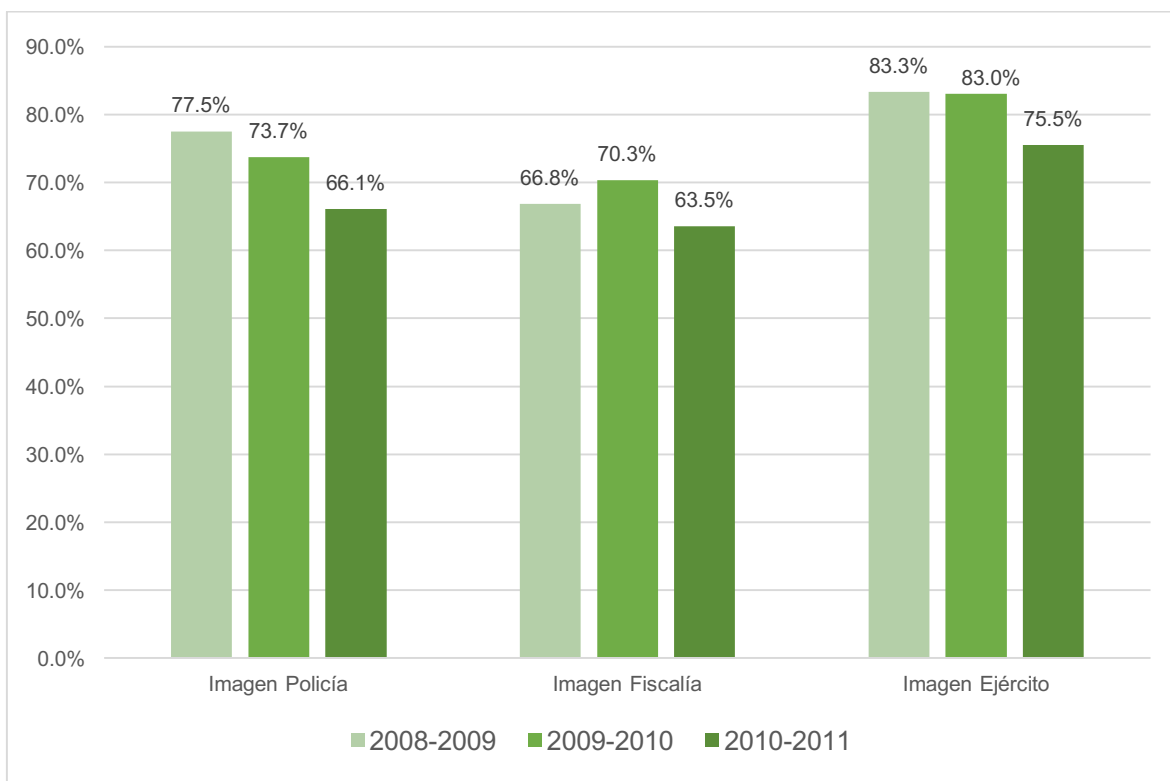
Gráfico 34. Resultados de victimización encuestas departamento de Antioquia 2008-2011



Fuente: Gobernación de Antioquia, 2008, 2010 y 2011.

Ahora bien, el Gráfico 34 da cuenta de las dinámicas de victimización y denuncia en el departamento en 2009, 2010 y 2011. La victimización por hogares fue de 16,4% en 2009, 15,5% en 2010 y 18,4% en 2011. De estos hogares victimizados, el 73,2% sufrió atraco o robo en 2009, en 2010 68,2% y en 2011 66,9%. El robo se redujo durante todo el periodo como parte de la victimización total. De igual forma, de las victimizaciones, el 10,1% en 2009, el 14,3% en 2010, y el 7,5% en 2011, fueron victimizados por homicidio de un familiar. La denuncia aumentó entre 2009 y 2010, pasando de 43,9% al 58,4%, y luego se redujo levemente a 53,3% en 2011.

Gráfico 35. Resultados de percepción de seguridad encuestas departamento de Antioquia 2008-2011



Fuente: Gobernación de Antioquia, 2008, 2010 y 2011.

La Gráfico 35 da cuenta de una tendencia clara de reducción de la imagen positiva de las instituciones en el departamento. En efecto, la Policía pasó de tener una imagen positiva del 77,5% en 2009 a 66,1% en 2011, una reducción del 11,4%. La Fiscalía pasó de 66,8% en 2009 al 63,5% en 2011, una reducción de 3,3%. Por su parte el Ejército pasó de una imagen positiva del 83,3% de los encuestados en 2009, a 75,5% en 2011, una reducción de 7,8%.

Estos estudios calcularon también un Índice de Seguridad Ciudadana⁷ que para el departamento en esta última medición de 2011 asciende a 68,1 (en una escala de

⁷ El índice es una adaptación del Índice de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Buenos Aires desarrollado por Catterberg y Asociados. Este instrumento es una combinación entre las percepciones de seguridad y la experiencia personal del ciudadano. Se compone de cuatro subíndices: percepción general, percepción personal, experiencia personal e imagen institucional.

0 a 100). Esto es comparativamente más bajo que el de las mediciones anteriores, puesto que en el periodo 2008-2009 el índice fue de 69,9 y para 2009-2010 el índice fue de 69,5. En el estudio de 2011 se afirma que esta disminución es producto del impacto causado por el aumento en los niveles de victimización. La subregión de Occidente es la que presenta el índice más alto (84,7) y Valle de Aburrá el más bajo (62,9), lo cual ha sido una constante para los tres estudios.

No obstante esta reducción del índice departamental, el estudio consideró que el coeficiente en general era muy favorable teniendo en cuenta las condiciones de presencia expansiva de bandas criminales en el departamento así como otros fenómenos como narcotráfico, pobreza e inequidad que potencialmente generan violencia.

Por otra parte, respecto a un estudio de la percepción de seguridad más reciente en el departamento, Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013 registró a un 60% de los encuestados sosteniendo que se sienten algo o muy seguros en sus municipios. Aunque al evaluar a nivel subregional, la percepción no es homogénea. En efecto, los habitantes del Valle de Aburrá tienen la segunda percepción de seguridad más baja, con el 55%, mientras en el Occidente y el Magdalena Medio es de 75%. En este sentido, resulta particular que justamente estas dos regiones registren percepciones de seguridad tan altas, en tanto cuentan con tasas de homicidio 40% más altas que la del promedio departamental (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 131). De igual forma, encuestados por las prioridades de sus municipios, los antioqueños señalaron al empleo (17%), la violencia (14%) y la falta de seguridad (9%) como los tres temas principales de las agendas locales.

Profundizando en los datos, dicho estudio encontró que son las personas entre 16 y 34 años, los habitantes del Nordeste y el Norte del departamento, los más sensibles al homicidio como causa de inseguridad. De igual forma, la percepción de seguridad tiende a ser menor en las poblaciones urbanas del departamento.

Revisando los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2011, se puede establecer otro panorama de la percepción de seguridad y su relación con los fenómenos de delito y violencia en el departamento. En Antioquia, las principales fuentes de inseguridad, en opinión de los encuestados, son la presencia de grupos armados ilegales (15,6%), los asaltos callejeros, a casas o negocios (12,4%) y la existencia de expendios de drogas (4,2%) (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 132).

Consideraciones sobre la seguridad ciudadana en el departamento

En 1996 Juan Luis Londoño en un trabajo titulado *Violencia, psique y capital social* corrió una serie de pruebas econométricas para falsear algunas de las causas atribuidas en la literatura sobre violencia en América Latina y Colombia. Londoño identificaba que lejos de encontrar correlación “sistemática y significativa” entre aspectos como la pobreza, el desempleo y la violencia; en su ejercicio surgían conexiones íntimas entre fenómenos menos explorados como la el consumo del alcohol y la prevalencia de enfermedades mentales en la población, es decir variables que invitaban a revisar el problema desde ópticas menos ortodoxas. Para Colombia, Londoño encontró que variables asociadas a la estructura social ofrecían interesantes correlaciones con la ocurrencia de violencia.

Recordando que este informe se centra en los problemas de seguridad y convivencia, vale la pena retomar del trabajo de Londoño (1996) un aspecto central relativo a las posibles variables independientes provenientes de la estructura social que pueden tener una profunda relación con las causas de los factores asociados con el tema que motiva este contexto, en particular: la intensidad del capital social y la velocidad del progreso de la educación. En su trabajo encontró por un lado que la correlación entre el capital social y el número reportado de homicidios es claramente negativa; así como que en los departamentos donde los adultos jóvenes que para la época habían aumentado su

educación a un ritmo relativamente mayor que la generación anterior, había ocurrido menos violencia (Londoño, 1996; 217-229).

Lo interesante es que para dicho ejercicio econométrico, Londoño midió desarrollo del capital social mediante la combinación de respuestas acerca del nivel de seguridad experimentada por los individuos en sus entornos familiares y comunitarios. Así, para finales de los noventa la ocurrencia de violencia era mayor en aquellos departamentos del país en los que: los ingresos eran mayores; era más bajo el progreso educativo; y sobre todo, en donde era menor la cohesión social de sus habitantes. Por esta razón las explicaciones sobre la inseguridad, sugería Londoño (1996; 225) deberían volcar la atención más allá de miradas punitivas para integrar “elementos de la organización social, tales como las redes, normas formales e informales [...] ya que el más grande desafío [...] para la política pública en América Latina es la reconstrucción del tejido social” (Ibíd.).

En este sentido, se puede observar en Antioquia un fenómeno que, aunque no es particular de la región, si resulta fundamental tener en cuenta a la hora de analizar la relación de su población con la legalidad: la disposición al familismo amoral. Esta se puede entender como la inclinación de un individuo, sustentada en la confianza familiar y la desconfianza social, a favorecer a los miembros de su familia por sobre otros miembros de la sociedad, incluso en detrimento de estos y de las reglas de juego establecidas en esa comunidad (Banfield, 1958). En efecto, encuestados para la investigación *Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013* (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013), el 60% de los participantes aprobó el pago de un soborno a un empleado público con el objetivo de conseguir un registro de nacimiento para su hijo. No se trata de desconocimiento moral, en tanto el 51% de los que aprobaron la conducta la reconoció como una acción corrupta. Esto da señales sobre la fragilidad de la cultura de la legalidad en el nivel microsocial en Antioquia.

Este comportamiento coincide con el comportamiento frente a las reglas y el marcado particularismo de muchos antioqueños. El 66% de los antioqueños encuestados para *Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013* sostuvo que importa más el beneficio particular que el general de la comunidad. Así pues, se puede decir que “la sociedad antioqueña está volcada sobre sí misma y mantiene una débil relación con el Estado, sus organizaciones y mecanismo de regulación” (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 31). Esta afirmación se corrobora con los bajos niveles de confianza que los antioqueños expresan por las instituciones estatales, ninguna de ellas por encima de las cuatro organizaciones civiles incluidas en la muestra, iglesia, universidades, organismos no gubernamentales y grandes empresas.

En efecto, las instituciones del Estado en que más confían los antioqueños son las fuerzas armadas con el 58%, seguida por la policía con el 44% y el poder judicial con el 31%. Respecto a las instituciones de gobierno, el 53% confía en la Gobernación, el 44% en su Alcaldía y el 44% en el Gobierno Nacional (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 74).

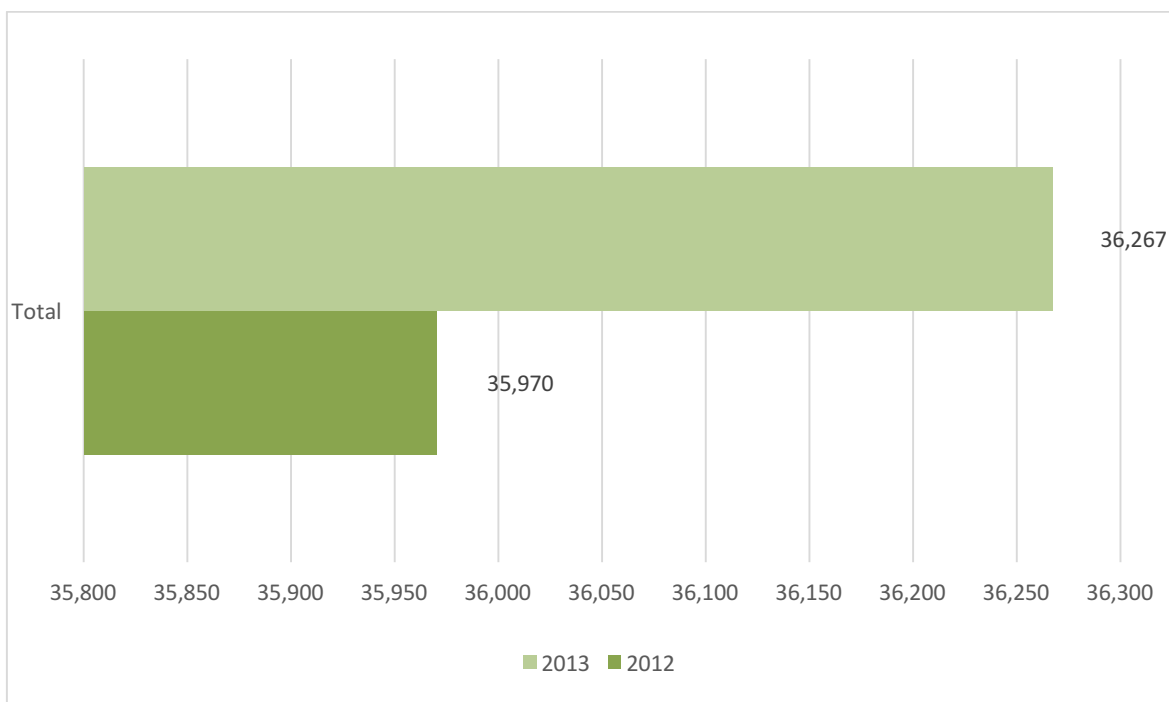
A enero de 2014, Antioquia contaba con la presencia de 14.956 agentes de policía. La mayoría en el departamento metropolitano del policía del Valle de Aburrá, 8.269 hombres, seguido por el departamento de policía de Antioquia, con 5.014 hombres, el departamento de policía de Urabá, con 1.369 hombres y el departamento de policía de Magdalena Medio, con 134 hombres.

Tabla 8. Número de policías en Antioquia

Departamento	Número de unidades
Metropolitana del Valle de Aburrá	8.269
Departamento de Policía de Antioquia	5.014
Departamento de Policía Urabá	1.369
Departamento de Policía de Magdalena Medio	134
Antioquia	14.956*

*Número total a enero de 2014

Fuente: SISC-Departamental

Gráfica 36. Capturas en el departamento de Antioquia

Fuente: SISC-Departamental

Por su parte, ONU-Habitat - Universidad EAFIT (2011, pág. 44) realizaron algunas consideraciones sobre las posibles causas de algunos fenómenos sociales que afectan la seguridad ciudadana:

- a) La primera posible causa evaluada es la pobreza y exclusión social: las carencias podrían implicar mayores tensiones sociales y familiares, aumentando el riesgo de expresiones de violencia intrafamiliar y complicaciones de convivencia.
- b) La segunda posible causa de la inseguridad revisada son las fallas institucionales en asuntos de seguridad local. En efecto, la debilidad institucional, la ausencia estatal, la falta de celeridad y eficacia de las instituciones y la corrupción reducen el impacto que cualquier política de seguridad ciudadana quiera tener sobre la sociedad afectada. Estas dificultades llevan a que los vacíos dejados por la institucionalidad sean llenados por organizaciones criminales que

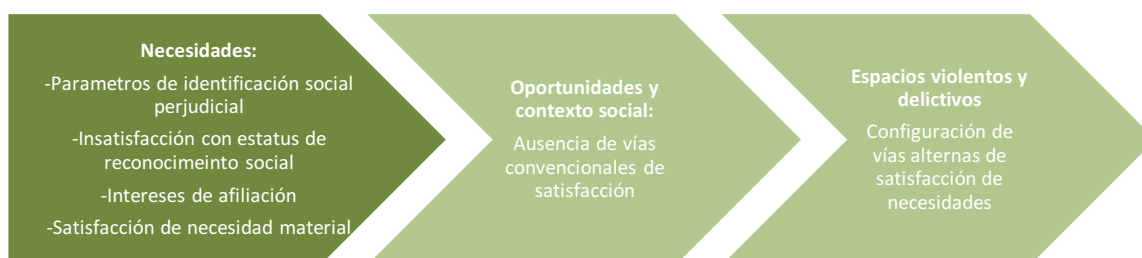
proveen servicios similares al Estado y que en muchos casos, los ciudadanos sientan un abandono por parte de las autoridades.

c) La tercera posible causa de la inseguridad se relaciona con las deficiencias en la justicia penal y el acceso a la justicia. Al respecto, reconoce que la falta de confianza y los problemas de legitimidad que enfrenta el sistema judicial es un fenómeno nacional. La impunidad, los largos y complejos trámites y la corrupción han marcado a generaciones de colombianos que desconfían de las instituciones de justicia.

d) Los jóvenes (17-24 años) son la población más involucrada en sus principales desafíos de seguridad, siendo tanto víctimas como victimarios de los fenómenos de delito y violencia (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011, pág. 135). Al respecto, tres aspectos podrían explicar en principio la prevalencia de la participación de los jóvenes en los fenómenos de violencia: (1) el ascenso de nuevas oportunidades delincuenciales, (2) el “trampolín” social y económico que representa la delincuencia (sobre todo el narcotráfico), y (3) las nuevas formas de construcción de identidad y reconocimiento social; (4) las organizaciones criminales buscan ocupar sus filas con nuevos reclutas, a falta de hombres experimentados, y con el objetivo de aprovechar las legislaciones especiales para menores de edad (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011, pág. 138).

Estas expresiones de crimen asociadas a los jóvenes (pandillas, combos) pueden ser abordadas desde la satisfacción desviada de necesidades individuales y sociales. De esta forma, a falta de vías convencionales de acción para la satisfacción de necesidades como desarrollo económico o reconocimiento social, se crearon vías alternas, “expresiones juveniles sin ninguna conducción o acompañamiento; expresiones que canalizaron desasosiegos e ímpetus propios de la adolescencia y que muy pronto mutaron hacia actividades violentas” (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011, pág. 139).

Gráfica 37. Insatisfacciones, jóvenes y violencia



Fuente: Elaboración propia con base en (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011).

Ahora bien, aunque el diagnóstico común de seguridad ciudadana de muchas ciudades de Latinoamérica, incluidas las colombianas, parece señalar a los jóvenes como una población particularmente vulnerable y en riesgo de ser víctima o victimario; aunque los jóvenes pueden identificarse como una población de suma importancia a la hora de construir políticas de seguridad, esto no supone que todos los jóvenes, hombres de bajos recursos, ni siquiera una mayoría, hacen parte de las expresiones violentas antes mencionadas. Sin embargo, teniendo en cuenta su alta participación en estos fenómenos, también resultaría irresponsable no señalar lo fundamental que resulta, para cualquiera de estos esfuerzos públicos, focalizar sus recursos e intervenciones en los jóvenes de su comunidad.

Este último punto supone un reto inesperado, pues casi el 70% de los antioqueños está de acuerdo con la afirmación según la cual “las personas jóvenes son más problemáticas” (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 144).

Los jóvenes no son únicamente una población objetivo en términos de su participación en las expresiones de delito y violencia de una sociedad. En efecto, también suelen ser un segmento poblacional particularmente afectado por estos fenómenos. Al menos la mitad de los jóvenes encuestados para *Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013* se sienten inseguros en su lugar de residencia (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 143).

Consecuentemente, el 39% de los jóvenes encuestados señaló la seguridad como el problema más grave que enfrenta su municipio. De igual forma, el diagnóstico de los valores prevalentes en los jóvenes antioqueños habla de una visión más completa de su rol social. Así, los “jóvenes antioqueños valoran la pujanza, el respeto y la solidaridad. Creen que los peores defectos de los antioqueños son la violencia, la mentira y la desconfianza” (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 143).

Hay que preguntarse entonces en el marco de este contexto: ¿existen entornos protectores para jóvenes en riesgo, enfocados en prevenir fenómenos perjudiciales como el mono-parentismo, la precariedad alimenticia, la violencia intrafamiliar y la ausencia y deserción escolar? ¿Se ofrecen oportunidades suficientes y pertinentes para que los jóvenes logren satisfacer sus necesidades de reconocimiento social y desarrollo económico? ¿El imaginario colectivo de muchos jóvenes, se orienta hacia la prevalencia de figuras criterio o modelos a seguir inadecuados? (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011, pág. 149).

En efecto, la informalidad supone en muchos casos una puerta de entrada a la ilegalidad y el crimen organizado. De hecho, su naturaleza paralela al Estado, desvinculadas de sus normas, implica una dificultad en prácticas en las que las organizaciones delincuenciales suelen encontrarse particularmente a gusto (Giraldo & Muñoz, 2012).

Finalmente, se advierte que los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) aunque importantes y pertinentes se dejan de lado dado el alcance de este informe. Como afirma Timaná (2014, 94),

A grandes rasgos la medición de la percepción en seguridad [en la ECV] se dedica exclusivamente a la pregunta sobre la percepción de la seguridad en el barrio o vereda, así como a la posibilidad de moverse libremente de un sitio a otro en un barrio o vereda y la pregunta ocasional sobre la percepción de la seguridad en el barrio. No existen publicaciones que desplieguen de forma más amplia la conceptualización de este instrumento, por lo que no es fácil comprender la razón

por la que la dimensión de seguridad solo se mide de forma tan sucinta en 3 variables, donde la pregunta sobre percepción de seguridad lastimosamente reúne tres variables disimiles, como la seguridad, vigilancia y reacción, aunque se abona el hecho de medirlo al nivel corregimental.

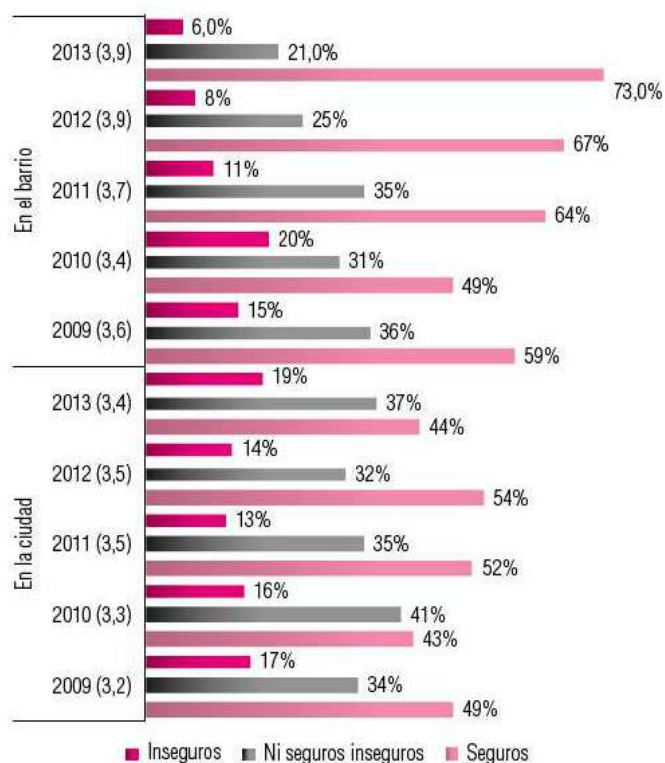
1.5.2 Diagnóstico de Medellín

Considerando que las dinámicas de seguridad del departamento de Antioquia se encuentran fuertemente influenciadas por los fenómenos de delito y violencia del Valle de Aburrá y sobre todo, de la ciudad de Medellín, se revisarán también algunos datos recientes sobre el comportamiento de la victimización y la percepción de seguridad en la capital antioqueña.

Percepción de seguridad en la encuesta Cómo Vamos

En primer lugar, los datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2013 de Medellín Cómo Vamos muestra que la percepción de seguridad en la ciudad para ese año fue de 44% de los encuestados sintiéndose “seguros”, el 47% “ni seguros ni inseguros” y el 19% “inseguros”. Esto representa un aumento de dos puntos de la percepción de inseguridad, respecto al año 2009 y una reducción de la percepción de seguridad en unos cinco puntos en ese mismo periodo. Respecto a la percepción de seguridad en el barrio, el 73% de los encuestados dijo sentirse seguro en su barrio, mientras un 21% dijo no sentirse ni seguro ni inseguro y solo el 6% sostuvo que se sentía inseguro. La percepción de seguridad en el barrio ha aumentado de forma sostenida desde el año 2009, pasando del 59% al 73% en ese periodo (Ver Gráfica 8).

Gráfica 38. Medellín: percepción de seguridad en el barrio y la ciudad, 2009-2013

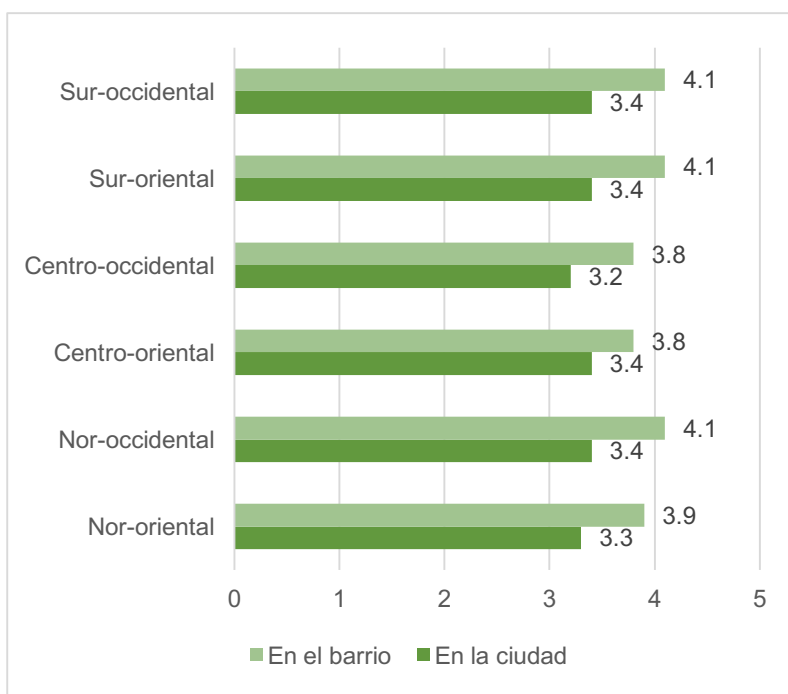


*Entre paréntesis el nivel promedio entre uno y cinco, donde uno es nada seguro y cinco muy seguro.

Fuente: Tomado de Medellín Cómo Vamos (2013).

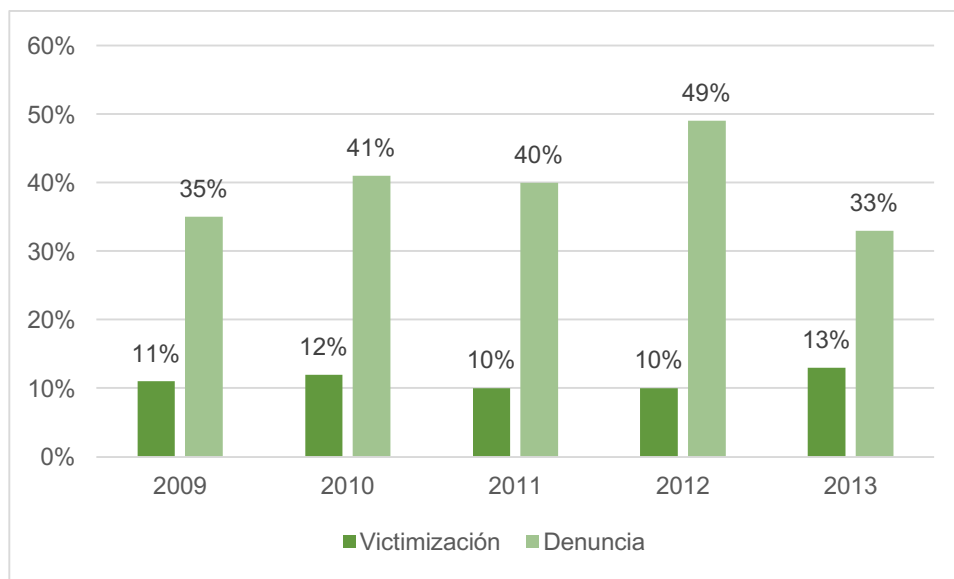
Ahora bien, al separar por zonas de la ciudad, la percepción de seguridad varía poco, siendo la parte centro-occidental la que se siente menos segura (con 3,2 puntos de 5) y la que se siente menos segura en su barrio, junto a la centro-oriental (con 3,8 puntos de 5).

Gráfica 39. Medellín y sus zonas urbanas. Percepción de seguridad en la ciudad y el barrio, 2013



Fuente: Medellín Cómo Vamos (2013).

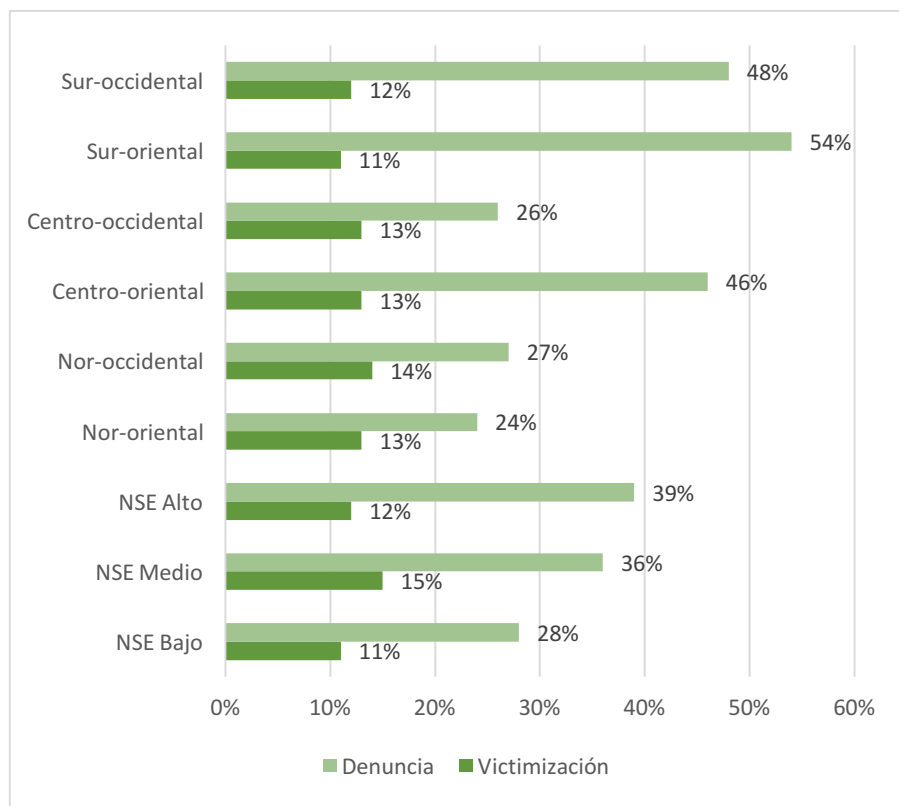
De acuerdo a los datos de la Encuesta, el porcentaje de victimización de los habitantes de Medellín en 2013 fue del 13%, un poco más alto del 10% de los dos años anteriores, mientras que la denuncia de estos hechos fue del 33% en el último años, una reducción importante del 49% de denuncia de 2012, el 40% de 2011 y el 41% de 2010 (Ver Gráfica 40).

Gráfica 40. Medellín: niveles de victimización y denuncia, 2009-2013

Fuente: Medellín Cómo Vamos (2013).

Ahora bien, las personas de nivel socio económico medio son las más victimizadas, con un 15%, pero son las del nivel alto las que más denuncian, con un 39%. La victimización es bastante similar si se mira por zonas de la ciudad, aunque la Noroccidental se encuentra ligeramente por encima del promedio de la ciudad. Las zonas Suroriental, Suroccidental y Centrorienta son las que más denuncian, comparativamente, de la ciudad (Ver Gráfica 41).

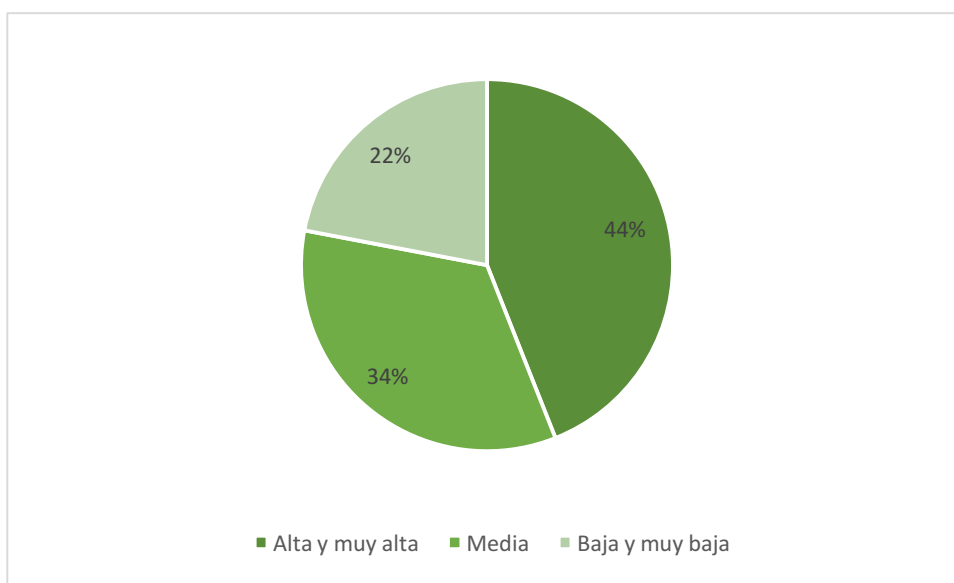
Gráfica 41. Medellín, zonas y NSE: niveles de victimización y denuncia.



Fuente: Medellín Cómo Vamos (2013).

La probabilidad percibida de volver a ser víctimas es en general alta, con un 44% sosteniendo que es alta o muy alta, el 34% que es media y el 22% que es baja o muy baja (Ver Gráfica 42).

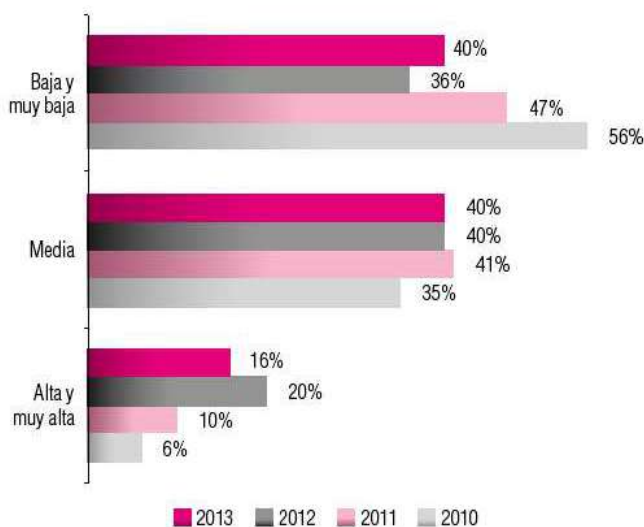
Gráfica 42. Medellín: probabilidad percibida de volver a ser víctima de un delito en el corto plazo, 2013



Fuente: Medellín Cómo Vamos (2013).

De igual forma, se ha presentado un ligero aumento en la percepción de las personas de que un delito no sea sancionado en Medellín. En efecto, en 2012 ese porcentaje era de 36% y en 2013 fue de 40%. Sin embargo, en el panorama general se ve una mejora sostenida de este indicador, en tanto en 2010, el 56% de los habitantes de la ciudad señalaba que la probabilidad de que sancionaran un delito era baja o muy baja (Ver Gráfica 43).

Gráfica 43. Medellín: percepción de probabilidad de que un delito sea sancionado en Medellín, 2010-2013.



*En 2010 el 3% respondió que no sabía, en 2011 es el 2%, en 2012 y 2013 es el 4%.

Fuente: Tomado de Medellín Cómo Vamos (2013).

Ahora bien, Medellín cuenta con niveles relativamente altos de percepción de seguridad si se compara con otras ciudades de Colombia. En 2012 el 54% de sus habitantes se sentían “seguros” en la ciudad, mientras en Bogotá, que es la ciudad con menor nivel de percepción de las analizadas, este porcentaje era de 17% (Ver Gráfica 44). La ciudad con más percepción de seguridad para 2012 fue Manizales con 61%.

Gráfica 44. Ciudades colombianas: percepción de seguridad en la ciudad



Fuente: Tomado de Medellín Cómo Vamos (2013).

Cultura ciudadana y seguridad

Otro de los diagnósticos relevantes para este tema lo constituye la Encuesta de Cultura Ciudadana (ECC) que se ha realizado en tres ocasiones en la ciudad (2007, 2009, 2011). En su más reciente versión, esta encuesta se ha preocupado por evaluar una inconsistencia entre la mejoría de las características de cultura ciudadana de la ciudad y el empeoramiento de los indicadores de seguridad ciudadana. Como lo afirma Timaná (2014, 116) “la ECC presenta un enfoque interesante sobre la seguridad y la convivencia desde una perspectiva cultural, pero su trazabilidad se dificulta porque su metodología cambia para cada una de las mediciones. No deja de ser interesante observar sus resultados, a pesar de las variaciones, pero esta situación compromete su trazabilidad en el tiempo”.

La respuesta se halló en un análisis sobre la concentración y diseminación de factores comportamentales y actitudinales de cultura ciudadana” (Corpovisionarios, 2011, pág. 6). De esta forma, la encuesta encontró que los cambios positivos y los avances en cultura ciudadana en Medellín se distribuían de manera proporcional en toda la población, pero los datos de homicidios de la ciudad mostraron que esta distribución no era igual, “y se evidenció que los casos de homicidios se concentraban en lugares de la ciudad y poblaciones específicas de ciudadanos” (Corpovisionarios, 2011, pág. 6).

De acuerdo al informe de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2011, en Medellín la gran mayoría de homicidios de la ciudad se encuentran concentrados en ciertos grupos o sectores poblacionales, mientras el deterioro de la seguridad no podría atribuirse al resto de la población, ni extenderse a todo el territorio (Corpovisionarios, 2011, pág. 8). Así pues, “quienes hacen la diferencia en la ciudad son ciertos grupos poblacionales en lugares puntuales de la ciudad”, que reúnen características de cultura ciudadana que pueden ser asociados a la

violencia y la disposición a cometer ciertos delitos. Sostiene el informe que “en el 2009 en Medellín el 35% de los homicidios sucedían en 76 barrios de la ciudad, que según diferentes informes han sido tradicionalmente territorios ocupados por los “combos” articulados al crimen organizado que opera en la ciudad” (Corpovisionarios, 2011, pág. 9).

De acuerdo a Corpovisionarios (2011), la violencia en Medellín, particularmente la que implica homicidios, se encuentra concentrada en términos territoriales y poblacionales. En efecto, aunque los factores de cultura ciudadana positivos han mejorado desde que se realiza la Encuesta de Cultura Ciudadana, la tasa de homicidio se ha comportado de manera independiente a esta mejoría. Corpovisionarios explica esta diferencia en esa localización de los fenómenos de violencia homicida. La encuesta realizó entonces un ejercicio de evaluación de indicadores de cultura ciudadana en una población particularmente vulnerable a los fenómenos de violencia: jóvenes en riesgo.

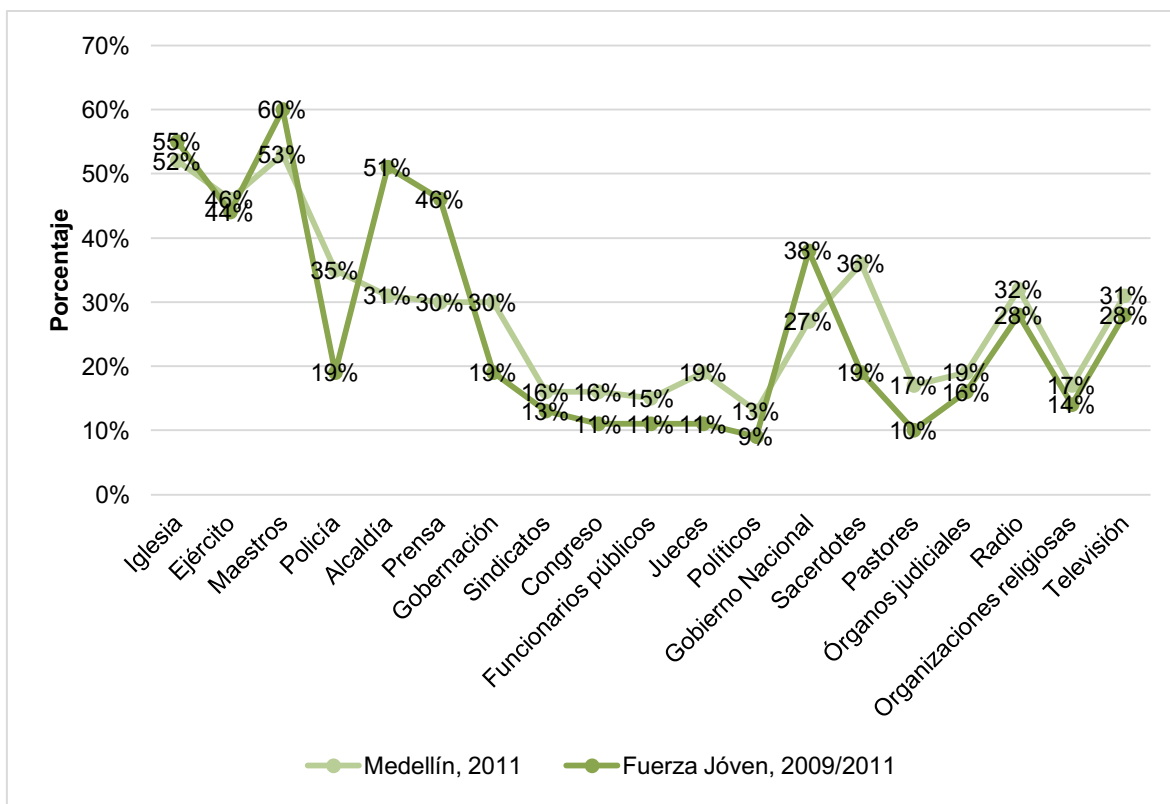
Para evaluar las dificultades a las que se enfrentaba esta población, la muestra de la encuesta incluyó a un grupo de participantes que pertenecían al programa “Fuerza Joven” de la Alcaldía de Medellín, que involucraba a jóvenes en riesgo de pertenecer o que habían pertenecido a organizaciones delincuenciales. Así pues, “se encontró que pese a que en Medellín se había experimentado una densificación de la cultura ciudadana, persistían sectores poblacionales resistentes a los cambios comportamentales, al mismo tiempo que existían toda una serie de argumentos y prácticas culturales que facilitaban la concentración de la violencia” (Corpovisionarios, 2011, pág. 9). Entre estos hallazgos, el informe destaca que “aunque estos jóvenes manifestaban un temor más alto que el común de ciudadanos a los castigos de ley, dicho miedo no jugaba un papel inhibitor ante las posibles transgresiones de las normas, por lo tanto no garantizaría que el comportamiento de los jóvenes pertenecientes a sectores con una concentración

de factores de cultura ciudadana alterados “negativos” respetasen la ley” (Corpovisionarios, 2011, pág. 10).

Igualmente, “otro resultado interesante es el valor que le asignaban [los jóvenes en riesgo] al reconocimiento social como la búsqueda de la admiración de sus pares a través de diferentes mecanismos, muchas veces privilegiando aquellos que permiten un ascenso social rápido y que en este medio tiene relación con la “cultura narco” y la violencia”. Así pues, “las justificaciones para desobedecer la ley y usar la violencia alcanzaron valores muchísimos más altos que los de los ciudadanos de Medellín y mostraron a personas mucho más intolerantes que el promedio de la ciudad hacia comunidades específicas y altamente permisivas con grupos paramilitares, narcotraficantes y personas reconocidas como corruptas” (Corpovisionarios, 2011, pág. 10).

Existen profundas diferencias entre la confianza institucional mostrada por el grupo de encuestados pertenecientes a Fuerza Joven y el total de los medellinenses participantes. En efecto, instituciones como los Maestros, la Alcaldía, la prensa y el Gobierno Nacional despiertan más confianza en los miembros de Fuerza Joven que en el general de la población de la ciudad, mientras la policía, la gobernación y los sacerdotes despiertan sustancialmente mayores niveles de confianza en los habitantes de la ciudad, como lo muestra la Gráfica 45.

Gráfica 45. Confianza en instituciones (Medellín y Fuerza Joven).



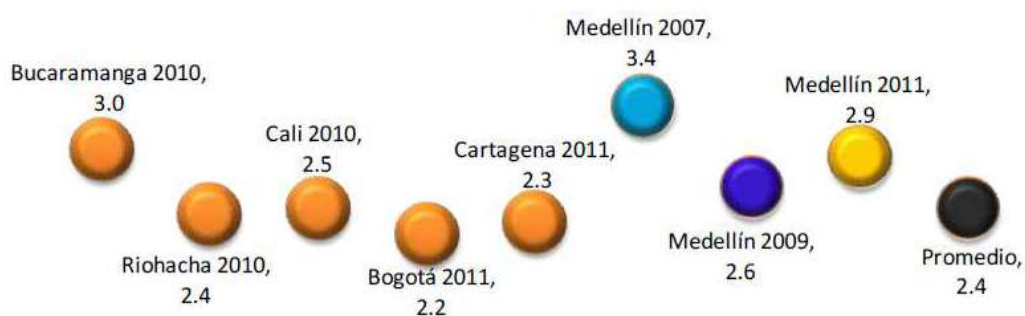
Fuente: Corpovisionarios (2011).

Entre las justificaciones para “desobedecer la ley” de los encuestados para la ciudad de Medellín, en 2011 las más mencionadas son “ayudar a la familia” (39%) y “defender propiedades o bienes” (34%). En general estas han sido las razones más mencionadas en las otras mediciones. Al compararlas con los jóvenes son las mismas, aunque con mayores porcentajes en esta población.

En cuanto a la percepción de seguridad, la Encuesta en 2011 muestra un ligero aumento respecto a la calificación que los encuestados le daban en el 2009, dado que el promedio del puntaje es de 2,9 en 2011 para la ciudad, mientras en 2009 fue de 2,6 y en 2007 de 3,4 (Ver Gráfica 46). Por otro lado, “se sigue considerando que el principal problema de seguridad es la delincuencia común y que lo que contribuye más a la seguridad de la ciudad es la colaboración de los ciudadanos.

Al menos el 20% de las personas han sido víctimas de algún delito y especialmente cuando se trata del hurto. Los homicidios continúan siendo el principal problema de seguridad de la ciudad y son los hombres jóvenes los más afectados” (Corpovisionarios, 2011, pág. 85).

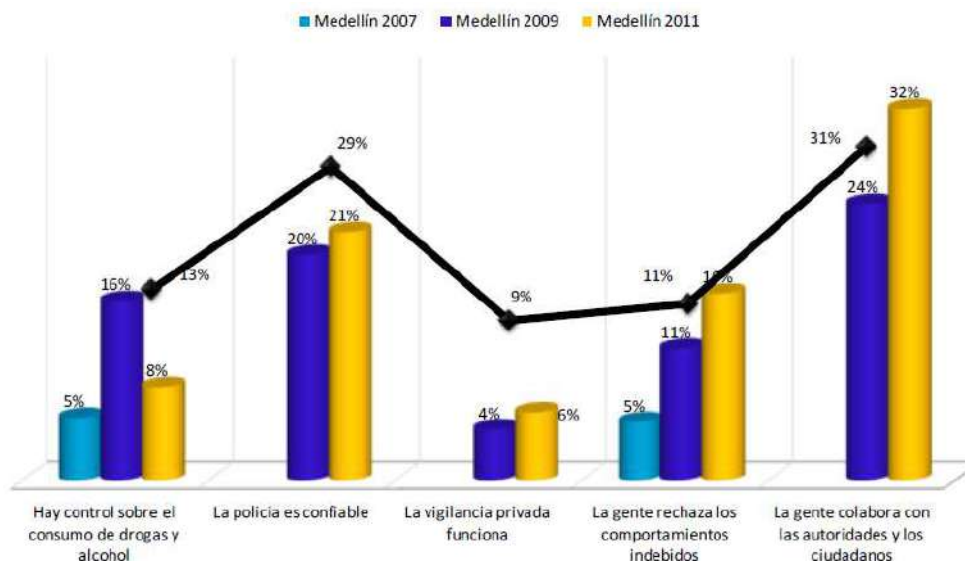
Gráfica 46. Calificación de percepción de seguridad



Fuente: Tomado de Corpovisionarios (2011).

Revisando los resultados de las preguntas por la razón principal por la cual la ciudad es segura (Ver Gráfica 47), el informe de la Encuesta encuentra ha aumentado la percepción sobre que la gente colabora con las autoridades y los ciudadanos. Adicionalmente, “los hombres son quienes más consideran que la *gente rechaza los comportamientos indebidos* (19% contra 14% de las mujeres) y las mujeres que *hay un control sobre el consumo de drogas y alcohol* (10% contra 6%). Las personas que menos escolaridad tienen son las que consideran en su mayoría que *la policía es confiable* (30%) y las personas que tienen posgrado consideran en un porcentaje muy superior a los demás que la ciudad es segura porque *la gente colabora con las autoridades y otros ciudadanos* (71%)” (Corpovisionarios, 2011, pág. 87).

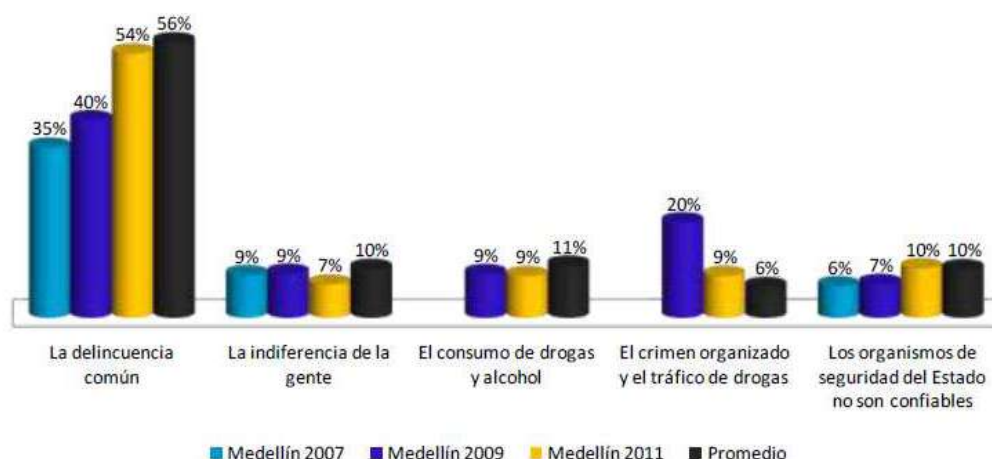
Gráfica 48. La razón principal por la cual la ciudad es segura



Fuente: Tomado de Corpovisionarios (2011).

Por otro lado, respecto a las razones por las cuales las personas consideran que la ciudad es insegura, la respuesta más común y que ha venido creciendo respecto a las mediciones anteriores fue “la delincuencia común”. Una razón que ha aumentado también es la relacionada con que las “organizaciones de seguridad el Estado no son confiables” y se ha reducido la alternativa relacionada con “el crimen organizado y el tráfico de drogas” (Ver Gráfica 8). Esto potencialmente sugiere una percepción ciudadana más enfocada a pequeños delitos cotidianos que a las acciones de las organizaciones criminales.

Gráfica 49. Porcentaje de personas que considera que la razón principal por la cual la ciudad es insegura



Fuente: Tomado de Corpovisionarios (2011).

Sin embargo, esta percepción no es constante en todos los estratos socioeconómicos, puesto que para los estratos altos la delincuencia común resulta sustancialmente más incidente en su percepción de inseguridad en Medellín, probablemente al ser los más afectados por delitos menores como el hurto de celulares o el robo de automóviles. Por otro lado, la percepción de inseguridad de los estratos bajos se ve más influida por la presencia de pandillas que los otros estratos y comparten la incidencia del crimen organizado con los estratos medios.

Para el 2011 la victimización directa de la ciudad fue de 19%, por debajo del promedio de otras ciudades en un 25%. De igual forma, la victimización indirecta (“conoce a alguien que haya sufrido un delito”) se encuentra en el 23%, también por debajo del promedio de ciudades del 28% (Ver Gráfica 50).

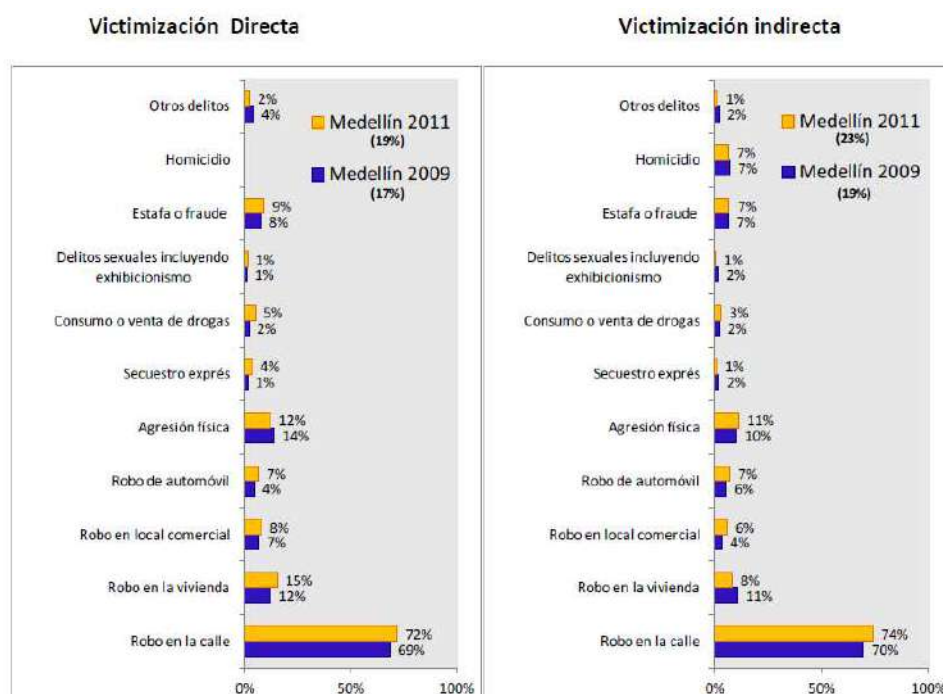
Gráfica 50. Victimización Medellín



Fuente: Tomado de Corpovisionarios (2011).

Los delitos más comunes (Ver Gráfica 51) fueron el robo en la calle, con el 72% de las victimizaciones en 2011 en Medellín y el robo en la vivienda con el 15%. Las victimizaciones indirectas más comunes fueron también el robo en la calle con el 74%, seguido por la agresión física con el 11%.

Gráfica 51. Victimización



Fuente: Tomado de Corpovisionarios (2011).

Ahora bien, “observando la victimización indirecta, las personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos fueron los más victimizados por el atraco en calle. En contraste, los niveles medios y altos fueron más víctimas de robo en la residencia, en establecimientos, vehículos y de estafa o fraude” (Corpovisionarios, 2011, pág. 100).

Respecto a la convivencia, la afectación más común en la ciudad es que un vecino ponga música a un volumen excesivo o haga mucho ruido con el 51%, mientras la segunda fue que alguien no les pagó una deuda con el 24% y la tercera presenciar una pelea o riña en su barrio con el 19%.

Tabla 9. Afectaciones a la convivencia

Porcentaje de personas que aseguran que durante los últimos 12 meses, vivenciaron una situación en la que:	Bogotá 2011	Cartagena 2011	Medellín 2007	Medellín 2009	Medellín 2011	Promedio
Un vecino puso música a un volumen excesivo o hizo mucho ruido	45%	47%	51%	52%	51%	45%
Los hijos de un vecino, insultaron o agredieron a sus hijos	4%	5%	6%	5%	6%	6%
Presenciaron peleas o riñas entre borrachos de sus barrios	32%	30%	21%	19%	19%	26%
No les han pagado lo que les corresponde por su trabajo	10%	12%	12%	9%	18%	11%
Alguien no les pagó una deuda económica	25%	21%	21%	20%	24%	21%
Se les han burlado o los han discriminado por su apariencia física	9%	6%	8%	8%	6%	9%

Fuente: Tomado de Corpovisionarios (2011).

Ahora bien, por estrato socioeconómico, la encuesta mostró que desafortunadamente la mayoría de problemas de convivencia se acentúan en los estratos 1 y 2. En estos estratos presenciar riñas alcanza un 25% y se distancia enormemente de los estratos 5 y 6 que apenas alcanzan un 5%. Los vecinos ruidosos son usuales en estratos 1 y 2 donde este tipo de situaciones las ha vivido más de la mitad de la población (el 63%) y nuevamente este porcentaje se

encuentra muy distante de lo visto en estratos 5 y 6 que registran sólo un 32% (Corpovisionarios, 2011, pág. 103).

Finalmente, la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2011 señala algunos aspectos clave de la inseguridad enfocada en cultura ciudadana en la ciudad. A saber:

- Que la “baja confianza generalizada de los ciudadanos hacia las instituciones de seguridad y justicia, [...] ha conducido a la creación de sistemas de justicia ilegales paralelos que operan bajo sus propias normas y que en muchos casos conlleva a la validación de la justicia por mano propia, la justificación del uso de armas para la protección, la poca degradación del valor de la vida humana y el *familismo*” (Corpovisionarios, 2011, pág. 122).
- Que al analizar las cifras de la Encuesta de Cultura Ciudadana en la ciudad se evidencian algunos porcentajes más elevados para quienes son jóvenes, de sexo masculino y de niveles socio económicos bajos, si se comparan con los resultados del resto de la ciudad. Es decir, que entre jóvenes como población y el resto de la ciudad la variación no es tan significativa y se encuentra dentro del promedio de la ciudad –que es de los más bajos del país, según la Encuesta-. Sin embargo, “cuando se comparan los resultados de la ciudad, con aquellos jóvenes en riesgo las cifras son mucho más dicientes” (Corpovisionarios, 2011, pág. 129).
- Que son, precisamente, las personas que han tenido un contacto directo con el delito y la violencia las que muestran unos porcentajes más altos que la población del común, en términos de la desobediencia a la ley y el uso de la violencia para resolver conflictos sociales (Corpovisionarios, 2011, pág. 130).
- Que “se debe ser más prudente a la hora de señalar a los jóvenes como los principales protagonistas de la violencia en la ciudad, pues realmente es un grupo reducido de personas quienes son resistentes al cambio que se ha experimentado en Medellín y posiblemente se encuentren en áreas de población muy específicas como las subculturas delictivas” (Corpovisionarios, 2011, pág. 131).

Pese a que, cómo el lector puede pensar, los datos de Medellín son urbanos y no representan la diversidad de situaciones de las nuevas subregiones del departamento; por el peso y efectos de las dinámicas de seguridad y convivencia en Medellín es de esencial importancia entender los aprendizajes que permite identificar para el resto del departamento. Como lo mencionamos en otro trabajo (Giraldo, Casas, Méndez y Eslava, 2013) las dinámicas sociales en el departamento siguen la tendencia de una creciente urbanización, si se observa con cuidado muchas de ellas se relacionan con actitudes, valores y comportamientos sociales que inciden en factores de seguridad y convivencia, y conforman mecanismos que se de manera espontánea o por aprendizaje social, son trasladados en particular a las cabeceras municipales a lo largo y ancho del departamento.

2. Hallazgos de la Encuesta de percepción de la seguridad, la convivencia y los niveles de victimización en Antioquia 2013

Teniendo como punto de referencia los datos de contexto sobre las tendencias regionales, nacionales y locales sobre seguridad y convivencia ciudadana, presentados en la primera parte del texto, a continuación se presentan los hallazgos para el departamento producto de la aplicación de la Encuesta de Percepción de la seguridad, la convivencia y los niveles de victimización en Antioquia 2013.

Para esto, en un primer momento se presentará el diseño metodológico a partir del cual se diseñó, aplicó y analizó la encuesta, incluyendo los detalles de la muestra de acuerdo a seis categorías, a saber: *Muestra por subregión, Muestra por densidad poblacional, Muestra por estrato socio-económico, Muestra por género, Muestra por nivel educativo y Muestra por nivel de ingresos.*

Posteriormente se abordarán las características sociodemográficas de la muestra a la cual se aplicó la encuesta y se presentarán los perfiles de seguridad y convivencia de los antioqueños. Estos perfiles se basan en un esquema analítico compuesto por las variables de percepción de seguridad, victimización y confianza institucional, y buscan definir algunos rasgos analíticos para caracterizar a los ciudadanos del departamento de acuerdo variables como el sexo y la densidad poblacional en la que viven.

Luego de esto se detallarán como tal los resultados de la encuesta en torno a las variables mencionadas y se presentarán los hallazgos de un ejercicio comparado que considera los resultados departamentales con los nacionales y con algunos

datos de referencia de Latinoamérica. De igual forma, este capítulo contempla el análisis por correlaciones de las categorías analíticas fundamentales.

2.1. Diseño metodológico

Con el objetivo de identificar las percepciones de los ciudadanos del Departamento de Antioquia frente a la seguridad y convivencia ciudadana, la metodología del estudio consistió en la aplicación de una encuesta representativa a nivel departamental, aplicada por Invamer S.A.S, firma dedicada a la investigación y asesoría de mercadeo.

Tal y como se ha mencionado en la primera parte del presente documento, la pertinencia de usar un instrumento como la encuesta yace en que esta facilita el rastreo de información subjetiva de los ciudadanos respecto al tema de seguridad, con base en la expresión de sus percepciones. Si bien los diagnósticos de los factores objetivos y cifras alrededor de los principales problemas de seguridad son importantes en la medida en que constituyen el panorama de la situación en los municipios del departamento, las percepciones que revelan las encuestas de victimización son un insumo fundamental para complementar dichos diagnósticos.

Es así como la información resultante de las encuestas permite mapear posibles causas subyacentes a las dinámicas de seguridad en el territorio y perfilar líneas de intervención en política pública que den cuenta no solo del estado actual del delito, sino además de la influencia que la victimización tiene directa e indirectamente en el bienestar de los ciudadanos, reconociendo que los delitos pueden tener un variado grado de afectación percibida por los antioqueños.

En este sentido, aunque el desarrollo de esta encuesta de victimización se basa fundamentalmente en la identificación de los delitos contra la propiedad y la integridad física, el análisis de la información es mucho más complejo pues busca correlacionar adicionalmente algunos aspectos clave de los factores psicológicos

producto de la experiencia de las víctimas, la confianza que tienen en las autoridades y en las instituciones en general, sus niveles de disposición a denunciar un delito y la caracterización sociodemográfica que permite buscar factores explicativos adicionales para comprender mejor el por qué los ciudadanos manifiestan estas percepciones alrededor del tema de seguridad.

Técnicamente para lograr la representatividad a nivel departamental se realizaron 2.408 encuestas a ciudadanos mayores de 15 años, habitantes de zonas urbanas y rurales de las 9 subregiones del departamento de Antioquia pertenecientes a todos los niveles socio-económicos. La modalidad bajo la cual se aplicó este instrumento fue por medio de una entrevista personal cara a cara usando un cuestionario estructurado de 176 preguntas. Más adelante, se detallarán las particularidades técnicas de la selección de la muestra, la escogencia de los puntos muestrales, el número de encuestas por subregión y el listado de municipios en los que se aplicó la herramienta.

Para el adecuado desarrollo de la encuesta, la metodología se basa en tres etapas que serán ampliadas a continuación:

- i) Diseño
- ii) Aplicación
- iii) Análisis

La **etapa de diseño** consistió en la revisión del estado del arte de los contextos de seguridad en Latinoamérica, Colombia y el departamento de Antioquia, particularmente analizando las encuestas de victimización, las encuestas de percepción de seguridad y los informes cualitativos sobre dinámicas y fenómenos de delito y violencia, que fueron presentados en la sección anterior.

Con base en la evidencia empírica de anteriores encuestas y algunos supuestos investigativos del equipo coordinador del proyecto se identificaron los bloques temáticos principales que debería contener la encuesta. Cabe mencionar que el insumo fundamental para la consolidación del instrumento es la Encuesta de

Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la cual viene siendo aplicada durante varios años, por lo cual la gran mayoría de los resultados pueden ser comparados con esta encuesta y con otras a nivel regional y mundial que guardan cierto nivel de estandarización en el diseño y formulación de las preguntas.

Es así como con la revisión documental, teórica y con la experticia del equipo coordinador y de la Gobernación, la encuesta se consolidó a partir de 176 preguntas temáticas y 15 preguntas más de identificación, agrupadas en 12 bloques temáticos:

- a. Identificación básica: Incluye 15 preguntas de registro básico sobre la edad, sexo, estrato, dirección y demás datos del entrevistado así como información sobre el punto muestral y subregión al que pertenece.
- b. Percepción de seguridad: Incluye 8 preguntas relacionadas con las percepciones de seguridad en el barrio, municipio y las posibles causas de estas.
- c. Relación de seguridad y justicia: Incluye 13 preguntas sobre la pertenencia de familiares a determinadas instituciones y grupos así como la calificación que los ciudadanos tienen sobre ellas y las posibles irregularidades que estas han cometido. También indaga por las formas de solución de conflictos al interior de la comunidad y las instancias a las que acuden, y finalmente, pregunta si los encuestados han sufrido alguna modalidad de victimización.
- d. Victimización: Incluye 9 preguntas con el propósito de indagar sobre los niveles de denuncia, los efectos percibidos de la misma y los procedimientos y organizaciones que se relacionan con esta acción.
- e. Hurto a personas: Incluye 26 preguntas sobre los datos de contexto, modalidades, actores, monto de lo perdido, efectos emocionales y reacción frente al hecho de hurto a personas. Cabe anotar que las preguntas que corresponden a este y los siguientes módulos de victimización solo son preguntadas si se respondió afirmativamente a la pregunta sobre si se “le ha presentado un problema de seguridad, convivencia o violencia” al entrevistado en los últimos 12 meses.
- f. Hurto a residencias: Incluye 28 preguntas que rastrean los mismos aspectos del anterior bloque.

- g. Hurto a automotores: Incluye 15 preguntas que indagan por los mismos elementos del bloque anterior.
- h. Riñas y golpes: Incluye 27 preguntas que buscan información sobre los aspectos de contexto, efectos emocionales, actores y valor de las pérdidas asociadas a la riña.
- i. Corrupción: Incluye 16 preguntas asociadas a la entrega o aceptación de dinero o regalos para conseguir un trato favorable o beneficioso, detallando el tipo de actor que estuvo implicado en el hecho, su nivel de autoridad, el tipo de bien requerido y el monto y la reacción del ciudadano.
- j. Extorsión: Incluye 11 preguntas sobre la presión que se hace a una persona, mediante el uso de la fuerza o la intimidación, para conseguir de ella dinero u otra cosa, buscando información sobre el contexto de la extorsión, los actores involucrados y su naturaleza, los medios de pago y la frecuencia con la que se es víctima de este delito, así como la reacción del encuestado.
- k. Confianza institucional: Incluye 10 preguntas que buscan información sobre las percepciones alrededor de la contribución de las instituciones a la seguridad del municipio. Adicionalmente se indaga por hechos violentos e ilegales (como la venta de droga) y también por la posible participación de los ciudadanos en actividades culturales y lúdicas.
- l. Caracterización socioeconómica: Incluye 13 preguntas relacionadas con el tipo de vivienda, nivel de ingresos y gastos del encuestado, estado civil, nivel educativo así como razones por las cuales llegó a vivir al barrio o municipio y el tiempo que lleva viviendo allí.

La **etapa de aplicación** de la encuesta fue realizada por Invamer S.A.S del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2013, y como se mencionó anteriormente el diseño garantiza la representatividad a nivel departamental, es decir, lograr captar la diversidad de las subregiones de Antioquia y así poder dar cuenta de eventuales diferencias entre ellas, a partir de conclusiones estadísticamente significativas.

Es así como se realizaron 2.408 encuestas repartidas en todo el territorio con un margen de error inferior al 2% con un 95% de confianza.

Para el diseño del muestreo general se llevó a cabo un muestreo Multietápico estratificado por Subregión y subestratificado por zona, usando distintos marcos muestrales.

En la primera etapa del muestreo, se realizó una selección de puntos muestrales de acuerdo a la población mayor de 15 años. Un punto muestral hace referencia a un total de 8 entrevistas obtenidas en dos manzanas lindantes, o un conglomerado de viviendas en la zona resto, con base en cartografías del departamento de Antioquia. Para cada una de las subregiones se utilizó la información de proyecciones poblacionales DANE a 2013.

En general el diseño fue probabilístico, multietápico estratificado por subregión y subestratificado por zonas. En la primera etapa, se hizo una selección de puntos muestrales, de esta forma se obtienen los municipios participantes en la muestra. En la segunda etapa se realizó una selección de conglomerados de viviendas y en las demás etapas, se seleccionó al azar hasta conseguir la persona a encuestar.

El procedimiento llevado a cabo para la selección de los puntos muestrales fue el siguiente:

- Inicialmente se prepararon los marcos por cada una de las subregiones, y se ordenaron los municipios de mayor a menor de acuerdo a la población mayor de 15 años pertenecientes a cada uno. Se escogió un número aleatorio entre el total de la población(a) y un intervalo de salto (k), el número aleatorio seleccionado es el punto de partida para la selección, luego se realiza un procedimiento sistemático de selección con incremento k , hasta alcanzar el número de encuestas planeadas en el estrato, realizando 8 encuestas por punto muestral.

En las siguientes etapas, se requirió una selección de personas mayores de 15 años. Por tanto, los marcos de muestreo fueron:

Zona cabecera: Se usaron los marcos muestrales propios de Invamer S.A.S de los principales municipios del departamento, estos marcos cuentan con listado de manzanas. Para aquellos casos en los que no se contó con el marco muestral de manzanas se estableció una estrategia para la selección aleatoria de la manzana a partir del trabajo de campo. Posteriormente se realizó una selección sistemática de la vivienda dentro de la manzana y en ella de la persona a ser encuestada.

Zona resto: Marco muestral con listado de corregimiento, caseríos, inspecciones de policía y centros poblados, posteriormente se procedió de igual forma a la zona cabecera.

A continuación, en la tabla 10 se señalan los 107 municipios en los cuales se aplicó la encuesta, el número de puntos muestrales en cada uno de ellos y el total de encuestas realizadas.

Tabla 10. Distribución muestral de la aplicación de la Encuesta

CONSE- CUTIVO	REGIÓN	MPIO	PUNTOS MUESTRALES	Total puntos muestrales	# Encuestas por punto	Total encuestas por región
1	Bajo Cauca	Cáceres	3	24	8	192
2	Bajo Cauca	Caucasia	10			
3	Bajo Cauca	El Bagre	4			
4	Bajo Cauca	Nechí	2			
5	Bajo Cauca	Taraza	3			
6	Bajo Cauca	Zaragoza	2			
7	Magdalena Medio	Maceo	1	10	8	80
8	Magdalena Medio	Puerto Berrio	4			
9	Magdalena Medio	Puerto Náre	1			
10	Magdalena Medio	Puerto Triunfo	2			

11	Magdalena Medio	Yondó	2			
12	Nordeste	Amalfi	2	16	8	128
13	Nordeste	Anorí	2			
14	Nordeste	Cisneros	1			
15	Nordeste	Remedios	2			
16	Nordeste	San Roque	1			
17	Nordeste	Santo Domingo	1			
18	Nordeste	Segovia	4			
19	Nordeste	Vegachí	1			
20	Nordeste	Yolombó	2			
21	Norte	Angostura	1	23	8	184
22	Norte	Belmira	1			
23	Norte	Campamento	1			
24	Norte	Don Matías	2			

25	Norte	Entrerríos	1			
26	Norte	Gómez Plata	1			
27	Norte	Guadalupe	1			
28	Norte	Ituango	2			
29	Norte	San Pedro	2			
30	Norte	Santa Rosa de Osos	4			
31	Norte	Toledo	1			
32	Norte	Valdivia	2			
33	Norte	Yarumal	4			
34	Occidente	Santafe de Antioquia	2	17	8	136
35	Occidente	Cañasgordas	2			
36	Occidente	Dabeiba	2			
37	Occidente	Ebejico	1			
38	Occidente	Frontino	1			



39	Occidente	Liborina	1			
40	Occidente	Peque	1			
41	Occidente	Sabanalarga	1			
42	Occidente	San Jerónimo	1			
43	Occidente	Sopetrán	1			
44	Occidente	Uramita	1			
45	Occidente	Buriticá	1			
46	Occidente	Armenia	1			
47	Occidente	Abriaqui	1			
48	Oriente	Abejorral	2	53	8	424
49	Oriente	Argelia	1			
50	Oriente	El Carmen de Viboral	4			
51	Oriente	Cocorná	2			
52	Oriente	Granada	1			

53	Oriente	Guarne	4
54	Oriente	La Ceja	5
55	Oriente	La Unión	1
56	Oriente	Marinilla	5
57	Oriente	Nariño	1
58	Oriente	Peñol	1
59	Oriente	Retiro	2
60	Oriente	Rionegro	11
61	Oriente	San Carlos	2
62	Oriente	San Francisco	1
63	Oriente	San Luis	1
64	Oriente	San Rafael	1
65	Oriente	San Vicente	2
66	Oriente	El Santuario	3

67	Oriente	Sonsón	3			
68	Suroeste	Amaga	3	35	8	280
69	Suroeste	Andes	5			
70	Suroeste	Angelópolis	1			
71	Suroeste	Betania	1			
72	Suroeste	Betulia	1			
73	Suroeste	Ciudad Bolívar	2			
74	Suroeste	Caicedo	1			
75	Suroeste	Caramanta	1			
76	Suroeste	Concordia	1			
77	Suroeste	Fredonia	2			
78	Suroeste	Jardín	1			
79	Suroeste	Jericó	1			
80	Suroeste	Montebello	1			

81	Suroeste	Pueblorrico	1			
82	Suroeste	Salgar	2			
83	Suroeste	Santa Bárbara	3			
84	Suroeste	Tamesis	2			
85	Suroeste	Titiribi	1			
86	Suroeste	Urrao	3			
87	Suroeste	Venecia	2			
88	Urabá	Apartado	14	51	8	408
89	Urabá	Arboletes	3			
90	Urabá	Carepa	4			
91	Urabá	Chigorodó	6			
92	Urabá	Mutatá	1			
93	Urabá	Necoclí	5			
94	Urabá	San Juan de Urabá	2			

95	Urabá	San Pedro de Urabá	3			
96	Urabá	Turbo	12			
97	Urabá	Vigía del Fuerte	1			
98	Valle de Aburrá	Medellín	49	72	8	576
99	Valle de Aburrá	Barbosa	1			
100	Valle de Aburrá	Bello	8			
101	Valle de Aburrá	Caldas	1			
102	Valle de Aburrá	Copacabana	1			
103	Valle de Aburrá	Envigado	5			
104	Valle de Aburrá	Girardota	1			
105	Valle de Aburrá	Itaguí	4			
106	Valle de Aburrá	La Estrella	1			
107	Valle de Aburrá	Sabaneta	1			
			301			2408

Fuente: Invamer



En términos de la **muestra subregional** y para garantizar la representatividad, la subregión con mayor número de encuestas es el Valle de Aburrá, dado que tiene un mayor número habitantes y participación poblacional respecto del departamento. Asimismo, en la subregión con menor participación poblacional respecto a Antioquia, en este caso Magdalena Medio, se aplicó el menor número de encuestas.

Tabla 11. Muestra por subregión

Valle de Aburrá	23.92%	=	576	Encuestas
Oriente	17.61%	=	424	Encuestas
Urabá	16.94%	=	408	Encuestas
Suroeste	11.63%	=	280	Encuestas
Bajo Cauca	7.97%	=	192	Encuestas
Norte	7.64%	=	184	Encuestas
Occidente	5.65%	=	136	Encuestas
Nordeste	5.32%	=	128	Encuestas
Magdalena Medio	3.32%	=	80	Encuestas
Total	100.00%	=	2408	Encuestas

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La [Tabla 12](#) da cuenta de la **muestra distribuida por la densidad poblacional**, en donde se especifica el número de encuestas aplicadas en relación con el cálculo de densidad poblacional. De esta forma se confirma una situación de equilibrio en la aplicación de las encuestas, dirigido a la representatividad que con estas se

buscaba.

Tabla 12. Muestra por densidad poblacional

De 100.000 o más	21.93%	=	528	Encuestas
Entre 30.000 - 99.999	20.27%	=	488	Encuestas
Entre 10.000 y 29.999	22.26%	=	536	Encuestas
Entre 5.000 y 9.999	15.95%	=	384	Encuestas
Menos de 5.000	19.60%	=	472	Encuestas
Total	100.00%	=	2408	Encuestas

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La [Tabla 13](#) detalla la distribución de la **muestra por el estrato socio-económico**, revelando que personas de estratos 2 y 3 fueron los más encuestados.

Tabla 13. Muestra por estrato socio-económico

Estrato 1	15.82%	=	381	Encuestas
Estrato 2	40.45%	=	974	Encuestas
Estrato 3	36.92%	=	889	Encuestas
Estrato 4	4.65%	=	112	Encuestas
Estrato 5	1.79%	=	43	Encuestas
Estrato 6	0.37%	=	9	Encuestas
Total	100.00%	=	2408	Encuestas

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La encuesta contó con una **distribución por sexo** homogénea entre la población de hombres y mujeres en el departamento de Antioquia.

La [Tabla 4](#) detalla la **distribución por nivel educativo**, a partir de lo cual se infiere que se cuenta con una representación que abarca todos los niveles. Como se puede observar, la distribución de la población de acuerdo al nivel educativo se halla concentrada en *Secundaria* y *Primaria* con un 37.98% y un 31.02% respectivamente, sumando el 68.1% del total de los encuestados. De otro lado, *Técnico*, *Superior o Universitario* y *Postgrado*, con 11.75%, 9.47% y 1.12% respectivamente, suman el 22.34% del total de la muestra. Finalmente, al sumar los datos restantes de *Preescolar* (5.27%) y *Ninguno* (4.28%), se obtiene una cifra de 9.55%.

Tabla 14. Muestra por nivel educativo

Preescolar	5.27%	=	127	Encuestas
Primaria	31.02%	=	747	Encuestas
Secundaria	37.08%	=	893	Encuestas
Técnico	11.75%	=	283	Encuestas
Superior o Universitario	9.47%	=	228	Encuestas
Postgrado	1.12%	=	27	Encuestas
Ninguno	4.28%	=	103	Encuestas
Total	100.00%	=	2408	Encuestas

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La [Tabla 5](#) da cuenta de la **distribución por el nivel de ingreso**. Para esta distribución por nivel de ingresos, la aplicación de la encuesta arroja que las personas que ganan menos de \$350.000 y las que ganan entre \$350.001 y \$700.000, con el 17.65% y el 33.43% respectivamente, suman el 50.98% del total



de los encuestados. Mientras que quienes tienen un nivel de ingresos correspondiente a las opciones *De \$700.001 a \$1.000.000* y *Más de \$1.000.000*, con el 16.99% y el 15.78% respectivamente, suman el 33.11%.

Tabla 15. Muestra por nivel de ingresos

Menos de \$350.000	17.65%	=	425	Encuestas
De \$350.001 a \$700.000	33.43%	=	805	Encuestas
De \$700.001 a \$1.000.000	16.99%	=	409	Encuestas
Más de \$1.000.000	15.78%	=	380	Encuestas
No sabe/ No responde	16.15%	=	389	Encuestas
Total	100.00%	=	2408	Encuestas

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Finalmente en la **etapa de análisis**, tras la aplicación de las encuestas, los datos fueron procesados y analizados descriptiva, inferencial y económicamente, con el fin de identificar rasgos relevantes y tendencias en cada uno de los bloques temáticos así como establecer posibles factores explicativos de las percepciones sobre seguridad.

La información resultante del análisis en estos tres niveles constituye el punto de partida para la elaboración de recomendaciones de política pública sobre el estado actual de la seguridad en Antioquia y posibles formas de intervención.

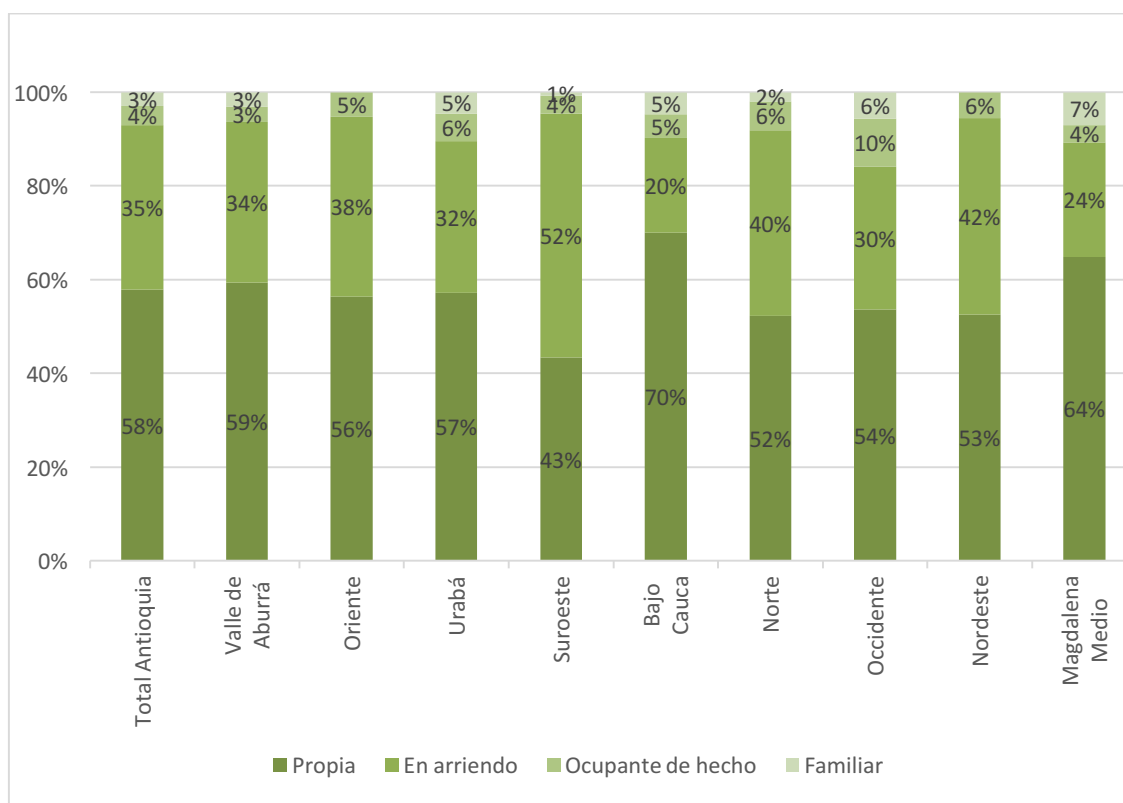
2.2. Caracterización socio-demográfica básica

En esta sección se presenta la caracterización general de los antioqueños encuestados en torno a sus condiciones materiales básicas. El 58% de los antioqueños encuestados cuenta con casa propia, el 35% vive en arriendo, el 4%



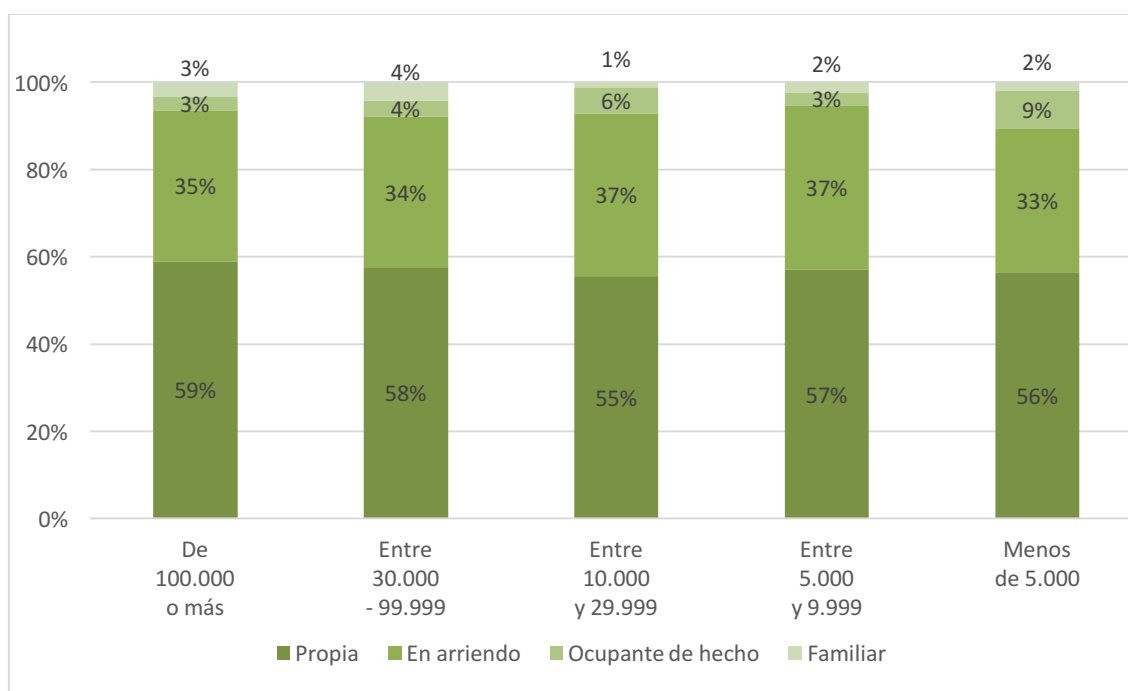
es ocupante de hecho y el 3% vive en vivienda familiar. La subregión con el mayor porcentaje de propietarios de vivienda es Bajo Cauca, con el 70% y el más bajo es suroeste, con el 43%. La subregión con mayor porcentaje de ocupantes de hecho es Occidente, con el 10%, el más bajo es Valle de Aburrá, con el 3%. En términos de densidad poblacional, la propiedad de vivienda aumenta con el tamaño de las poblaciones, mientras que el arriendo y los ocupantes de hecho se reducen.

Gráfica 52. Vivienda por subregiones



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 53. Vivienda por densidad poblacional



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El 36% de los antioqueños encuestados trabaja de forma independiente, el 31% es asalariado y el 10% vive de una pensión (Ver Tabla 6). Bajo Cauca es la subregión con un porcentaje más alto de trabajo independiente (63%). Urabá es la subregión con mayor número de personas sin ingresos, al igual que zonas entre 30.000 y 99.999 habitantes. Entre más pequeña la población, se reporta una mayor vinculación laboral independiente.

Tabla 16. Empleo

	Total	Subregión								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Trabajo Independiente	36%	30%	37%	46%	42%	63%	42%	39%	42%	45%
Trabajo asalariado	31%	33%	39%	22%	25%	22%	35%	22%	33%	21%
Pensiones (jubilación, invalidez, vejez, etc.)	10%	13%	9%	3%	6%	1%	4%	5%	4%	3%
Esposo(a)	6%	7%	3%	3%	6%	2%	3%	16%	5%	-
Padres	6%	7%	4%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	4%
Desempleado/no tiene ingresos	5%	4%	2%	19%	2%	5%	4%	8%	3%	1%
Dinero provenientes de otros hogares	4%	4%	3%	3%	5%	5%	2%	6%	7%	8%
Hijo(a)	2%	2%	1%	1%	2%	-	4%	2%	1%	1%
Ingresos de capital (arriendo, utilidades intereses)	1%	1%	3%	-	3%	-	1%	-	2%	16%
Ingresos ocasionales (venta de bienes, lotería, etc.)	1%	1%	1%	-	4%	1%	1%	-	-	-
Familiar	1%	1%	-	-	1%	-	1%	2%	-	-
No sabe/ No responde	1%	1%	-	1%	1%	-	-	-	1%	-

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Los ingresos del 33% de los antioqueños están entre \$350 mil y un millón de pesos mensuales, el 16% entre un millón y dos millones, y el 14% van de \$100 mil y \$350 mil (Ver [Tabla 7](#)). De igual manera, los gastos mensuales del 33% de los antioqueños están entre \$350 mil y \$700 mil pesos mensuales, los del 18% están entre \$700 mil y un millón, y los del 16% están entre \$100 mil y \$350 mil pesos.

Tabla 17. Ingresos

	Total	Subregión								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Menos de \$100.000	2%	1%	4%	1%	5%	3%	5%	2%	1%	1%
De \$100.000 a \$350.000	14%	10%	16%	23%	24%	21%	21%	23%	16%	15%
De \$350.001 a \$700.000	33%	31%	31%	35%	42%	33%	38%	40%	42%	38%
De \$700.001 a \$1.000.000	16%	17%	19%	13%	6%	15%	19%	9%	22%	26%
De \$1.000.001 a \$2.000.000	13%	15%	13%	5%	8%	6%	7%	10%	4%	11%
De \$2.000.001 a \$3.500.000	4%	5%	3%	1%	1%	-	1%	1%	3%	1%
De \$3.500.001 a \$5.000.000	2%	3%	-	-	1%	-	-	-	1%	-
Más de \$5.000.000	-	1%	-	-	-	-	-	-	1%	-
No sabe/ No responde	17%	18%	14%	22%	13%	21%	9%	16%	10%	9%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

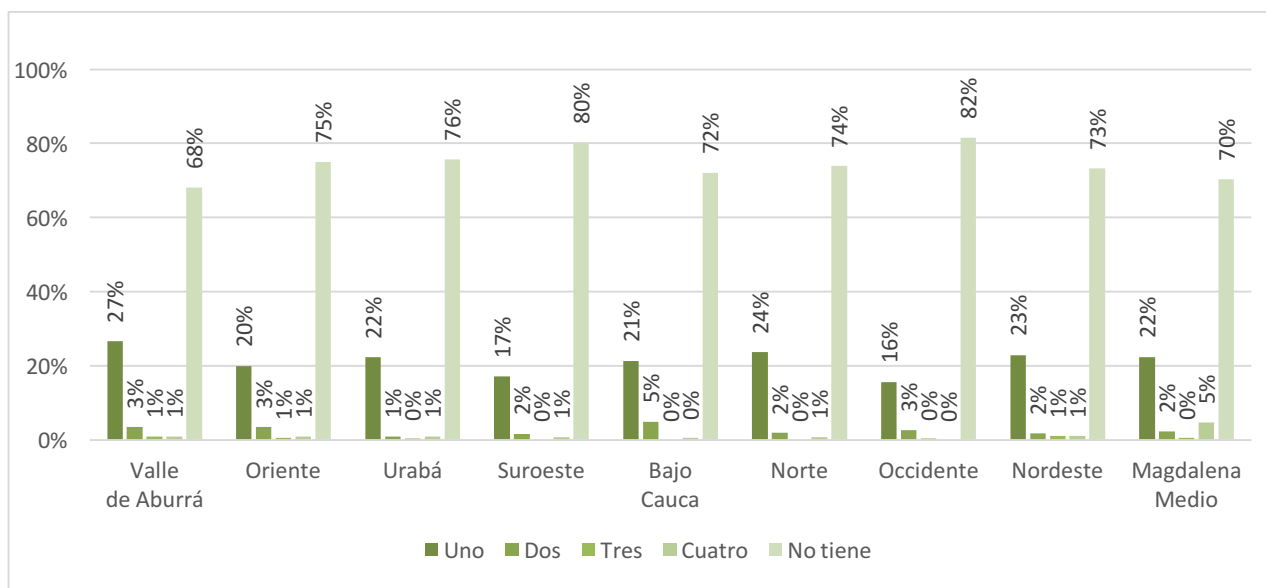
Tabla 18. Gastos

	Total	Subregión								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Menos de \$100.000	2%	1%	2%	1%	2%	13%	2%	2%	2%	4%
De \$100.000 a \$350.000	16%	11%	21%	25%	27%	34%	22%	29%	19%	30%
De \$350.001 a \$700.000	33%	30%	36%	39%	43%	30%	44%	38%	44%	43%
De \$700.001 a \$1.000.000	18%	20%	19%	13%	8%	5%	19%	12%	25%	8%
De \$1.000.001 a \$2.000.000	13%	17%	8%	3%	6%	1%	4%	7%	3%	3%
De \$2.000.001 a \$3.500.000	2%	4%	1%	-	1%	-	-	1%	1%	1%
De \$3.500.001 a \$5.000.000	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Más de \$5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No sabe/ No responde	15%	16%	12%	19%	13%	16%	8%	12%	5%	12%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La Gráfica 53 señala que el 71% de los encuestados no posee ningún automotor, el 24% tiene un automotor, el 3% tiene dos automotores y el 2% tiene ente tres y cuatro automotores. La subregión con más automotores es Valle de Aburrá (32%), seguida por Norte (27%) y Nordeste (27%). Las subregiones con menos automotores son Occidente (19%) y Suroeste (20%).

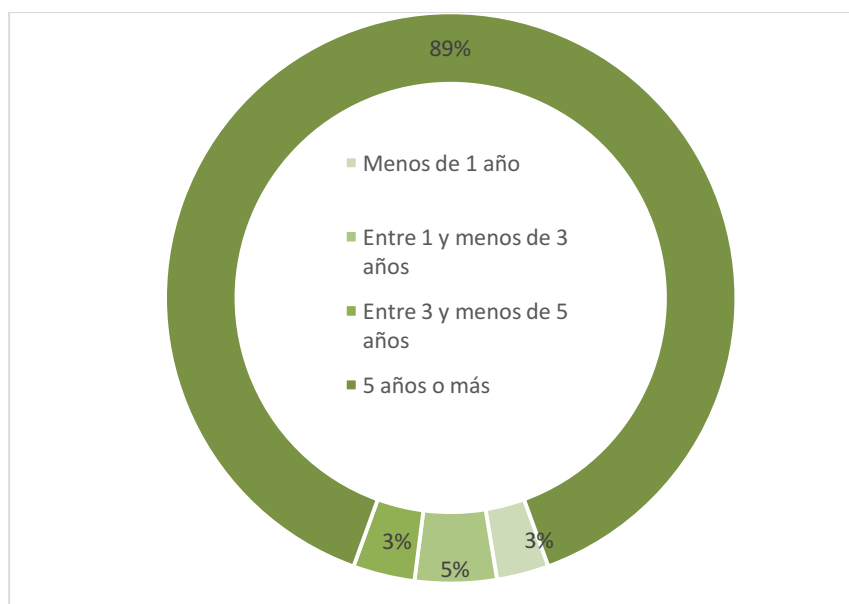
Gráfica 53. ¿Cuántos automotores posee usted? (Subregiones)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El 84% de los encuestados son naturales de Antioquia, el 3% del Valle del Cauca, el 3% de Córdoba, el 2% de Chocó y el 2% de Cundinamarca. Las dos subregiones con poblaciones comparativamente más heterogéneas de acuerdo a su procedencia son: Urabá (con el 12% de cordobeses y 8% de chocoanos) y Magdalena Medio (con 12% de cordobeses, 12% de cundinamarqueses, 10% de santandereanos y 16% de bolivarenses).

Gráfica 54. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta ciudad? (Total).

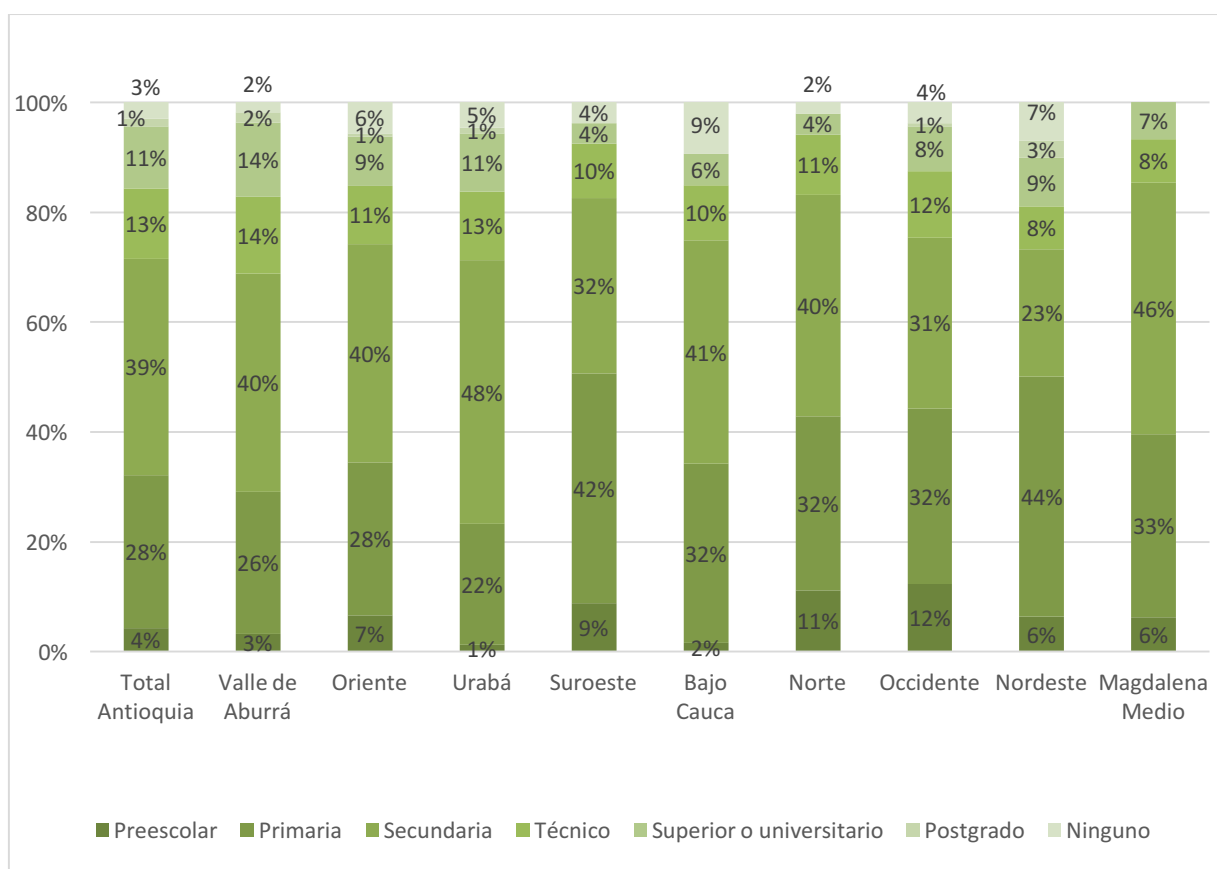


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Las razones principales para los traslados entre municipios, barrios y veredas son la búsqueda de trabajo (31%), la adquisición de vivienda (12%), el cambio del estado civil (10%), el desplazamiento forzado (8%), y la disminución de los ingresos (6%). Las subregiones con mayor incidencia del desplazamiento forzado como razón de migración son Nordeste, con 13%, y Bajo Cauca, con el 11%.

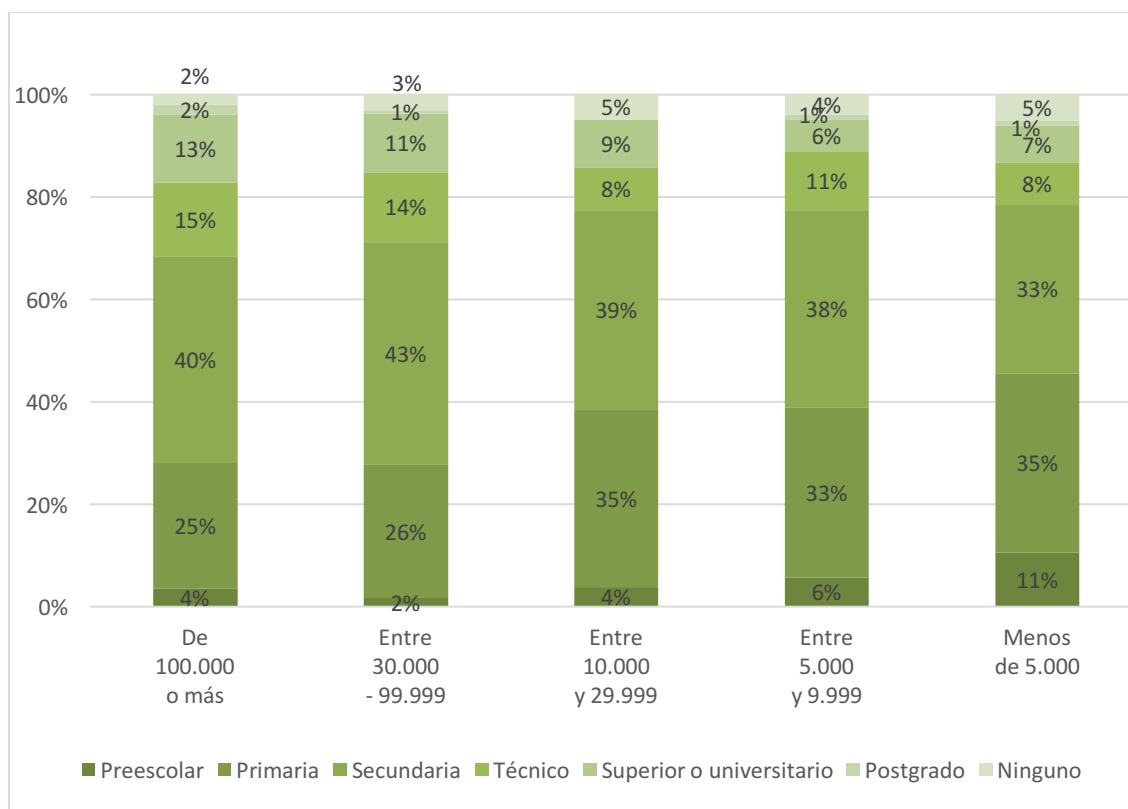
En lo relacionado con el nivel educativo, el 3% de los antioqueños encuestados no tiene ningún nivel educativo, el 4% preescolar, el 28% primaria, el 39% secundaria, el 13% técnico, el 11% superior o universitario, y el 1% postgrado (Ver Gráfica 54). La subregión en la que el nivel universitario es más alto es el Valle de Aburrá, con 14%, mientras las subregiones con el mayor porcentaje de respuestas de “ninguno” son Bajo Cauca, con el 9%, y Nordeste, con el 7%. En efecto, en las poblaciones con más habitantes, los niveles educativos aumentan, el universitario pasa del 7% en poblaciones de menos de 5.000 habitantes al 13% en las de 100.000 o más habitantes.

Gráfica 55. ¿Cuál es su nivel educativo? (Subregiones)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

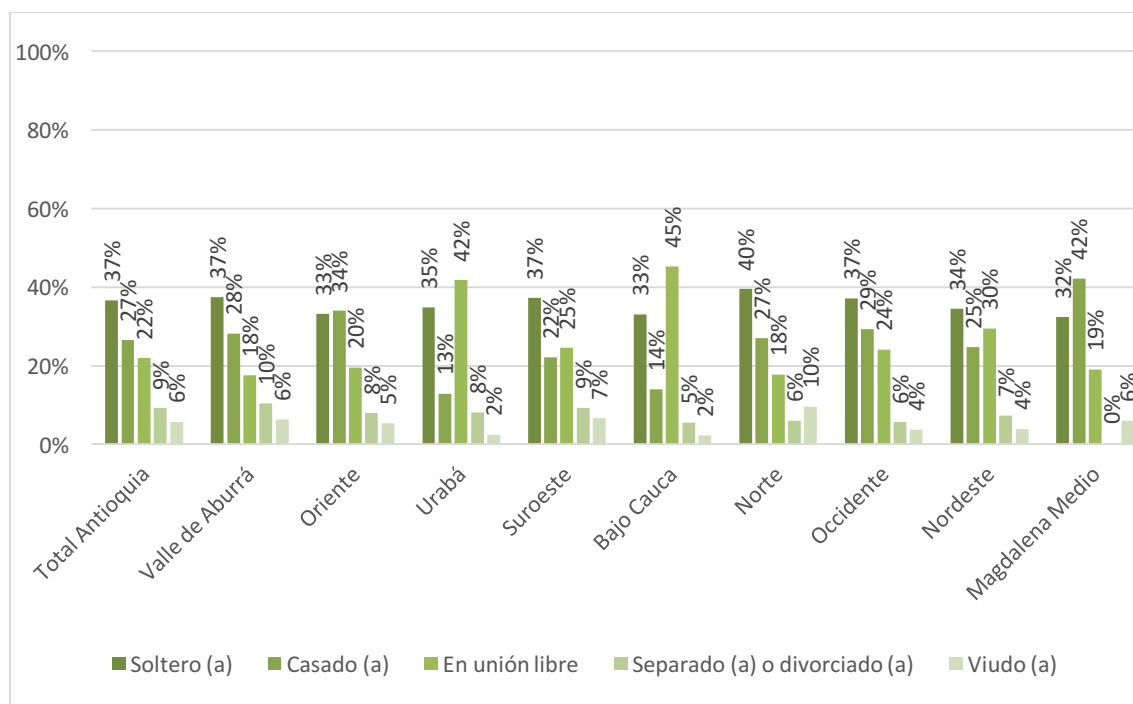
Gráfica 56. ¿Cuál es su nivel educativo? (Densidad poblacional)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La Gráfica 57 da cuenta del estado civil de los antioqueños participantes en la encuesta. Las subregiones en que la mayoría de los encuestados están casados son Magdalena Medio (42%), Oriente (34%) y Occidente (29%). El mayor porcentaje de unión libre está en Bajo Cauca (45%), Urabá (42%) y Nordeste (30%).

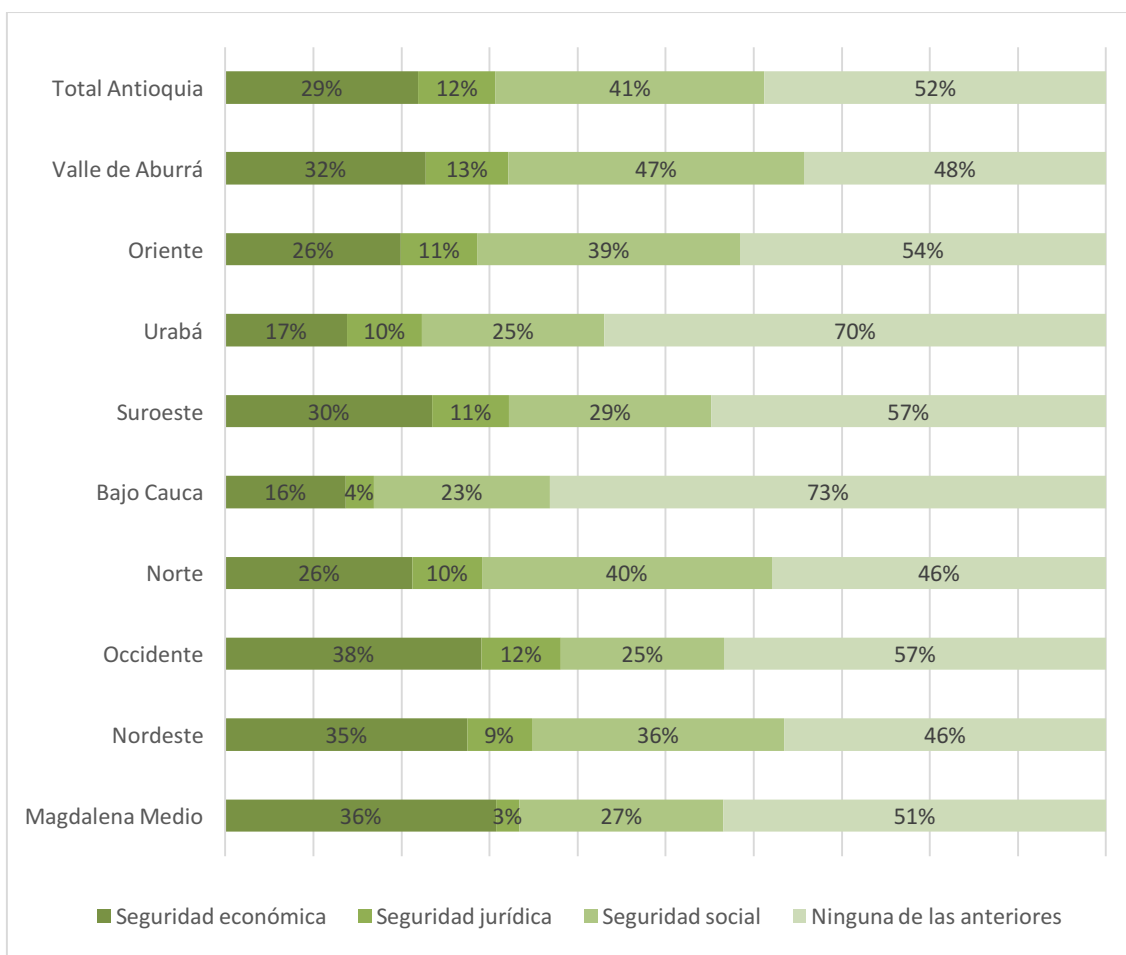
Gráfica 57. ¿Actualmente está?



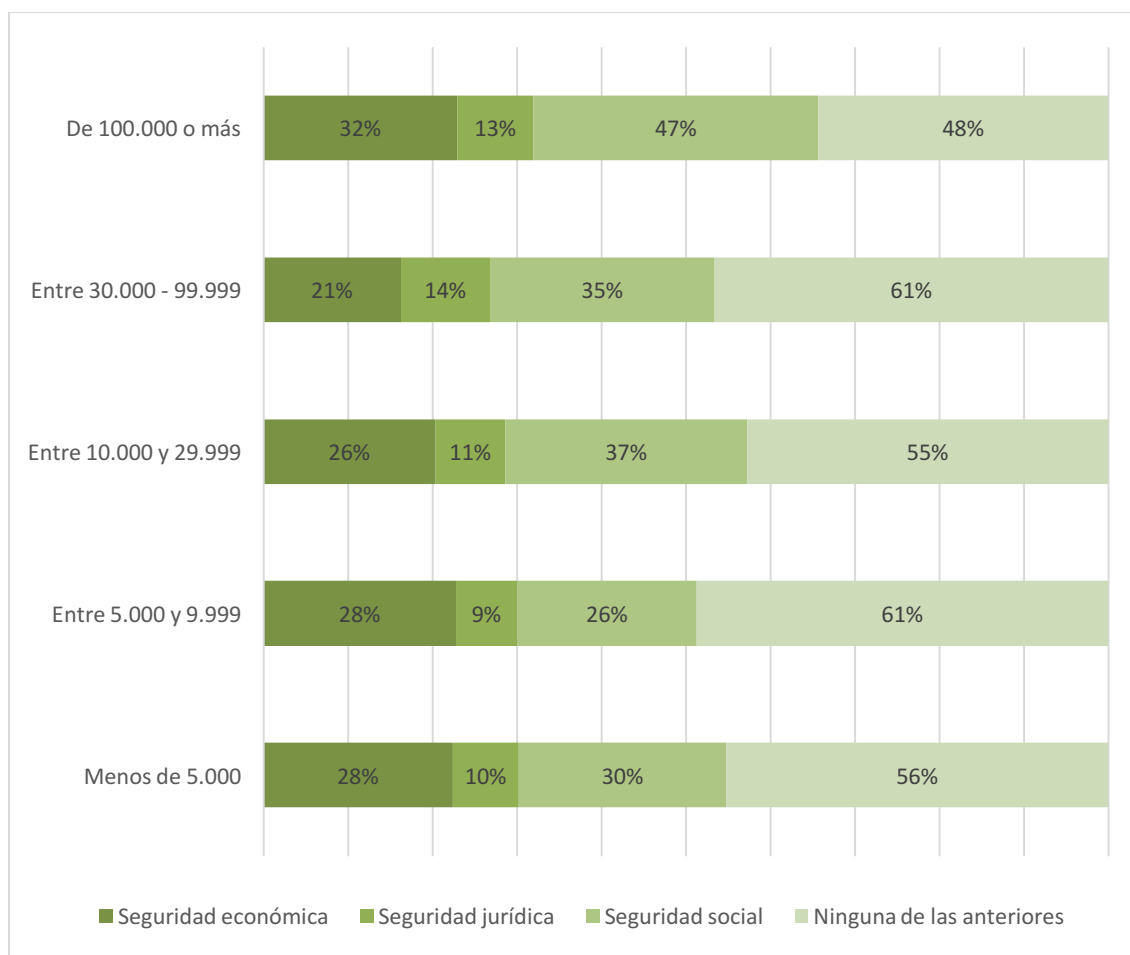
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El 52% de los antioqueños encuestados no cuentan con ninguna de las garantías asociadas a los derechos laborales (Ver Gráfica 58). Las subregiones en las que este porcentaje de inseguridad laboral es más alto son Bajo Cauca (73%), Urabá (70%) y Suroeste (57%). El Valle de Aburrá es la subregión con una menor incidencia de la inseguridad laboral, con el 48%.

Gráfica 58. ¿En el trabajo que usted realiza, tiene? (Subregiones)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfico 59. ¿En el trabajo que usted realiza, tiene? (Densidad poblacional)

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

En resumen, el 58% de los antioqueños viven en casa propia; el 67% cuenta con un trabajo actualmente; el 29% tiene ingresos entre \$350 mil y \$1 millón de pesos mensuales; el 71% no tiene un automotor (carro/moto) en la actualidad; el 89% lleva más de cinco años viviendo en su ciudad de residencia; el 79% lleva más de cinco años viviendo en su barrio o vereda de residencia; y el 37% son solteros.

2.3. Perfiles de los antioqueños en seguridad y convivencia ciudadana

Habiendo presentado la caracterización básica de las condiciones materiales de los ciudadanos en el departamento, se detallarán a continuación los resultados de

la encuesta. Para dotar a este ejercicio de profundidad, análisis y rigurosidad, la interpretación de los hallazgos resultantes de la aplicación de la encuesta se hará en torno al siguiente esquema analítico:

Gráfico 60. Esquema analítico de comprensión integral de la seguridad y la convivencia



Fuente: Elaboración propia.

Este esquema analítico para la comprensión integral de los fenómenos de seguridad y convivencia ciudadana se basa en la literatura que afirma que las percepciones de seguridad deben ser incluidas en los modelos explicativos de seguridad, al mostrar no solo actitudes y predisposiciones en los ciudadanos; sino que estas, se traducen en transformaciones comportamentales tales como la limitación en los movimientos y prácticas cotidianas, y las decisiones que toman los individuos respecto a su vida, lugar de residencia, compra de bienes y en general en todos los asuntos que están relativos al nivel de bienestar percibido en sus entornos locales.

El segundo elemento del esquema está relacionado con los niveles de victimización real, que como se ha mencionado al inicio de este texto se

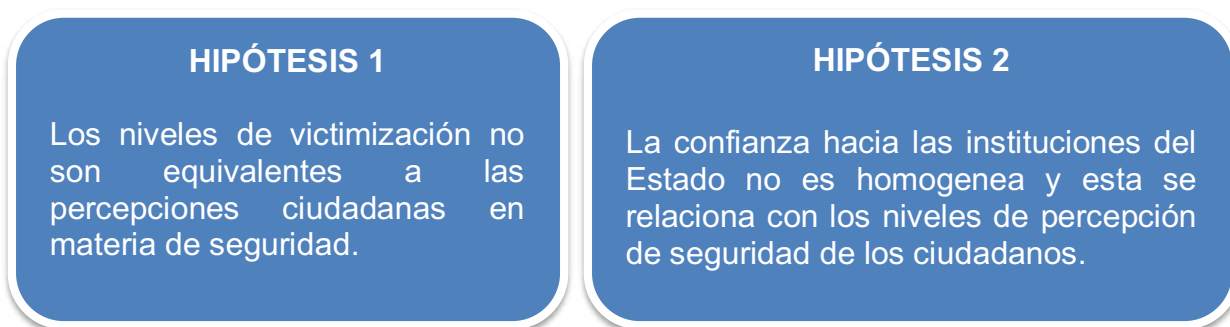
relacionan con los factores objetivos y cifras en materia de homicidio, hurtos, riñas, entre otros. La importancia de este elemento en el esquema es indiscutible, pues además de reflejar la realidad material del fenómeno, permite identificar de forma clara los efectos de las intervenciones estatales en la garantía de la vida, seguridad e integral personal de los habitantes; un aspecto fundamental desde el enfoque de seguridad de Antioquia la más educada.

Por último, la confianza institucional aunque es un factor menos explorado en la literatura especializada sobre el tema, es fundamental para el análisis en tanto señala el tipo de relaciones que se constituyen entre la ciudadanía y el Estado, y que como se afirmó en la primera parte del informe, tienen importantes efectos en la movilización cognitiva, afectiva y evluativa de los ciudadanos. Estos elementos definen la calidad y el tipo de legitimidad de la autoridad y las reglas en el nivel microsocial.

La naturaleza de estos vínculos puede generar que las acciones estatales tengan un mayor impacto en el corto, mediano y largo plazo, o por el contrario pueden constituir esfuerzos aislados, ineficaces y desprovistos de legitimidad desde el punto de vista de la comunidad. Esta falta de legitimidad puede generar comportamientos que justifiquen el incumplimiento de reglas o la desinstitucionalización de la resolución de problemas o la privatización de las soluciones.

Con base en este esquema, la revisión de antecedentes y tendencias presentadas en la sección anterior, el estudio parte de las siguientes hipótesis que articulan los tres elementos del esquema analítico ya mencionado:

Gráfico 61. Hipótesis de trabajo



Fuente: Elaboración propia.

Estas hipótesis serán abordadas no solo con el análisis descriptivo sino con la construcción de correlaciones sobre diferentes temáticas de la encuesta.

Para empezar, al hacer un análisis de clústers fue posible construir una serie de perfiles para los ciudadanos del departamento a partir de algunos atributos no solo sociodemográficos sino de seguridad y convivencia ciudadana. Para esto se construyeron 6 clústers que están compuestos de variables relacionadas con los elementos constitutivos del esquema analítico: percepción de seguridad, nivel de victimización y confianza institucional.

Los clúster se obtuvieron mediante la técnica denominada “clúster en dos fases”, que emplea un algoritmo que permite determinar el número de clúster mediante la comparación de criterios de información para diferentes soluciones de agrupación, determinando de esta forma, el número óptimo de clústeres. Después de generadas las agrupaciones se realizan pruebas de comparación de proporciones de las variables de interés entre los grupos.

En una primera etapa los clúster se construyeron con las variables de percepción y nivel de victimización. Al respecto se tiene el siguiente perfil para hombres y mujeres:

Gráfico 62. Perfil de los antioqueños acuerdo a percepciones de seguridad y victimización

El hombre antioqueño de entre 15 y 42 años que vive en municipios pequeños (de menos de 9.999 habitantes) o medianos (10.000 a 99.000 habitantes) se caracteriza por tener muy altos niveles de percepción de seguridad en su barrio, vereda y municipio y en no haber sido víctima de un delito en el último año.

2 de cada 3 mujeres antioqueñas de este mismo rango de edad y que viven en ese tipo de densidad poblacional, se sienten inseguras en su barrio y municipio y alrededor de 1 de cada 5 ha reportado algún

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, al hacer los clúster considerando como variable de referencia la confianza institucional, las diferencias se revelan en el ámbito de densidad poblacional municipal, dando como resultado los siguientes perfiles:

Gráfico 63. Perfil de los antioqueños acuerdo a percepciones de contribución de instituciones a la seguridad

La mayoría de habitantes de municipios grandes (de más de 100.000 personas) que están en el rango de edad de 27 a 56 años, creen que la Policía Nacional (en un 40%) y las Fuerzas Militares (en un 57,3%) contribuyen poco o nada al logro de la seguridad. Casi la totalidad de los habitantes de estas ciudades (90%) cree que la Alcaldía y Gobernación contribuyen muy poco al logro de la seguridad, lo cual es similar a la percepción que tienen sobre actores ilegales como bandas, grupos armados y pandillas.

El perfil de los ciudadanos de municipios medianos (entre 10.000 y 99.000 habitantes) tiene una percepción neutra de la contribución de la fuerza pública, la alcaldía y la Gobernación. En el caso de la fuerza pública el 50% cree que no contribuye ni mucho ni poco, y en el de las autoridades territoriales este porcentaje es de alrededor del 75%.

En los municipios pequeños de menos de 9.999 habitantes, y sobre todo en el rango de edad de 43 años en adelante, las personas dicen que la Policía y las Fuerzas Militares contribuyen

Fuente: Elaboración propia.

Con estos perfiles de referencia, a continuación se mostrarán los resultados en torno a los tres elementos del esquema analítico, empezando con los datos relacionados con percepción de seguridad.

2.4. Percepción de seguridad

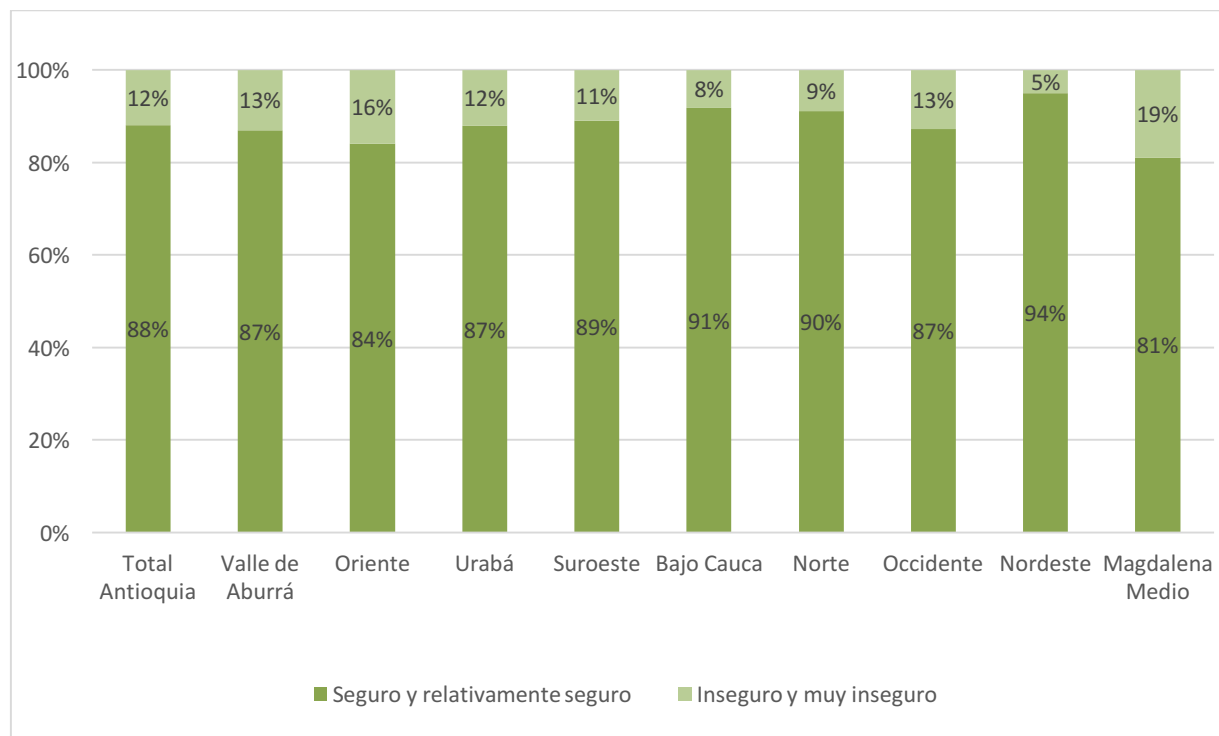
De acuerdo a los datos representados en la [Gráfica 9](#), el 2% y el 10% de los antioqueños encuestados se siente *Muy inseguro* o *Inseguro* en su barrio o vereda de residencia respectivamente, mientras el 21% se siente *Relativamente seguro* y



el 67% *Seguro*. Esto habla de un nivel de seguridad percibida bastante alta en el departamento. La muestra de la encuesta incluyó una participación importante (y pocas veces incluida en encuestas de victimización y percepción de seguridad realizadas en Colombia) de las zonas rurales en las que se observa una disposición de los ciudadanos más alta que en las zonas urbanas a sentirse seguros. Las gráficas 64 y 68 dan cuenta de esto. En efecto, la percepción de seguridad pasa del 95% al 87% entre poblaciones de menos de 5.000 y más de 100.000 habitantes, respectivamente.

De otro lado, en términos subregionales la percepción de seguridad en el barrio o vereda más alta de Antioquia se encuentra en el Bajo Cauca con el 78%, seguido en el segundo lugar por Occidente con el 77%, y en el tercero por Nordeste con el 76%. En cuanto a la percepción de inseguridad⁸, las subregiones con porcentajes más altos son Magdalena Medio con el 19%, Oriente con el 16%, y Valle de Aburrá y Occidente con el 13%.

Gráfica 64. ¿En general, en su barrio o vereda usted se siente? (Total y subregional).



⁸ Esto es: el agregado entre sentirse inseguro y muy inseguro.

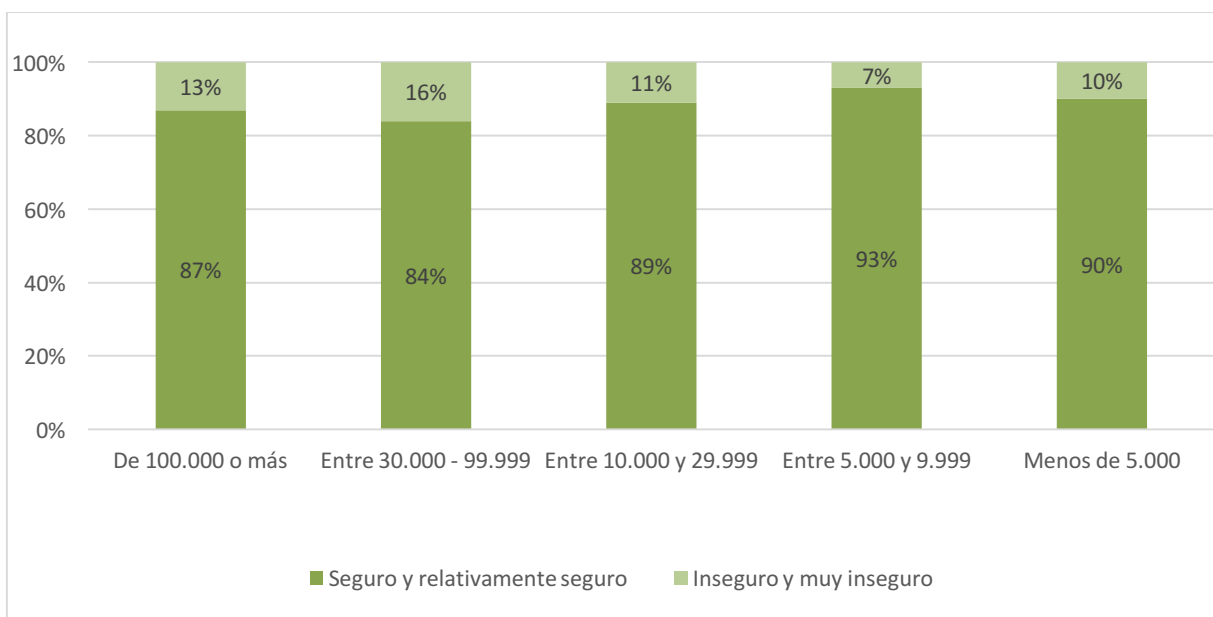
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, la percepción de seguridad en el barrio o vereda, desagregada en términos de densidad poblacional, como se puede apreciar en la [Gráfica 60](#), señala que en las poblaciones de 100.000 o más habitantes, el 2% de los encuestados se sienten muy inseguros y el 11% inseguros, mientras que el 25% se sienten relativamente seguros y el 62% seguros. En las poblaciones de entre 30.000 y 99.000 habitantes el 14% muy inseguros, el 2% se sienten inseguros, el 16% relativamente seguros, y el 68% seguros. En poblaciones de entre 10.000 y 29.999 habitantes, el 11% de los encuestados se sienten inseguros (10%) o muy inseguros (1%), el 16% relativamente inseguros, y el 73% seguros. En poblaciones de entre 5.000 y 9.999, el 7% se sienten inseguros (4%) o muy inseguros (3%), el 15% relativamente seguros y el 78% seguros; y en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el 10% se siente inseguro o muy inseguro, el 14% relativamente seguro y el 76% seguro.

En la misma línea, podría afirmarse que en las poblaciones más densas, con más de 100.000 habitantes, es más probable encontrarse con percepciones de seguridad dirigidas a la opción *Relativamente seguro*. En el mismo sentido, podría afirmarse que los municipios con menor densidad poblacional, la sensación de *Relativamente seguro* disminuye en número de ocurrencias, a la par que aumentan el número de respuestas dirigidas a la opción *Seguro*. No obstante, en general la situación de percepción positiva se mantiene en diferentes municipios con densidades poblacionales diversas.



Gráfica 65. ¿En general, en su barrio o vereda usted se siente? (Densidad poblacional).

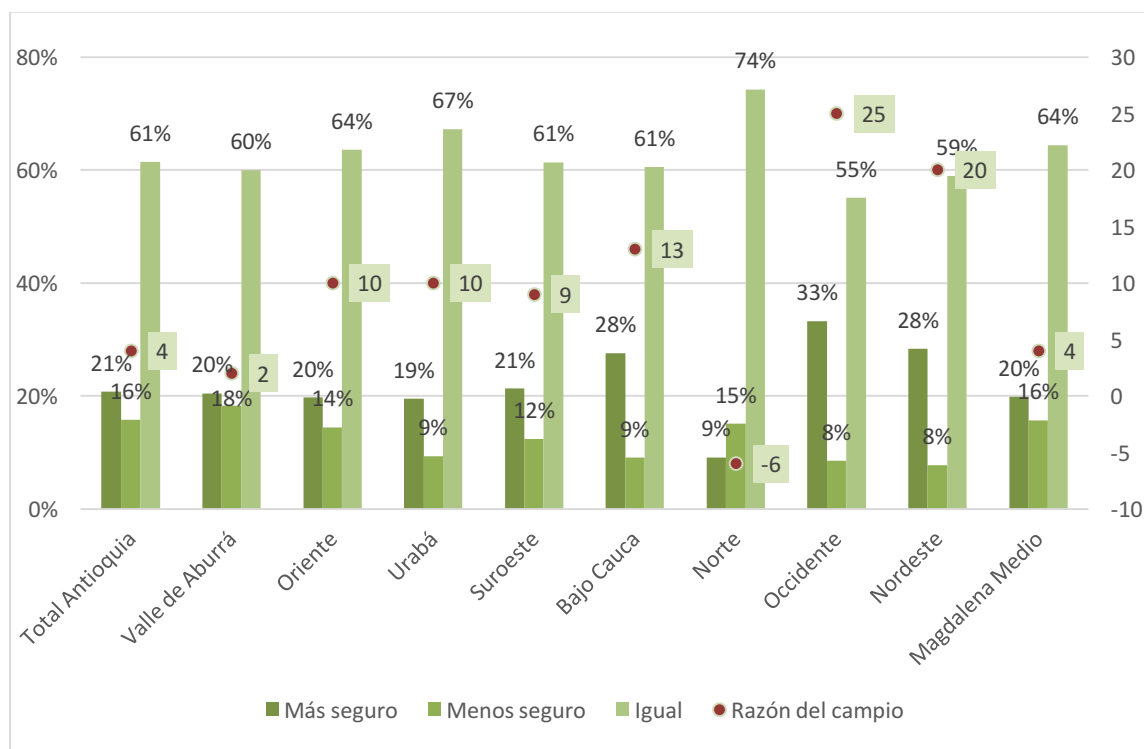


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Con la intención de indagar por la percepción histórica de seguridad, la [Gráfica 66](#) da cuenta de percepción de seguridad para el encuestado, en relación con la misma percepción respecto al año anterior.

Así, de acuerdo con la Gráfica 61, el 21% de los antioqueños encuestados se siente más seguro que el año pasado en su barrio o vereda, mientras que el 16% se siente menos seguro. En el Valle de Aburrá el 20% se sienten más seguros y el 18% menos seguro respecto al año pasado. Estos mismos valores para el Norte son de 9% y 15%, donde se tiende a percibir que la situación ha empeorado; mientras que Occidente, con 33% de más seguros y 8% de menos seguros, cuenta con una mejoría notable. Otra subregión con datos significativos por su variación al respecto es Bajo Cauca, con 28% sintiéndose más seguros y 9% menos seguros en su barrio o vereda.

Gráfica 66. Con relación a hace un año ¿cómo se siente usted actualmente en este barrio o vereda? (Total y subregional)⁹.



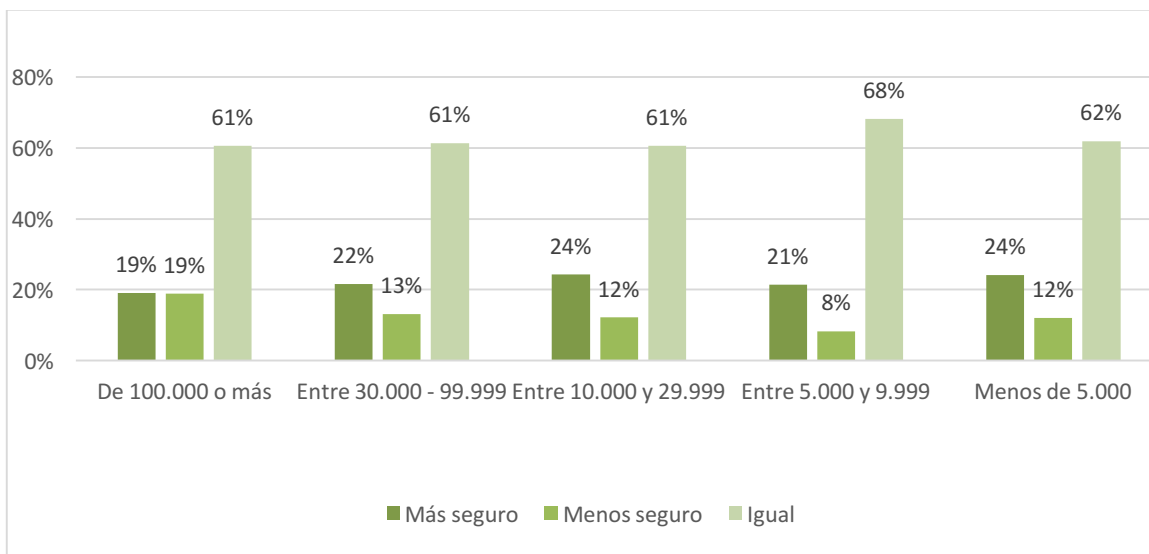
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El cambio esta variable desagregada por densidad poblacional, se notan variaciones que dan cuenta de los desafíos en términos de percepción de seguridad en zonas urbanas contra las mejoras de las rurales.

En las poblaciones de 100.000 o más habitantes, el 19% de los encuestados se siente más seguro, pero otro 19% se siente menos seguro en su barrio o vereda respecto al año pasado. A medida que la densidad poblacional disminuye, esta relación cambia: tiende a aumentar la sensación de mejoría en la seguridad, mientras disminuye la sensación de inseguridad. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el 24% se siente más seguro y el 12% menos seguro que el año anterior.

⁹ Este Gráfico no incluye los porcentajes de respuesta de No sabe/No responde.

Gráfica 67. Con relación a hace un año ¿cómo se siente usted actualmente en este barrio o vereda? (Densidad poblacional)¹⁰.

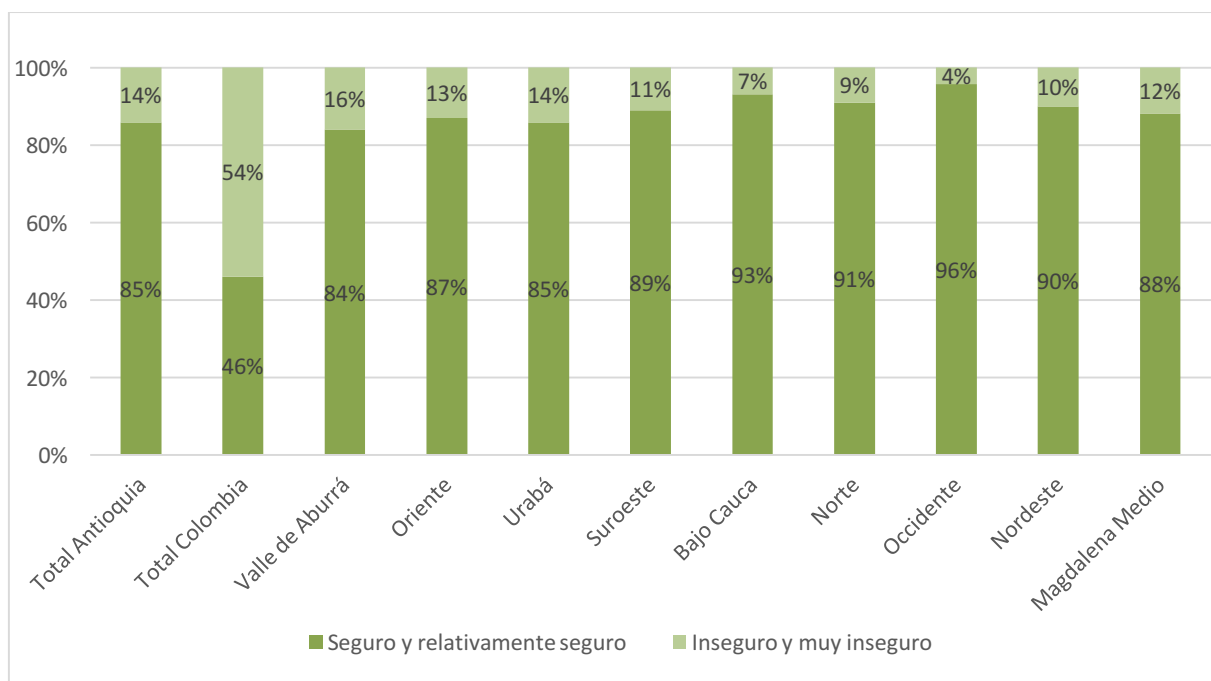


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La percepción de inseguridad tiende a aumentar en las subregiones más urbanas y en mayores densidades poblacionales. El 14% de los antioqueños encuestados se siente inseguro o muy inseguro en su municipio de residencia, mientras el 85% se siente relativamente seguro o seguro. En términos subregionales, la percepción de seguridad por municipios más alta de Antioquia se encuentra en el Occidente con el 82%, seguido en el segundo lugar por Bajo Cauca con el 77%, y en el tercero por Magdalena Medio y Suroeste, con el 69%. En cuanto a la percepción de inseguridad, las subregiones con porcentajes más altos son Valle de Aburrá con el 16%, Urabá con el 14%, y Oriente, con el 13%.

¹⁰ Este Gráfico no incluye los porcentajes de respuesta de No sabe/No responde.

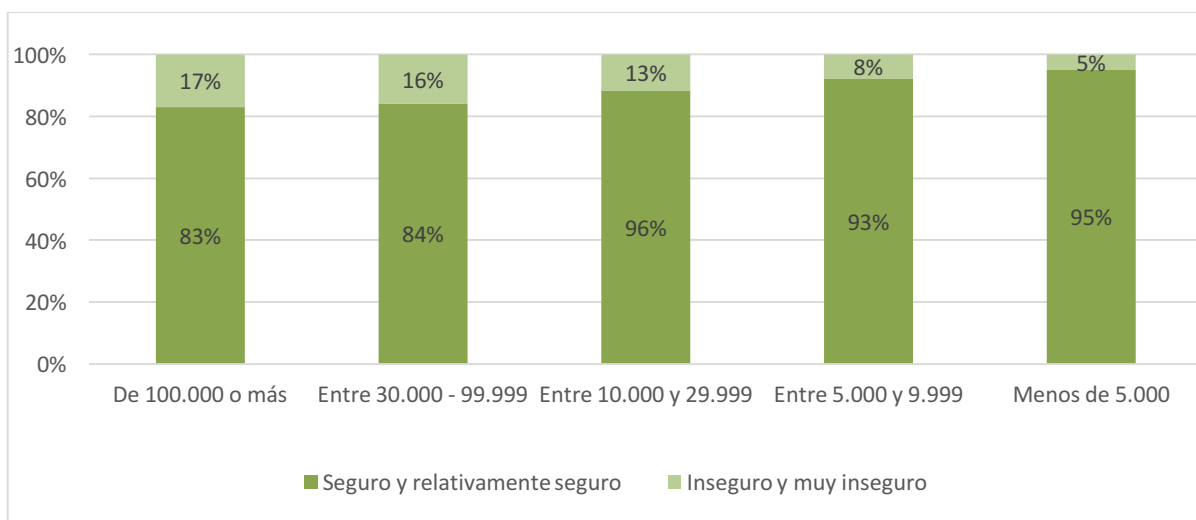
Gráfica 68. ¿En general, en este municipio se siente? (Total y subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, la percepción de seguridad en el municipio de residencia, desagregada en términos de densidad poblacional (Ver Gráfica9), da cuenta de que en las poblaciones de 100.000 o más habitantes, el 17% de los encuestados se sienten inseguros o muy inseguros, mientras el 83% se sienten relativamente seguros o seguros. En las poblaciones de entre 30.000 y 99.000 habitantes, el 16% se sienten inseguros o muy inseguros, el 84% relativamente seguros o seguros. En poblaciones de entre 10.000 y 29.999 habitantes, el 13% de los encuestados se sienten inseguros y el 86% relativamente seguros o seguros. En poblaciones de entre 5.000 y 9.999, el 8% se sienten inseguros o muy inseguros y el 93% se sienten relativamente seguros o seguros. Y en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el 5% se siente inseguro o muy inseguro y el 95% relativamente seguro o seguro.

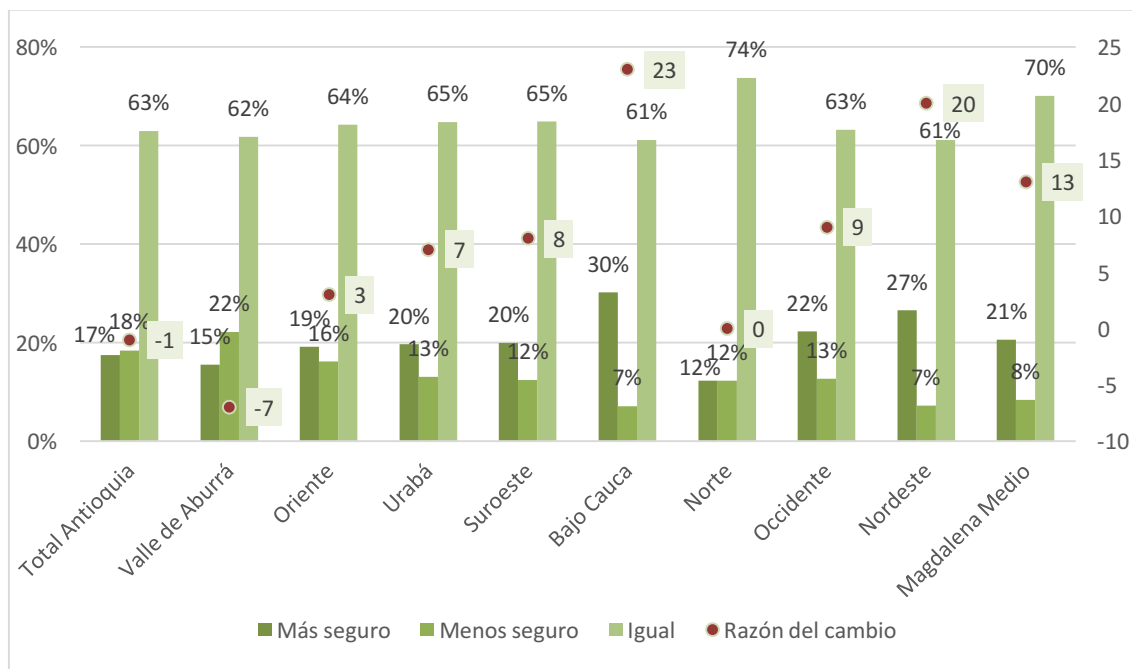
Gráfica 69. ¿En general, en este municipio se siente? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Al preguntar por circunstancias de percepción histórica respecto a los municipios en clave subregional, la gráfica 70 permite observar que el 17% de los antioqueños encuestados se siente más seguro que el año pasado en su municipio de residencia mientras el 18% se siente menos seguro. En el Valle de Aburrá el 15% se sienten más seguros y el 22% menos seguro respecto al año pasado, haciéndola la subregión en donde la relación mejora-empeoramiento de la sensación de seguridad es más negativa; mientras Bajo Cauca, con 30% de más seguros y 7% de menos seguros, cuenta con la mejor relación de la muestra. Otra subregión con datos significativos por la variación al respecto es Nordeste, con 27% sintiéndose más seguros y 7% menos seguros en su municipio.

Gráfica 70. Con relación a hace un año, ¿cómo se siente usted actualmente en este municipio? (Total y subregional)¹¹.

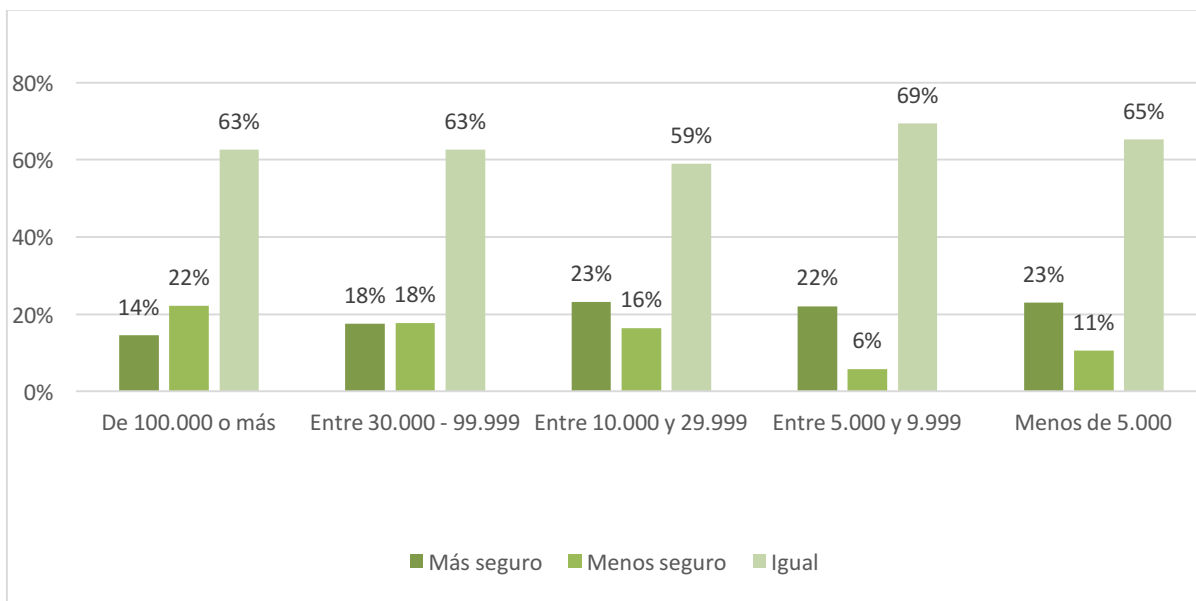


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El cambio en la sensación de seguridad respecto al año inmediatamente anterior en el municipio de residencia refuerza la intuición establecida anteriormente sobre las dificultades en términos de percepción de las zonas urbanas del departamento. Así pues, en las poblaciones de 100.000 o más habitantes, el 14% de los encuestados se siente más seguro, mientras que el 22% se siente menos seguro en su municipio respecto al año pasado. De nuevo, en tanto la densidad poblacional disminuye, esta relación cambia: aumenta la sensación de mejoría en la seguridad, mientras disminuye la sensación de inseguridad. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el 23% se siente más seguro y el 11% menos seguro que el año anterior.

¹¹ Este Gráfico no incluye los porcentajes de respuesta de No sabe/No responde.

Gráfica 71. Con relación a hace un año, ¿cómo se siente usted actualmente en este municipio? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, respecto a los aspectos por los cuáles las personas no se sienten seguras en sus municipios¹², los participantes señalaron la falta de policía como la principal causa, con el 48% (Ver [Tabla 9](#)). Le sigue a continuación, la existencia de grupos delincuenciales con el 38%; en tercer lugar por las noticias que ven o escuchan en los medios de comunicación con el 28%; luego por los comentarios de la gente con el 23%; y en quinto lugar por la victimización de familiares, amigos o conocidos, con el 17%. De igual manera, el 16% señaló que su sensación de seguridad se ve influenciada por “tener que transitar por lugares peligrosos” y el 10% por haber sido víctima directa de agresiones.

En términos subregionales, en el Valle de Aburrá las razones que se encuentran por encima del promedio departamental son: existencia de grupos delincuenciales (39%), por las noticias que ven o escuchan en los medios de comunicación (30%) y el tránsito obligado por lugares considerados peligrosos (18%). Por otro lado, Urabá es la subregión del departamento en donde la opción “presencia de grupos delincuenciales” fue la causa más alta con el 54%, mientras que el Bajo Cauca es

¹² Esta pregunta permitía respuestas múltiples por parte de los encuestados.

la subregión que más señala la “falta de policía” como causa de la sensación de inseguridad. Las dos subregiones en las que la influencia de los medios masivos de comunicación fue mayor en la sensación de inseguridad fueron Magdalena Medio (44%) y Bajo Cauca (39%).

Respecto a las interacciones que pueden reforzar sensaciones de inseguridad, los medios masivos de comunicación resultan fundamentales en zonas más urbanas y densamente pobladas. Así, 31% de los encuestados que viven en poblaciones de más de 100.000 habitantes sustenta su sensación de inseguridad en lo que ve y escucha en las noticias, mientras este porcentaje se reduce al 16% en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Por otro lado, la influencia de los comentarios de las personas en la sensación de inseguridad sigue una tendencia contraria. En las poblaciones de más de 100.000 habitantes, es de 19%, mientras en la de menos de 5.000 habitantes es del 32%.

Tabla 19. ¿Por cuáles de los siguientes aspectos usted no se siente seguro en su Municipio? (Total, subregional).

	Total	Subregión								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Hay poca policía	48%	48%	49%	52%	54%	56%	35%	34%	35%	49%
Existen grupos de delincuentes	38%	39%	33%	54%	30%	32%	28%	42%	24%	19%
Por las noticias que ve o escucha en los medios de comunicación	28%	30%	23%	24%	11%	39%	13%	28%	14%	44%
Comentarios de la gente	23%	20%	31%	22%	37%	51%	31%	26%	41%	14%
Familiares o amigos han sido víctimas de distintas agresiones	17%	17%	26%	18%	11%	17%	10%	10%	16%	10%
Debe transitar por sitios peligrosos	16%	18%	13%	5%	20%	18%	13%	22%	9%	24%
Ha sido víctima de agresiones	10%	9%	8%	8%	14%	9%	6%	14%	9%	38%

La gente es muy agresiva	9%	9%	6%	9%	6%	8%	5%	12%	8%	-
Mucha violencia/ inseguridad	2%	2%	-	1%	5%	1%	15%	-	3%	-
Temas de drogadicción en las calles	1%	-	2%	-	7%	-	2%	-	1%	-
No sabe/ No responde	1%	-	1%	1%	1%	-	3%	-	2%	-

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Tabla 20. ¿Por cuáles de los siguientes aspectos usted no se siente seguro en su Municipio? (Densidad poblacional).

		Densidad Poblacional				
	Total	De 100.000 o más	Entre 30.000 - 99.999	Entre 10.000 y 29.999	Entre 5.000 y 9.999	Menos de 5.000
Hay poca policía	48%	49%	50%	52%	45%	36%
Existen grupos de delincuentes	38%	38%	49%	36%	36%	24%
Por las noticias que ve o escucha en los medios de comunicación	28%	31%	25%	16%	25%	16%
Comentarios de la gente	23%	19%	32%	34%	29%	32%
Familiares o amigos han sido víctimas de distintas agresiones	17%	17%	23%	15%	13%	12%
Debe transitar por sitios peligrosos	16%	18%	9%	12%	12%	15%
Ha sido víctima de agresiones	10%	9%	10%	9%	13%	10%
La gente es muy agresiva	9%	9%	8%	10%	8%	5%
Mucha violencia/ inseguridad	2%	2%	1%	2%	2%	8%
Temas de drogadicción en las calles	1%	-	1%	1%	5%	1%
No sabe/ No responde	1%	-	1%	1%	2%	1%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

A la pregunta por los aspectos que, en opinión de los encuestados, mejorarían la seguridad de sus municipios (Ver Tabla 21), el 52% de los antioqueños



encuestados señaló medidas que involucran a la Fuerza Pública: vigilancia, patrullaje policial, mayor pie de fuerza, construcción de CAI, entre otros; el 30% medidas de apoyo y acompañamiento: generación de empleo, presencia institucional, programas sociales; el 13% medidas de recreación y deporte: educación, información pública, campañas culturales; y el 12% medidas de transparencia: cumplimiento de la ley, disminución de la corrupción. Esto es interesante pues a pesar que las personas creen que la gestión de la Policía está entre buena y regular (como se verá más adelante), se sigue demandando que está es la mejor forma cómo se mejoraría la seguridad en el municipio.

Tabla 21. ¿Usted cómo cree que se mejoraría la seguridad de su municipio? (Total, subregional).

		Subregión								
	Total	Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
FUERZA PÚBLICA	52%	54%	52%	46%	50%	57%	61%	24%	54%	37%
Aumentar la vigilancia/ patrullaje	32%	31%	33%	33%	28%	43%	37%	16%	34%	27%
Aumentando el pie de fuerza de la policía	20%	21%	20%	13%	25%	15%	25%	7%	23%	5%
Aumentando los CAI's	3%	4%	-	1%	-	1%	1%	-	1%	-
Generando cuadrantes/ más cuadrantes	2%	2%	1%	2%	-	4%	1%	-	-	-
APOYO/ ACOMPAÑAMIENTO	30%	31%	30%	31%	24%	18%	24%	33%	35%	43%
Estando pendientes de la comunidad/ de las necesidades	12%	11%	17%	14%	13%	6%	10%	16%	22%	14%
Generando empleo	8%	8%	4%	11%	3%	4%	7%	13%	6%	25%
Acabando con los índices delincuencia/ violencia	4%	5%	2%	3%	3%	3%	3%	-	5%	2%
Trabajando en equipo	3%	4%	3%	2%	3%	1%	5%	3%	1%	3%
Implementar cámaras en los barrios	2%	3%	4%	1%	2%	-	1%	2%	2%	-
EDUCACIÓN/ RECREACIÓN	13%	13%	11%	16%	11%	4%	16%	23%	5%	9%
Educando la personas	8%	8%	3%	12%	4%	3%	8%	14%	1%	6%
Realizando campañas para eliminar/ prevenir la drogadicción	4%	4%	7%	1%	6%	-	7%	3%	4%	3%
Generando espacios recreativos/ culturales/ deportivos	3%	3%	2%	6%	1%	3%	2%	8%	-	2%
TRANSPARENCIA	12%	14%	10%	7%	9%	9%	8%	13%	11%	2%
Haciendo cumplir las leyes	6%	6%	6%	5%	6%	5%	4%	7%	7%	1%
Disminuyendo la corrupción	5%	7%	3%	1%	3%	4%	1%	1%	3%	1%
ESTÁ SATISFECHO CON LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	4%	3%	5%	3%	11%	4%	6%	5%	4%	18%

NO SABE/ NO RESPONDE	5%	4%	2%	9%	7%	16%	4%	7%	11%	1%
----------------------	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La subregión en donde la opción de medidas de Fuerza Pública fue más popular entre los encuestados fue Norte con el 61%, seguido del Bajo Cauca con 57%, y Nordeste y Valle de Aburrá con el 54%. Por otro lado, Magdalena Medio (43%), Nordeste (35%) y Occidente (33%) tuvieron la mayor cantidad de respuestas para medidas de apoyo y acompañamiento.

Respecto a las opciones de educación y recreación, Occidente tuvo el porcentaje más alto con 23%, seguido por Norte y Urabá con el 16%. Las subregiones que más señalaron medidas de transparencia como posibles mejorías de la seguridad, fueron Valle de Aburrá con el 14% y Occidente con 13%. En términos de densidad poblacional, las poblaciones con más habitantes tienden a preferir medidas de Fuerza Pública: menos de 5.000 personas, 43%; más de 100.000, 52%.

De igual manera, entre mayor es la densidad poblacional, mayor es la exigencia de transparencia como medida para mejorar la seguridad: menos de 5.000 es de 9%; más de 100.000 es de 15%. Las poblaciones con menos habitantes tienden a sentirse más satisfechas con la seguridad de sus municipios: solo el 3% de los encuestados en poblaciones de 100.000 o más habitantes se sienten satisfechos con la seguridad, mientras que en poblaciones de 5.000 o menos habitantes, este porcentaje es del 11%.

La percepción de seguridad se vincula en buena medida con la relación de los ciudadanos con la justicia, en términos de efectividad y eficiencia, pero en el aspecto más general de su conocimiento institucional y la percepción de su responsabilidad en el asunto de la seguridad. En los datos que se exponen a continuación se profundizará en esta relación entre seguridad y justicia.

El 88% de los antioqueños encuestados conoce a la Policía, el 81% conoce a la Policía Nacional y el 71% a las inspecciones de policía; el 55% de los encuestados conoce a la Fiscalía y al ICBF; el 48% conoce las comisarías de familia y el 40% a la Personería municipal (Ver Tabla 21). El 37% conoce la casas de justicia,



mientras el 34% conoce la Defensoría del pueblo; la Procuraduría y el CTI son conocidos por el 32% de los encuestados, y los jueces de la república por el 19%; los centros de conciliación son conocidos por el 12%, y los conciliadores en equidad por el 4%.

Las subregiones en las que el conocimiento de la Policía es menor o igual al promedio departamental son Valle de Aburrá, con 86%, y Occidente, con el 88%. El conocimiento de la institución parece también reducirse en tanto aumenta la población de lugar de residencia, en poblaciones con menos de 5.000 habitantes es de 92%, mientras en las de 100.000 o más es de 86%.

Tabla 22. ¿Cuáles de los siguientes organismos o dependencias públicas conoce? (Total, subregional).

	Total	Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
POLICIA	88%	86%	88%	92%	93%	95%	92%	96%	96%	91%
Fiscalía	55%	58%	57%	63%	41%	35%	45%	46%	49%	54%
ICBF	55%	56%	46%	62%	55%	49%	50%	58%	42%	65%
Comisaría de familia	48%	45%	54%	61%	46%	38%	53%	59%	51%	69%
Personería municipal	40%	29%	59%	61%	68%	42%	67%	69%	57%	57%
Casa de Justicia	37%	37%	33%	40%	12%	80%	18%	29%	64%	21%
Defensoría del pueblo	34%	33%	32%	47%	30%	37%	19%	41%	35%	60%
Procuraduría	32%	33%	25%	40%	33%	26%	17%	29%	14%	37%
CTI	32%	36%	25%	32%	21%	19%	21%	21%	22%	25%
Jueces de la República	19%	20%	17%	27%	17%	10%	21%	17%	11%	12%
Centro de conciliación	12%	12%	12%	15%	8%	9%	7%	12%	15%	9%
Conciliador en equidad	4%	3%	7%	11%	3%	5%	3%	4%	5%	1%
Ninguno	6%	8%	7%	4%	2%	1%	5%	1%	1%	-

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El conocimiento de la Fiscalía es mayor al promedio departamental en las subregiones de Urabá (63%), Oriente (57%) y Valle de Aburrá (58%), mientras que Suroeste (41%) y Norte (45%) son las subregiones en las que su conocimiento es más bajo. En términos de densidad poblacional, el conocimiento de la Fiscalía aumenta junto a la cantidad de habitantes del municipio, es de 41% en poblaciones de 5.000 o menos habitantes y de 59% en las de 100.000 o más habitantes.

Se destaca el desconocimiento de los encuestados de los espacios de resolución alternativa de conflictos, en Norte, por ejemplo, solo el 7% conoce los centros de conciliación y en Magdalena Medio solo el 1% conoce los conciliadores en equidad.

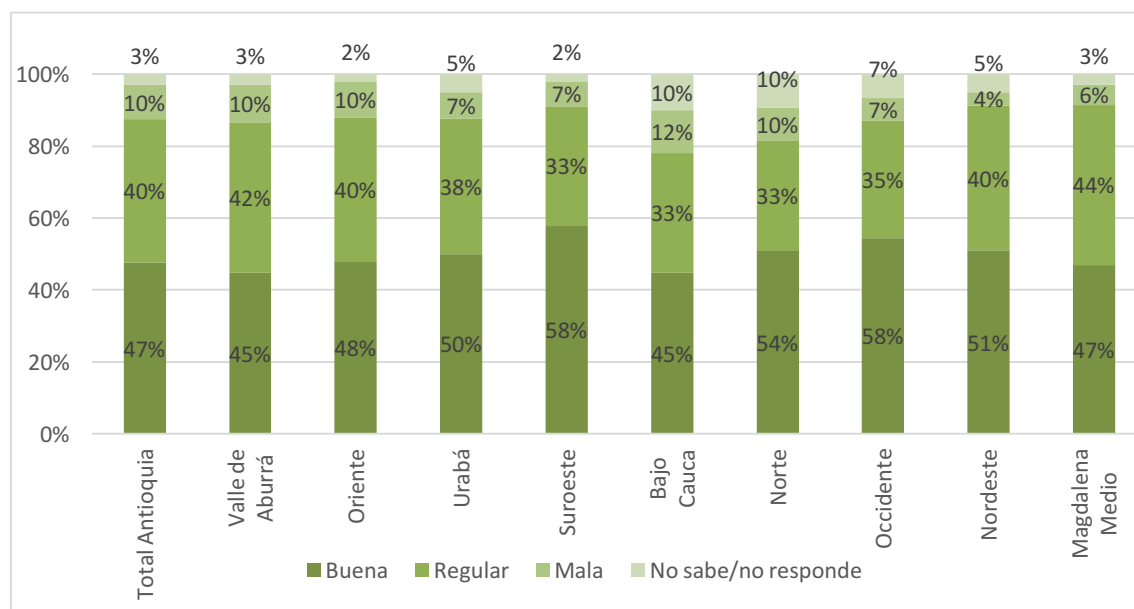
En efecto, se observa un profundo desconocimiento por parte de la mayoría de los antioqueños de muchas de las instituciones que se vinculan con las responsabilidades de seguridad. Así, el conocimiento se concentra en la policía y las inspecciones de policía; un conocimiento que se reduce casi a la mitad cuando se refiere a la Fiscalía y a las comisarías de familia y a un tercio respecto a casa de justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el CTI. Los jueces, los centros de conciliación y los conciliadores en equidad son las instituciones y personas menos conocidas en el departamento en esta materia.

La encuesta le preguntó a los entrevistados que conocían las instituciones sobre el desempeño de su labor en términos de seguridad para sus municipios. Así, el 47% de los antioqueños encuestados calificó como buena la labor de la Policía Nacional, el 40% como regular y el 10% como mala. El Bajo Cauca fue la subregión en donde la calificación negativa de la labor de la policía fue mayor, con 12%, mientras Occidente y Suroeste obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor policial, con el 58%. En términos de densidad poblacional, la calificación de la policía se reduce en tanto el municipio sea más poblado, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 60% señala una buena labor, mientras el 5% la



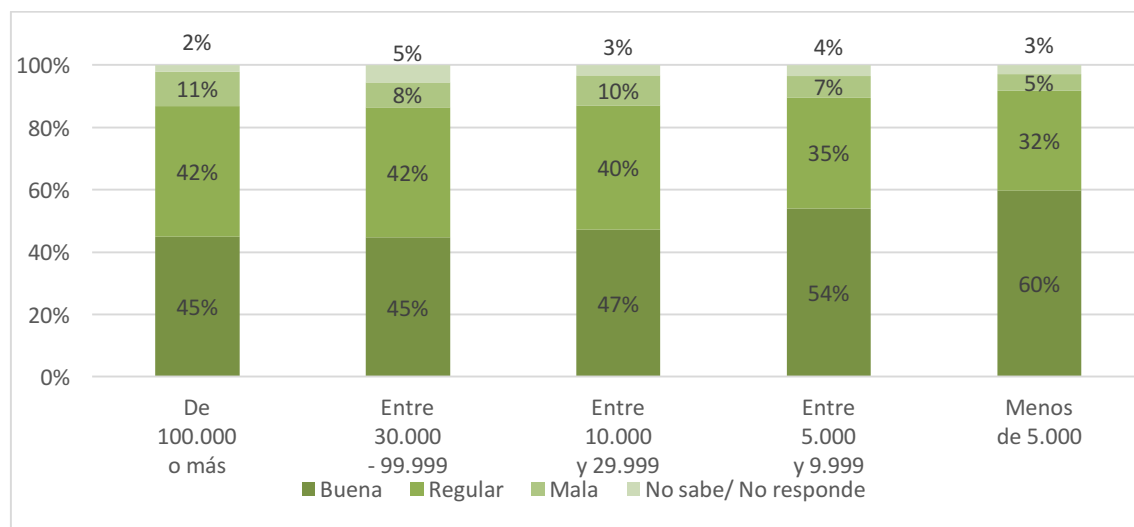
califica como mala; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 45% de los encuestados y la mala, del 11%.

Gráfica 72. ¿Cómo califica la labor de la Policía Nacional? (Subregiones)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfico 73. ¿Cómo califica la labor de la Policía Nacional? (Densidad poblacional)

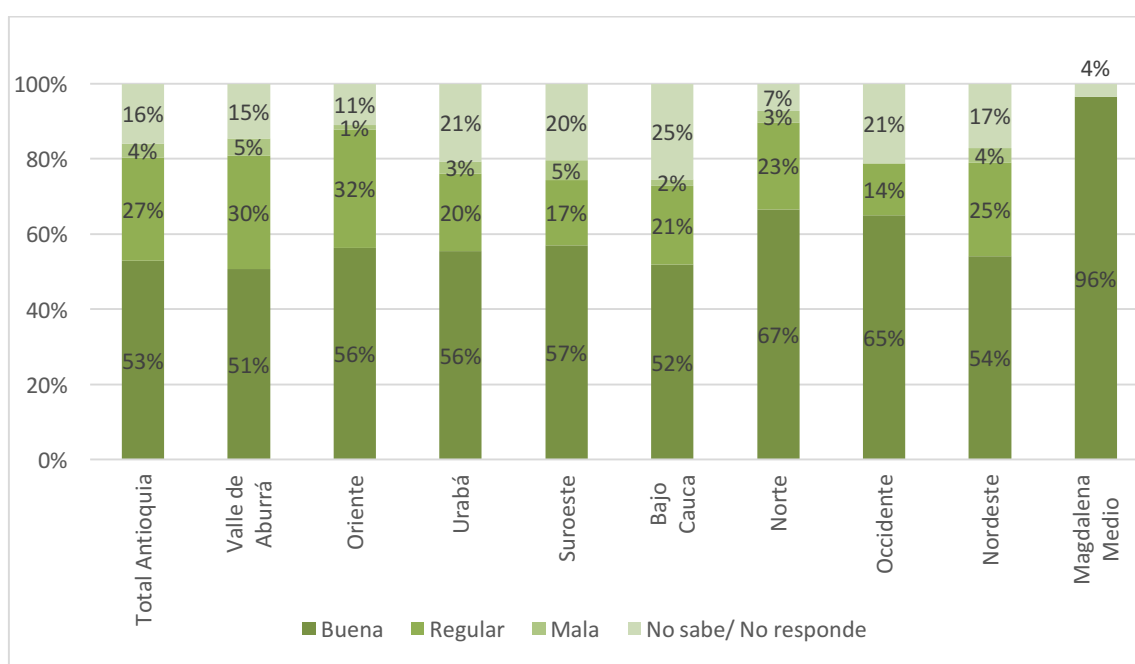


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Para las casas de justicia, el 53% de los antioqueños encuestados calificó como buena su labor, el 27% como regular, el 6% como mala y el 16% no sabe o no

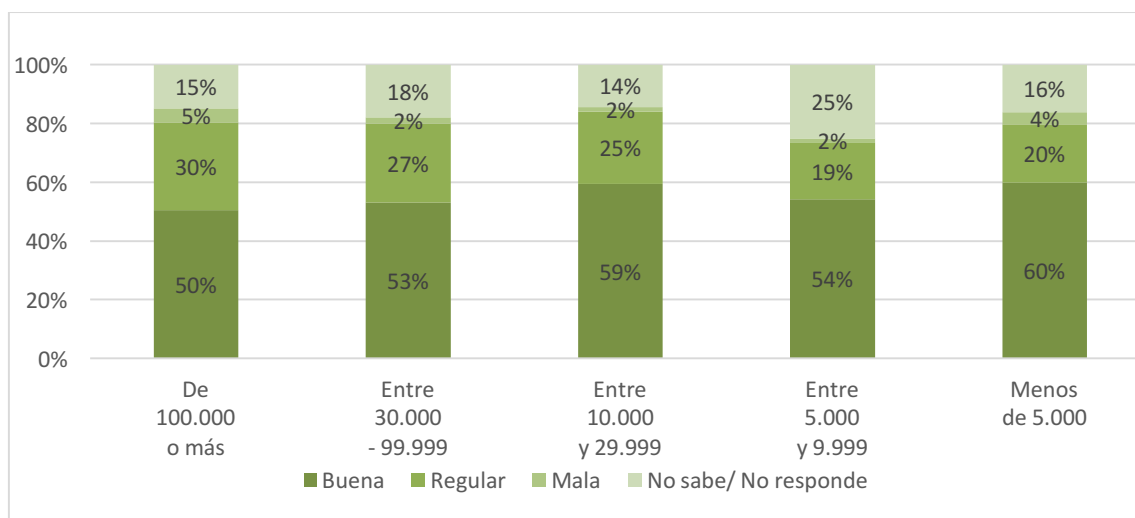
responde. El Valle de Aburrá fue la subregión en donde la calificación negativa de la labor de las casas de justicia fue mayor con 5%, mientras Magdalena Medio y Nordeste obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor de las casas de justicia, con el 96% y 67%, respectivamente. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 60% señala una buena labor, mientras el 4% la califican como mala y el 16% no sabe o no responde; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 51% de los encuestados, la mala, del 5%, y el 15% no sabe o no responde.

Gráfica 74. ¿Cómo califica la labor de la casa de justicia? (Subregiones)



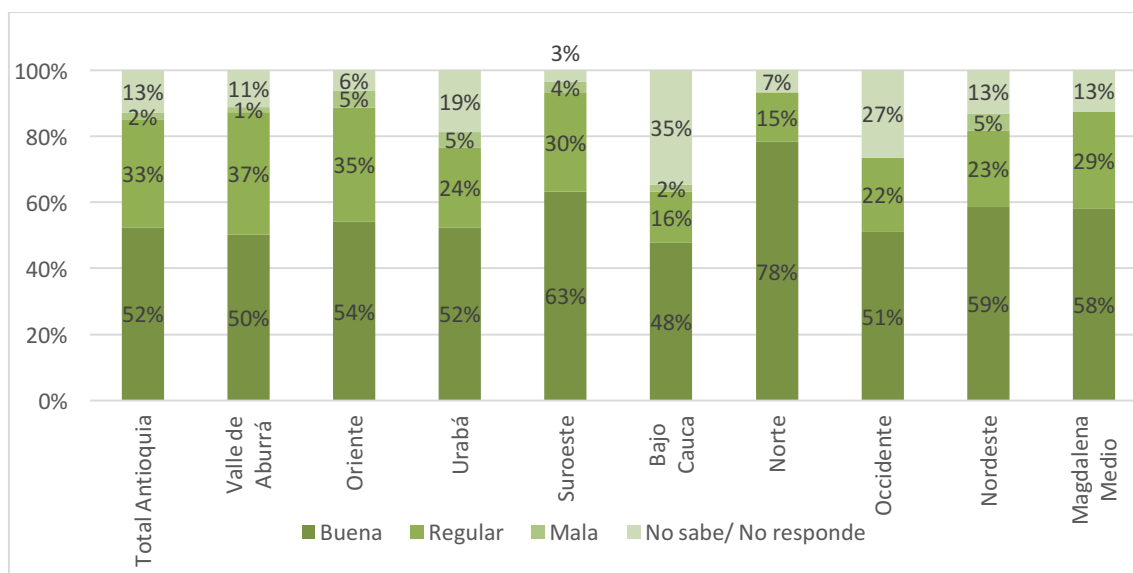
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 75. ¿Cómo califica la labor de la casa de justicia? (Densidad poblacional)

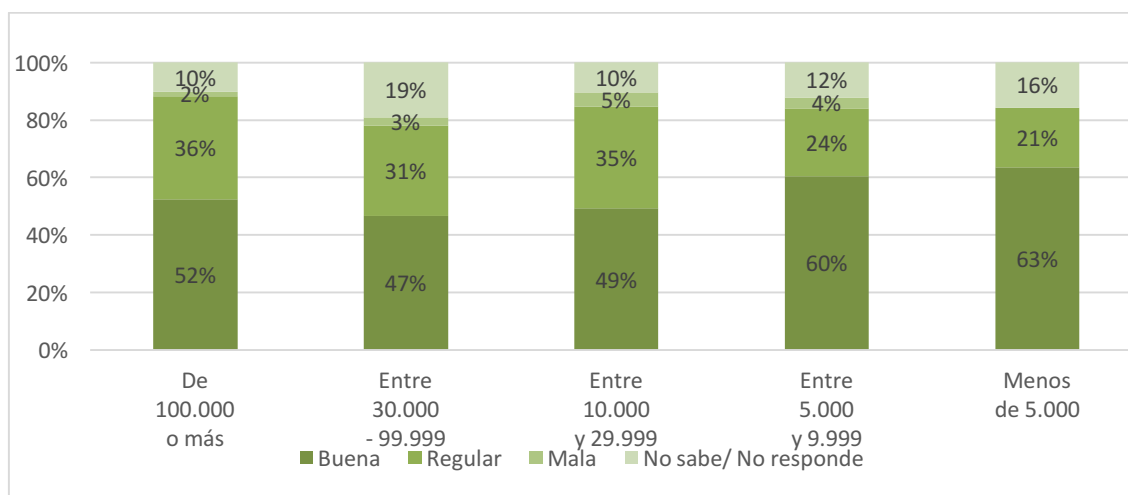


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Respecto a la Defensoría del Pueblo, el 52% de los antioqueños encuestados calificó como buena su labor, el 33% como regular, el 2% como mala y el 13% no sabe o no responde. Oriente, Urabá y Nordeste fueron las subregiones en donde la calificación negativa de la labor de la Defensoría del pueblo fue mayor, con 5%, mientras Norte y Suroeste obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor de la Defensoría, con el 78% y 63%, respectivamente. Las subregiones en donde las respuestas de no sabe o no responde fueron mayores fueron Bajo Cauca, con el 35%, y Occidente, con el 27%. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 63% señala una buena labor, mientras el 16% no sabe o no responde; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 52% de los encuestados, la mala, del 2%, y el 11% no sabe o no responde.

Gráfica 76. ¿Cómo califica la labor de la Defensoría del Pueblo? (Subregiones)

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

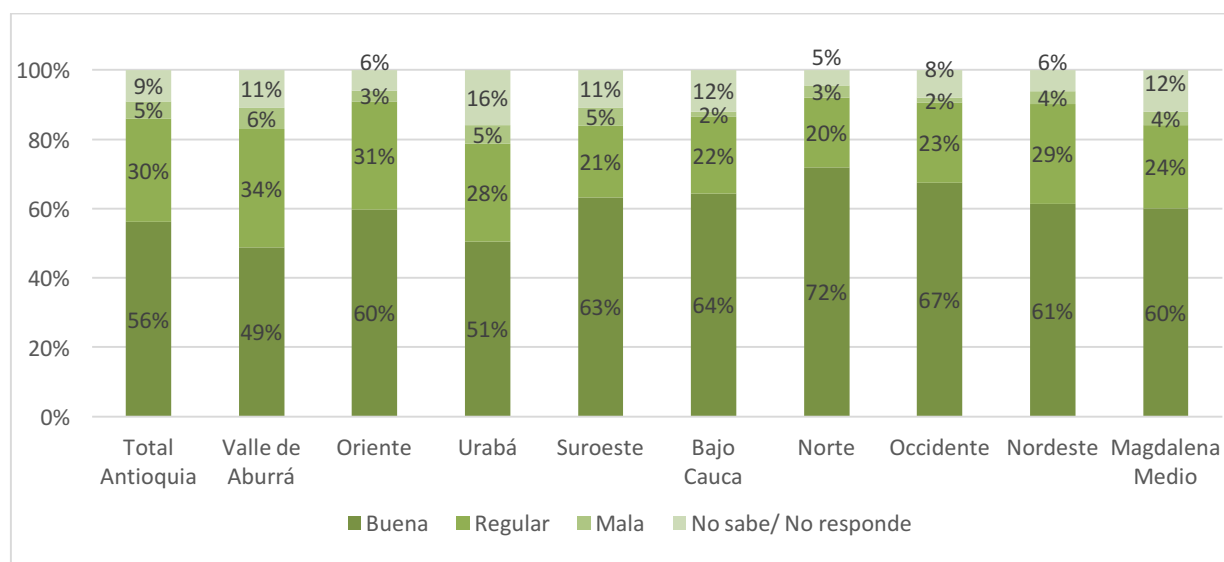
Gráfica 77. ¿Cómo califica la labor de la Defensoría del Pueblo? (Densidad poblacional)

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El 56% de los antioqueños encuestados calificó como buena la labor de la Personería Municipal, el 30% como regular, el 5% como mala y el 10% no sabe o no responde. Valle de Aburrá, Urabá y Suroeste fueron las subregiones en donde la calificación negativa de la labor de la Personería municipal fue mayor, con 6%, 5% y 5%, respectivamente. Mientras Norte, Occidente y Bajo Cauca obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor de la Personería, con el 72%, 67% y 64%,

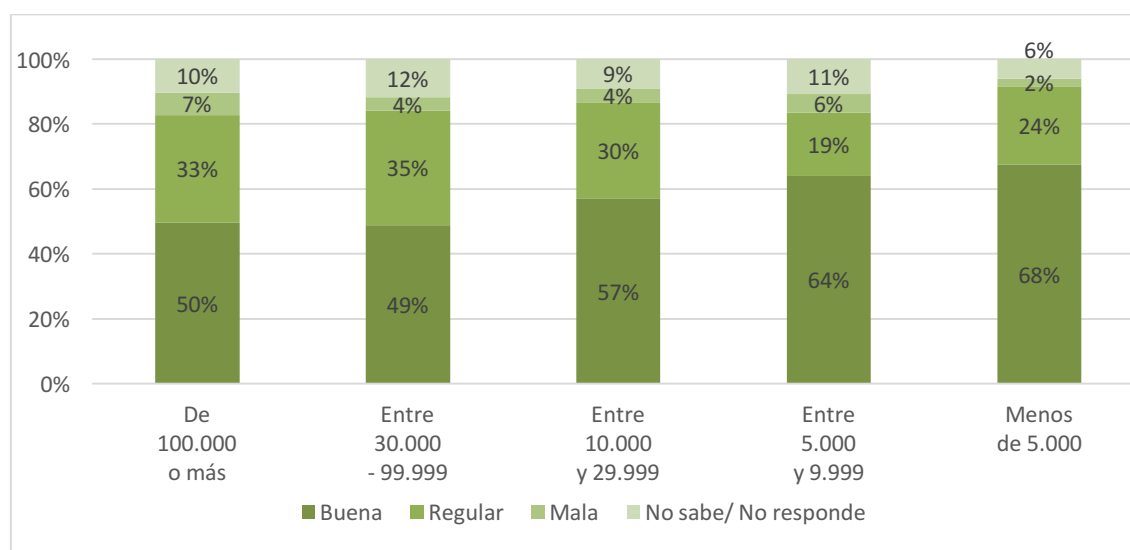
respectivamente. Las subregiones en donde las respuestas de no sabe o no responde fueron mayores fueron Urabá, con el 15%, y Magdalena Medio, con el 13%. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 68% señala una buena labor, mientras el 6% no sabe o no responde; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 50% de los encuestados, la mala, del 7%, y el 10% no sabe o no responde.

Gráfica 78. ¿Cómo calificaría la labor de Personería Municipal? (Subregiones)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

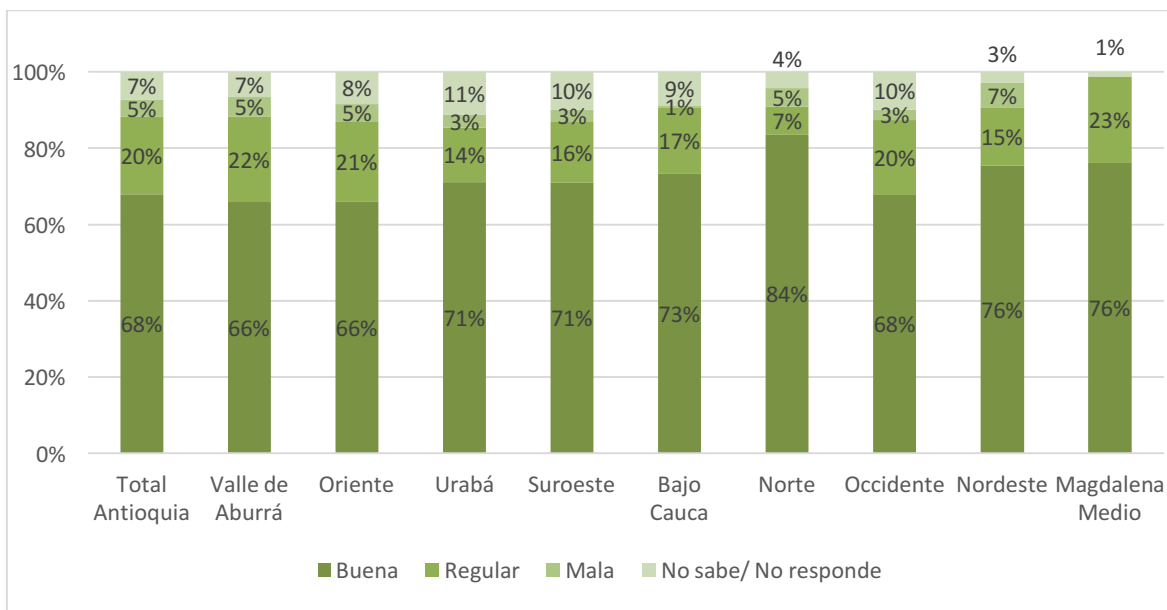
Gráfica 79. ¿Cómo calificaría la labor de Personería Municipal? (Densidad poblacional)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

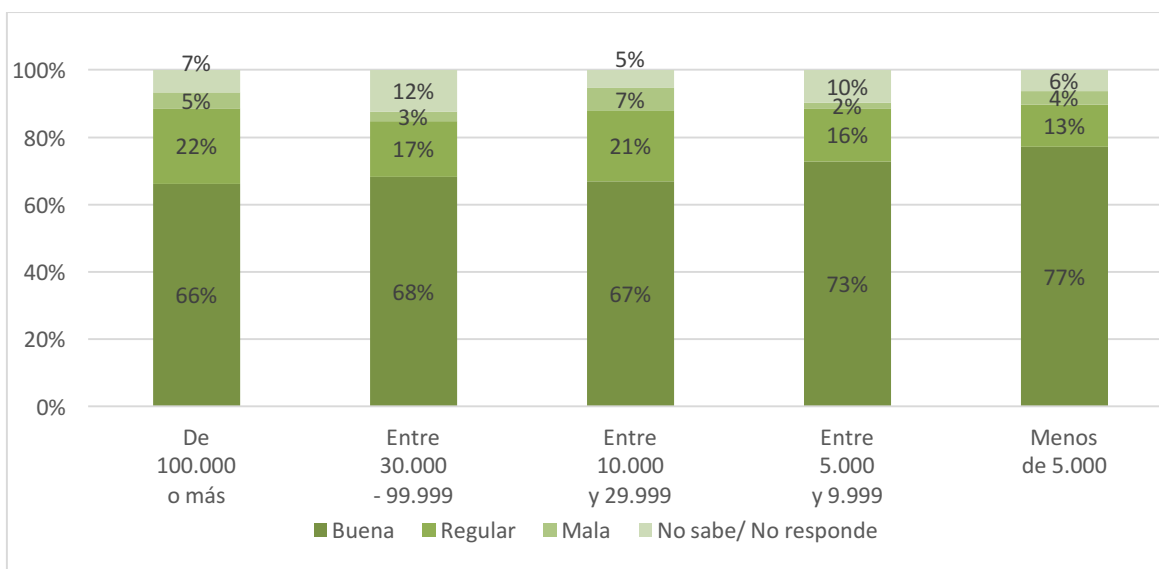
Respecto al ICBF, el 68% de los antioqueños encuestados calificó como buena su labor, el 20% como regular, el 5% como mala y el 7% no sabe o no responde. Nordeste, Valle de Aburrá, y Oriente fueron las subregiones en donde la calificación negativa de la labor del ICBF fue mayor, con 7%, 5% y 5%, respectivamente. Mientras Norte, Magdalena Medio y Nordeste obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor del ICBF, con el 84%, 76% y 76%, respectivamente. Las subregiones en donde las respuestas de no sabe o no responde fueron mayores fueron Urabá, con el 11%, y Suroeste y Occidente, con el 10%. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 77% señala una buena labor, mientras el 6% no sabe o no responde; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 66% de los encuestados, la mala, del 5%, y el 7% no sabe o no responde.

Gráfica 80. ¿Cómo calificaría la labor del ICBF? (Subregiones)



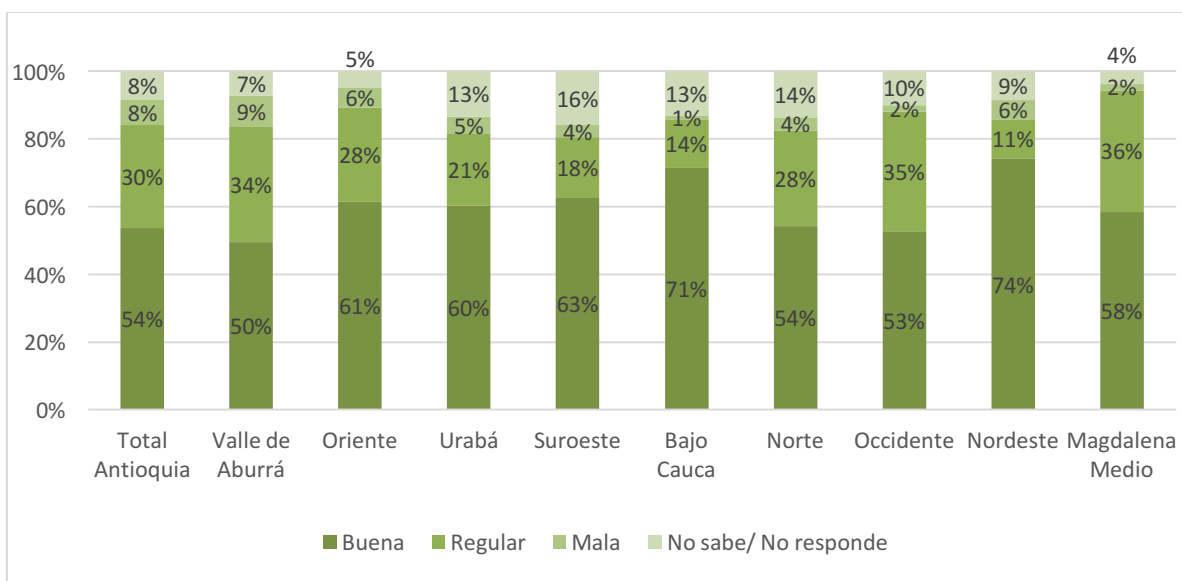
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 81. ¿Cómo calificaría la labor del ICBF? (Densidad poblacional)

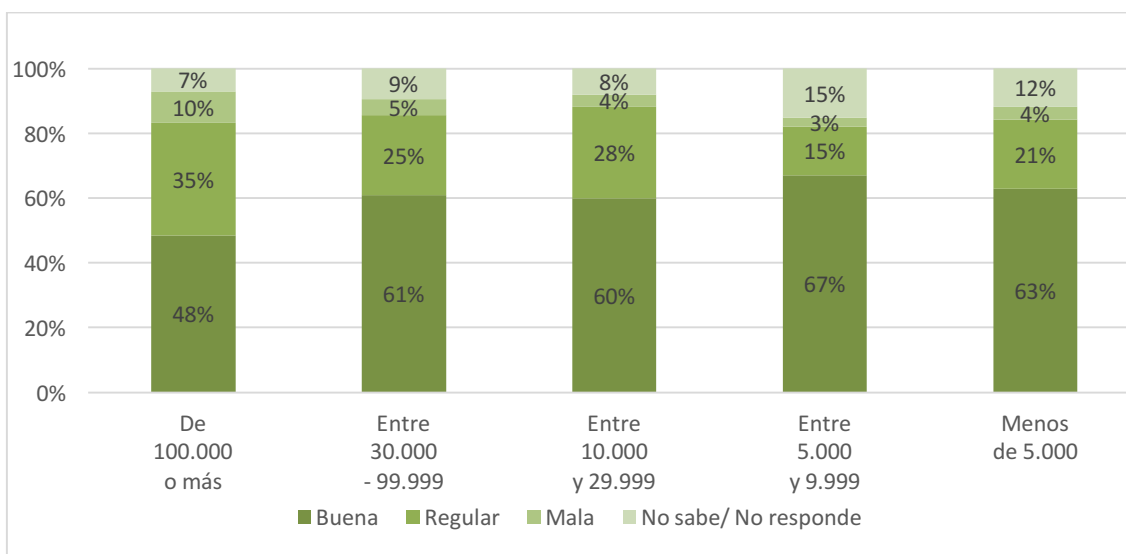


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Evaluando a la Fiscalía, el 54% de los antioqueños encuestados calificó como buena su labor, el 30% como regular, el 8% como mala y el 8% no sabe o no responde. Nordeste, Valle de Aburrá, Nordeste y Oriente fueron las subregiones en donde la calificación negativa de la labor de la Fiscalía fue mayor, con 9%, 6% y 6%, respectivamente. Mientras Nordeste y Bajo Cauca obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor de la Fiscalía, con el 74% y 71%, respectivamente. Las subregiones en donde las respuestas de no sabe o no responde fueron mayores fueron Suroeste, con el 16%; Norte, con el 14%; y Bajo Cauca, con el 13%. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 63% señala una buena labor, mientras el 12% no sabe o no responde; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 48% de los encuestados, la regular de 35%, la mala del 10%, y el 9% no sabe o no responde.

Gráfica 82. ¿Cómo calificaría la labor de la Fiscalía? (Subregiones)

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

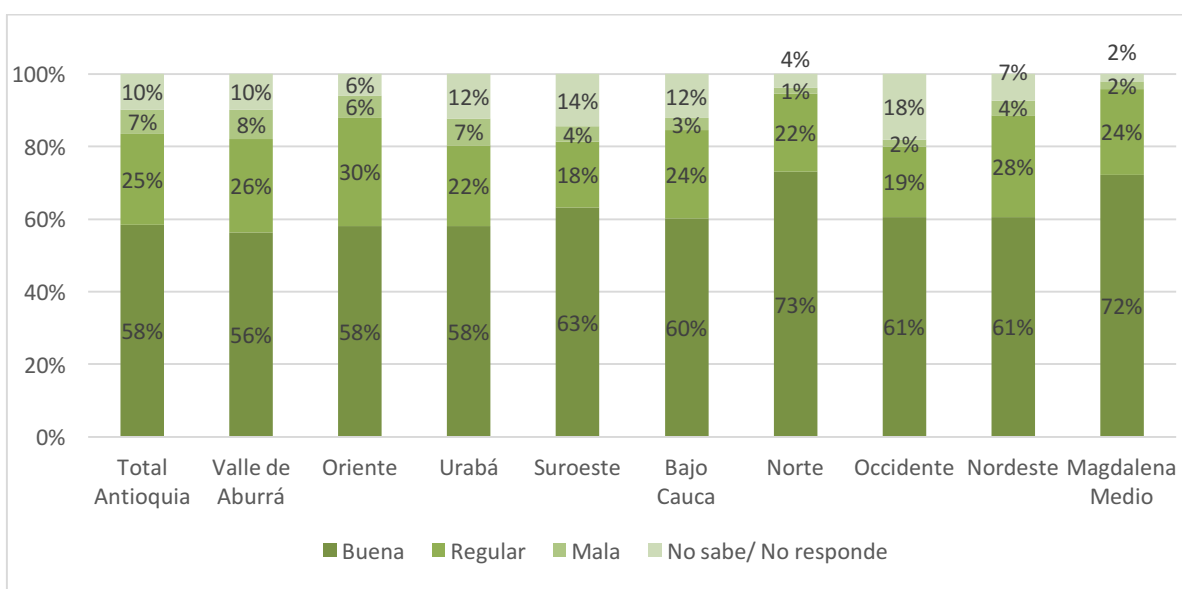
Gráfica 83. ¿Cómo califica la labor de la Fiscalía? (Densidad poblacional)

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Respecto a las Comisarías de Familia, el 58% de los antioqueños encuestados calificó como buena su labor, el 25% como regular, el 7% como mala y el 10% no sabe o no responde. Valle de Aburrá, Urabá y Oriente fueron las subregiones en donde la calificación negativa de la labor de las comisarías fue mayor, con 8%, 7%

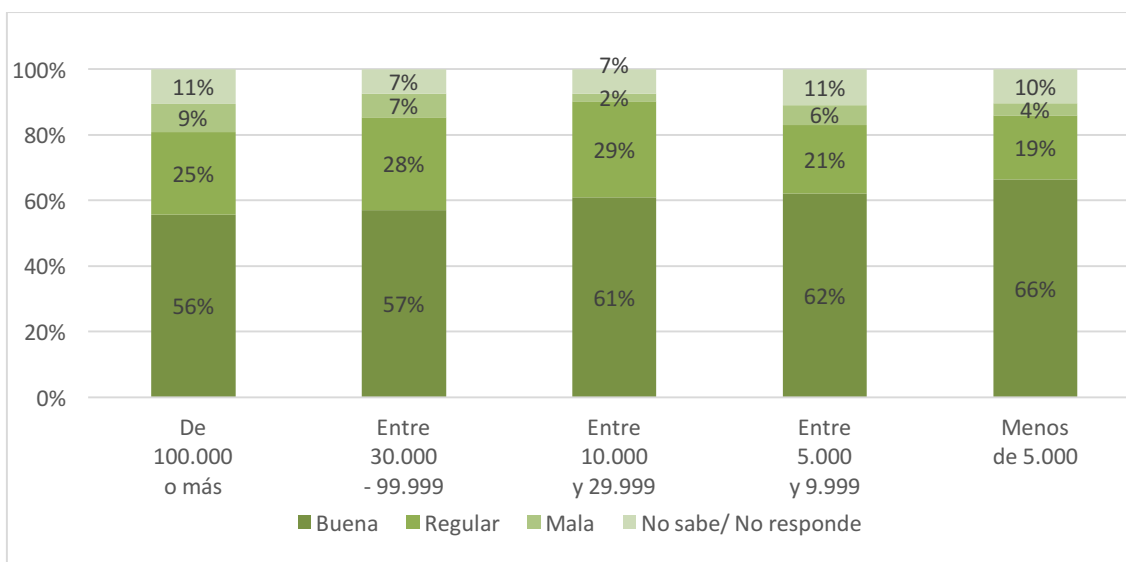
y 6%, respectivamente. Mientras Norte y Magdalena Medio obtuvieron el mayor porcentaje de buena labor de las comisarías, con el 73% y 72%, respectivamente. Las subregiones en donde las respuestas de no sabe o no responde fueron mayores fueron Occidente, con el 18%, y Suroeste, con el 14%. En poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 66% señala una buena labor, mientras el 10% no sabe o no responde; en poblaciones de 100.000 o más habitantes, la buena calificación es del 56% de los encuestados, la regular de 25%, la mala del 9%, y el 11% no sabe o no responde.

Gráfica 84. ¿Cómo calificaría la labor de la Comisaría de familia? (Subregiones)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

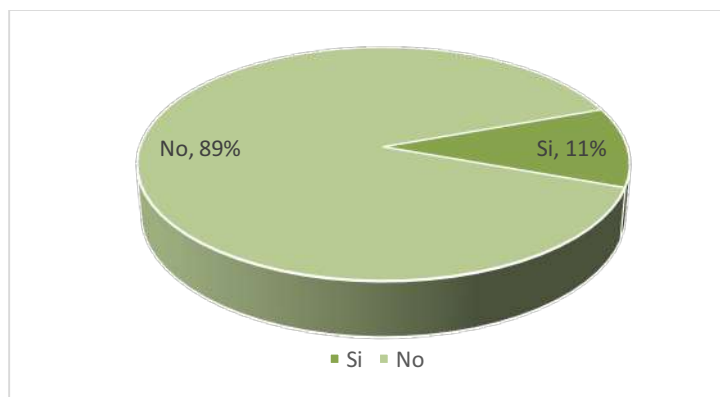
Gráfica 85. ¿Cómo calificaría la labor de la Comisaría de familia? (Densidad poblacional)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, al interrogarlos sobre la presencia de hechos delictivos o atropellos en sus barrios, veredas o municipios por parte de funcionarios, el 11% de los antioqueños encuestados afirmó haberlo hecho (Ver Gráfica 86). Por encima del promedio departamental se encuentran las subregiones de Valle de Aburrá, con el 12%, Oriente, con el 13%, y Magdalena Medio, con el 17%. Respecto a la densidad poblacional, el 12% en las poblaciones de 30.000 a 99.000 habitantes y en las mayores de 100.000.

Gráfica 86. ¿Usted ha visto a algún (os) funcionario (os) de las instituciones de seguridad cometer delitos o atropellos en este barrio, vereda o municipio? (Total).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Como se verá a continuación, la institución que más es relacionada por los encuestados con los delitos o atropellos presenciados por los encuestados en Antioquia es la Policía (Ver Tabla 23). Los datos de esta tabla se construyen a partir de los encuestados que respondieron que en efecto habían visto a algún funcionario cometer un atropello (es decir, el 11% del total de los encuestados). De ese 11%, 8 de cada 10 ha visto que la Policía ha cometido delitos o atropellos, el 7% con el Ejército Nacional y el 6% con las casas de justicia. En las subregiones, el porcentaje de presencia de hechos delictivos o atropellos de la policía es más alto en Oriente (97%) y Suroeste (95%). Respecto al Ejército Nacional, el 50% de los hechos delictivos o atropellos institucionales presenciados en Magdalena Medio corresponde a sus miembros, mientras en el Norte es el 26%.

Tabla 23. ¿De qué entidades han sido esas personas que usted ha visto cometer delitos o atropellos?

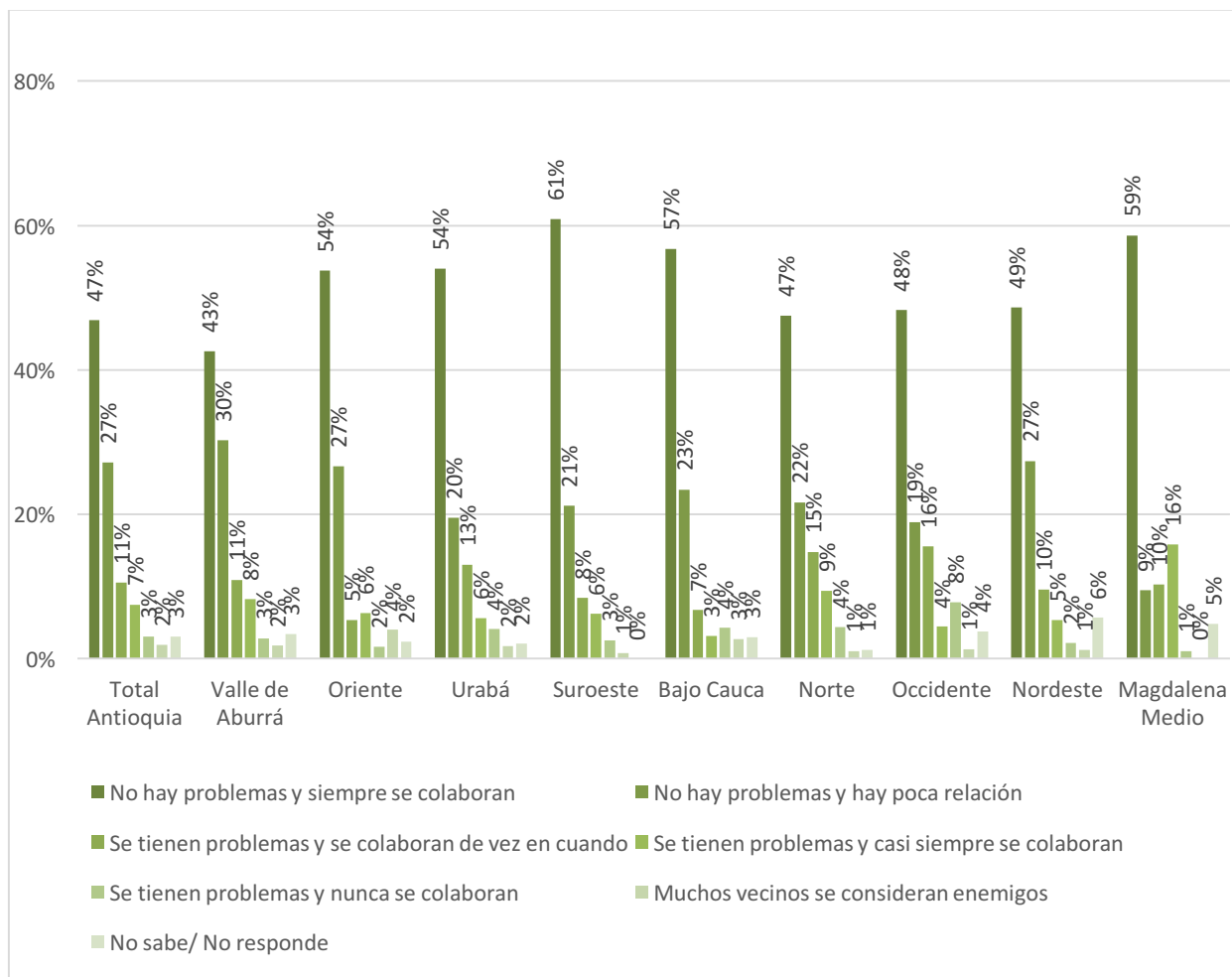
	Total	Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
POLICIA	88%	87%	97%	90%	95%	92%	72%	72%	66%	90%
Ejército Nacional	7%	7%	-	5%	-	-	26%	-	7%	50%
Casa de Justicia	6%	8%	-	4%	-	-	9%	-	27%	-
CTI	3%	5%	-	4%	-	3%	-	-	-	-
Fiscalía	3%	3%	2%	5%	6%	-	-	-	-	-
Comisaría de familia	2%	2%	-	4%	2%	-	-	13%	-	-
Frente de seguridad	2%	2%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jueces de la República	1%	1%	-	5%	-	-	-	-	-	-
Defensoría del pueblo	1%	1%	-	4%	2%	-	-	-	-	-

Centro de conciliación	1%	1%	-	4%	-	-	-	-	-	-
Espacio público	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Sijín	1%	-	-	-	6%	9%	-	-	7%	-
Alcaldía	1%	-	-	4%	2%	-	12%	-	-	-
Tránsito	1%	-	3%	4%	-	-	-	-	-	-

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Indagados por las relaciones sociales en sus barrios, veredas y municipios, el 47% de los antioqueños encuestados señaló que en general no hay problemas y siempre se colaboran, el 27% afirmó que no hay problemas y hay poca relación, el 11% que se tienen problemas y se colaboran de vez en cuando, el 7% que se tienen problemas y casi siempre se colaboran, el 3% reportó que se tiene problemas y nunca se colaboran, y el 2% que muchos vecinos se consideran enemigos. Magdalena Medio es la subregión en donde el porcentaje de cooperación para resolver problemas es más alta, con el 16%, mientras que el porcentaje más bajo se encuentra en Oriente, con el 2%. Las subregiones que podrían enfrentar mayores problemas de convivencia son Occidente, en donde el 8% sostienen que se tienen problemas y nunca se colaboran, y el 1% de los vecinos se considera enemigos; y Oriente, en donde el 4% considera a la mayoría de vecinos como enemigos.

Gráfica 87. ¿Cómo describiría usted las relaciones entre los habitantes de este barrio, vereda o municipio? (Total y subregión).

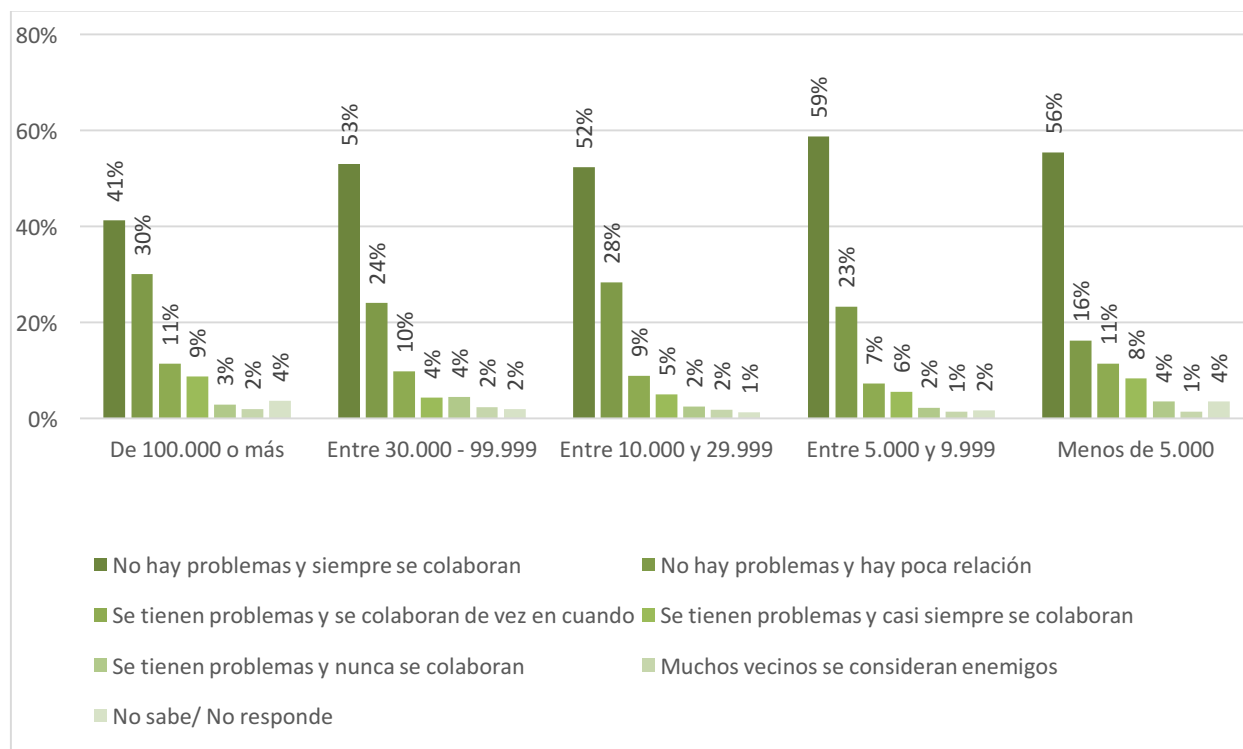


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Respecto a la división por densidad poblacional, la resolución de problemas comunes por medio de la cooperación es más frecuente en las poblaciones menos habitadas. En efecto, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el 8% dice que se tienen problemas y casi siempre se colaboran, el 11%, que se tienen problema y casi siempre se colaboran, y el 56% que no se tienen problemas y siempre se colaboran. Aunque en las poblaciones con más habitantes, los problemas de convivencia no se agudizan necesariamente, si aumenta la desconexión social y se reduce la disposición a cooperar para resolver problemas comunes. Así, en poblaciones de 100.000 o más habitantes, el 41% dice que nunca se tiene problemas y siempre se colaboran, y el 30% que no hay problemas

y hay poca relación, este porcentaje casi el doble que en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Gráfica 88. ¿Cómo describiría usted las relaciones entre los habitantes de este barrio, vereda o municipio? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, a la hora de resolver sus problemas de la comunidad (Ver tabla 24), los antioqueños prefieren en su mayoría acudir a las autoridades públicas (59%). El 13% señala que cada uno se defiende como puede, mientras el 12% afirma que algunos vecinos hacen de mediadores y conciliadores y el 5% que no se hace nada. En términos subregionales, el 75% de los encuestados en Occidente y el 67% en Urabá y Bajo Cauca, acuden a las autoridades públicas para resolver sus problemas comunitarios. En el Valle de Aburrá (15%), Magdalena Medio (15%) y Suroeste (14%), se encuentran los porcentajes más altos de quienes afirman que cada quién se defiende como puede. En términos poblacionales, mediante aumenta densidad de habitantes, los encuestados acuden menos a las

autoridades (menos de 5.000 habitantes, 65%; 100.000 o más, 57%) y se defiende más de forma individual (Menos de 5.000 habitantes, 8%; 100.000 o más, 15%).

Tabla 24. En general, ¿qué hace la gente de este barrio, vereda o municipio para resolver los problemas de esta comunidad?

	Total	Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Acude a las autoridades públicas	59%	56%	64%	63%	67%	67%	49%	75%	64%	60%
Cada uno se defiende como puede	13%	15%	9%	11%	14%	10%	13%	5%	10%	15%
Algunos vecinos hacen de mediadores y conciliadores	12%	12%	8%	13%	10%	8%	11%	5%	10%	17%
No hacen nada	5%	4%	7%	4%	5%	7%	14%	5%	3%	-
Pide ayuda a otras organizaciones privadas, religiosas, comunitarias	4%	5%	5%	-	3%	1%	2%	2%	2%	1%
Define unas reglas y le pide a todo el mundo que las cumpla	2%	2%	1%	1%	1%	-	-	-	2%	5%
Se une para obligar a cumplir las normas	1%	1%	3%	3%	-	1%	-	1%	2%	1%
Está abandonando el barrio	1%	1%	-	-	1%	-	-	-	-	-
No sabe/ No responde	8%	9%	7%	6%	5%	6%	10%	7%	10%	17%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La Tabla 5 muestra las organizaciones de índole privado que prestan algún servicio asociado a la seguridad de los barrios, las veredas o los municipios de los antioqueños encuestados. Las empresas de vigilancia representa el 14%, seguidas por las organizaciones comunitarias con el 13%, las pandillas y combos con el 7%, las bandas con el 6%, las organizaciones religiosas con el 5%, las organizaciones políticas con el 4%, las milicias urbanas con el 4% y las

organizaciones paramilitares con el 1%. El 50% de los encuestados sostuvo que ninguna de las anteriores organizaciones prestaba seguridad en su barrio, vereda o municipio.

En términos subregionales, las empresas de vigilancia son más comunes en Magdalena Medio, Valle de Aburrá y Oriente, con el 21%, 18% y 16% de las respuestas, respectivamente. En Magdalena Medio y en Occidente están las respuestas más altas de organizaciones comunitarias, con el 35% y el 24%. Las subregiones en las que la respuesta de “ninguno” fue más alta son Suroeste, con el 78%, y Urabá, con el 72%. El Valle de Aburrá concentra las respuestas sobre pandillas/combos (10%), bandas (9%) y milicias urbanas (5%), las más altas de todo el departamento.

Las empresas privadas acompañan la urbanización, de acuerdo a la desagregación por densidad de población (100.000 o más habitantes, 18%; 5.000 o menos, 5%), y las poblaciones pequeñas las organizaciones comunitarias que prestan servicios asociados a la seguridad (100.000 o más habitantes, 12%; 5.000 o menos, 19%).

Tabla 25. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones prestan seguridad en este barrio, vereda o municipio?

	Total	Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Empresas de vigilancia	14%	18%	16%	5%	10%	1%	7%	1%	3%	21%
Comunitarias	13%	12%	17%	11%	6%	4%	16%	24%	19%	35%
Pandillas/ combos	7%	10%	-	1%	-	-	2%	-	1%	-
Bandas	6%	9%	1%	2%	2%	-	-	-	-	-

Religiosas	5%	4%	11%	3%	3%	2%	5%	2%	4%	35%
Políticas	4%	4%	12%	3%	1%	2%	1%	2%	2%	14%
Milicias urbanas	4%	5%	-	1%	-	-	-	1%	-	-
Paramilitarismo	1%	1%	1%	3%	-	-	-	1%	-	-
Ninguno	50%	42%	53%	72%	78%	65%	68%	60%	58%	25%
No sabe/ No responde	10%	10%	10%	8%	3%	27%	6%	11%	15%	10%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El siguiente es el resumen de los principales resultados asociados a la percepción de seguridad, las causas asociadas a esta y posibles soluciones para mejorar la situación en los municipios, así como al nivel de conocimiento sobre las instituciones y su calificación en relación con este tema.

Tabla 26. Resumen de hallazgos percepción de seguridad

Resumen de hallazgos – Percepción de seguridad
El 67% de los antioqueños encuestados se siente seguro en su barrio o vereda.
El 21% de los antioqueños encuestados considera que la seguridad mejoró en su barrio o vereda en el último año. El 10% que empeoró.
El 54% de los antioqueños encuestados se siente seguro en su municipio.
El 16% de los antioqueños encuestados considera que la seguridad mejoró en su municipio en el último año. El 18% que empeoró.
El 88% de los antioqueños encuestados conoce a la Policía. El 55% conoce a la Fiscalía.
El 47% de los antioqueños encuestados califica como buena la labor de la Policía, el 40% como regular y el 10% como mala.
El 54% de los antioqueños encuestados califica la labor de la Fiscalía como buena, el 30% como regular, el 8% como mala y el 8% no sabe.
El 11% de los antioqueños encuestados ha visto a un funcionario cometer un abuso. En 8 de cada 10 de los casos, fue un miembro de la Policía.
El 47% considera que en su comunidad no hay problemas y siempre se colaboran, mientras que el 27% dice que no hay problemas y que hay poca relación.

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

2.5. Victimización

Se entiende por victimización a los hechos que afectan la seguridad y convivencia de los ciudadanos y que suponen la violación de algún derecho a partir de la presencia de un delito o contravención. La encuesta de Percepción de seguridad, la convivencia y los niveles de victimización de Antioquia indaga por hechos victimizantes como hurto a personas, carterismo, amenazas, problemas entre vecinos, cobros de extorsión, hurto de partes de automotor, hurto a residencias, desplazamiento por violencia, riñas familiares, hurto de automóviles, accidentes de tránsito, riñas callejeras y perturbación de la propiedad.

En este sentido, el 85% de los antioqueños no ha sufrido ninguno de los anteriores hechos en lo corrido del año pasado. El 3% de los antioqueños encuestados sufrió hurto con violencia a personas (atraco) en el último año (Ver Tabla 7). El atraco es el fenómeno victimizante más común en el departamento, seguido por el carterismo (2%), las amenazas (2%), los problemas entre vecinos por ruidos y basuras (2%) y el cobro de vacunas o extorsión (1%). El 1% de los antioqueños encuestados ha sufrido de hurto a partes de vehículos, el 1% hurto a residencia, el 1% desplazamiento por violencia, el 1% riñas familiares, el 1% hurto a vehículos (motos, carros), el 1% accidentes de tránsito, el 1% accidentes de tránsito, el 1% riñas callejeras, y el 1% perturbación en su propiedad.

La subregión en donde es más común el hurto es Valle de Aburrá, con el 4%, y el carterismo, con el 3%. La subregión más impactada por las amenazas es Suroeste, con el 4%. En Occidente, el 7% de los encuestados ha tenido problemas entre vecinos por ruidos y basuras. Las subregiones con mayores problemas de extorsión son Nordeste y Bajo Cauca, con 4% y 3%, respectivamente. Las subregiones en donde menos se reportan fenómenos de victimización o problemas de convivencia son Urabá y Bajo Cauca, con el 91% de las respuestas de “ninguno”. Las subregiones en donde más se reportan son Magdalena Medio y Nordeste, con 81%, y Valle de Aburrá, con el 83%. En términos de densidad



poblacional, el hurto a personas, el carterismo y el hurto a vehículos son fenómenos urbanos, más comunes en las poblaciones de 100.000 o más habitantes. Por otro lado, los problema entre vecinos por ruidos y basuras y las riñas callejeras se producen más en tanto se reduce en tanto el tamaño del municipio es menor.

Tabla 27. Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de inseguridad, convivencia y violencia se le han presentado a usted? (Victimización directa).

	Total	Subregiones								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Hurto con violencia a personas (atracos)	3%	4%	1%	2%	1%	-	2%	-	1%	-
Carterismo	2%	3%	-	-	1%	1%	-	-	-	2%
Amenazas	2%	2%	1%	1%	4%	-	3%	2%	3%	-
Problemas entre vecinos por ruidos y basuras	2%	2%	2%	1%	1%	-	3%	7%	3%	3%
Cobro de cuotas o vacunas (extorsión)	1%	2%	1%	-	-	3%	-	1%	4%	-
Hurto a partes de vehículos	1%	2%	-	1%	-	-	1%	1%	-	-
Hurto a residencias	1%	1%	3%	1%	2%	-	1%	-	2%	5%
Desplazado por la violencia	1%	1%	-	2%	1%	1%	1%	-	4%	-
Riñas familiares	1%	1%	-	-	1%	-	-	-	-	-
Hurto de vehículos (motos, carros)	1%	1%	1%	-	1%	-	-	-	-	-
Accidentes de tránsito	1%	1%	1%	1%	-	2%	1%	1%	3%	2%
Riñas callejeras	1%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	1%	1%	7%
Corren linderos o perturban la propiedad	1%	1%	1%	-	1%	-	-	-	3%	-
Ninguno	85%	83%	86%	91%	88%	91%	89%	87%	81%	81%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Tabla 28. Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de inseguridad, convivencia y violencia se le han presentado a usted? (Victimización directa, según densidad poblacional)

		Densidad poblacional				
	Total	De 100.000 o más	Entre 30.000 - 99.999	Entre 10.000 y 29.999	Entre 5.000 y 9.999	Menos de 5.000
Hurto con violencia a personas (atraco)	3%	4%	3%	2%	-	1%
Carterismo	2%	3%	-	-	-	-
Amenazas	2%	2%	2%	1%	2%	2%
Problemas entre vecinos por ruidos y basuras	2%	2%	2%	1%	1%	3%
Cobro de cuotas o vacunas (extorsión)	1%	2%	-	-	1%	2%
Hurto a partes de vehículos	1%	2%	1%	1%	-	-
Hurto a residencias	1%	1%	1%	1%	2%	2%
Desplazado por la violencia	1%	1%	1%	1%	-	1%
Riñas familiares	1%	1%	-	1%	-	1%
Hurto de vehículos (motos, carros)	1%	1%	-	1%	-	-
Accidentes de tránsito	1%	1%	2%	1%	2%	1%
Riñas callejeras	1%	1%	1%	1%	2%	2%
Corren linderos o perturban la propiedad	1%	1%	-	-	-	1%
Ninguno	85%	83%	88%	88%	88%	87%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, al consultar por los problemas de seguridad y convivencia que han vivido sus familiares, amigos o conocidos (la victimización indirecta), el 12% de los encuestados señala el hurto a personas, seguido por el hurto de vehículos, con el 9%, y los accidentes de tránsito, con el 8% (Ver Tabla 29). El 7% de los antioqueños encuestados reportan hurto a residencias de familiares, amigos o conocidos en el últimos años, el 6% de carterismo, el 6% de riñas callejeras, el 4% de homicidios, el 4% de hurto de autopartes, el 4% de cobro de extorsión y el 4% de problemas entre vecinos. Las amenazas, el hurto a comercios y los tiroteos

reportan un 3%, y las riñas familiares, el 2%. El 59% de los encuestados no reportan ningún hecho de los anteriores ocurrido a familiares, amigos o conocidos en el último año. Las tendencias de victimización indirecta mantienen alguna relación con la victimización directa. En efecto, las zonas urbanas y subregiones como Valle de Aburrá y Oriente, reportan mayor incidencia de fenómenos como hurto a personas, carterismo y hurto a vehículos.

Tabla 29. Durante los últimos 12 meses, ¿cuáles de los siguientes problemas de inseguridad, convivencia y violencia se le han presentado a un familiar, amigo o conocido? (Victimización indirecta).

	Total	Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Hurto con violencia a personas (atraco)	12%	15%	12%	8%	12%	1%	5%	7%	9%	2%
Hurto de vehículos (motos, carros)	9%	11%	3%	2%	6%	3%	6%	11%	8%	-
Accidentes de tránsito	8%	8%	5%	5%	7%	2%	8%	18%	10%	27%
Hurto a residencias	7%	8%	9%	2%	9%	-	6%	3%	5%	4%
Carterismo	6%	7%	6%	1%	3%	1%	3%	-	3%	16%
Riñas callejeras	6%	5%	6%	4%	8%	1%	15%	9%	7%	11%
Homicidios	4%	3%	7%	4%	3%	1%	12%	5%	6%	3%
Hurto a partes de vehículos	4%	5%	4%	1%	4%	-	1%	1%	5%	-
Cobro de cuotas o vacunas (extorsión)	4%	4%	3%	1%	1%	1%	2%	4%	7%	12%
Problemas entre vecinos por ruidos y basuras	4%	4%	3%	2%	4%	1%	8%	3%	4%	7%
Amenazas	3%	3%	4%	1%	5%	1%	5%	6%	5%	2%
Hurto a comercios (tiendas, distribuidoras, etc.)	3%	3%	5%	1%	7%	-	4%	2%	5%	1%
Tiroteos	3%	3%	2%	1%	1%	-	4%	1%	5%	10%
Riñas familiares	2%	2%	1%	1%	2%	-	5%	2%	5%	13%
Ninguno	59%	54%	63%	77%	63%	88%	54%	59%	59%	61%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La relación entre la victimización directa y la victimización indirecta puede evaluarse desde su incidencia en el efecto multiplicador de los fenómenos asociados a la seguridad y la convivencia. En efecto, aunque se puede intuir una relación entre victimización directa y percepción de seguridad (una persona que sufre un hurto tendería a sentirse más insegura), es claro que la relación es más fuerte entre la victimización indirecta y la percepción (una persona que oye de muchos hurtos a personas cercanas tendería a sentirse sustancialmente más insegura). Las personas construyen su sensación de seguridad, en buena medida, respecto a lo que escuchan de sus conocidos, familiares y amigos. La tabla 30 da cuenta del efecto multiplicador de cada hecho victimizante o problema de convivencia, es decir, la relación entre la victimización directa y efectiva, y la victimización indirecta. El hurto a personas es el hecho con un mayor efecto multiplicador, a razón de 36, pues la victimización directa es del 3% y la indirecta del 12%. El segundo hecho con un efecto multiplicador alto es el carterismo, con 12; seguido por el hurto a vehículos, con 9; y los problemas entre vecinos, con 8.

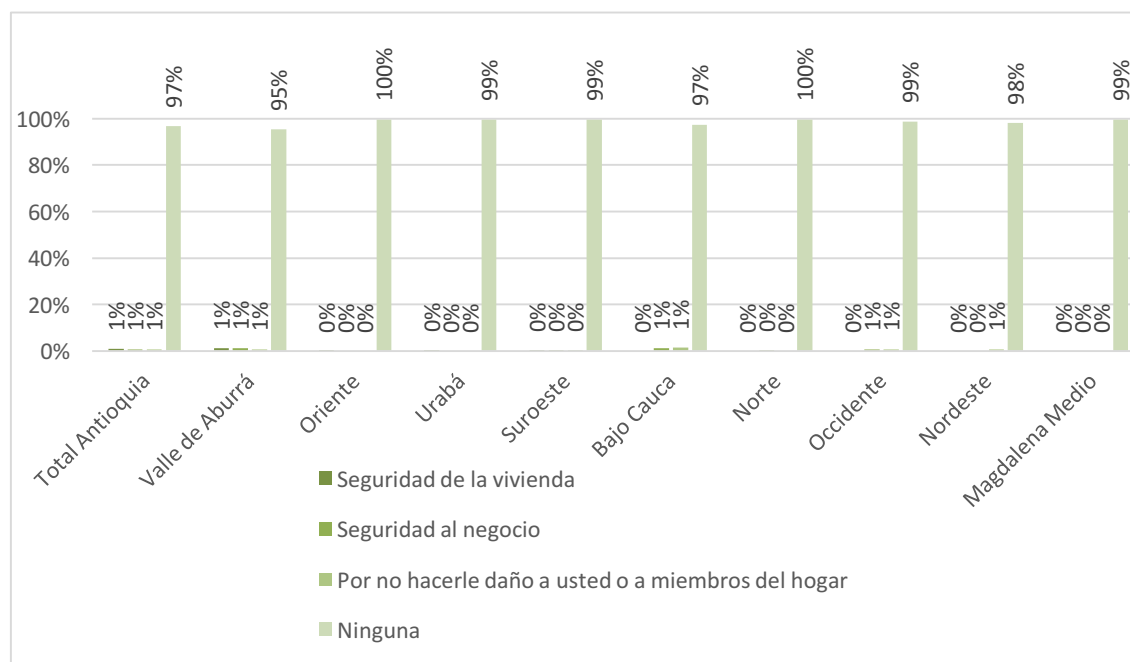
Tabla 30. Efecto multiplicador de la victimización

	USTED MISMO	OTROS	EFFECTO MULTIPLICADOR
Hurto con violencia a personas (atracos)	3%	12%	36
Carterismo	2%	6%	12
Amenazas	2%	3%	6
Problemas entre vecinos por ruidos y basuras	2%	4%	8
Cobro de cuotas o vacunas (extorsión)	1%	4%	4
Hurto a partes de vehículos	1%	4%	4
Hurto a residencias	1%	7%	7
Riñas familiares	1%	2%	2
Hurto de vehículos (motos, carros)	1%	9%	9
Accidentes de tránsito	1%	8%	8
Riñas callejeras	1%	6%	6

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La Gráfica 89 muestra las respuestas a la pregunta por el pago de dinero adicional o el ofrecimiento de dinero por servicios de seguridad o prevención de daño y amenazas. El 3% del total (concentrado sobre todo en la subregión de Valle de Aburrá), señaló haberse involucrado en alguna de estas conductas en el último año.

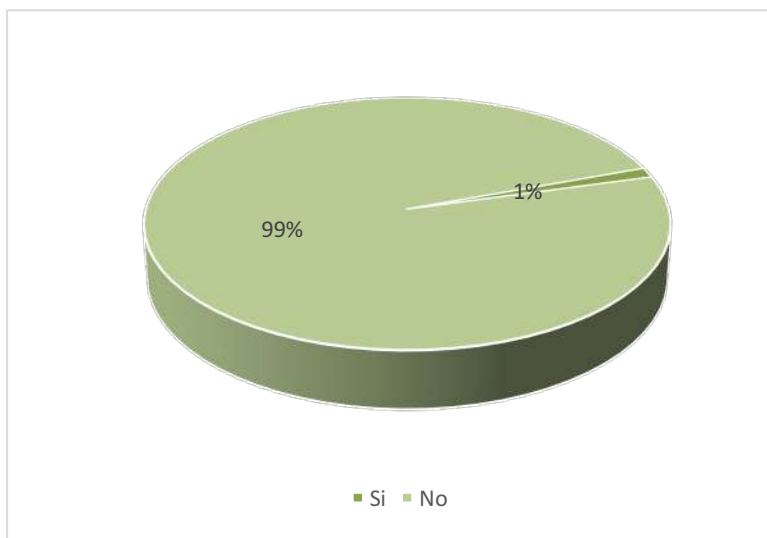
Gráfica 89. Durante el último año, ¿a usted le han exigido pagos de dinero adicional o ha ofrecido dinero por algunas de las siguientes razones? (Total y subregión).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

De manera similar, la Gráfica 90 muestra los resultados de la encuesta a la pregunta por la realización o exigencia de pagos para facilitar un trámite en los últimos doce meses. Solo el 1% del total de la muestra aceptó haberse visto involucrado en esta conducta. La encuesta no encontró evidencia de importancia (en la forma de auto reporte) de un fenómeno de pago de sobornos para facilitar servicios o trámites públicos.

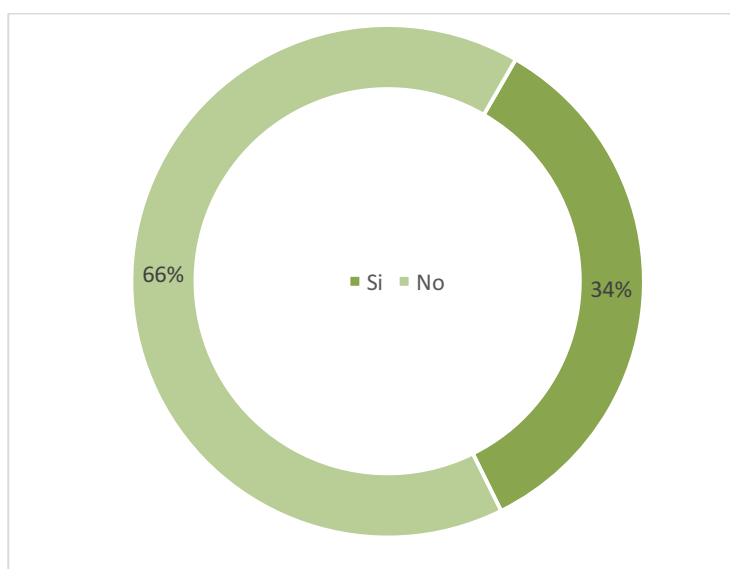
Gráfica 90. ¿Usted ha realizado o le han exigido algún pago para facilitar algún trámite para su propio beneficio o de terceros en los últimos 12 meses?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, respecto a los hechos victimizantes revisados en la Tabla , el 34% de los antioqueños encuestados que fueron victimizados o sufrieron un problema de convivencia, denunciaron (Ver Gráfica 91). El nivel de denuncia en Antioquia es mayor que en el país. En Antioquia el porcentaje es de 34% y en Colombia es del 24,4% (DANE-ESCS 2013).

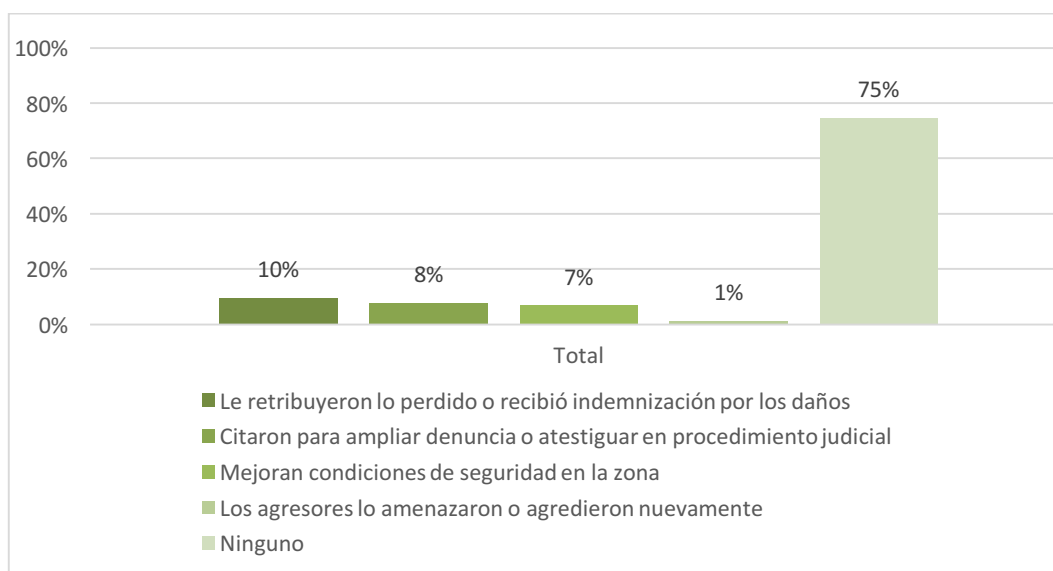
Gráfica 91. ¿Denunció el delito o contravención del que fue víctima?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Existe un importante porcentaje de los ciudadanos que no perciben ningún efecto luego de haber denunciado el hecho del que fueron víctimas (Ver Gráfica 92). En efecto, tres de cada cuatro personas encuestadas de los denunciantes consideran que hacerlo no tuvo “ningún” efecto. Al 10% de los denunciantes le retribuyeron lo perdido o recibió alguna indemnización por los daños sufridos, mientras el 8% fueron citados para ampliar la denuncia o atestiguar en un proceso judicial, y el 7% consideró que su denuncia llevó a una mejoría en las condiciones de seguridad de la zona. Solo el 1% sufrió amenazas o agresiones por denunciar.

Gráfica 92. ¿Qué efectos tuvo la denuncia?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

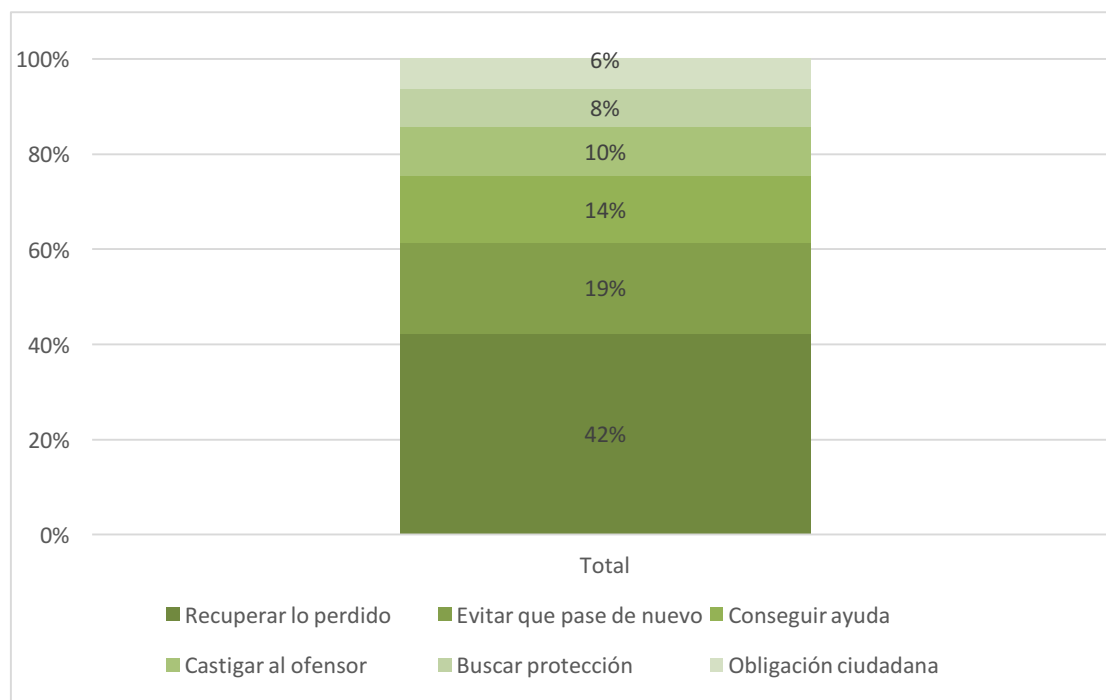
Respecto a lo anterior, los problemas de la denuncia, por lo menos en los casos evaluados, se pueden explicar más por la falta de eficacia de las autoridades y no por miedo de respuestas violentas o amenazas para el denunciante. En efecto, la percepción de ineficacia en los ciudadanos podría configurarse como uno de los principales desincentivos a la denuncia de este tipo de hechos.

Otro elemento importante podría ser la disposición de comunidades rurales a resolver sus conflictos de manera informal, con la intervención de vecinos o instituciones como la iglesia u organizaciones sociales y comunitarias. Así como

se observa en la Gráfica 87, las comunidades rurales suelen tener menos conflictos con sus vecinos y resolverlos a través de la gestión de terceros informales que hacen parte de sus comunidades.

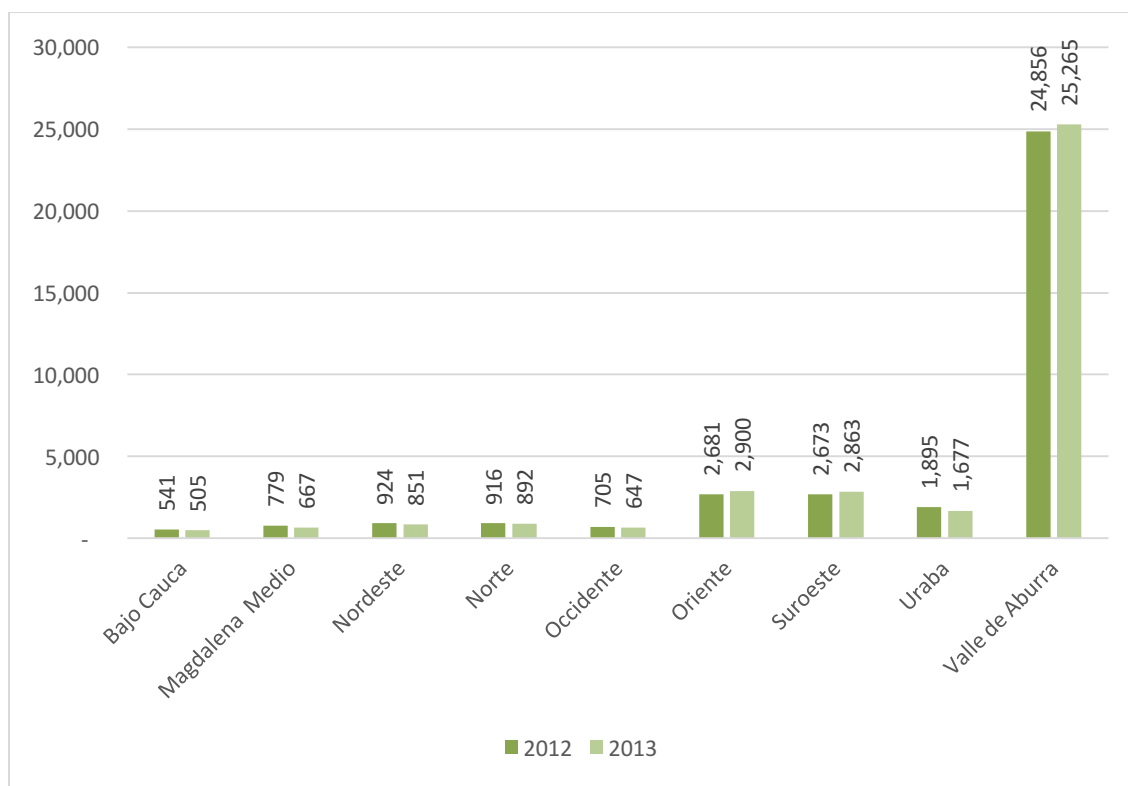
Al asunto de las expectativas de denuncia y sus efectos reales le añade algunos factores explicativos a las respuestas sobre las motivaciones de la denuncia. La principal razón que motiva la denuncia, de acuerdo a los antioqueños encuestados (Ver Gráfica 93), es la posibilidad de recuperar lo perdido, con el 42%, seguido por evitar que pase de nuevo, con el 19%, y conseguir ayuda, con el 14%. Castigar al ofensor es la razón del 10% de las denuncias, mientras buscar protección es la razón del 8% y un sentido de obligación ciudadana, el 6%. Esto llama la atención pues la denuncia se motiva por una orientación restitutiva más que punitiva.

Gráfica 93. ¿Cuál fue la razón por la que usted denunció el delito o contravención?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 6. Total capturas por subregiones



Fuente: SISC Departamental

La Tabla 31 caracteriza la experiencia de los denunciantes: el 34% entendió las instrucciones para denunciar, al 21% le hicieron recomendaciones para evitar ser víctima de nuevo, al 13% le explicaron en qué consistían los trámites que estaba haciendo, al 6% le comentaron de otras opciones legales que podría utilizar, y al 3% no le explicaron nada. Los datos dan cuenta de que al 15% de las personas que denunciaron, los trámites le generan costos económicos. Los trámites asociados a la denuncia aún pueden enfrentar serios desafíos en tanto a la información y el acompañamiento que se les brinda a los ciudadanos, sobre todo en tanto han tenido la disposición a denunciar. Que el 75% de las denuncias no tengan ninguna consecuencia se suma a la frustración ciudadana con todo el proceso, y erosiona la legitimidad del proceso legal haciendo que las acciones del Estado en materia punitiva no tenga credibilidad. Esto abre la posibilidad a mercados de provisión privada de la seguridad y la justicia en el nivel local.

Tabla 31. Cuándo denunció el delito, usted...

	Total
Entendió los trámites que estaba haciendo	34%
Le hicieron alguna recomendación para evitar ser víctima nuevamente	21%
Le explicaron en qué consistían los trámites que estaba haciendo	13%
Le comentaron de otras opciones legales que podía usar	6%
No le explicaron	3%
Quedó en espera de la llamada/ resultados	1%
Ninguno(a)	21%
No sabe/ No responde	1%
Otros(as)	1%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

A raíz de estos resultados, las siguientes son las principales conclusiones del tema de victimización en el departamento, demostrando que una amplia mayoría de las personas no ha sufrido ningún hecho victimizante o problema.

Tabla 32. Resumen de hallazgos victimización

Resumen de hallazgos – Victimización
El 85% de los antioqueños encuestados no sufrió ningún hecho victimizante o problema a de convivencia en el último año.
El 3% de los antioqueños encuestados fue víctima de hurto personal en el último año. El 2% fue víctima de carterismo.
El 12% de los antioqueños encuestados conoce a alguien que fue víctima de hurto a personas en el último año. El 9% conoce a alguien que fue víctima de hurto de vehículo.
El 34% de los antioqueños encuestados que fueron víctimas de un delito lo denunciaron. El 75% de esas denuncias no tuvo ningún efecto.
Las subregiones con mayores niveles de denuncia son Suroeste y Valle de Aburrá, y los menores niveles están en Urabá y Bajo Cauca.

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

2.6. Confianza institucional

En esta sección se indaga por las diferentes percepciones alrededor de las instituciones del Estado y la imagen de eficacia frente a la contribución a la seguridad y la sensación de protección que producen varias de ellas con responsabilidades asociadas a los asuntos de seguridad y convivencia (Ver Tabla 33). Así las cosas, el 42% de los antioqueños encuestados sostiene que la Policía contribuye a la seguridad y califican su desempeño entre 4 y 5 (en una escala de 1 a 5, donde 5 es mucho). El 29% de los encuestados califican entre 4 y 5¹³, la contribución de las fuerzas militares a la seguridad, el 34% a la alcaldía y el 29% a la gobernación. La sensación de protección que generan estas mismas instituciones en los encuestados es calificada entre 4 y 5 por el 38% para la Policía, el 35% para las Fuerzas Militares, el 26% para la Alcaldía y el 24% para la Gobernación.

Tabla 33. Contribución a la seguridad y sensación de protección

	<i>Contribuye a la seguridad</i>		<i>Qué tan protegido</i>	
	"5" Mucho	TTB	"5" Muy	TTB
POLICIA	20%	42%	19%	38%
FUERZAS MILITARES	19%	39%	17%	35%
ALCALDÍA	14%	34%	12%	26%
GOBERNACIÓN	13%	29%	10%	24%

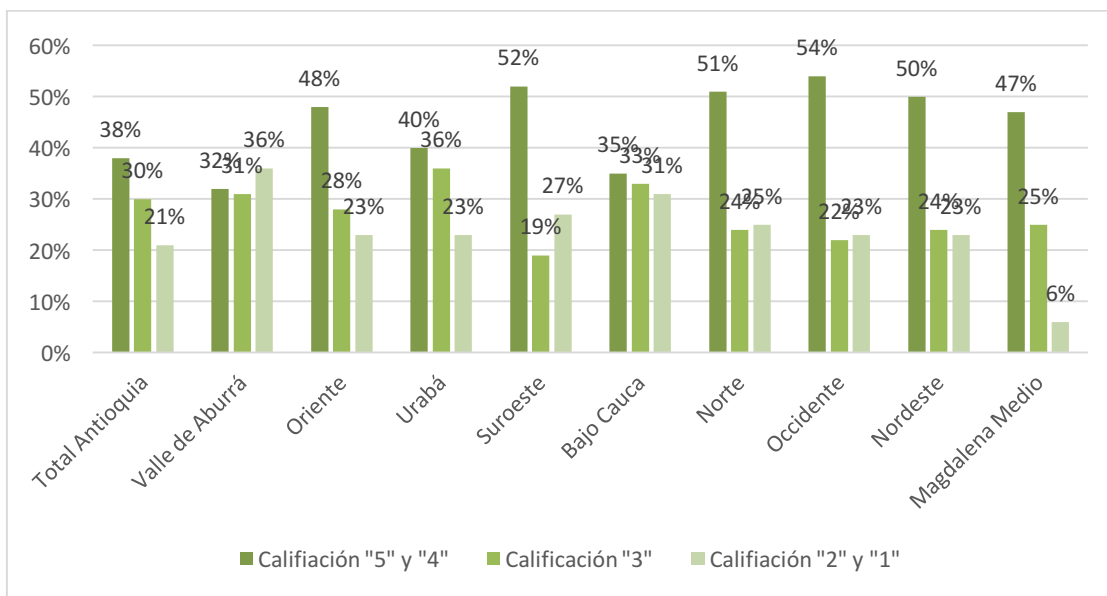
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

El 38% de los antioqueños califican con 4 y 5 (donde 5 es mucho) su sensación de protección por parte de la Policía (Gráfica 93). Las subregiones en donde esta sensación es menor son el Valle de Aburrá (32%) y Bajo Cauca (35%), y donde es

¹³ Por TTB se entiende *two top bottom*, es decir, la agregación de las dos opciones más altas. En este caso, las calificaciones de 4 y 5.

mayor, Occidente (54%) y Norte (51%). La única subregión en donde las calificaciones de 2 y 1 (donde uno es “nada”) superan las de 4 y 5, es Valle de Aburrá, con 36%.

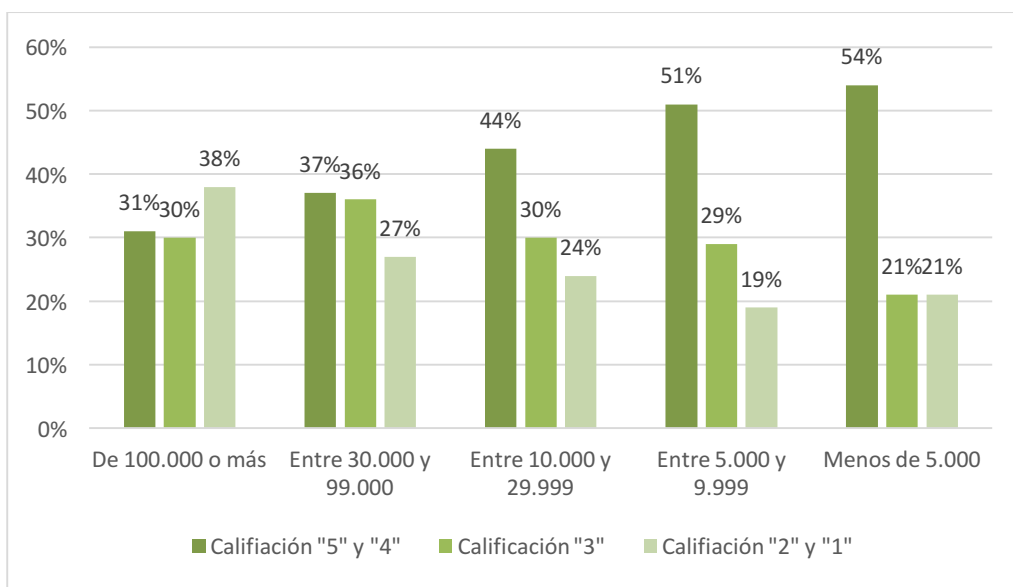
Gráfica 95. ¿Qué tan protegido se siente por la Policía? (Total, subregión).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

La sensación de protección por parte de la Policía, en términos de densidad poblacional, señala mayores niveles de aprobación en las poblaciones pequeñas que en las grandes. En efecto, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, el 54% de las respuestas califican la sensación de protección que genera la policía con 4 y 5, mientras que en poblaciones de 100.000 o más habitantes es de 31%.

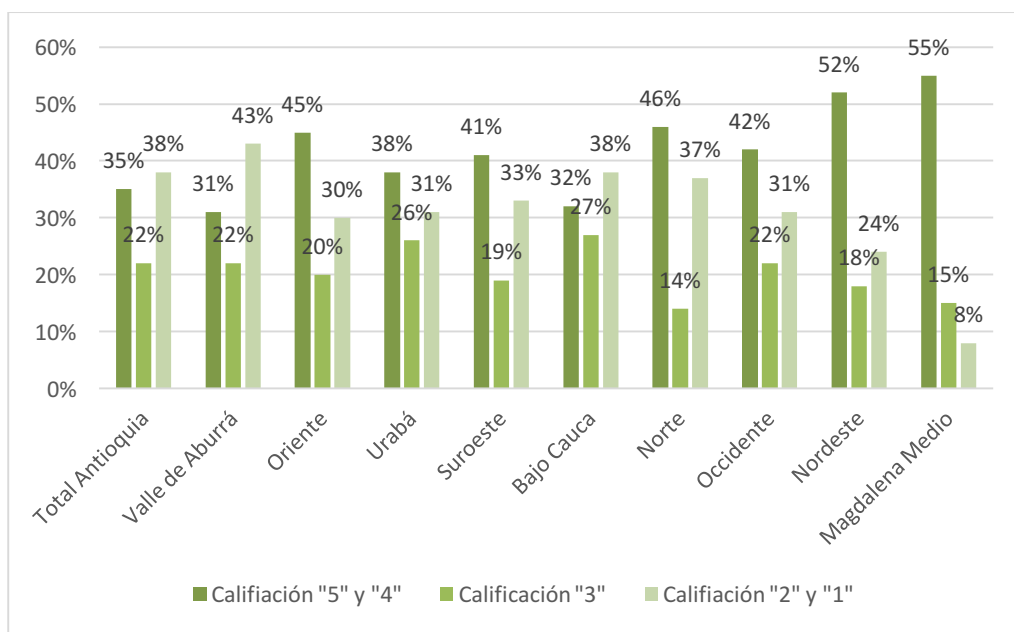
Gráfica 96. ¿Qué tan protegido se siente por la Policía? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

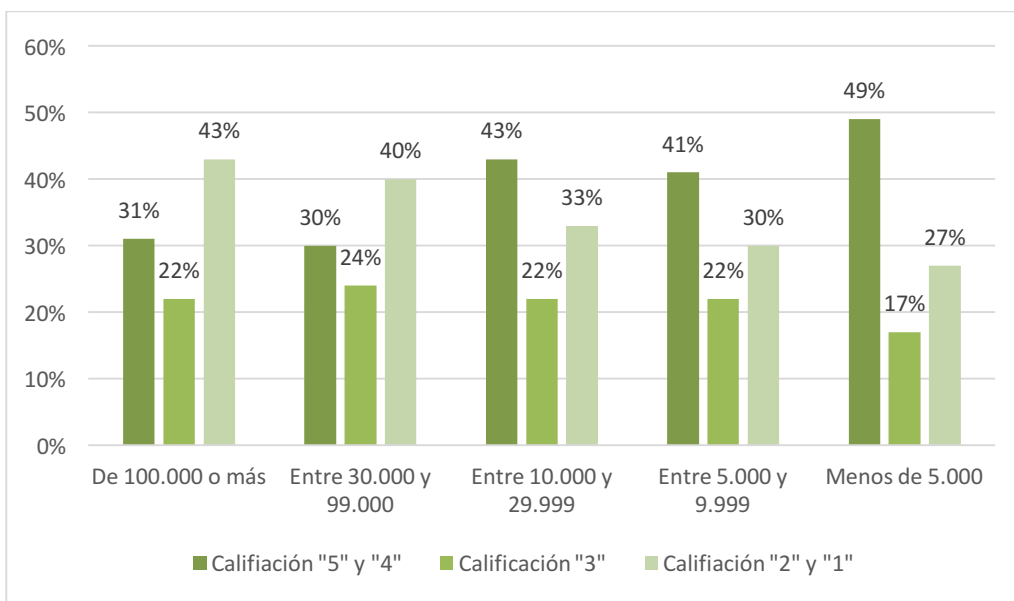
La sensación de protección que generan las Fuerzas Militares es calificada con 4 y 5, por el 35% de los antioqueños encuestados (Ver Gráfica 95). El 38% califican esta sensación con 1 y 2. Las subregiones en donde la sensación de protección es más baja son Valle de Aburrá (31%), Bajo Cauca (32%) y Urabá (38%). De igual forma que la Policía, las Fuerzas Militares generan más sensación de protección en municipios pequeños.

Gráfica 97. ¿Qué tan protegido se siente por la Fuerzas Militares? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 98. ¿Qué tan protegido se siente por la Fuerzas Militares? (Densidad poblacional)

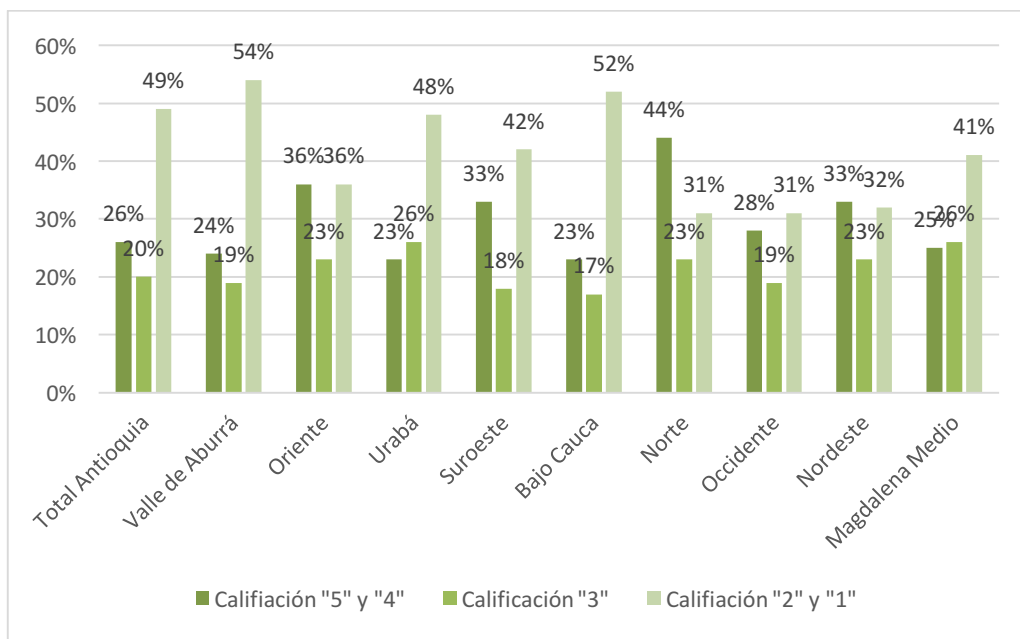


Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Respecto a la sensación de protección que produce la Alcaldía, el 26% de los antioqueños encuestados la calificaron con 4 y 5, y el 49% con 2 y 1. Las subregiones donde la sensación de protección que genera la alcaldía es menor

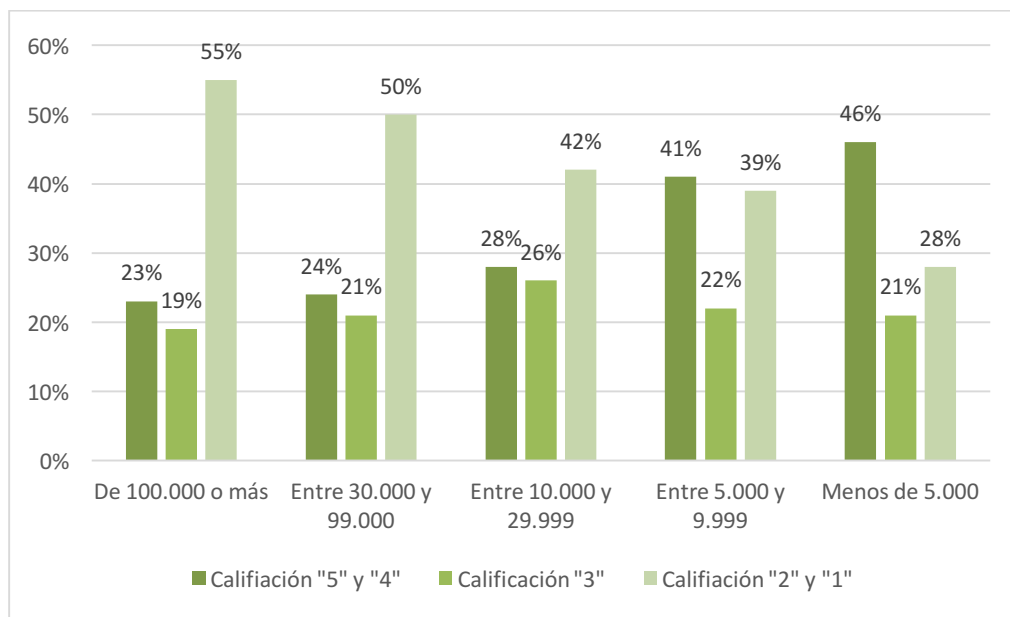
son Bajo Cauca (23%), Valle de Aburrá (24%) y Urabá (23%). En términos de densidad demográfica, entre mayor la población, menor la sensación de protección que puede generar la alcaldía entre sus habitantes.

Gráfica 99. ¿Qué tan protegido se siente por la Alcaldía? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

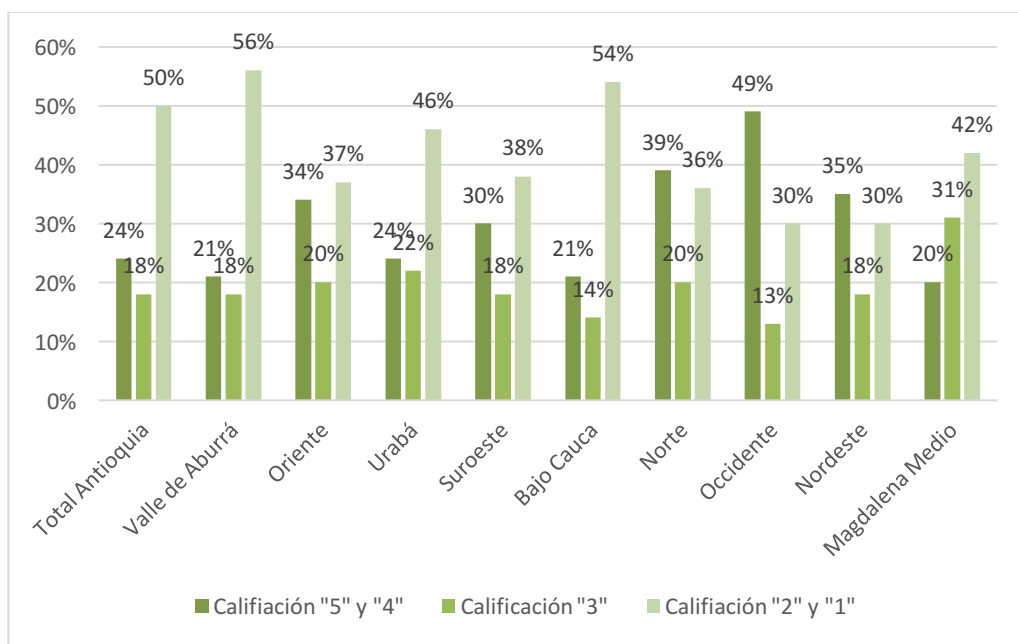
Gráfica 100. ¿Qué tan protegido se siente por la Alcaldía? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

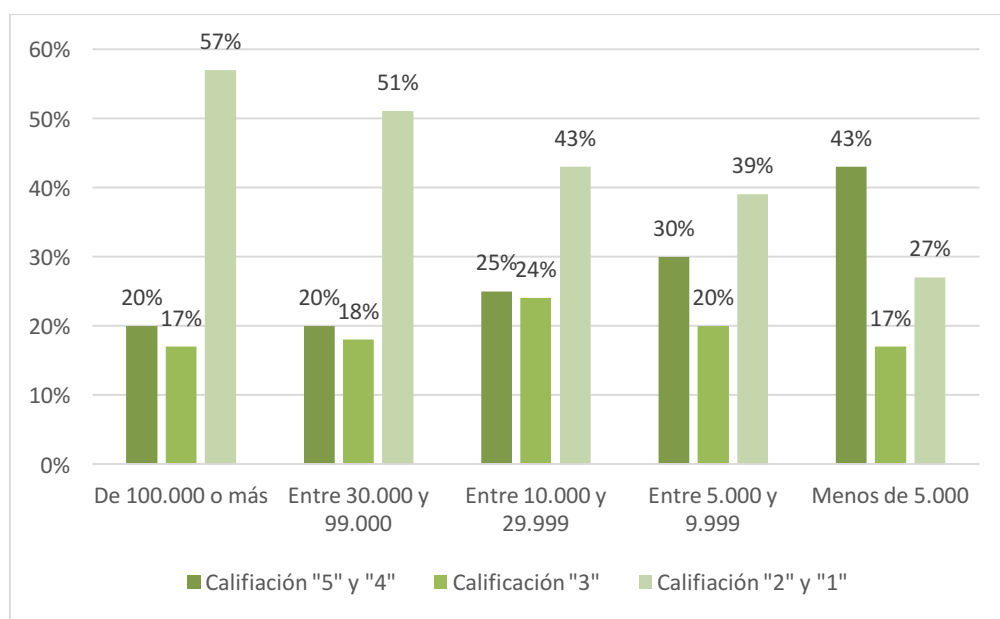
Ante la pregunta por la sensación de protección que les produce la Gobernación (Gráfica 101), el 24% de los antioqueños encuestados la calificaron con 4 y 5, y el 50% con 2 y 1. Las subregiones donde la sensación de protección que genera la Gobernación es menor son Valle de Aburrá (21%), Magdalena Medio (20%), Bajo Cauca (21%) y Urabá (24%). En términos de densidad demográfica, entre mayor la población, menor la sensación de protección que puede generar la Gobernación en sus habitantes.

Gráfica 101. ¿Qué tan protegido se siente por la Gobernación? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 102. ¿Qué tan protegido se siente por la Gobernación? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

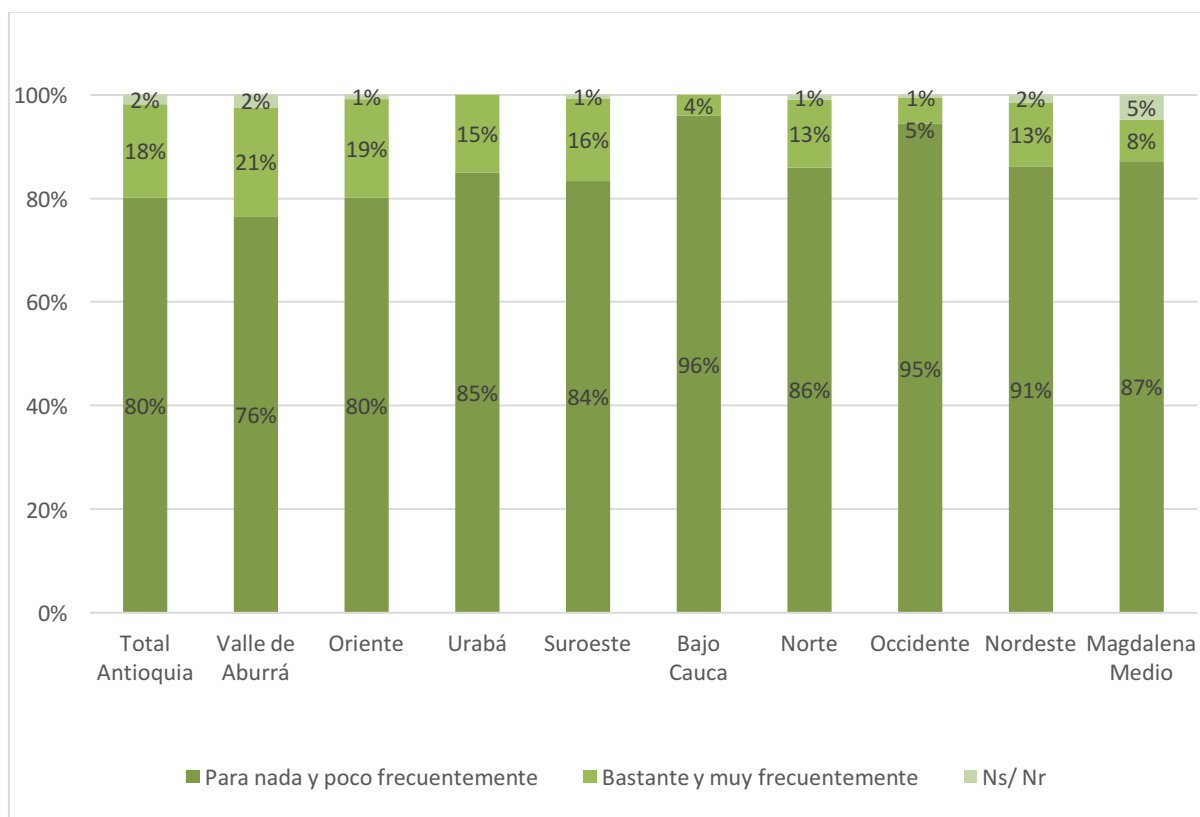
La Encuesta indagó por la sensación de protección que posiblemente podrían generar las organizaciones ilegales en la población del departamento. En efecto, solo el 3% de los antioqueños encuestados calificó con 4 y 5 (donde 5 es “mucho”) a las milicias urbanas, para la guerrilla y el paramilitarismo, no hubo ninguna calificación de protección que superar el 3 (Guerrilla 1%, Paramilitares 1%), las bandas tampoco recibieron una calificación importante al respecto. El único fenómeno ilegal que tuvo alguna calificación como generador de sensación de protección fueron las pandillas y los combos, el 3% de los encuestados lo calificó con 4 y 5 y el 3% con 3.

Los bajos puntajes de “percepción de protección” que tienen las organizaciones ilegales dan cuenta que, incluso bajo esquemas de protección *de facto*, las personas no se sienten necesariamente protegidas bajo estas lógicas. La confianza en la institucionalidad respecto a la misión pública de protección de los ciudadanos es reconocida claramente por los encuestados. Esto supone un voto de confianza cargado de responsabilidad, las personas no solo quieren estar protegidas por las autoridades, esperan que así sea. La institucionalidad debe

aprovechar este escepticismo frente a la habilidad de protección de los ilegales que se intuye en las respuestas de los antioqueños encuestados, mientras redobla esfuerzos para aumentar la sensación de protección que emanan las autoridades públicas.

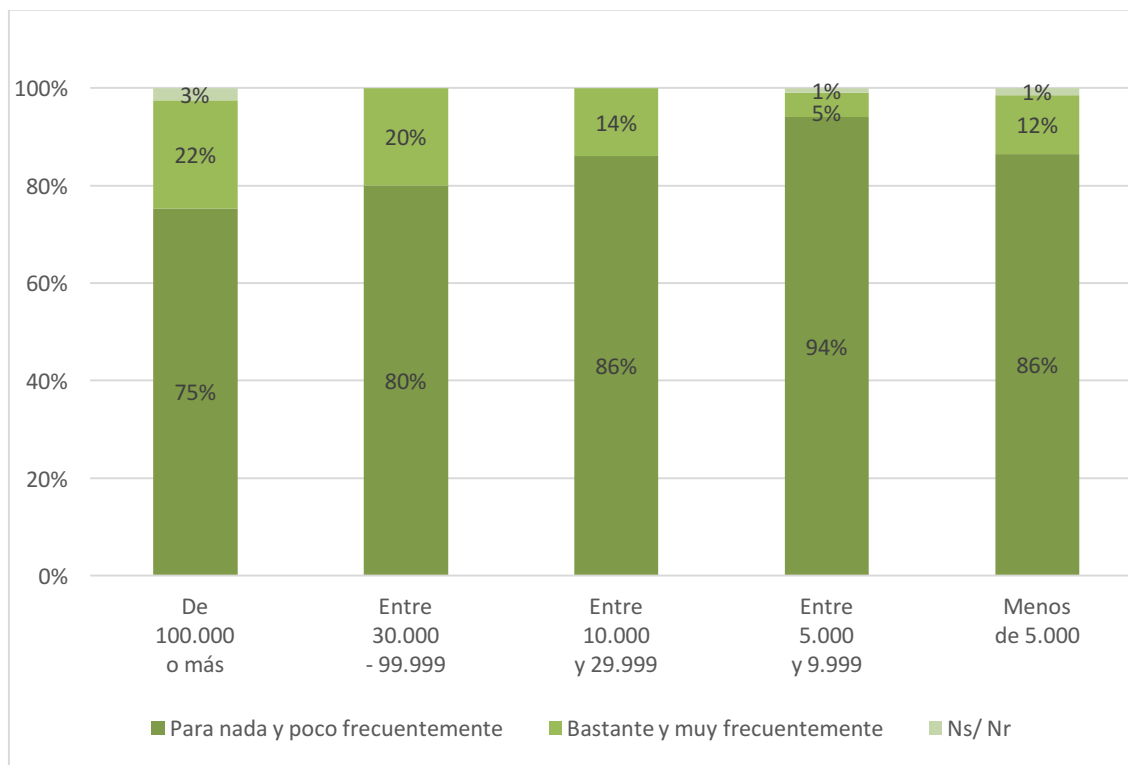
Por otra parte, la encuesta interrogó a los antioqueños participantes sobre la frecuencia en la ocurrencia de algunos hechos de seguridad y convivencia en el barrio o área en donde viven. Respecto a robos, el 18% de los antioqueños sostiene que son muy o bastante frecuentes, el 43% que son poco frecuentes y el 37% que para nada frecuentes. (Ver Gráfica 103). Las subregiones en donde el porcentaje de muy y bastante frecuentes es más alto son Valle de Aburrá (21%), Oriente (19%) y Suroeste (16%). Las subregiones en donde la respuesta “para nada frecuentes” es más alta son Bajo Cauca (75%) y Occidente (64%). La frecuencia de los robos aumenta de acuerdo a la densidad poblacional, resaltando su carácter de fenómeno urbano: en poblaciones de menos de 5.000 habitantes es de 12%, mientras en poblaciones de 100.000 o más habitantes es de 22%.

Gráfica 103. ¿Qué tan frecuentemente ocurren robos en su barrio o área donde vive? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

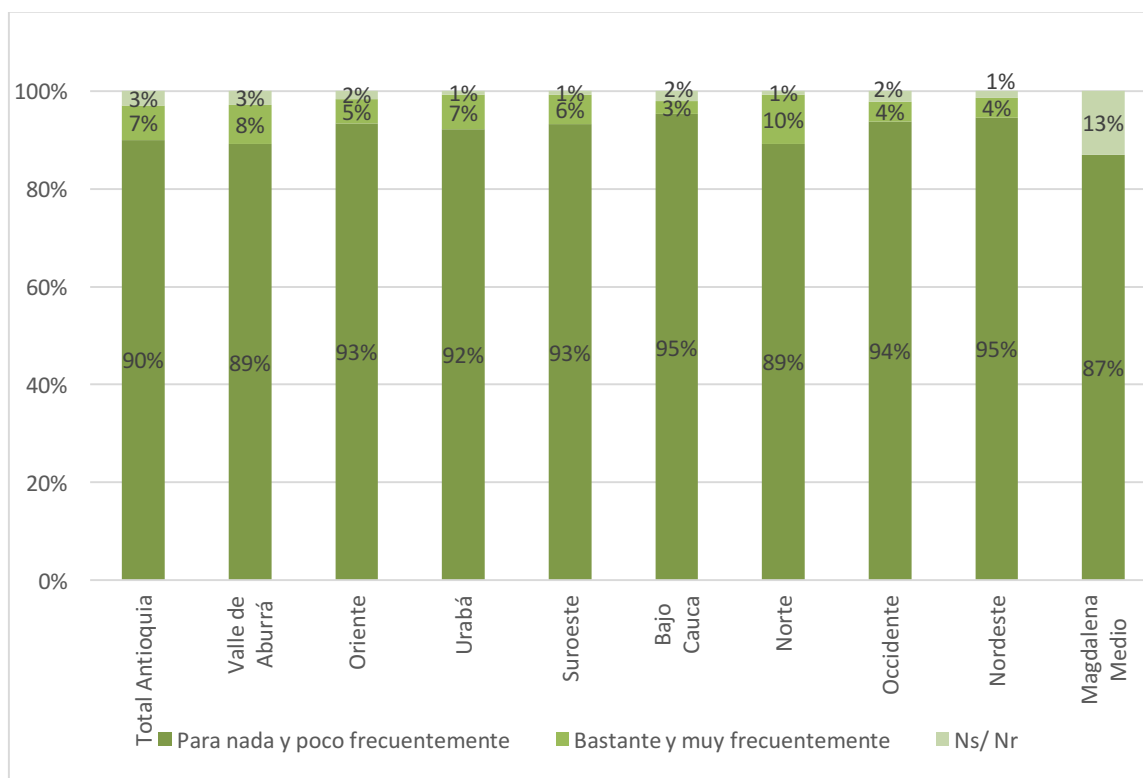
Gráfica 104. ¿Qué tan frecuentemente ocurren robos en su barrio o área donde vive? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

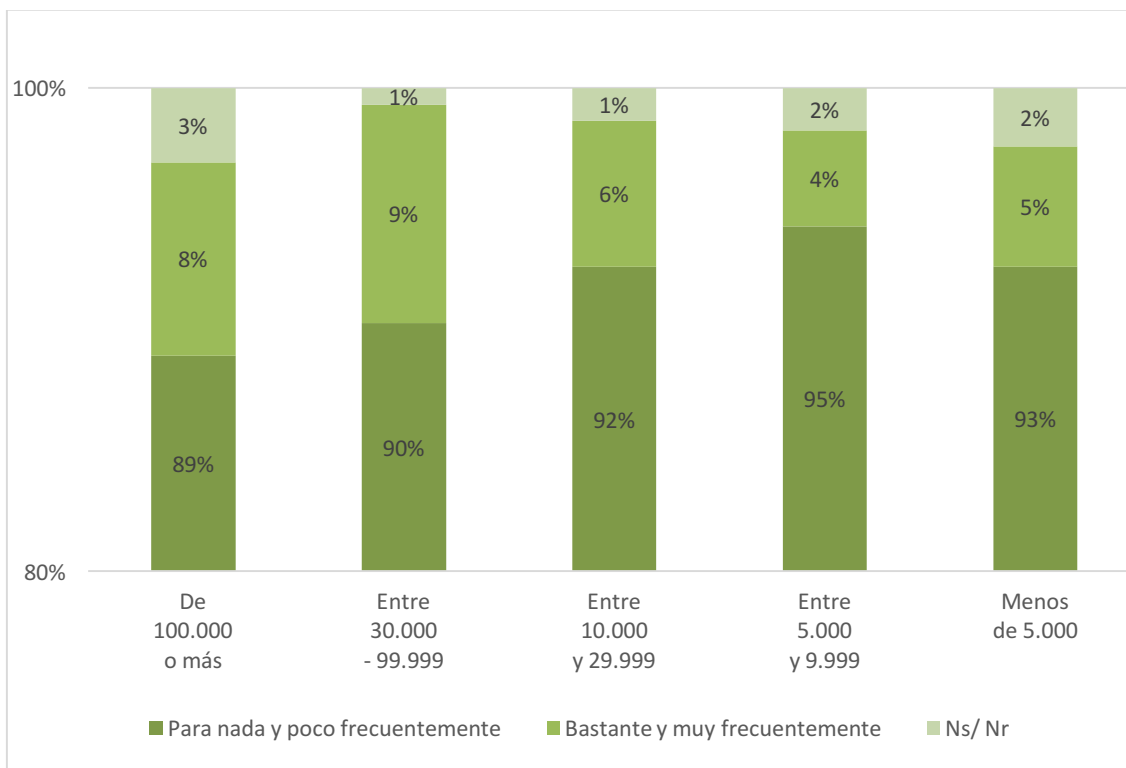
De igual forma, el 7% de los antioqueños sostiene que los homicidios son muy o bastante frecuentes, el 31% que son poco frecuentes y el 59% afirma que no son para nada frecuentes. (Ver Gráfica 103). Las subregiones en donde el porcentaje de muy y bastante frecuentes es más alto son Norte (10%), Valle de Aburrá (9%) y Urabá (7%). Las subregiones en donde la respuesta “para nada frecuentes” es más alta son Bajo Cauca (86%) y Occidente (78%). La frecuencia de los homicidios aumenta de acuerdo a la densidad poblacional: en poblaciones de menos de 5.000 habitantes es de 5%, mientras en poblaciones de 100.000 o más habitantes es de 8%.

Gráfica 105. ¿Qué tan frecuentemente ocurren homicidios en su barrio o área donde vive?
(Total, subregional y densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

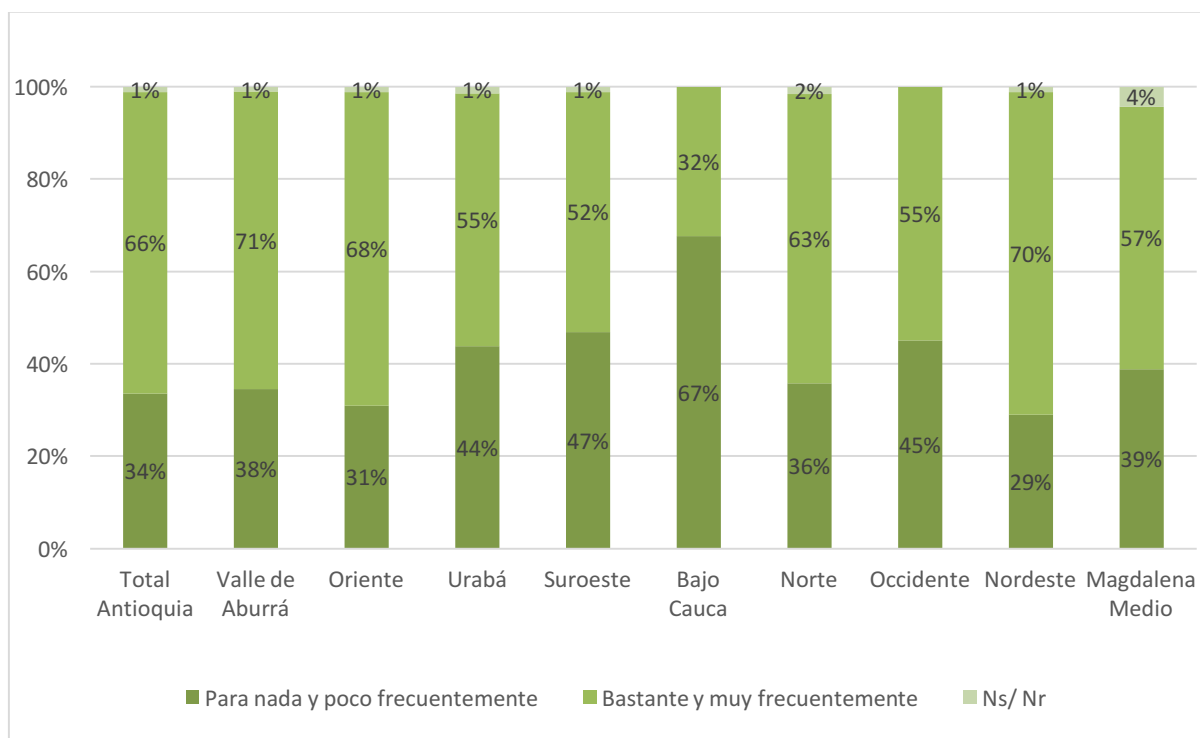
Gráfica 106. ¿Qué tan frecuentemente ocurren homicidios en su barrio o área donde vive? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

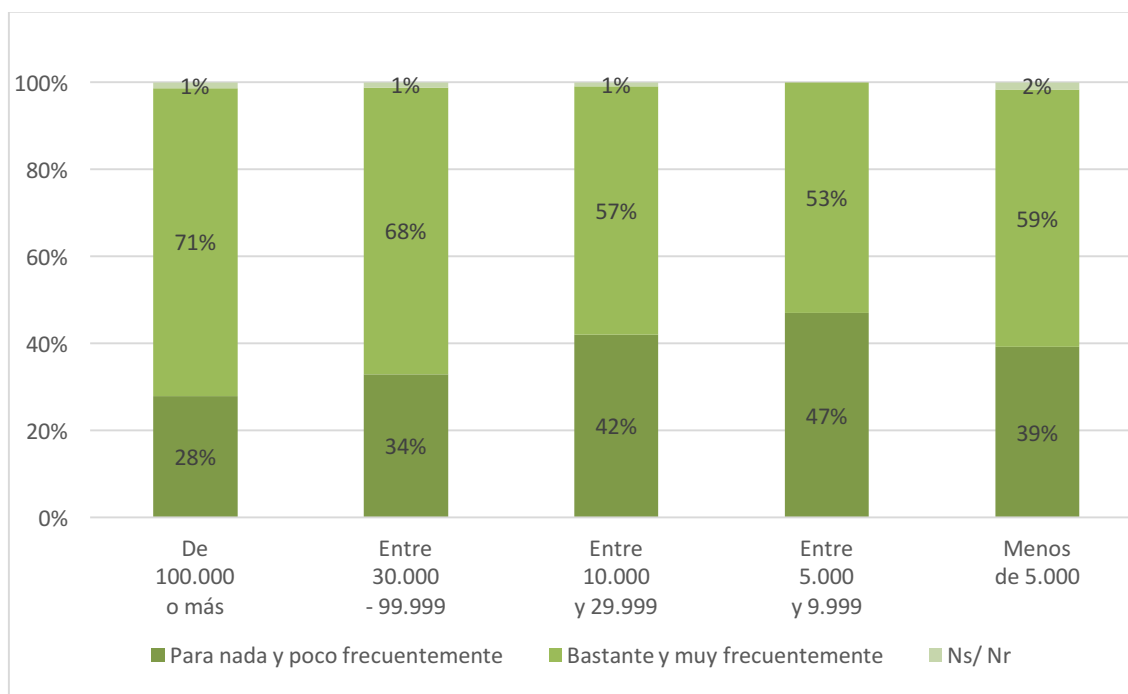
Respecto al consumo de alcohol en las calles, el 66% de los antioqueños sostiene que es muy o bastante frecuente, el 18% que es poco frecuente y el 16% que para nada frecuente. (Ver [Gráfica 107](#)). Las subregiones en donde el porcentaje de muy y bastante frecuente es más alto son Valle de Aburrá (71%) y Oriente (68%). Las subregiones en donde la respuesta “para nada frecuente” es más alta son Bajo Cauca (41%) y Occidente (33%). La frecuencia del consumo de alcohol en la calle aumenta de acuerdo a la densidad poblacional: en poblaciones de menos de 5.000 habitantes es de 59%, mientras en poblaciones de 100.000 o más habitantes es de 71%.

Gráfica 107. ¿Qué tan frecuentemente ocurre consumo de alcohol en la calle en su barrio o área donde vive? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

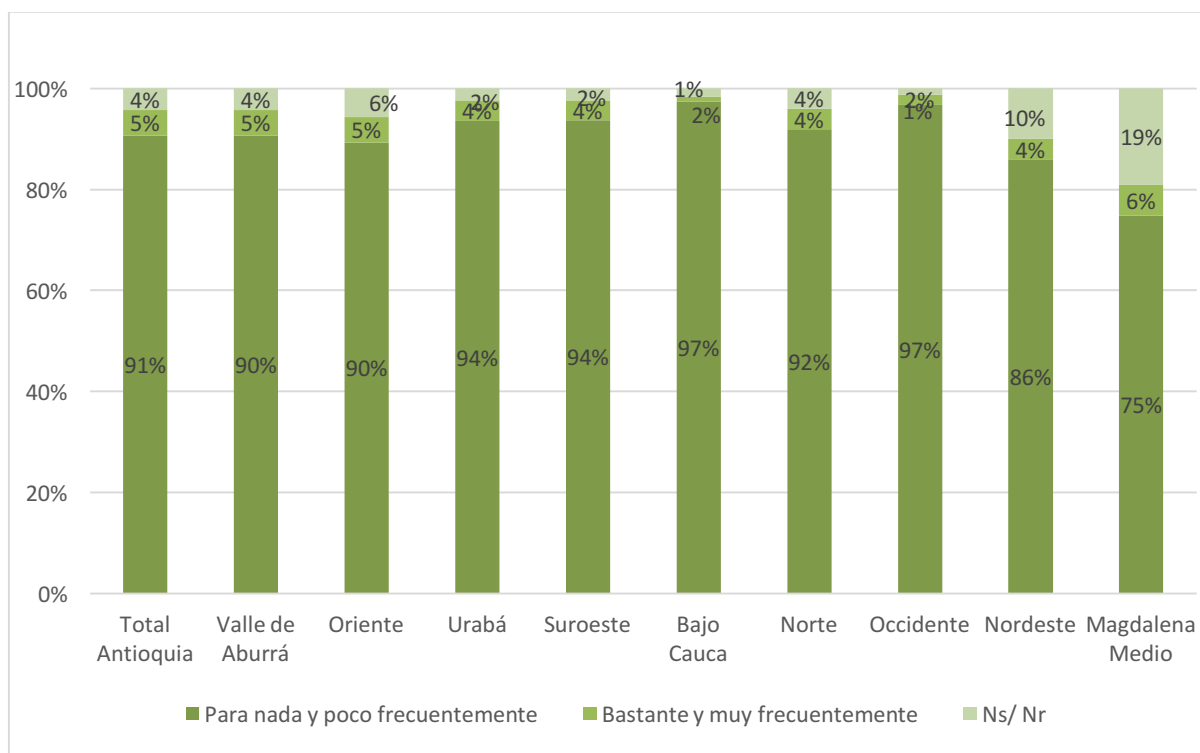
Gráfica 108. ¿Qué tan frecuentemente ocurre consumo de alcohol en la calle en su barrio o área donde vive? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

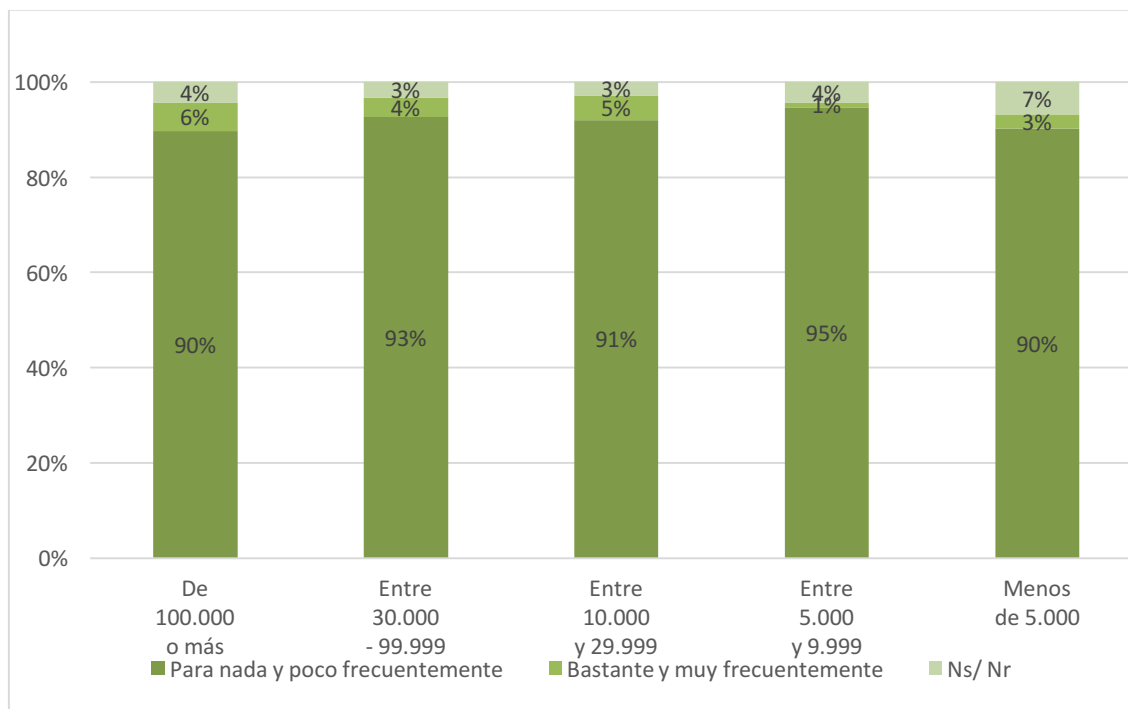
La encuesta indagó por el comportamiento denominado como “interferencia policial o militar en la vida de las personas”, buscando establecer las dificultades resultantes de posibles abusos de autoridad o intromisión de las autoridades en la vida personal de los antioqueños. Esta categoría hace parte de preguntas utilizadas en otras encuestas de victimización y busca dar cuenta del respeto a los derechos de las personas. El 5% de los antioqueños sostiene que la interferencia policial o militar en la vida de las personas es muy o bastante frecuente en su barrio o vereda de residencia, el 20% que es poco frecuente y el 71% que para nada frecuente (Ver Gráfica 109). Las subregiones en donde el porcentaje de muy y bastante frecuente es más alto son Valle de Aburrá (5%) y Oriente (5%). Las subregiones en donde la respuesta “para nada frecuente” es más alta son Bajo Cauca (95%) y Occidente (83%). La incidencia de este fenómeno no puede ser explicada por la densidad poblacional.

Gráfica 109. ¿Qué tan frecuentemente ocurre la interferencia policial o militar en la vida de las personas en su barrio o área donde vive? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

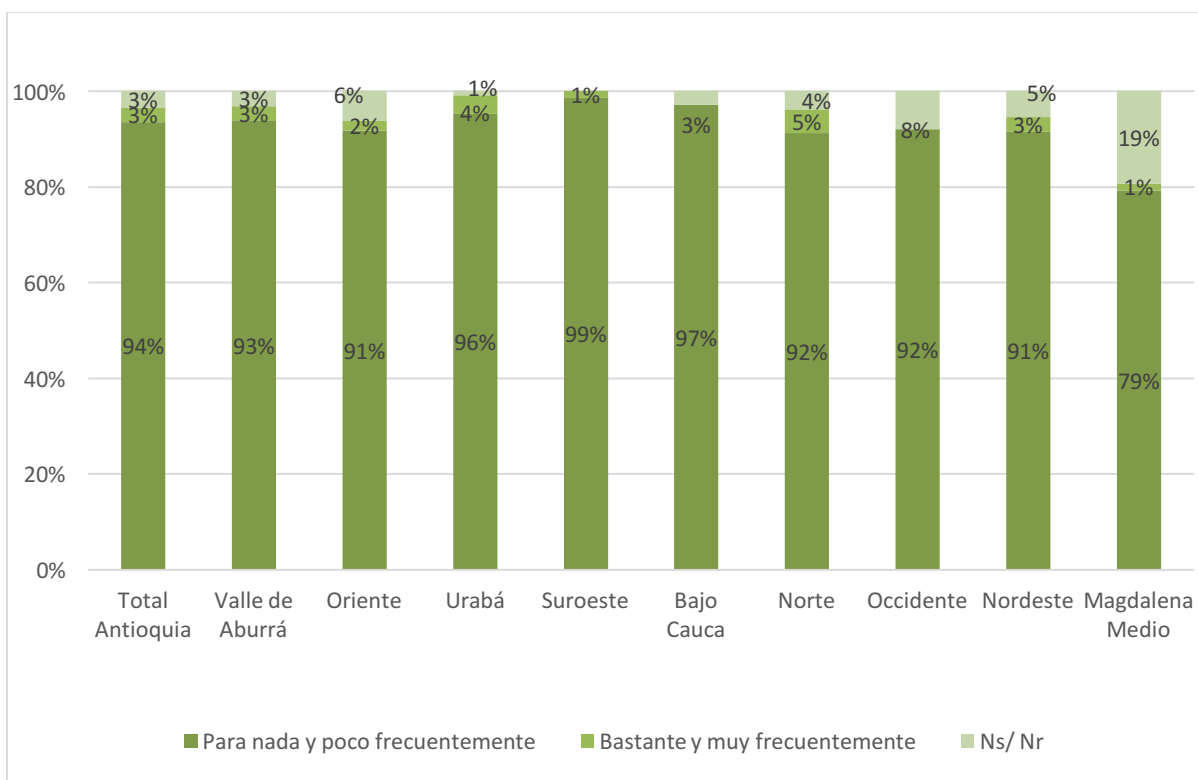
Gráfica 110. ¿Qué tan frecuentemente ocurre la interferencia policial o militar en la vida de las personas en su barrio o área donde vive? (Densidad poblacional)



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

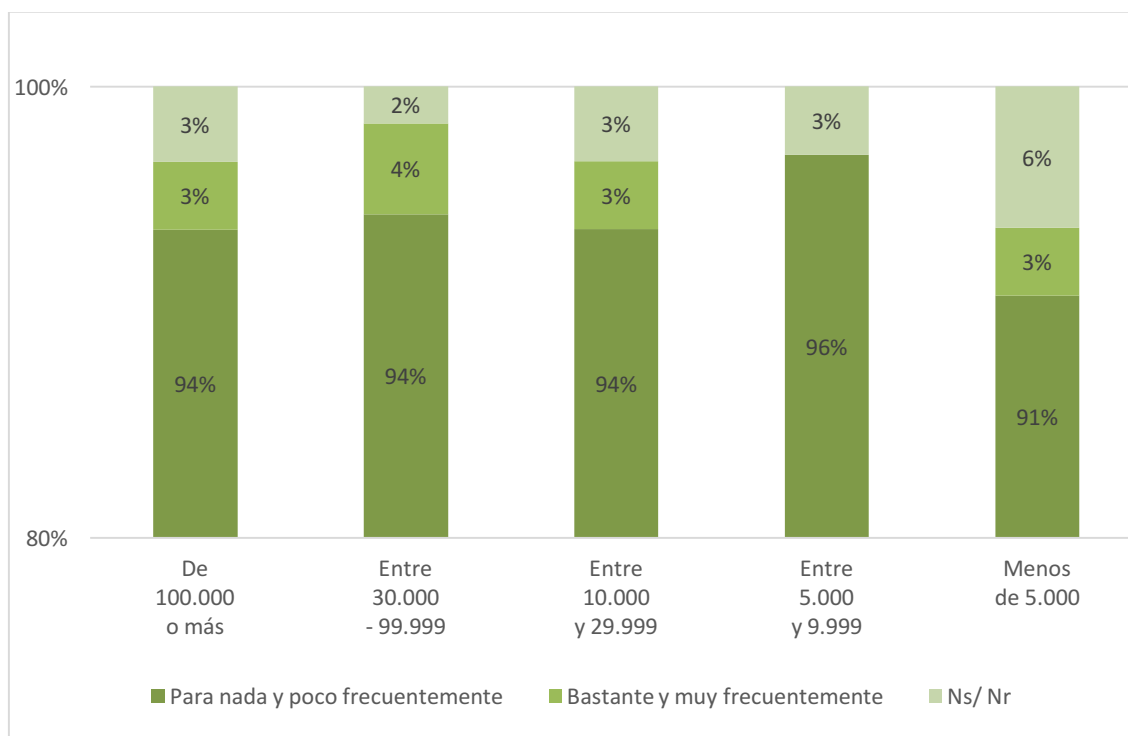
Al preguntar por la ocurrencia de comportamientos racistas, el 3% de los antioqueños sostiene que es muy o bastante frecuente en su barrio o vereda de residencia, el 10% que es poco frecuente y el 84% que para nada frecuente (Ver Gráfica 111). Las subregiones en donde el porcentaje de muy y bastante frecuente es más alto son Valle de Aburrá (3%) y Oriente (3%). Las subregiones en donde la respuesta “para nada frecuente” es más alta son Bajo Cauca (94%) y Suroeste (91%). La densidad poblacional no afecta la incidencia de este fenómeno.

Gráfica 111. ¿Qué tan frecuentemente ocurren comportamientos racistas en su barrio o área donde vive? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

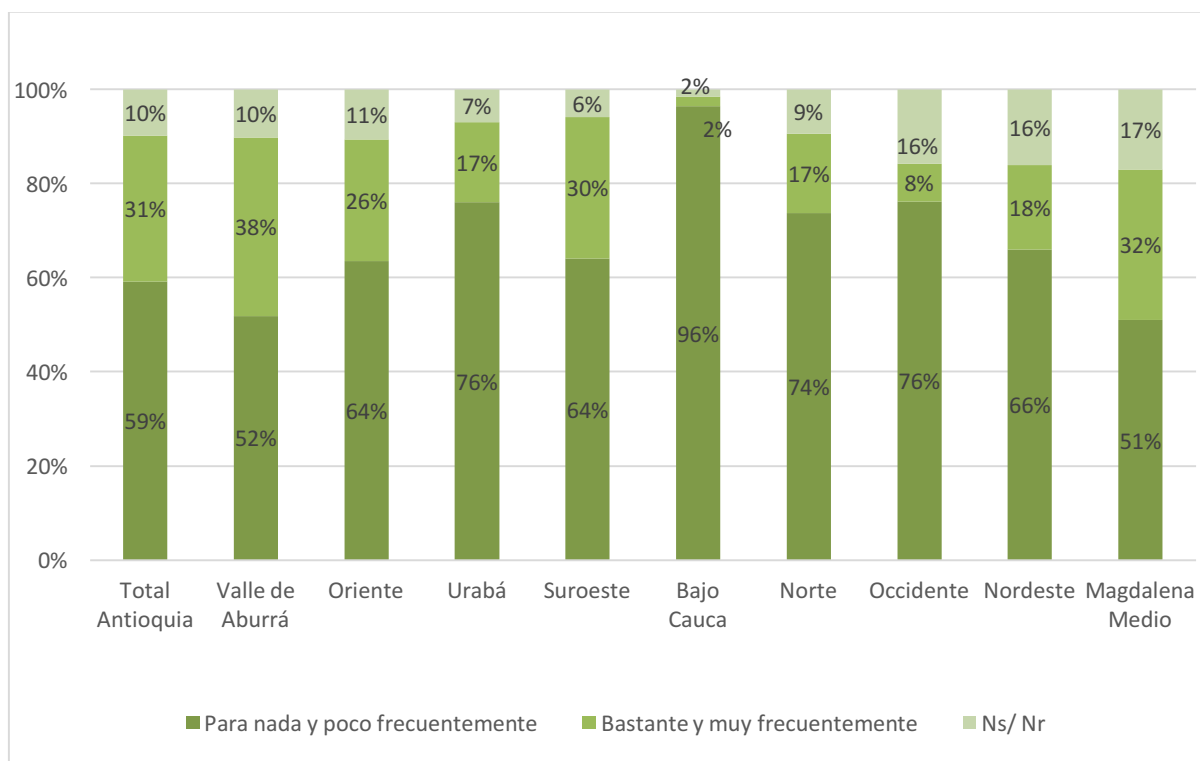
Gráfica 112. ¿Qué tan frecuentemente ocurren comportamientos racistas en su barrio o área donde vive? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

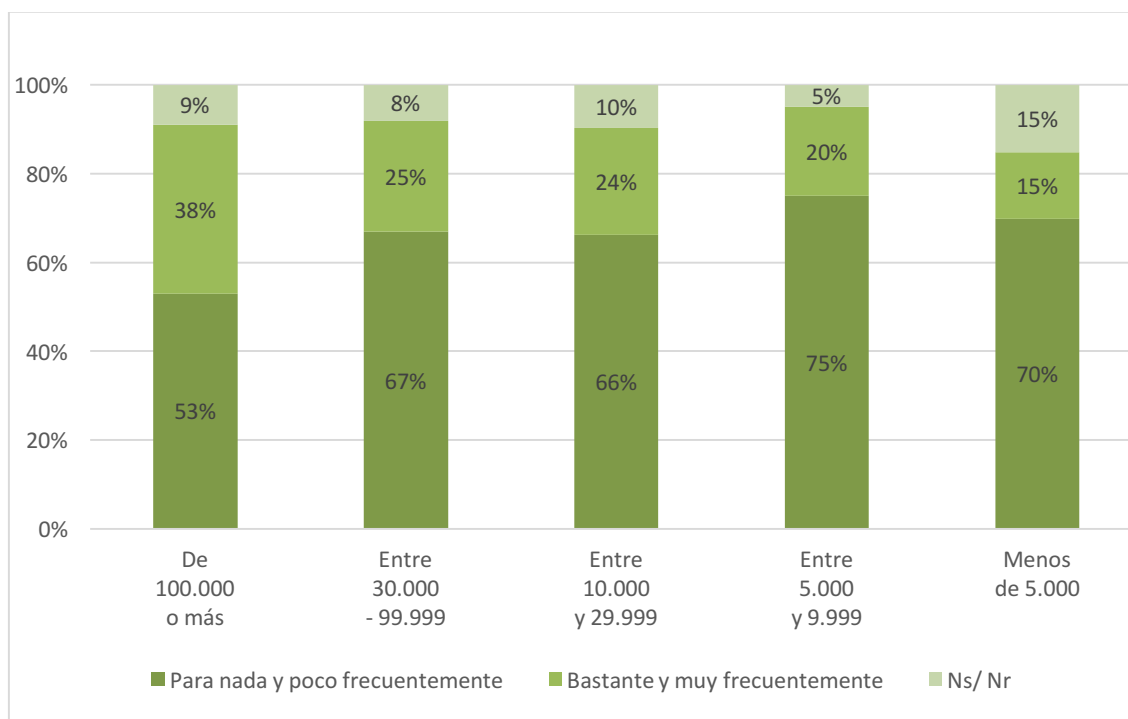
Respecto a la venta de droga en las calles, el 31% de los antioqueños sostiene que es muy o bastante frecuente en su barrio o vereda de residencia, el 14% que es poco frecuente y el 45% que para nada frecuente (Ver 113). Las subregiones en donde el porcentaje de muy y bastante frecuente es más alto son Valle de Aburrá (38%), Oriente (26%) y Magdalena Medio (31%). Las subregiones en donde la respuesta “para nada frecuente” es más alta son Bajo Cauca (94%) y Urabá (63%). El aumento de la densidad poblacional va de la mano con la mayor incidencia del fenómeno. En efecto, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, la venta de drogas en las calles es muy o bastante frecuente para el 15% de los encuestados, mientras en poblaciones de 100.000 o más habitantes es de 38%.

Gráfica 113. ¿Qué tan frecuentemente ocurre la venta de droga en las calles en su barrio o área donde vive? (Total, subregional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

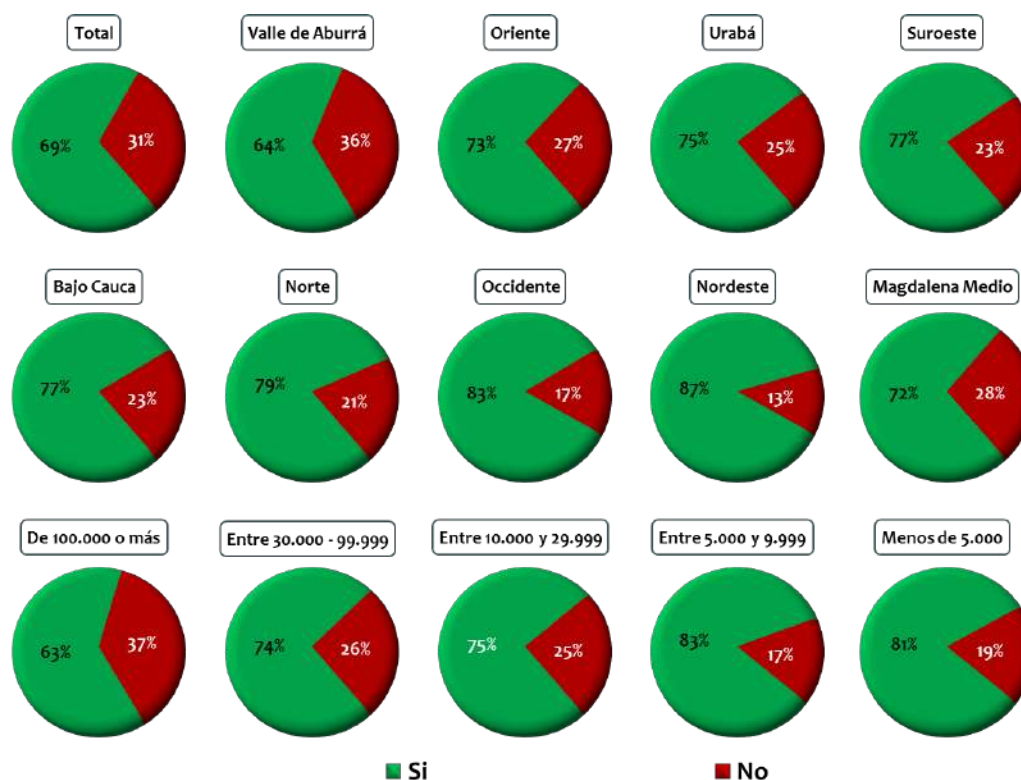
Gráfica 114. ¿Qué tan frecuentemente ocurre la venta de droga en las calles en su barrio o área donde vive? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Finalmente, la encuesta les preguntó a los antioqueños por el conocimiento que tienen de las actividades culturales, lúdicas y musicales que se realizan en sus municipios por parte de las autoridades públicas. Los resultados a esta pregunta se presentan en la gráfica 115. El 69% de los antioqueños encuestados ha oído hablar de las actividades; la subregión en donde este conocimiento es más alto son Nordeste (87%), seguido de Norte (79%) y Bajo Cauca y Suroeste (77%). De igual forma, el conocimiento de la realización de actividades culturales es menor en las poblaciones con más habitantes, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes es del 81%, mientras en las de 100.000 o más habitantes es del 63%.

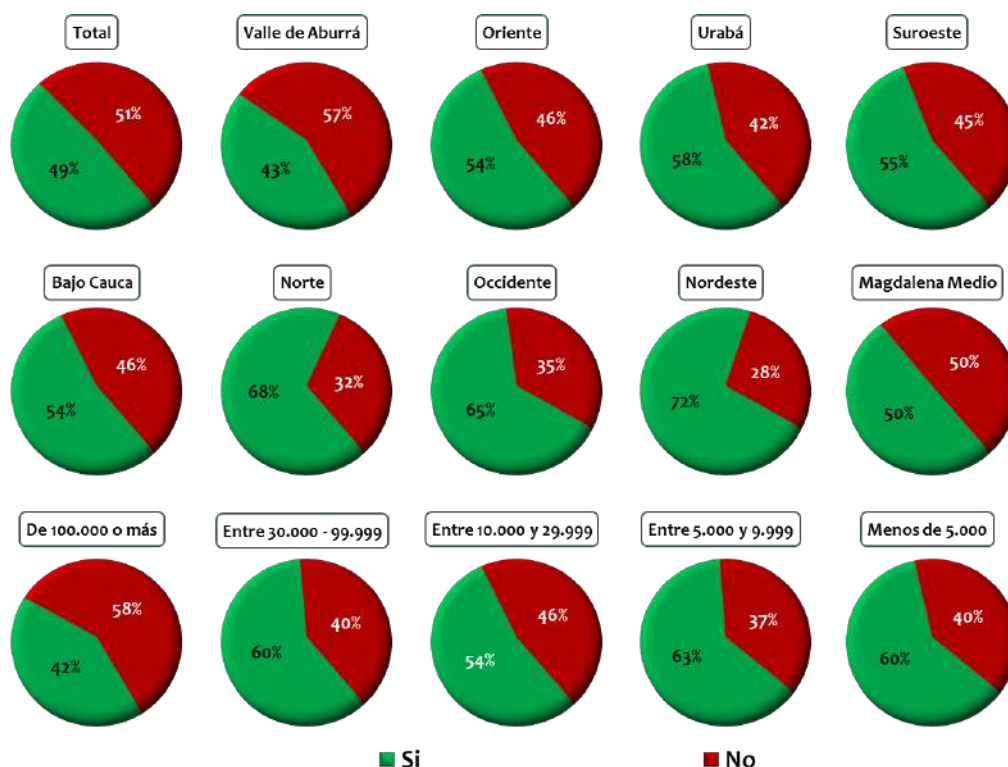
Gráfica 115. ¿Ha oído hablar de las actividades culturales, lúdicas y musicales que se realizan en su municipio?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Ahora bien, interrogados sobre su conocimiento de las actividades realizadas en su municipio y dirigidas a los jóvenes, el 49% de los antioqueños encuestados dijo haber oído hablar de ellas. Las subregiones en las que este conocimiento es más alto son Nordeste (72%), Norte (68%) y Occidente (65%). De manera similar al conocimiento de actividades culturales en general analizado anteriormente, el aumento de la densidad poblacional va acompañado de un aumento en el desconocimiento de las actividades dirigidas a los jóvenes en los municipios. En las poblaciones de menos de 5.000 habitantes es del 60%, mientras en las de 100.000 o más habitantes es del 42%.

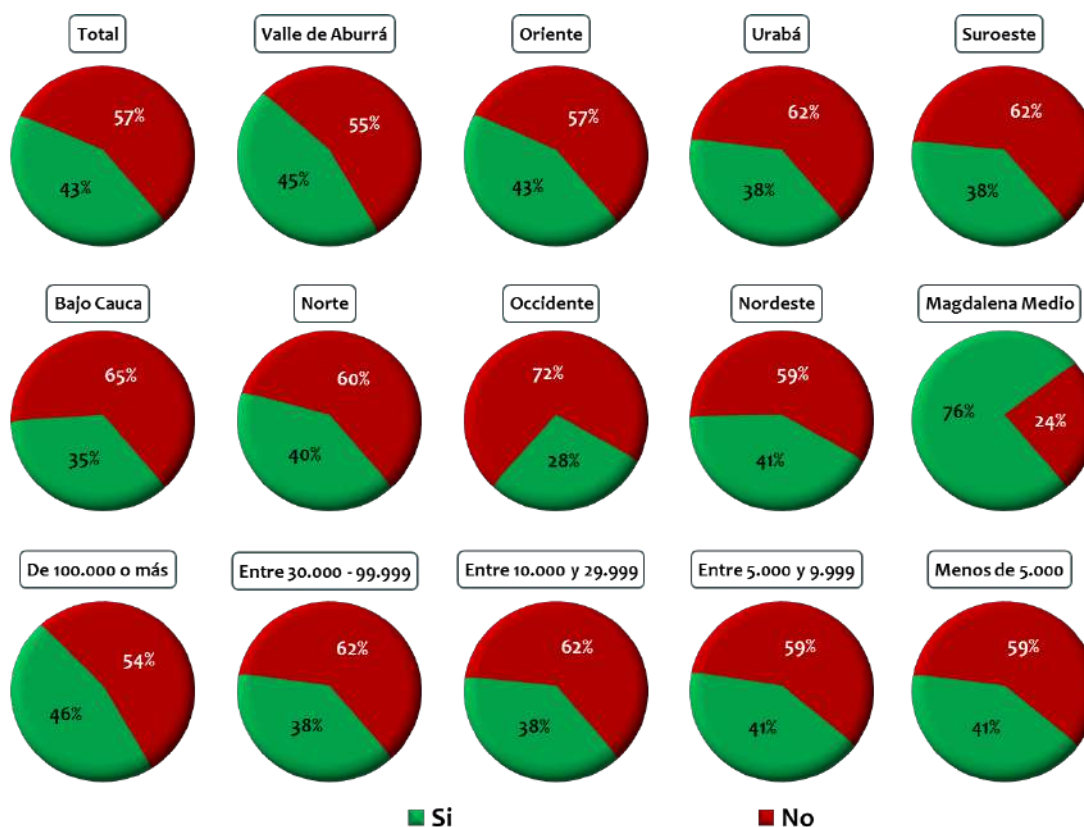
Gráfica 116. ¿Conoce cuáles actividades culturales existen en su municipio para los jóvenes?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Respecto a la participación de las personas en las actividades culturales, el 43% de los antioqueños encuestados dijo haberlo hecho (Ver Gráfica17). Las subregiones en las que esta participación fue más alta son Magdalena Medio (76%), Valle de Aburrá (45%) y Oriente (43%). Las subregiones con menor participación en actividades culturales son Occidente (28%), Bajo Cauca (35%) y Urabá y Suroeste (38%). La participación es similar en las diferentes densidades poblacionales, a excepción de las poblaciones de 100.000 o más habitantes, en donde alcanza el 46%.

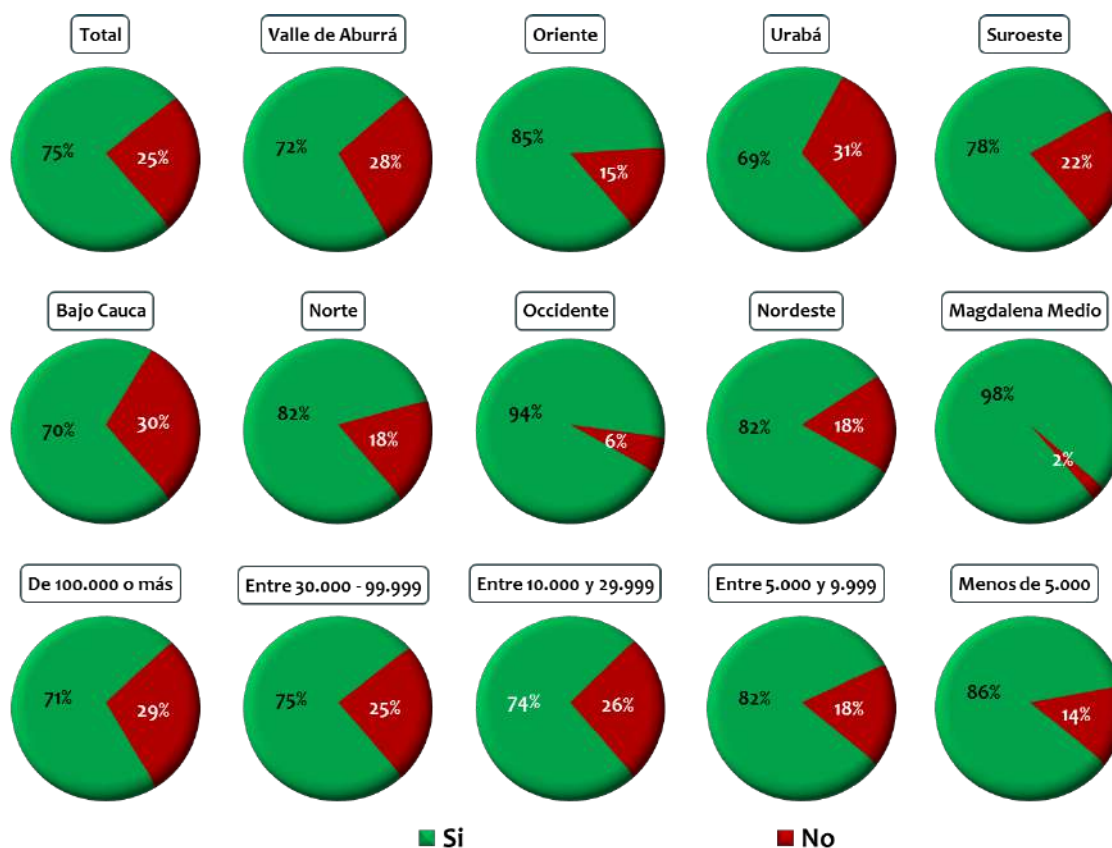
Gráfica 117. ¿Usted ha participado en alguna de esas actividades?



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Finalmente, el 75% de los antioqueños encuestados afirmó conocer a un joven o persona cercana que había participado en alguna actividad cultural (Ver gráfica 118). Las subregiones en las que este conocimiento de un participante fue más alto son Magdalena Medio (98%), Occidente (94%) y Oriente (85%). Las subregiones con menor porcentaje en el conocimiento de participantes en actividades culturales son Urabá (69%) y Bajo Cauca (70%). En términos de densidad poblacional, en tanto aumentan los habitantes de una población, aumenta el conocimiento de los participantes en actividades culturales.

Gráfica 118. ¿Sabe usted si los jóvenes o alguna persona cercana a usted han participado de esas actividades?



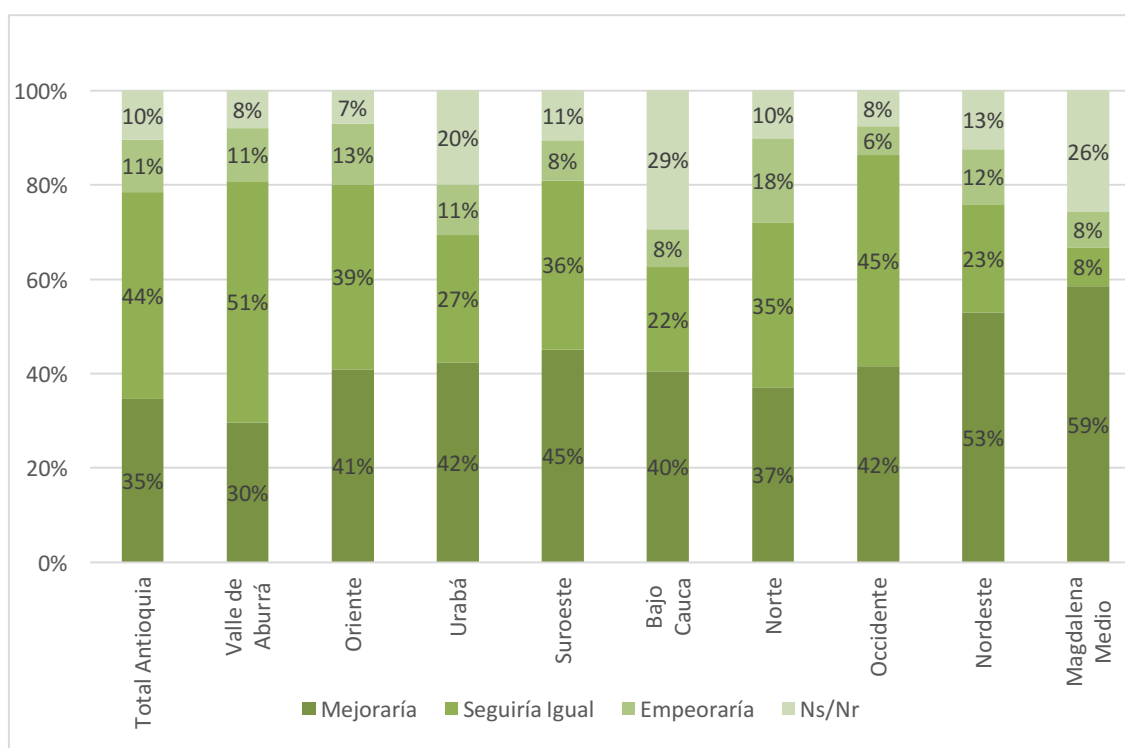
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Actitudes frente a las negociaciones de paz y su relación con la seguridad y la convivencia ciudadana

De manera simultánea con el proceso de negociaciones que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, el Gobierno de Antioquia adelanta el programa “Preparémonos para la paz”, cuyo objetivo es generar de condiciones para favorecer la consecución de la paz. Preparémonos para la paz es un programa de la Gobernación de Antioquia que involucra a todas las secretarías de los municipios y el Gobierno Nacional y que busca que una vez se termine el conflicto se facilite la generación de las condiciones para que la paz se empiece a construir desde las regiones. El mecanismo base del programa es el de preparar a la ciudadanía para el posible desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes a la vida civil; así como facilitar el paso hacia el posconflicto en el nivel comunitario.

Con el interés de medir la relación entre un posible posconflicto y su relación las percepciones sobre la seguridad, la convivencia y la victimización, la encuesta indaga respecto a las consecuencias que tendría sobre la vida de los encuestados, el posible éxito de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc (Ver Gráfica19).

Gráfica 119. Si se firma la terminación del conflicto con las FARC, ¿cuál de las siguientes opciones cree usted que define mejor lo que pasaría en su vida en términos de seguridad? (Total, subregión).



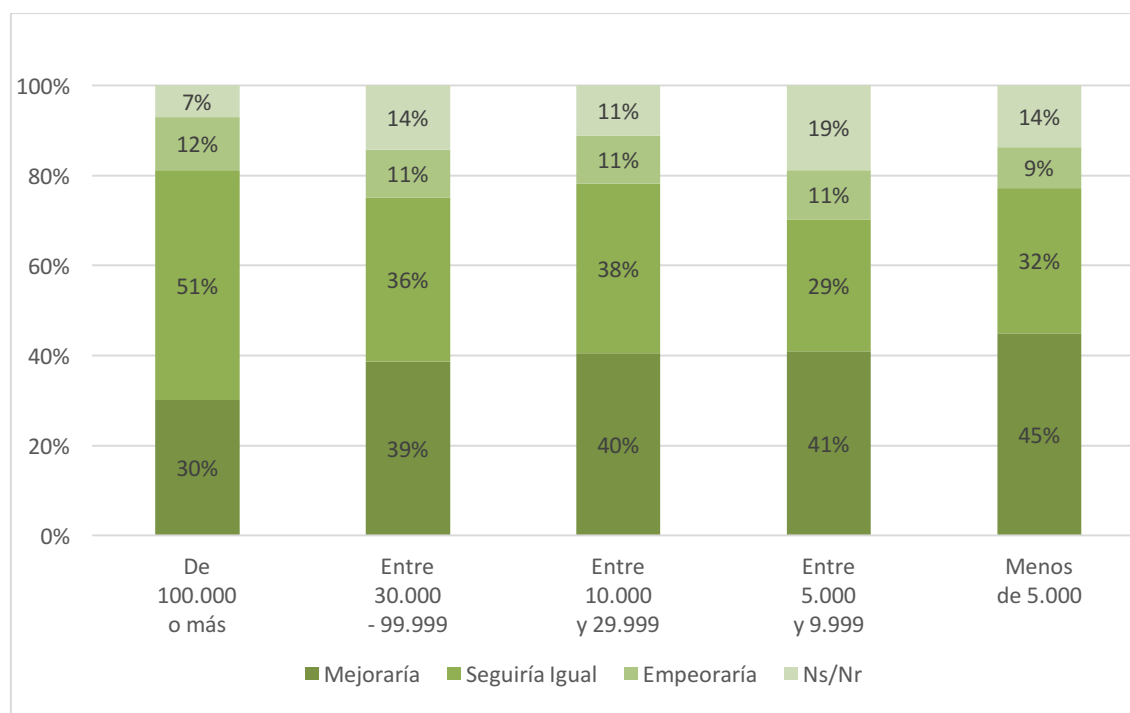
Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Se observa así una marcada variación entre los antioqueños, que varía de acuerdo a la región y sus efectos que el conflicto armado ha tenido en su territorio. El 35% de los antioqueños encuestados cree que mejoraría su seguridad, el 44% que seguiría igual, el 11% que empeoraría y el 10% no sabe o no responde. La subregión en la que mayor porcentaje de respuestas hablan de una mejora son Magdalena Medio, con el 59%, Nordeste, con el 53%, y Suroeste, con el 43%. Los

mayores porcentajes de la respuesta “empeoraría”, están en Norte, con el 18%, Oriente, con el 13% y Nordeste, con el 12%.

En términos de densidad poblacional, en tanto aumenta el tamaño de las poblaciones, se reduce el porcentaje de personas que contestan que su seguridad mejoría, aunque el porcentaje que dice que empeoraría se mantiene igual. Esta variación es importante pues responde a la sensibilidad del impacto del tema dada la distribución urbano/rural del departamento.

Gráfica 120. Si se firma la terminación del conflicto con las FARC, ¿cuál de las siguientes opciones cree usted que define mejor lo que pasaría en su vida en términos de seguridad? (Densidad poblacional).



Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Percepción sobre los jóvenes, la seguridad y la convivencia

La encuesta le preguntó a los participantes sobre las medidas que creen pueden tener mejores resultados a la hora de evitar que los jóvenes se involucren en la ilegalidad. Las respuestas resaltan el acceso a la educación (43%), la generación

de empleo (41%), y la oferta de espacios deportivos y recreativos (14%) como las alternativas más populares entre los antioqueños encuestados. En términos subregionales, el apoyo a la facilidad del acceso a la educación es de 45% en Valle de Aburrá, 44% en Nordeste y 49% en Bajo Cauca. El porcentaje de apoyo a la generación de empleo como medio de desincentivo de la participación de jóvenes en la ilegalidad está por encima del promedio departamental en las subregiones de Urabá, con 48%, Norte, con 49%, Occidente, con 48% y Magdalena Medio, con 48%. Respecto a la densidad poblacional, las poblaciones con menos habitantes apoyan en menor medida la facilidad de acceso a la educación como desincentivo de la vinculación juvenil a la ilegalidad, cuando se comparan con las poblaciones con más habitantes. La generación de empleo y la oferta de espacios recreativos y deportivos se comportan de manera relativamente constante en todas las densidades poblacionales. En la Gráfica 121 se observa la gravedad del fenómeno.

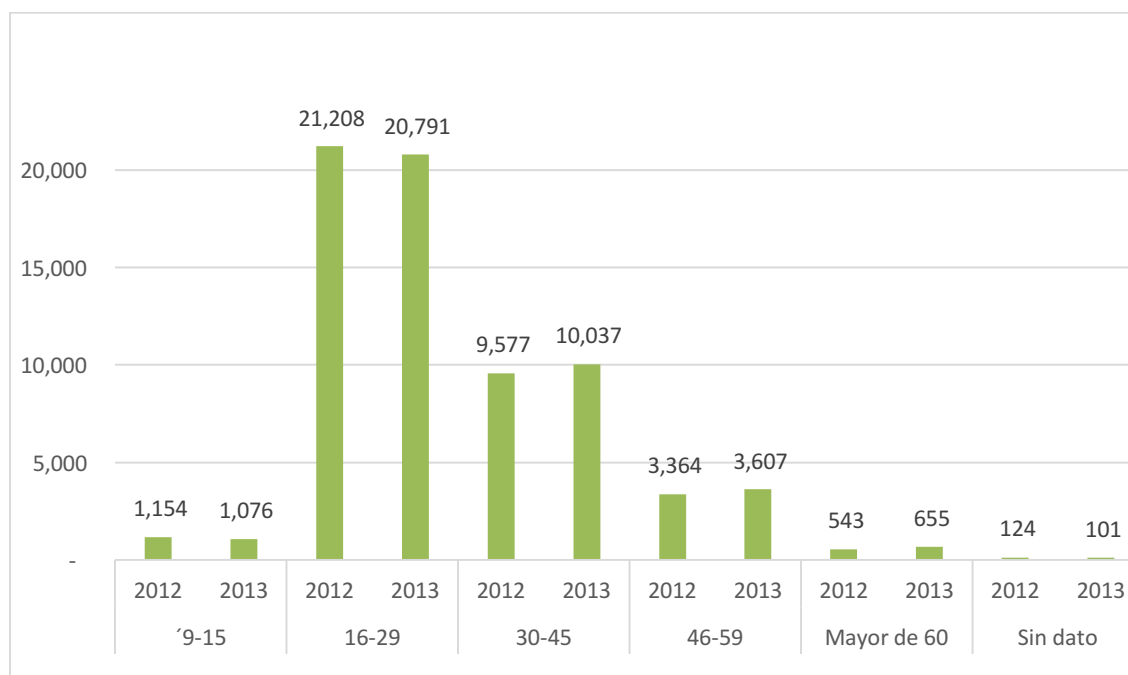
Tabla 34. ¿Qué piensa usted que se puede hacer para evitar la entrada de los jóvenes en el mundo de la ilegalidad?

	Total	Subregiones								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Facilitar el acceso a la educación	43%	45%	35%	41%	38%	49%	46%	33%	44%	26%
Generar empleo	41%	41%	40%	48%	36%	38%	49%	48%	31%	48%
Ofrecer espacios deportivos/ recreativos	14%	13%	13%	22%	13%	19%	9%	8%	15%	24%
Mejor educación/ principios morales desde la familia	11%	11%	12%	9%	11%	11%	14%	11%	14%	8%
Mayor vigilancia/ acompañamiento por parte de los padres	10%	10%	11%	10%	13%	7%	11%	9%	9%	9%
Ofrecer espacios lúdicos/ culturales	8%	8%	7%	7%	7%	9%	8%	12%	14%	5%
Generar espacios de diálogo/ comunicación	5%	5%	5%	7%	6%	9%	5%	7%	5%	11%
Mejorar la seguridad ciudadana	3%	3%	6%	2%	2%	1%	3%	-	3%	-
Combatir la drogadicción	3%	3%	2%	2%	7%	3%	5%	1%	2%	1%
Promover campañas de convivencia/ conciencia ciudadana	3%	3%	2%	3%	1%	1%	-	7%	5%	6%
Nada/ es decisión propia	2%	3%	1%	1%	2%	1%	-	4%	2%	1%

No sabe/ No responde	4%	4%	3%	4%	6%	4%	3%	2%	6%	5%
Otros(as)	2%	2%	2%	-	1%	5%	2%	3%	5%	-

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 121. Capturas por rango de edad (Antioquia)



Fuente: SISC Departamental

Justicia, seguridad y convivencia

El 32% de los antioqueños encuestados considera que se hace justicia cuando se castiga al delincuente, el 12% cuando se cumplan las leyes, el 9% cree que nunca, el 6% cuando no haya corrupción y el 4% cuando haya igualdad. En las subregiones, la idea de que la justicia supone el castigo del delincuente tiene el 39% de Norte, el 36% de Nordeste y el 35% de Oriente; la justicia como cumplimiento de las leyes tiene el 17% en el Bajo Cauca, el 16% de Occidente y el 14% de Oriente y Suroeste; y la idea de que la justicia nunca se puede alcanzar la comparte el 11% de Valle de Aburrá, el 11% de Occidente y el 9% de Oriente. El castigo al delincuente como condición de la justicia es constante en todas las densidades poblacionales, pero la creencia de que nunca se puede hacer justicia aumenta de acuerdo a los habitantes de las poblaciones; en menos de 5.000 habitantes es de 6%, en 100.000 o más es del 12%.

Tabla 35. ¿Cuándo considera usted que se hace justicia?

	Total	Subregiones								
		Valle de Aburrá	Oriente	Urabá	Suroeste	Bajo Cauca	Norte	Occidente	Nordeste	Magdalena Medio
Cuando se castigue al delincuente	32%	31%	35%	28%	30%	30%	39%	25%	36%	33%
Cuando se cumplan las leyes	12%	12%	14%	13%	14%	17%	9%	16%	8%	4%
Nunca	9%	11%	9%	6%	6%	3%	4%	11%	3%	4%
Cuando no haya corrupción	6%	7%	7%	3%	6%	-	4%	3%	3%	7%
Cuando haya igualdad	4%	5%	5%	3%	5%	5%	7%	2%	6%	1%
Cuando la sociedad se base en principios morales	4%	4%	4%	3%	5%	3%	5%	7%	5%	7%
Cuando se acaba la delincuencia/ violencia	4%	4%	6%	5%	5%	1%	3%	3%	3%	7%
Cuando las autoridades hagan las validaciones/ investigaciones pertinentes	3%	4%	2%	1%	4%	-	10%	2%	4%	4%
Cuando haya presencia/ apoyo a la comunidad	3%	3%	6%	3%	3%	3%	4%	6%	8%	4%
Cuando haya una solución objetiva	3%	3%	2%	9%	2%	2%	6%	3%	4%	4%
Cuando se respeten los derechos humanos	3%	4%	3%	3%	3%	1%	3%	3%	1%	3%
No sabe/ No responde	14%	12%	7%	21%	15%	33%	7%	19%	19%	21%
Otros(as)	2%	2%	2%	1%	2%	1%	1%	-	-	2%

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

A continuación se señalan los principales hallazgos alrededor de la confianza institucional mencionados en esta sección.

Tabla 36. Resumen de hallazgos confianza institucional

Resumen de hallazgos – Confianza institucional
El 42% de los antioqueños encuestados considera que la Policía contribuye mucho o bastante a la seguridad.
El 38% de los antioqueños encuestados se siente muy o bastante protegido por la Policía.
El 24% se siente protegido por la Gobernación.
El 26% de los antioqueños encuestados se siente muy o bastante protegido por su alcaldía.



El 69% de los antioqueños encuestados ha oído de las actividades culturales que se adelantan en su municipio. El 43% ha participado de ellas.
El 35% de los antioqueños encuestados considera que un acuerdo de paz entre el Gobierno –Nacional y la guerrilla de las Farc mejoraría la seguridad e su municipio. El 11% que la empeoraría.
El 52% piensa que la seguridad del municipio mejoraría con acciones relacionadas con la fuerza pública (patrullaje, aumento de pie de fuerza de la Policía y CAI's y generando más cuadrantes). El 59% acude a las autoridades públicas para resolver problemas.
El 69% de los antioqueños ha oído de actividades culturales, lúdicas y musicales en su municipio, y el 43% ha participado en ellas.

Fuente: C.A.P EAFIT-Invamer.

2.7. Convivencia ciudadana

Como se mencionó en el apartado teórico del inicio del documento, la convivencia hace referencia a la naturaleza de las relaciones sociales dentro de una comunidad y a cómo se generan lógicas de confianza y resolución de conflictos sociales. Estos recursos pueden constituirse como un acervo que contribuya a la seguridad desde un enfoque preventivo.

En este sentido, se considera que el capital social del departamento puede ser un factor que aporte a la seguridad. Al respecto Ellinor Ostrom indica que el capital social se forma a partir de tres variables fundamentales: confianza, acción colectiva e instituciones formales e informales (Ostrom & Ahn, 2003 en Giraldo, et. al., 2013), por lo cual este recurso puede sentar las bases de relaciones de cooperación y redes informales para resolver los problemas que enfrentan las comunidades, así como en la creación y fortalecimiento de organizaciones formales que actúan como forma de inserción en espacios sociales, económicos y políticos.

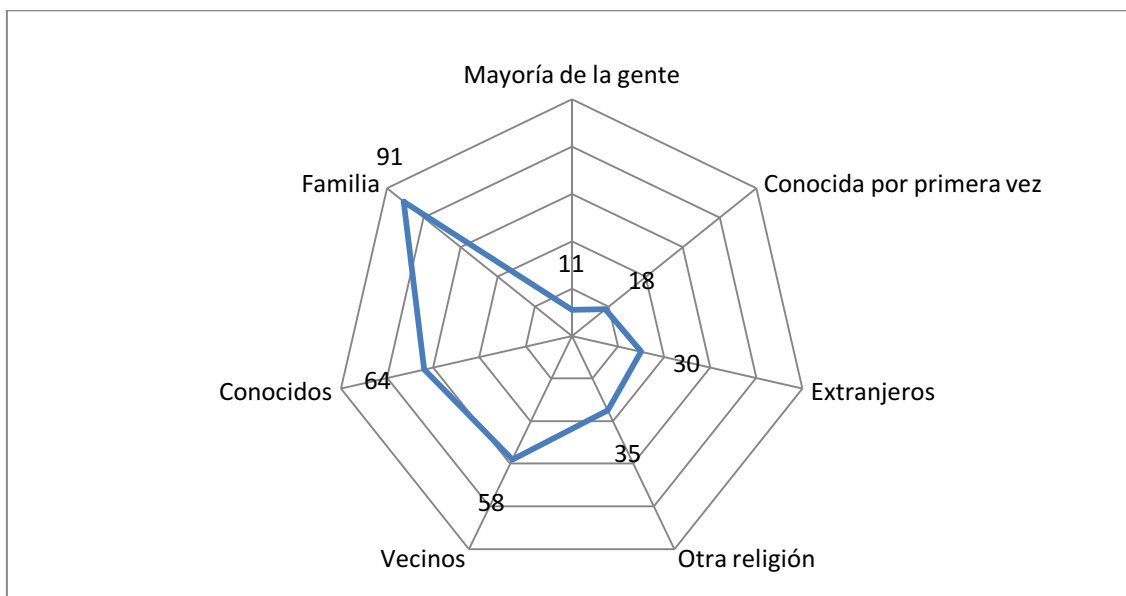
En este sentido, la confianza que tienen los ciudadanos tanto en sus familiares como en grupos específicos de su entorno barrial y local es clave para comprender posibles circunstancias de lealtad y mecanismos alternativos de



resolución de problemas, basados más en las lógicas comunitarias y no tanto en sanciones generados por actores externos. Desde el enfoque desarrollado por EAFIT, la convivencia se relaciona con uno de los dos problemas gemelos del orden social, la confianza interpersonal. En nuestras mediciones, tomamos variables tales como confianza, tolerancia, la disposición a la acción colectiva y la resolución de conflictos como variables que ayudan a operacionalizar la convivencia.

En el estudio de Giraldo, et. al. (2013) se señala que en Antioquia es la familia el grupo específico que cuenta con mayores niveles de confianza (91%), seguido por los conocidos (64%) y los vecinos (58%). La confianza en personas de otra religión y extranjeros son similares (35% y 30% respectivamente), mientras la confianza en personas que se conocen por primera vez (18%) y en la mayoría de la gente (11%) es muy baja, como se puede ver en la Gráfica 122 que representa los radios de confianza de los antioqueños.

Gráfica 122. Radios de confianza de los antioqueños

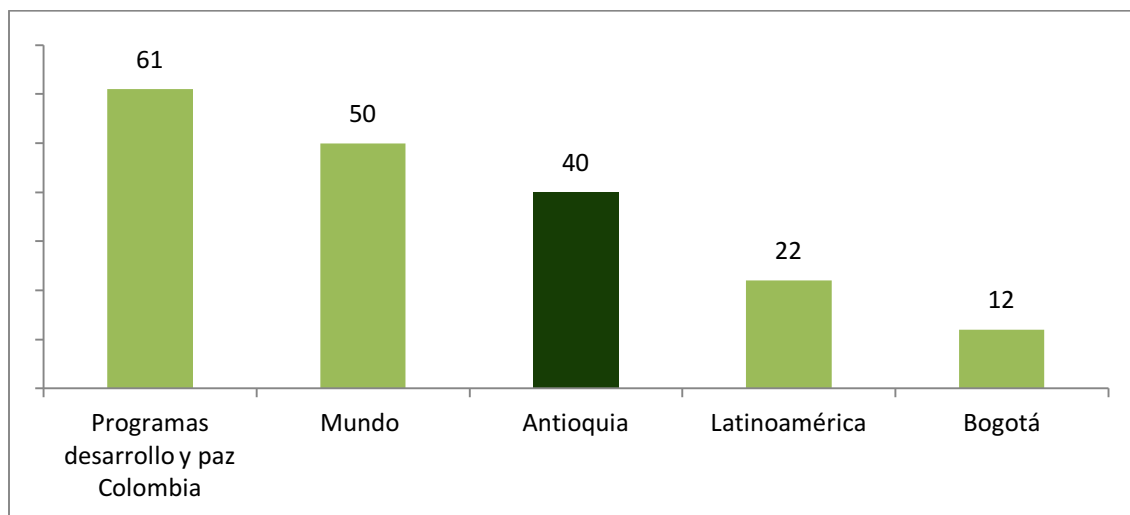


Fuente: Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013

Por su parte, los ejercicios experimentales realizados en el mencionado estudio, revelaron que el departamento en general tiene altas disposiciones a la acción

colectiva, en comparación con países de la región e incluso con Bogotá, lo cual se puede ver a continuación.

Gráfica 123. Niveles de disposición a la acción colectiva en varias regiones

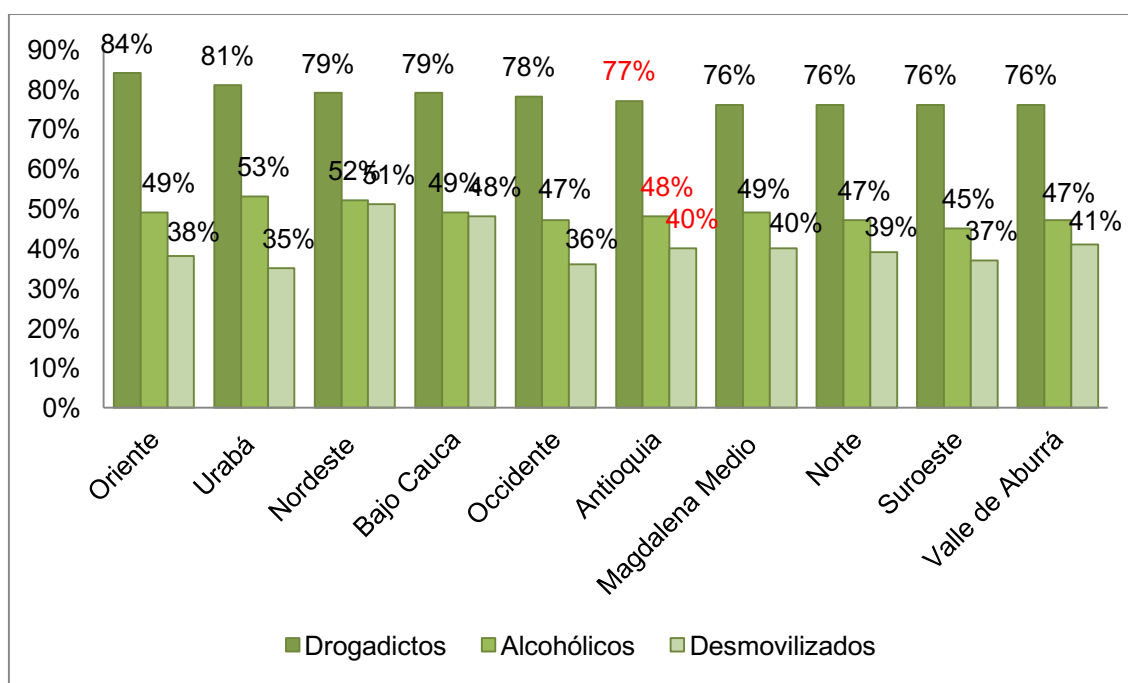


Fuente: Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013, Cárdenas et al., DNP.

Así mismo, a través de las encuestas que se realizaron luego de estos experimentos se identificó que el 73% de los participantes ha contribuido a solucionar un problema de su familia y el 46% de su comunidad, lo que hace pensar en un nivel de cooperación y confianza altos hacia la familia y medios hacia el nivel comunitario.

Finalmente, al indagar por los grupos que no quisieran tener como vecinos, los antioqueños respondieron en su gran mayoría que los drogadictos, alcohólicos y desmovilizados son poblaciones que preferirían no tener en su entorno próximo. En la gráfica 124 se pueden observar las diferencias subregionales frente a esta variable.

Gráfica 124. Grupos que no quisiera tener como vecinos



Fuente: Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013, Cárdenas et al., DNP.

En materia de resolución de problemas de interacción interpersonal, la encuesta establece que el 12% de los antioqueños reporta que cuando hay problemas de convivencia los vecinos hacen de mediadores y conciliadores y el 4% acude a organizaciones sociales. El 47% considera que en su comunidad no hay problemas y siempre se colaboran. El 27% dice que no hay problemas y que hay poca relación. La subregión donde más colaboración hay en la comunidad es Suroeste (61%) y en la que menos colaboración existe es Valle de Aburrá (43%). En los municipios pequeños la colaboración es del 56% y en los grandes del 41%.

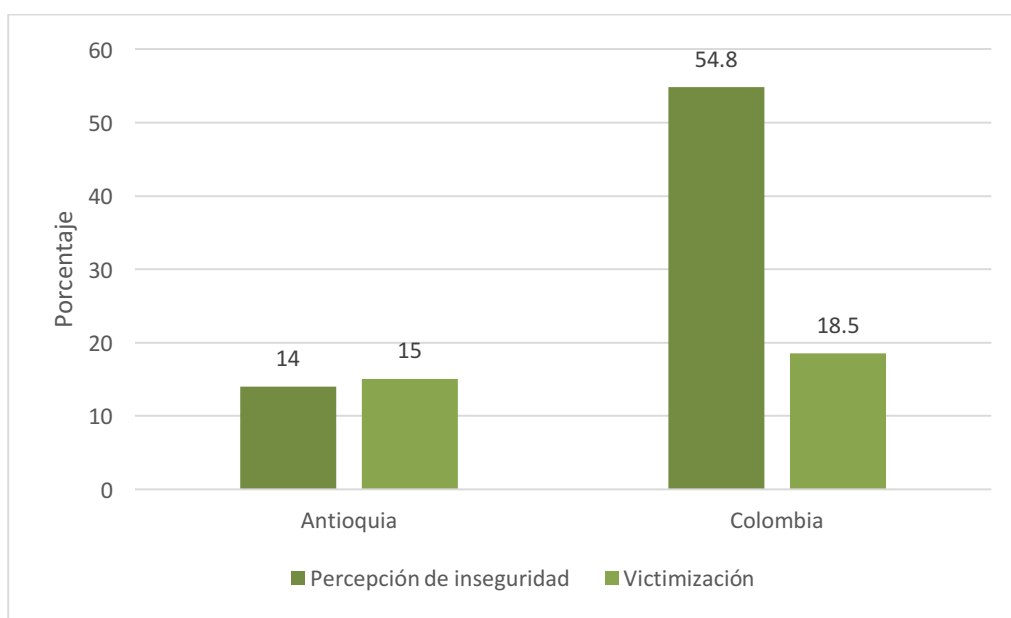
Por último, y como ya se ha mencionado al pensar en la convivencia en la región aparecen tres aspectos que se deben tener en cuenta para ser atendidos desde la política pública: el problema del consumo de alcohol en la calle (66%), los problemas que se pueden generar entre vecinos por basuras y el ruido, así como aprovechar los indicadores positivos en materia de capital social y resolución de conflictos en las zonas rurales.

2.8. Un ejercicio comparado

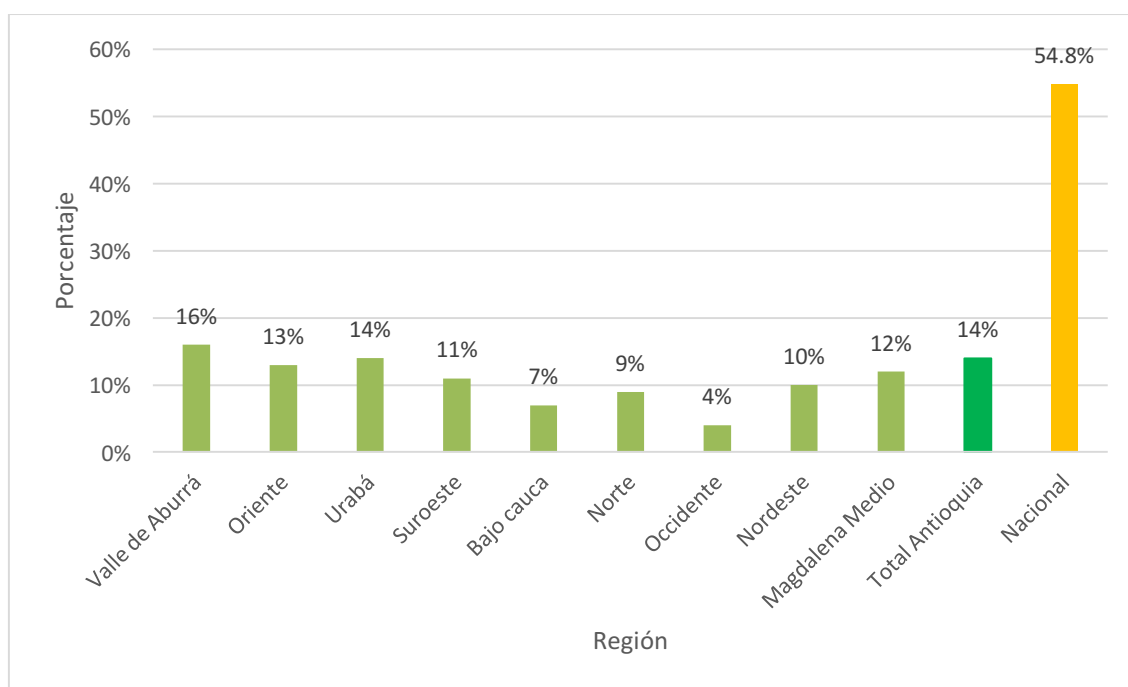
Los datos de percepción de seguridad ciudadana y victimización presentados hasta ahora pueden compararse con los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Seguridad y Convivencia 2013, adelantada por la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia y el Departamento Nacional de Estadística. En estas comparaciones también se mencionarán algunos de los datos que existen, no solo en el nivel nacional, sino también de América Latina con el fin de determinar cuál es la situación del departamento en perspectiva comparada.

La gráfica 125 compara la percepción de inseguridad y la victimización total del departamento de Antioquia y de Colombia. En efecto, mientras el 14% de los antioqueños se sienten *inseguros* o *muy inseguros* en sus municipios, el 54,8% de los colombianos lo hacen. Por otro lado, mientras en 14% de los antioqueños encuestados fueron víctimas de algún hecho victimizante, el 18,5% de los colombianos encuestados lo fue.

Gráfica 125. Percepción de inseguridad y victimización en Colombia y Antioquia



Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

Gráfica 126. Percepción de inseguridad en Colombia, Antioquia y subregiones

Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

La situación en cuanto a percepción de inseguridad en Antioquia respecto a lo que puede observarse en el ámbito nacional, contrasta enfáticamente. Mientras que por un lado el consolidado de Antioquia es del 14%, la percepción de inseguridad a nivel nacional sube al 54,8%, dejando un margen de separación de 40,8%.

A nivel subregional, el Valle de Aburrá con el 16% -seguido de Urabá con 14% y Oriente con 13%- encabeza la lista en materia de percepción de inseguridad. Si bien al comparar este dato con la situación del país la conclusión sería positiva para la subregión, al comparar Valle de Aburrá y Occidente, que registra un porcentaje de percepción de inseguridad del 4%, da cuenta del reto que subregiones como el Valle de Aburrá tienen por delante.

Después de Urabá y Oriente, Magdalena Medio aparece con un porcentaje del 12%, seguido de la región del Suroeste con 11%, el Norte con 9% y el Bajo Cauca con el 7%.

En comparación con Latinoamérica, el departamento tiene niveles de percepción de inseguridad y victimización más bajos. Considerando como referencia el informe del PNUD del año 2013 (que tomó mediciones de 2012), se identifica que el promedio del nivel de inseguridad para los 17 países incluidos es de 33,5% y teniendo en cuenta que para Antioquia es del 14%, el departamento tiene un promedio bastante inferior al latinoamericano. En esta medición del PNUD el puntaje para Colombia es del 32,5%.

De igual forma, el porcentaje de victimización en el departamento (15%) es menor que el latinoamericano que asciende a 19,4%. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de los países del estudio en comparación con el promedio departamental.

Tabla 37. Percepción de inseguridad y nivel de victimización comparadas entre Antioquia, Colombia y América Latina

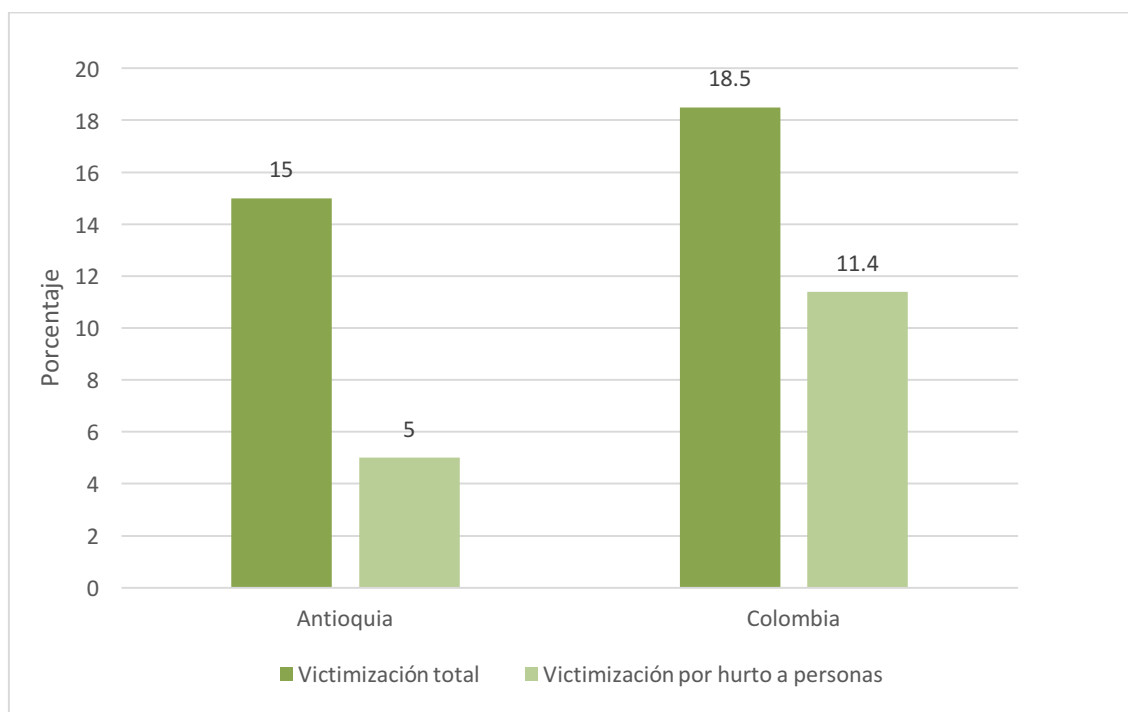
	Percepción de inseguridad	Nivel de victimización	Fuente
Antioquia 2013	14%	15%	EAFIT – Invamer
Colombia 2013	54,8%	18,5%	DANE – Alta Consejería
Latinoamerica 2012	33,5%	19,4%	PNUD
Bolivia 2012	39,8%	27,8%	PNUD
Brasil 2012	28,2%	16,4%	PNUD
Chile 2012	28,7%	14%	PNUD
Colombia 2012	32,5%	21%	PNUD
Costa Rica 2012	29,7%	17,5%	PNUD
Ecuador 2012	38,1%	28,1%	PNUD
El Salvador 2012	42,5%	17,4%	PNUD
Guatemala 2012	31,7%	20,9%	PNUD
Honduras 2012	23,2%	18,9%	PNUD
México 2012	36,8%	23,1%	PNUD
Nicaragua 2012	29%	13,5%	PNUD

Panamá 2012	19,3%	6,9%	PNUD
Paraguay 2012	24,5%	15,3%	PNUD
Perú 2012	50%	28,1%	PNUD
Rep. Dominicana 2012	38,6%	19,1%	PNUD
Uruguay 2012	32,4%	22,8%	PNUD
Venezuela 2012	43,7%	19,4%	PNUD

Fuente: Elaboración propia basada en datos Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer 2013 y PNUD 2013.

Ahora bien, la victimización más alta tanto en Antioquia como en Colombia fue por hurto a personas o carterismo, afectando en el departamento al 5% de los encuestados y en la nación al 11% de los encuestados. La Gráfica 127 compara ambos datos y el total de victimización de las dos encuestas.

Gráfica 127. Hurto a personas y victimización en Colombia y Antioquia



Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

En relación al resto de los países latinoamericanos, el promedio departamental es más bajo pues en el departamento es del 5% y en la región del 16%. La siguiente tabla muestra los datos comparados con los 18 países que incluye el informe del PNUD para este tipo de victimización.

Tabla 38. Hurto comparado entre Antioquia, Colombia y América Latina

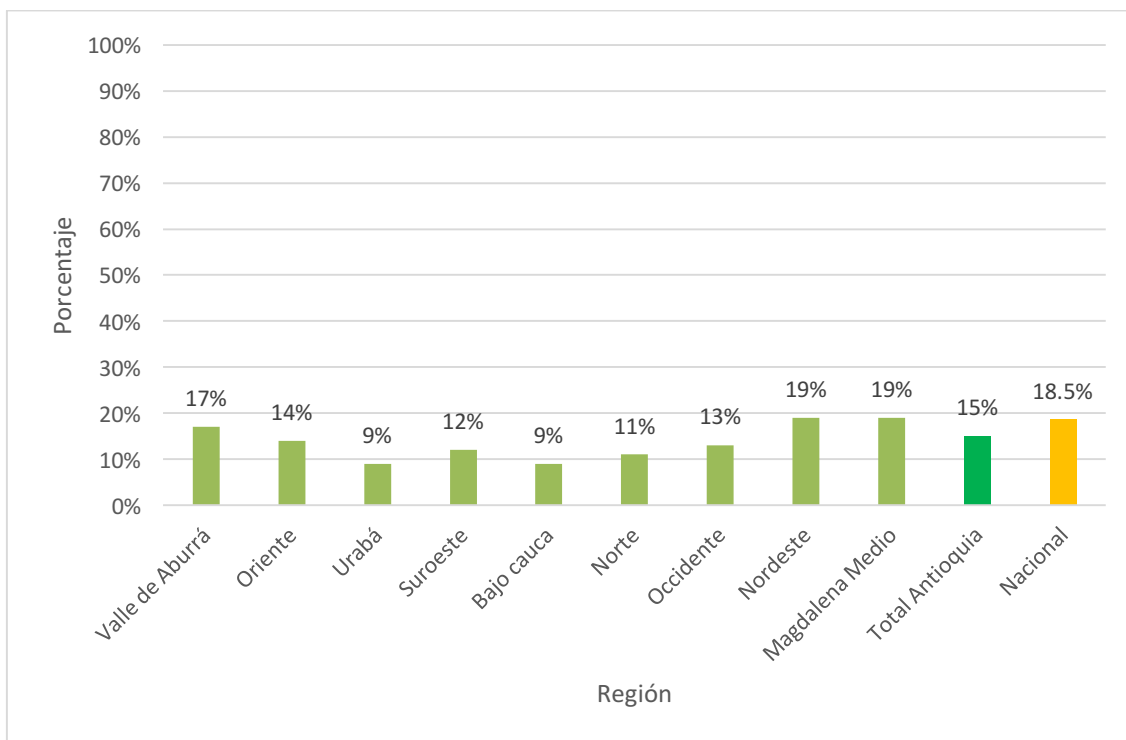
	Hurto	Fuente
Antioquia 2013	5%	EAFIT – Invamer
Colombia 2013	11,4%	DANE – Alta Consejería
Latinoamérica 2012	16%	PNUD
Argentina 2012	17,93%	PNUD
Bolivia 2012	22,56%	PNUD
Brasil 2012	12,14%	PNUD
Chile 2012	10,82%	PNUD
Colombia 2012	17,66%	PNUD
Costa Rica 2012	15,38%	PNUD
Ecuador 2012	25,19%	PNUD
El Salvador 2012	12,46%	PNUD
Guatemala 2012	17,26%	PNUD
Honduras 2012	16,11%	PNUD
México 2012	15,33%	PNUD
Nicaragua 2012	10,71%	PNUD
Panamá 2012	5,49%	PNUD
Paraguay 2012	12,88%	PNUD
Perú 2012	23,43%	PNUD
Rep. Dominicana 2012	16,61%	PNUD
Uruguay 2012	19,13%	PNUD
Venezuela 2012	17,22%	PNUD

Fuente: Elaboración propia basada en datos Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer 2013 y PNUD 2013.

En términos comparados a nivel subregional (Ver Gráfica 128) se observa una situación de variación que no puede ser dejada de lado. Subregiones como el Nordeste y el Magdalena Medio presentan una victimización del 19%, tan solo un poco más alta del consolidado nacional (18%), que difiere de las condiciones de subregiones como el Urabá y el Bajo Cauca antioqueños, los cuales registran porcentajes de 9% cada uno.

Después del Magdalena Medio y del Nordeste, el Valle de Aburrá se ubica con un 17% de victimización, la cual no deja de ser alta al contrastar nuevamente con las subregiones con porcentajes más bajos del departamento. Al Valle de Aburrá le sigue Oriente con 14%, Occidente con 13%, Suroeste con 12%, y Norte con 11%.

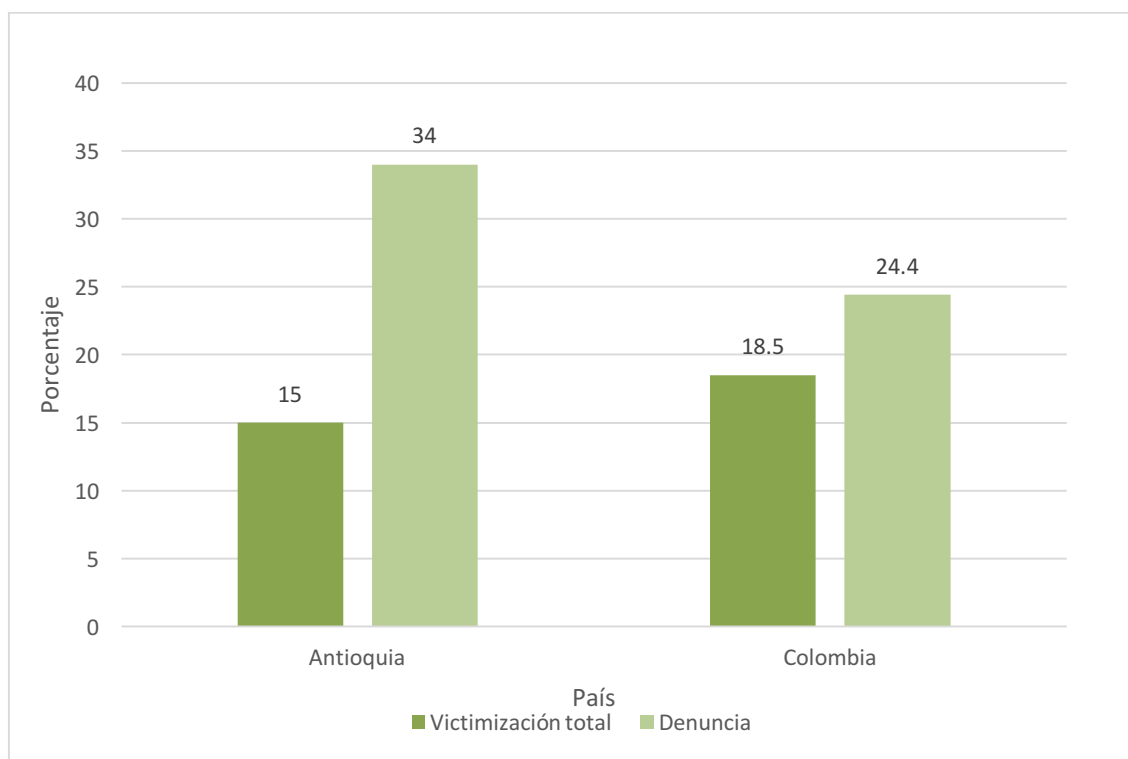
Gráfica 128. Victimización en Colombia, Antioquia y subregiones



Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

La Gráfica 129 compara los datos de victimización y denuncia en Colombia y Antioquia. En efecto, la denuncia alcanza el 34% de los casos totales de victimización en Antioquia, mientras en Colombia es de 24%.

Gráfica 129. Victimización y denuncia en Colombia y Antioquia



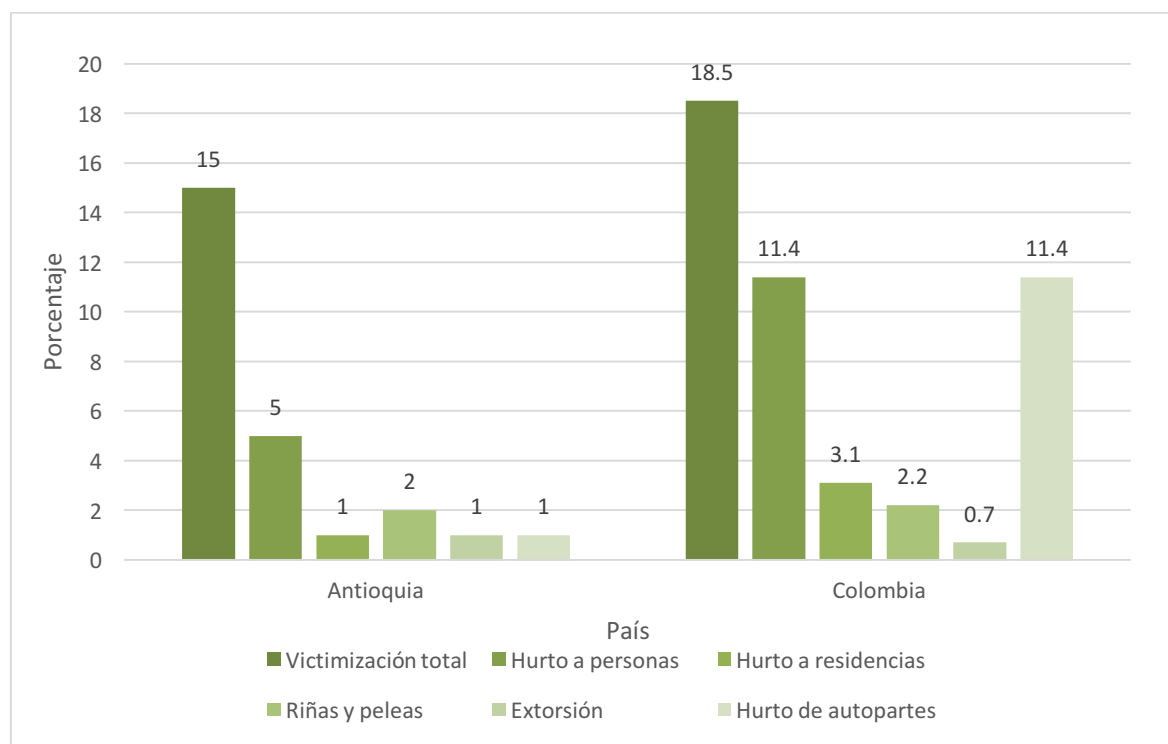
Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

La Gráfica30 compara los porcentajes de ciudadanos encuestados que sufrieron hechos victimizantes seleccionados en Colombia y Antioquia en los últimos doce meses inmediatamente anteriores a la encuesta. Así, mientras el porcentaje de victimización en Antioquia fue de 15%, en Colombia fue de 18,5%. Esto quiere decir que el 85% de los antioqueños no ha sufrido un hecho victimizante en el último año.

En Antioquia 5% de los encuestados sufrió de hurto personal, en Colombia lo hizo el 11,4% de los encuestados; en Antioquia el 1% señaló haber sufrido hurto a residencia, mientras en Colombia fue el 3,1%. En Antioquia el 2,1% fue víctima en riñas o peleas, en Colombia el 2,2%; en Antioquia el 1% de los encuestados

reportó haber sido víctima de extorsión, en Colombia, el 0,7%; y en Antioquia, el 1% fue victimizado por el hurto a autopartes, once veces menos que el 11,4% que lo sufrió en Colombia.

Gráfica 130. Victimización por delito en Colombia y Antioquia



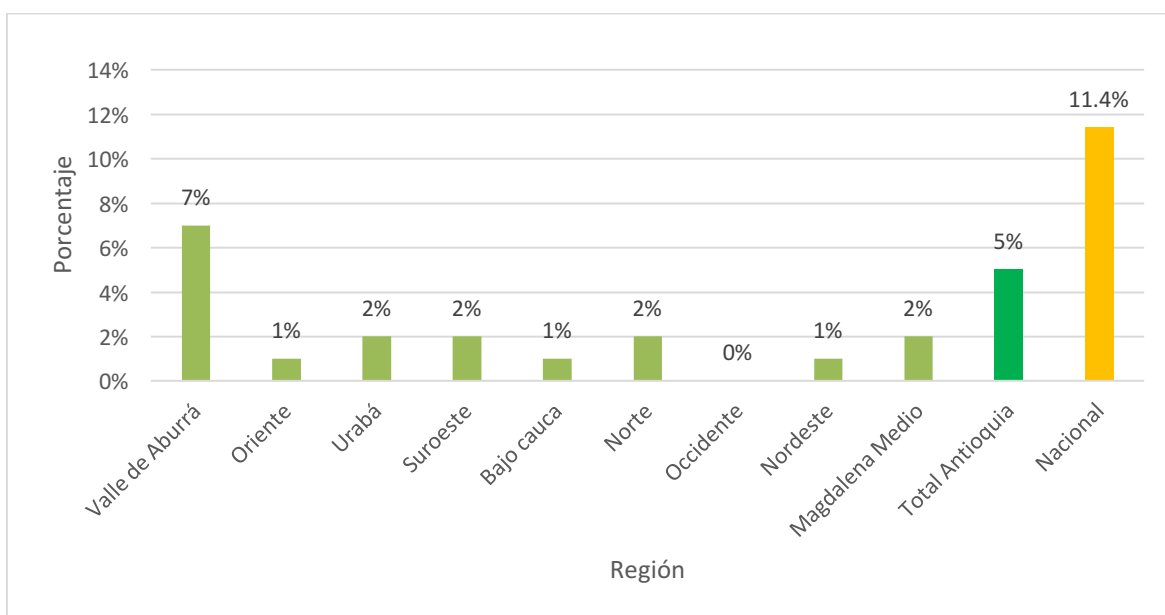
Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

La subregión del departamento que registra un mayor porcentaje de victimización en relación con el hurto, tanto en modalidad atraco como en carterismo, es el Valle de Aburrá con un 7%. Este es un factor que podría hallar su explicación en la naturaleza predominantemente urbana de este tipo de fenómenos así como de los escenarios en los que se presentan. (Ver Gráfica). Al Valle de Aburrá le siguen las subregiones de Urabá, Suroeste, Norte y Magdalena Medio, cada una con un 2% de victimización en este escenario; y Oriente, Bajo Cauca y Nordeste, con un 1%. La subregión de Occidente, por su parte, no reporta victimización en este rubro.

El porcentaje de victimización total de Antioquia en lo referente a hurto, que registra un 5%, halla su explicación en el importante peso que los municipios del Valle de Aburrá tienen para el departamento. Finalmente, la comparación Nacional

(11,4%) permite observar una diferenciación significativa, en donde el departamento se encuentra por debajo del porcentaje Nacional. No obstante, es necesario aclarar, los datos antioqueños -salvo Valle de Aburrá- dan cuenta de una victimización por hurto baja.

Gráfica 131. Victimización por hurto a personas y carterismo en Colombia, Antioquia y subregiones



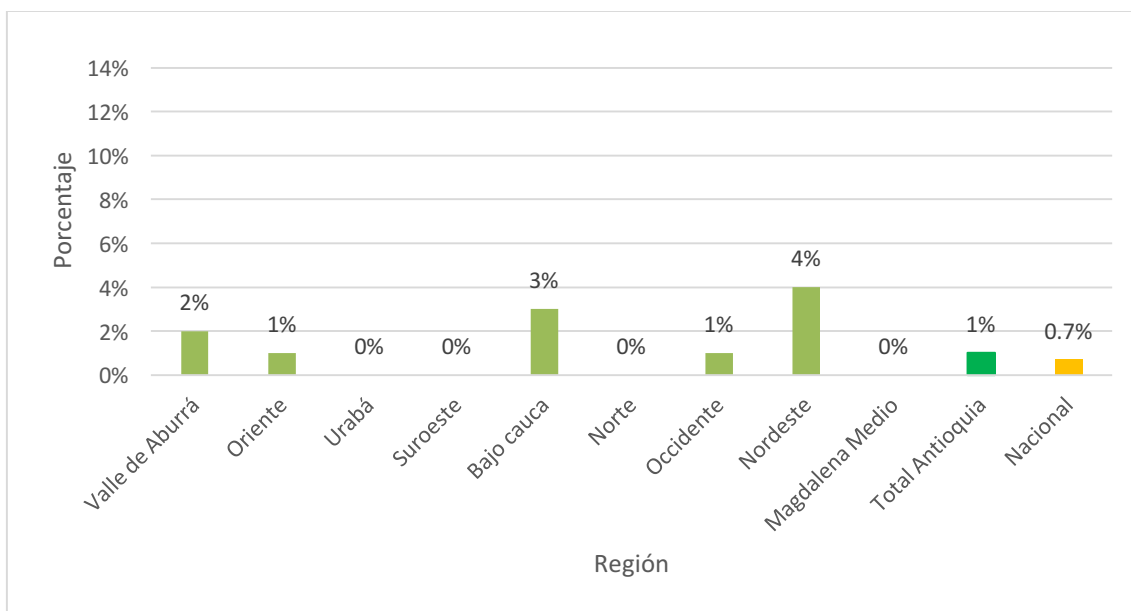
Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamex.

En lo relacionado a extorsión, las subregiones del departamento de Antioquia que registra un mayor porcentaje de victimización son el Nordeste y el Bajo Cauca, con un 4% y un 3% respectivamente. A estos le sigue el Valle de Aburrá, con una victimización del 2%; y Oriente y Occidente, con 1% cada uno. Por su parte, subregiones como Urabá, Suroeste y Norte no registran con fenómenos de este carácter.

La situación de Antioquia en su totalidad, con un porcentaje de 1%, no se aleja mucho del 0,7% de victimización por extorsión a nivel nacional. Sin embargo, es menester dejar sobre la mesa que, pese a los aparentemente bajos porcentajes generalizados, los números de Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Nordeste, superan

desde dos hasta por cuatro veces la situación del país y, por tanto, requieren de especial atención.

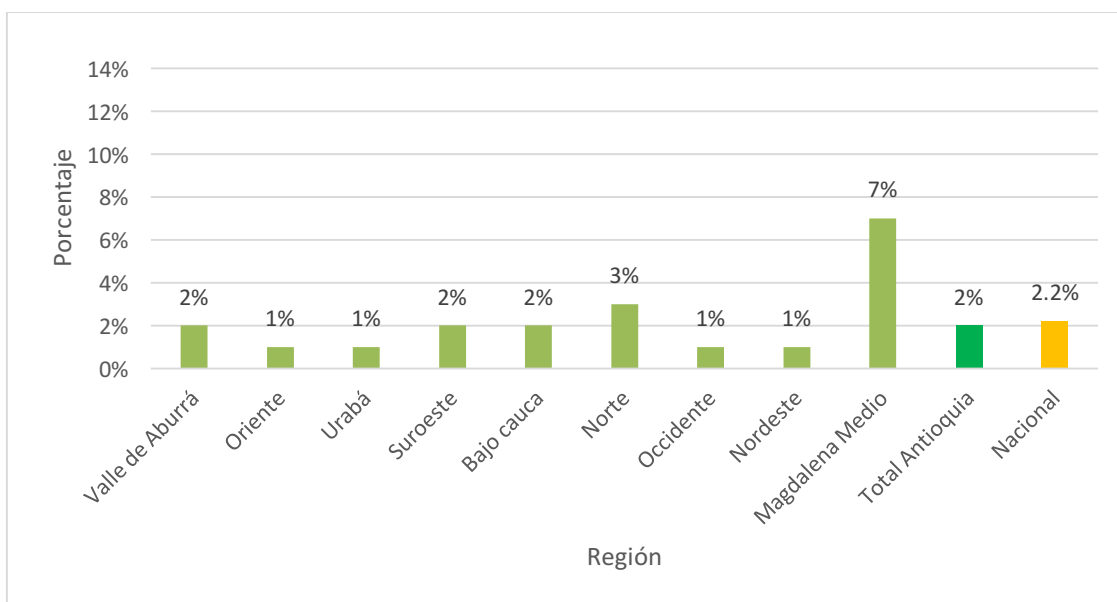
Gráfica 132. Victimización por extorsión en Colombia, Antioquia y subregiones



Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

En cuanto a victimización en función de Riñas, tanto familiares como callejeras, las subregiones de Antioquia presentan porcentajes que oscilan entre el 3% y el 1%. Con el 3% el Norte; con el 2% el Valle de Aburrá, Suroeste y Bajo Cauca; y con el 1% Oriente, Urabá, Occidente y Nordeste.

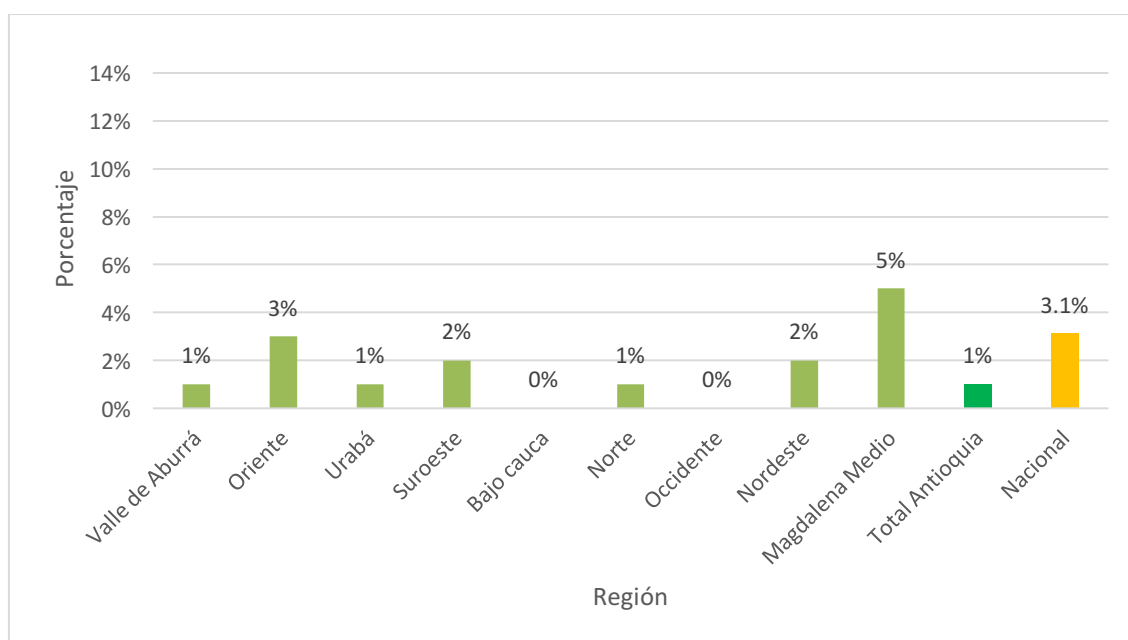
Ahora, un dato atípico que supera los porcentajes de las demás subregiones es el correspondiente al Magdalena Medio, donde un 7% de victimización alerta sobre este fenómeno. En los niveles Antioquia y Nación, con 2% y 2,2% respectivamente, la situación no se encuentra muy lejana de las subregiones del departamento antioqueño.

Gráfica 133. Victimización por riñas en Colombia, Antioquia y subregiones

Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

El porcentaje de victimización por hurto a residencias encuentra su pico mayor en la subregión del Magdalena Medio con un 5%, seguido del Oriente con 3%, y del Suroeste y Nordeste, cada uno con un registro de 2%. Finalmente, Norte registra un 1%, y Bajo Cauca y Occidente no registran victimización en este rubro del fenómeno.

Nuevamente la situación del Magdalena Medio sobresale, no solo por su comparación con las demás subregiones y con el consolidado del departamento de Antioquia (1%), sino en función del porcentaje de victimización nacional, a saber: 3,1%. En este sentido, se reitera el carácter alarmante a nivel de victimización que tiene lugar en esta subregión.

Gráfica 134. Victimización por hurto a residencias en Colombia, Antioquia y subregiones

Fuente: Alta Consejería, 2013; C.A.P EAFIT-Invamer.

En suma, las anteriores comparaciones permiten establecer que Antioquia tiene menores niveles de victimización por delitos y en general presenta un grado inferior de percepción de inseguridad que el promedio de Colombia. Esta tendencia se mantiene también al compararlo con Latinoamérica.

2.9. Análisis de correlaciones

Habiendo presentado la descripción y comparación de los resultados principales de la Encuesta, en esta subsección se ofrecen algunos elementos para la comprensión del fenómeno de seguridad en el departamento a partir de un análisis de correlaciones. Cabe advertir que las magnitudes de las correlaciones identificadas en la gran mayoría de casos no son tan altas como para generar hallazgos concluyentes en este sentido, pero en general las correlaciones permiten mostrar tendencias indicativas sobre las dinámicas de las variables.

De acuerdo a las hipótesis y a los elementos del esquema analítico, se empezará con las correlaciones que tienen que ver con percepción de seguridad. Cabe mencionar que las variables contra las cuales se definieron las correlaciones son edad, nivel educativo, ingresos mensuales, tiempo de vivir en el barrio y tiempo de vivir en la ciudad. A parte de los coeficientes de correlación, en las tablas se señalarán el error estándar y valores P de significancia estadística para identificar así cuáles son las correlaciones que resultan relevantes desde el punto de vista estadístico.

Percepción de seguridad

En este sentido, en la tabla 39 se verán los coeficientes de correlación y valores p estadísticos del cruce de las variables de percepción de seguridad en el barrio y en el municipio (actual y de hace un año).

Tabla 39. Correlaciones sobre percepción de seguridad

CATEGORÍA	V1	CORRELACIÓN	ERROR ESTÁNDAR	VALOR P	Prueba de Estadístico o Wald	Valor P
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL BARRIO (P1)	EDAD (FC_EDAD)	-0,06545	0,02635	0,065	6,170	0,013**
	EDUCACIÓN (P173)	-0,1437	0,02606	0,001	-5,514	0,000***
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,07224	0,02685	0,007	-2,691	0,004***
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,02751	0,03586	0,005	-0,767	0,221
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD	-0,06392	0,04162	0,026	-1,536	0,062

		(P169)					
PERCEPCIÓN DE	EDAD	-0,03165	0,02468	0,633	1,645	0,200	
SEGURIDAD EN EL	(FC_EDAD)						
BARRIO HACE UN	EDUCACIÓN	-0,09779	0,02471	0,606	-3,958	0,000***	
AÑO (P2)	N (P173)						
	INGRESO	-0,04152	0,02501	0,011	-1,660	0,048**	
	MENSUAL						
	(P166)						
	TIEMPO DE	-0,04117	0,0344	0,035	-1,197	0,116	
	VIVIR EN EL						
	BARRIO						
	(P170)						
	TIEMPO DE	-0,01597	0,04035	0,008	-0,396	0,346	
	VIVIR EN LA						
	CIUDAD						
	(P169)						
PERCEPCIÓN DE	EDAD	-0,01595	0,025	0,008	0,407	0,523	
SEGURIDAD EN	(FC_EDAD)						
MUNICIPIO (P4)	EDUCACIÓN	-0,1457	0,02471	0,084	-5,896	0,000***	
	N (P173)						
	INGRESO	-0,06654	0,02527	0,297	-2,633	0,004***	
	MENSUAL						
	(P166)						
	TIEMPO DE	-0,06275	0,03404	0,059	-1,843	0,033**	
	VIVIR EN EL						
	BARRIO						
	(P170)						
	TIEMPO	-0,1579	0,03944	0,220	-4,004	0,000***	
	DE VIVIR						
	EN LA						
	CIUDAD						
	(P169)						
PERCEPCIÓN DE	EDAD	-0,01158	0,02444	0,481	0,224	0,636	

SEGURIDAD EN (FC_EDAD MUNICIPIO HACE) UN AÑO (P6)	EDUCACIÓN (P173)	-0,1514	0,02418	0,648	-6,261	0,000***
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,05921	0,02472	0,006	-2,395	0,008***
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,09076	0,03349	0,290	-2,710	0,003***
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	-0,06669	0,03956	0,115	-1,686	0,046**

Coeficiente de significancia estadística al **5% (95% de confianza) y al 1%*** (99% de confianza).

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los niveles p de significancia estadística y con un grado de confianza del 95%, se puede inferir lo siguiente alrededor de esta variable:

- A menor edad, menor nivel educativo y menores niveles de ingresos mensuales existe una correlación con mayores niveles de percepción de seguridad en el barrio. Esto posiblemente sugiere la mayor inconformidad de los segmentos socioeconómicamente altos.
- La misma tendencia se confirma al indagar por la percepción de seguridad en el barrio en relación a hace un año. En esta correlación, son el nivel de educación y los ingresos mensuales los que están correlacionados inversamente (mayor niveles de percepción de seguridad están asociados con menos educación y menores ingresos).
- En el caso de las percepciones asociadas con la seguridad en el municipio también se encontró una correlación significativa con ingresos mensuales y

educación, exactamente en la misma dirección que las anteriores inferencias. Adicionalmente resultan significativas el tiempo de vivir en la ciudad y en el barrio, dado que a mayor tiempo de estar viviendo en el lugar de residencia se tiene una menor percepción de seguridad.

- En relación a la percepción de seguridad en el municipio de hace un año, las variables involucradas son las mismas (ingresos, educación y tiempo de estar viviendo) y presentan tendencias similares.

Nivel de victimización

Para poder realizar las correlaciones en torno al nivel de victimización se acudió a la variable de frecuencia de hechos, en la que se incluyen frecuencia de robos, homicidios, consumo de alcohol en la calle, interferencia policial, comportamiento racista y venta de droga en la calle. No todos los delitos tipificados se incluyen en este análisis por su pertinencia para la comprensión del fenómeno de seguridad. Para las correlaciones además de las variables básicas (ingresos, educación, edad, tiempo de vivir en el barrio y municipio) se incluyeron las relacionadas con la variable de confianza institucional.

Tabla 40. Correlaciones sobre nivel de victimización

CATEGORÍA	V1	CORRELACIÓN	ERROR ESTÁNDAR	VALOR P Prueba de Normalidad	Estadístico Wald	Valor P
FRECUENCIA DE HECHOS ROBOS (P156_1)	POLICIA (P155_POLICIA)	-0,2077	0,02379	0,004	-8,731	0,000***
	FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	-0,1034	0,0252	0,104	-4,103	0,000***
	ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	-0,1436	0,02503	0,018	-5,737	0,000***

		GOBERNACIÓN (P155_GOVERNACION)	-0,1593	0,02558	0,045	-6,228	0,000***
		MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,1307	0,0505	0,352	2,588	0,995
		GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,01413	0,08457	0,964	0,167	0,566
		PARAMILITARISMO (P155_PARAMILITARISMO)	-0,02059	0,06442	0,001	-0,320	0,375
		PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	0,0849	0,05732	0,361	1,481	0,931
		BANDAS (P155_BANDAS)	0,09317	0,05667	0,273	1,644	0,950
		EDAD (FC_EDAD)	0,002158	0,02397	0,000	0,008	0,928
		EDUCACIÓN (P173)	0,151	0,02381	0,002	6,342	1,000
		INGRESO MENSUAL (P166)	0,05187	0,02441	0,002	2,125	0,983
		TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,06804	0,03253	0,847	2,092	0,982
		TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,04635	0,03767	0,783	1,230	0,891
FRECUENCIA DE HECHOS	POLICIA (P155_POLICIA)		-0,1742	0,02625	0,214	-6,636	0,000***
HOMICIDIOS	FUERZAS		-0,05868	0,02776	0,094	-2,114	0,017**

(P156_2)	MILITARES (P155_FUERZASM)					
	ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	-0,09501	0,02759	0,020	-3,444	0,000***
	GOBERNACIÓN (P155_GOBERNAC ION)	-0,1097	0,02845	0,006	-3,856	0,000***
	MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,2076	0,05285	0,131	3,928	1,000
	GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,2219	0,08429	0,683	2,633	0,996
	PARAMILITARISM O (P155_PARAMILIT ARISMO)	0,1957	0,06474	0,015	3,023	0,999
	PANDILLAS/COMB OS (P155_PANDILLAS)	0,2854	0,05613	0,018	5,085	1,000
	BANDAS (P155_BANDAS)	0,2765	0,05534	0,124	4,996	1,000
	EDAD (FC_EDAD)	-0,08625	0,02605	0,007	10,962	0,001***
	EDUCACIÓN (P173)	0,05369	0,02654	0,026	2,023	0,978
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,03108	0,0268	0,187	-1,160	0,123
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,01741	0,03559	0,570	0,489	0,688
	TIEMPO DE VIVIR	0,02454	0,04104	0,707	0,598	0,725

		EN LA CIUDAD (P169)					
FRECUENCIA DE HECHOS	DE	POLICIA (P155_POLICIA)	-0,182	0,02704	0,051	-6,731	0,000***
CONSUMO DE ALCOHOL EN LA CALLE (P156_3)	DE	FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	-0,1594	0,02799	0,745	-5,695	0,000***
		ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	-0,1225	0,02817	0,440	-4,349	0,000***
		GOBERNACIÓN (P155_GOBERNACION)	-0,09679	0,02909	0,717	-3,327	0,000***
		MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,1692	0,05886	0,966	2,875	0,998
		GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,1807	0,09878	-	1,829	0,966
		PARAMILITARISMO (P155_PARAMILITARISMO)	0,1809	0,07335	0,960	2,466	0,993
		PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	0,311	0,06562	-	4,739	1,000
		BANDAS (P155_BANDAS)	0,2775	0,06461	0,796	4,295	1,000
		EDAD (FC_EDAD)	-0,1409	0,02634	0,224	28,615	0,000***
		EDUCACIÓN (P173)	0,08504	0,02701	0,130	3,148	0,999
		INGRESO	-0,01486	0,0274	0,434	-0,542	0,294

		MENSUAL (P166)					
		TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,04828	0,03657	-	1,320	0,907
		TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,08217	0,04215	-	1,949	0,974
FRECUENCIA DE HECHOS INTERFERENCIA POLICIAL (P156_4)	POLICIA (P155_POLICIA)	-0,07936	0,02993	0,058	-2,652	0,004***	
	FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM9)	-0,000292	0,03086	0,061	-0,009	0,496	
	ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	-0,04187	0,03098	0,044	-1,352	0,088	
	GOBERNACIÓN (P155_GOBERNACION)	-0,03838	0,0318	0,088	-1,207	0,114	
	MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,1651	0,05825	0,039	2,834	0,998	
	GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,1252	0,09416	0,311	1,330	0,908	
	PARAMILITARISMO (P155_PARAMILITARISMO)	0,147	0,07137	0,046	2,060	0,980	
	PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	0,327	0,0577	0,744	5,667	1,000	
	BANDAS	0,2819	0,05855	0,781	4,815	1,000	

		(P155_BANDAS)					
		EDAD (FC_EDAD)	-0,1781	0,0282	0,064	39,887	0,000***
		EDUCACIÓN (P173)	0,1743	0,02928	0,002	5,953	1,000
		INGRESO MENSUAL (P166)	0,04373	0,02984	0,109	1,465	0,929
		TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,0263	0,03987	0,603	0,660	0,745
		TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,04347	0,04654	0,480	0,934	0,825
FRECUENCIA DE HECHOS COMPORTAMIENT O RACISTA (P156_5)		POLICIA (P155_POLICIA)	-0,04512	0,03624	0,358	-1,245	0,107
		FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	0,01033	0,03701	0,671	0,279	0,610
		ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	-0,07847	0,03708	0,219	-2,116	0,017**
		GOBERNACIÓN (P155_GOBERNAC ION)	-0,07458	0,03826	0,011	-1,949	0,026**
		MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,1167	0,07002	0,317	1,667	0,952
		GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,1701	0,1073	0,090	1,585	0,944
		PARAMILITARISM O (P155_PARAMILIT ARISMO)	0,1266	0,08458	0,651	1,497	0,933

	PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	0,253	0,07012	0,734	3,608	1,000
	BANDAS (P155_BANDAS)	0,1636	0,07315	0,370	2,237	0,987
	EDAD (FC_EDAD)	-0,1741	0,03444	0,000	25,555	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	0,136	0,03539	0,355	3,843	1,000
	INGRESO MENSUAL (P166)	0,01133	0,03592	0,521	0,315	0,624
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,05336	0,0473	0,447	-1,128	0,130
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,004037	0,0557	0,569	0,072	0,529
FRECUENCIA DE HECHOS VENTA DE DROGA EN LA CALLE (P156_6)	POLICIA (P155_POLICIA)	-0,2018	0,02659	0,007	-7,589	0,000***
	FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	-0,1276	0,02791	0,000	-4,572	0,000***
	ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	-0,1636	0,02777	0,054	-5,891	0,000***
	GOBERNACIÓN (P155_GOBERNACION)	-0,177	0,02852	0,012	-6,206	0,000***
	MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,177	0,05466	0,104	3,238	0,999
	GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,2288	0,08579	0,791	2,667	0,996

)					
PARAMILITARISMO (P155_PARAMILITARISMO)	0,1929	0,067	0,001	2,879	0,998
PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	0,3798	0,05459	0,065	6,957	1,000
BANDAS (P155_BANDAS)	0,3457	0,05491	0,012	6,296	1,000
EDAD (FC_EDAD)	-0,04909	0,02645	0,024	3,445	0,063
EDUCACIÓN (P173)	0,1166	0,02668	0,052	4,370	1,000
INGRESO MENSUAL (P166)	0,02416	0,02721	0,149	0,888	0,813
TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,1037	0,03642	0,011	2,847	0,998
TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,1171	0,04252	0,282	2,754	0,997

Coeficiente de significancia estadística al **5% (95% de confianza) y al 1%*** (99% de confianza).

Fuente: Elaboración propia.

Reiterando un grado de confianza del 95%, los coeficientes de significancia estadística permiten concluir lo siguiente sobre esta variable:

- En el caso de la relación entre frecuencia de un hecho delictivo, como los robos, con la confianza institucional se obtiene que una alta frecuencia de robos en el barrio se correlaciona con menores niveles de confianza en la Policía, las Fuerzas Militares, la Alcaldía y la Gobernación. Ninguna otra variable resulta significativa para este delito.

- La tendencia para la variable de venta de droga en la calle es igual a la anterior. Un mayor nivel de reporte en esta supone correlación con menores niveles de confianza en Policía, Fuerzas Militares, Alcaldía y Gobernación.
- Para la frecuencia del hecho delictivo de homicidios ocurre exactamente lo mismo que en la inferencia anterior: declarar que existe una alta frecuencia en homicidios en el barrio está correlacionado con menores niveles de confianza en la fuerza pública y las autoridades territoriales. Adicional a estas variables, fue significativa la edad lo que se traduce en que está correlacionado tener menos edad con decir que se presentan más homicidios en el barrio.
- Esta misma tendencia de baja confianza institucional se corrobora al indagar por la variable de frecuencia de consumo de alcohol en la calle. También fue significativa la edad por lo cual tener menos edad se correlaciona con decir que se presenta más consumo de alcohol en la calle. Esto supone que los jóvenes son los que están percibiendo (o al menos lo reportan más) mayores niveles de homicidio y consumo de alcohol.
- La interferencia policial solo se correlaciona significativamente con la edad, lo que supone que son las personas jóvenes quienes están reportando más este delito. El comportamiento racista también muestra esta tendencia.

Confianza institucional

Para el análisis de correlaciones de la confianza institucional se tomaron como referencia cada una de las instituciones indagadas en la encuesta: Policía, Fuerzas Militares, Alcaldía, Gobernación, Milicias Urbanas, Guerrilla, Paramilitarismo, pandillas o combos y bandas. Posteriormente, se analizó la relación entre estos grupos con la percepción de seguridad.

Tabla 41. Correlaciones sobre confianza institucional

CATEGORÍA	V1	CORRELACIÓN	ERROR ESTÁNDAR	VALOR P Prueba de Normalidad	Estadístico Wald	Valor P
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN POLICIA (P155_POLICIA)	EDAD (FC_EDAD)	0,2298	0,02101	0,005	119,632	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	-0,1934	0,02195	0,000	-8,811	0,000***
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,0696	0,02279	0,579	-3,054	0,001***
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,01651	0,03042	0,008	-0,543	0,294
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	-0,06714	0,03513	0,059	-1,911	0,028**
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	EDAD (FC_EDAD)	0,09132	0,02289	0,000	15,916	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	-0,1278	0,02298	0,010	-5,561	0,000***
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,0138	0,0236	0,574	-0,585	0,279
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,05317	0,03131	0,153	-1,698	0,045**
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	-0,06298	0,03612	0,253	-1,744	0,041**
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN ALCALDIA (P155_ALCALDIA)	EDAD (FC_EDAD)	0,1727	0,02217	0,048	60,681	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	-0,1368	0,02291	0,000	-5,971	0,000***
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,03478	0,02359	0,050	-1,474	0,070
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,05305	0,03139	0,346	-1,690	0,046**

	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	-0,06984	0,03618	0,082	-1,930	0,027**
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN GOBERNACIÓN (P155_GOBERNACION)	EDAD (FC_EDAD)	0,1067	0,02335	0,000	20,881	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	-0,13	0,02363	0,000	-5,501	0,000***
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,05056	0,0243	0,015	-2,081	0,019**
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,06196	0,03232	0,510	-1,917	0,028**
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN MILICIAS URBANAS(P155_MILICIAS)	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	-0,0778	0,03732	0,489	-2,085	0,019**
	EDAD (FC_EDAD)	-0,1944	0,04703	0,000	17,086	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	0,04709	0,04791	0,666	0,983	0,837
	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,007829	0,04833	0,109	-0,162	0,436
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	-0,0354	0,06397	0,385	-0,553	0,290
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN GUERRILLAS(P155_GUERRILLA)	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	-0,003207	0,07514	0,822	-0,043	0,483
	EDAD (FC_EDAD)	-0,1075	0,07765	0,062	1,917	0,166
	EDUCACIÓN (P173)	0,0452	0,07726	0,241	0,585	0,721
	INGRESO MENSUAL (P166)	0,004322	0,07852	0,454	0,055	0,522
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,04536	0,1071	-	0,424	0,664
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,2227	0,15	-	1,485	0,931
	EDAD (FC_EDAD)	-0,2191	0,0588	0,000	13,884	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	0,1106	0,05896	0,004	1,876	0,970

PARAMILITARISMO(P155_PARAMILITARISMO)	INGRESO MENSUAL (P166)	-0,01369	0,05957	0,276	-0,230	0,409
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,02667	0,08029	0,062	0,332	0,630
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,1665	0,1039	0,051	1,603	0,945
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN PANDILLAS/COMBOS(P155_PANDILLAS)	EDAD (FC_EDAD)	-0,209	0,05246	0,509	15,872	0,000***
	EDUCACIÓN (P173)	-0,0987	0,0534	0,042	-1,848	0,032**
	INGRESO MENSUAL (P166)	0,05471	0,05328	0,145	1,027	0,848
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,02216	0,07247	-	0,306	0,620
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,07471	0,08748	-	0,854	0,803
CONFIANZA INSTITUCIONAL EN BANDAS(P155_BANDAS)	EDAD (FC_EDAD)	-0,1414	0,05123	0,000	7,618	0,006***
	EDUCACIÓN (P173)	-0,07009	0,05241	0,103	-1,337	0,091
	INGRESO MENSUAL (P166)	0,01635	0,05297	0,399	0,309	0,621
	TIEMPO DE VIVIR EN EL BARRIO (P170)	0,05481	0,07203	0,901	0,761	0,777
	TIEMPO DE VIVIR EN LA CIUDAD (P169)	0,04387	0,08428	0,392	0,521	0,699
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN BARRIO (P1)	POLICIA (P155_POLICIA)	0,2532	0,02598	0,000	9,746	1,000
	FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	0,1663	0,02758	0,085	6,030	1,000
	ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	0,1676	0,02753	0,000	6,088	1,000
	GOBERNACIÓN	0,17	0,02823	0,001	6,022	1,000

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN MUNICIPIO (P4)	DE	(P155_GOBERNACION)					
		MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,004018	0,05676	0,730	0,071	0,528
		GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	-0,1108	0,08742	0,430	-1,267	0,102
		PARAMILITARISMO (P155_PARAMILITARISMO)	-0,005221	0,06945	0,332	-0,075	0,470
		PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	-0,03452	0,06242	0,958	-0,553	0,290
		BANDAS (P155_BANDAS)	-0,01247	0,06183	0,020	-0,202	0,420
		POLICIA (P155_POLICIA)	0,3254	0,02353	0,001	13,829	1,000
		FUERZAS MILITARES (P155_FUERZASM)	0,2236	0,02561	0,004	8,731	1,000
		ALCALDÍA (P155_ALCALDIA)	0,2612	0,0252	0,019	10,365	1,000
		GOBERNACIÓN (P155_GOBERNACION)	0,2317	0,02627	0,001	8,820	1,000
		MILICIAS URBANAS (P155_MILICIAS)	0,03043	0,054	0,550	0,564	0,713
		GUERRILLA (P155_GUERRILLA)	0,04971	0,08843	0,525	0,562	0,713
		PARAMILITARISMO (P155_PARAMILITARISMO)	-0,02742	0,06487	0,081	-0,423	0,336
		PANDILLAS/COMBOS (P155_PANDILLAS)	0,02114	0,05977	0,541	0,354	0,638

BANDAS	0,01368	0,05846	0,907	0,234	0,593
(P155_BANDAS)					

Coeficiente de significancia estadística al **5% (95% de confianza) y al 1%*** (99% de confianza).

Fuente: Elaboración propia.

Las correlaciones significativas a partir del análisis son las siguientes:

- El aumento en la confianza en la Policía Nacional está correlacionada con mayor edad, menores niveles de ingresos y educación, y menor tiempo de residencia en la ciudad.
- El aumento en la confianza en las Fuerzas Militares se correlaciona con mayor edad, menor educación y menor tiempo de vivir en el barrio y la ciudad.
- El aumento en la confianza en la Alcaldía y la Gobernación se correlaciona con mayor edad, menor educación e ingresos mensuales, así como un menor tiempo de residencia en el barrio y la ciudad.
- El aumento de la confianza en milicias urbanas se correlaciona únicamente con tener menos edad. Esto supone cierto nivel de simpatía (aunque leve) de personas con menor edad con este tipo de grupos.
- La misma tendencia anterior se repite en la confianza a paramilitares, pandillas o combos y bandas. Cabe mencionar que la confianza en estos grupos es muy baja de todas formas. En el caso de las pandillas o combos también resultó significativa la variable educación, lo que significa que más confianza en estos grupos se correlaciona con tener menor educación.
- En términos de correlaciones entre confianza institucional y percepción de seguridad no se identificó ninguna significancia estadística.
- Aunque se relacionaron correlaciones que vinculaban los hechos victimizantes puntuales (riñas, corrupción, hurto a automotores, etc) con confianza institucional y percepción de seguridad, estas no son confiables desde el punto de vista estadístico, pues la base de observaciones de los hechos victimizantes es muy pequeña (por ejemplo en el caso de corrupción el número de observaciones es de 11 personas).

En relación a los análisis multivariados, a pesar que se construyeron modelos de regresión para cada uno de los posibles factores explicativos de la percepción de inseguridad en Antioquia, el coeficiente R-cuadrado de robustez de los modelos fue muy bajo por lo cual los resultados de los modelos no generaron hallazgos adicionales que resulten válidos desde el punto de vista econométrico.

3. Conclusiones y retos para la política pública

En suma, el principal aporte de este estudio es poder tener una medición empírica clara para ver prioridades de política y definir intervenciones diferenciadas en lo subregional. Las subregiones con mayor percepción de inseguridad son Vallé de Aburra, Urabá y Oriente. Las que tienen los menores niveles son Norte, Bajo Cauca y Occidente. Las subregiones con mayores niveles de victimización son Nordeste, Magdalena Medio y Valle de Aburrá, mientras que Norte, Bajo Cauca y Urabá reportan los más bajos niveles. Las subregiones que más percepción de protección tienen frente a la Gobernación son Norte, Nordeste y Oriente. Las que menos la tienen son Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Urabá.

A lo largo de este documento se han señalado diferentes hallazgos teóricos y empíricos relevantes para el análisis de la seguridad en el departamento. En primer lugar, vale la pena señalar que América Latina en su conjunto se enfrenta a un enorme desafío en términos de seguridad ciudadana. En efecto, en la región se presentan unos 100.000 homicidios al año (PNUD, 2013). De igual forma, la región plantea un desconcertante escenario en el que el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la industrialización parcial de la economía no han supuesto una mejora –todo lo contrario– de los indicadores de seguridad ciudadana. De esta forma, “entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó” (PNUD, 2013, pág. V). Algo similar parece que está ocurriendo en Colombia y en sus regiones. Pese a la grave situación, los datos comparados muestran un comportamiento positivo de los indicadores en Antioquia, tanto en materia de percepción como de victimización.

Los jóvenes son identificados como la población más involucrada en los riesgos a la seguridad ciudadana actual, pues su entorno ha sufrido profundos cambios en

los últimos años que podrían explicar algunos de los incentivos perversos que los llevan a involucrarse en la criminalidad. En efecto, las nuevas oportunidades delincuenciales, el “trampolín” social y económico presentado por el narcotráfico, y las nuevas formas de construcción de identidades se han configurado como elementos de un contexto social en el que deben desarrollarse los jóvenes (ONU-Habitat - Universidad EAFIT, 2011). En el país y en sus regiones surge la preocupación por la vulnerabilidad de los jóvenes a los incentivos simbólicos y materiales que se involucran a la hora de tomar la decisión de involucrarse con estos grupos, eso si la vinculación no es forzosa. Como se mostró en este informe, aunque leve, en Antioquia estos grupos al parecer gozan de un legitimidad creciente entre algunos jóvenes.

Los datos presentados en el contexto que abre este informe, muestran que aunque existan particularidades (sobre todo asociadas al Conflicto armado y la influencia del narcotráfico) los fenómenos de seguridad ciudadana en Colombia no son necesariamente diferentes de los que enfrentan otros países de América Latina. En efecto, la preocupación por la percepción de seguridad, el incremento del hurto como principal victimización cotidiana de los ciudadanos y el papel activo (como víctimas y victimarios) de los jóvenes en los asuntos de seguridad son todos puntos comunes que comparten las regiones colombianas con el resto de la región. Al parecer en toda América Latina se ha vivido una urbanización de los patrones de inseguridad, y una presión dada por prevalencia del hurto y la evidencia las limitaciones de medidas de macrosecuritizadores de autoridades aún orientadas por las doctrinas de seguridad nacional y orden público.

Por otro lado, la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, señala que “entre los desafíos estructurales [a la seguridad en Colombia] se encuentran los relacionados con el proceso de urbanización del país y sus complejidades, el incremento del mercado de bienes y servicios y los riesgos que esto implica en cuanto a propiciar el delito, la existencia –aunque menguada– de grupos armados ilegales y de narcotráfico en sus diversas manifestaciones –entre éstas su incidencia en patrones culturales y en grupos etarios, en particular en los jóvenes,

y redes delincuenciales y de organización criminal ligados a ese fenómeno—, y la presencia precaria del Estado en algunos municipios, a pesar de avances significativos en materia de institucionalidad pública y privada y sus logros en el mejoramiento de la calidad de vida” (Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, p. 2).

Así pues, aunque la política señala la reducción de la incidencia de los Grupos Armados ilegales en el delito y la violencia, “persiste su capacidad de adaptación, aprendizaje y transferencia de prácticas criminales, en especial por medio de nuevas modalidades de delincuencia organizada que también se expresa a escala urbana, que oscilan desde acciones de carácter terrorista hasta la operación de diversas actividades legales e ilegales relacionadas con el narcotráfico, como oficinas de cobro, lavado de activos, microtráfico de drogas y venta de armas, piratería terrestre, juegos de suerte y azar, trabajo sexual y préstamos de usura” (Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, p. 3).

Según el diagnóstico de la PNSC, existen “una serie de desafíos asociados al comportamiento ciudadano y a la falta de apropiación de los referentes básicos de cultura ciudadana”. En efecto, “entre éstos cabe señalar la condescendencia y, en ocasiones, la complicidad de miembros de la sociedad con actividades ilícitas (por ejemplo, la compra de bienes hurtados, piratas o en sitios de venta ilegal), la comisión de contravenciones, la intolerancia —que parece haber aumentado o por lo menos es más visible— y el incumplimiento de reglas informales de conducta, entre otros, que obligan a una actuación más proactiva del Estado y de la sociedad en este campo” (Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, 2011, p. 4).

En este sentido, los datos de la encuesta permiten comprender mejor las bases para generar dinámicas de construcción de una relación más estrecha entre institucionalidad y ciudadanos. Los datos muestran cómo pese a intuiciones escépticas, la gente prefiere acudir a las instituciones estatales en busca de respuestas, aunque aún exista un alto sentimiento de frustración y baja

expectativa frente a la respuesta estatal. De hecho los entrevistados en Antioquia comprenden los efectos perversos de entregarle la lealtad y la solución de los problemas de seguridad a agentes privados y e ilegales. Sin embargo, se debe actuar con celeridad y comprender el reto que implica dar a conocer de manera más concreta el abanico de instituciones y servicios que ofrece la institucionalidad formal, y que nos e reducen al servicio de policía. Preocupa la excesiva carga simbólica y de efectividad que recae sobre la Policía Nacional como la cara más visible del Estado en los territorios.

Ahora bien, las encuestas de victimización del delito tienen el objetivo general de “intentar comprender los delitos que no estaban bien identificados en las estadísticas policiales, [convertirse en] una herramienta de investigación para ayudar a identificar aspectos del delito y la victimización que las fuentes administrativas no podían capturar fácilmente” (UNODC, 2009, p. 11). Las encuestas de victimización “son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y su público a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos” (UNODC, 2009, p. 9).

En efecto, son utilizadas para mejorar la información sobre los fenómenos de delito y violencia de la sociedad y la relación que las personas establecen con estos. Las encuestas recogen información que puede ser utilizada para que los tomadores de decisión diseñen políticas de seguridad utilizando información confiable sobre la situación de inseguridad que viven sus ciudadanos, desde los datos objetivos así como sus percepciones. En este sentido, “la naturaleza, grado y consecuencias de la actividad criminal, así como la percepción del público sobre su propia seguridad son cuestiones que tienen una influencia directa e indirecta sobre la calidad de vida de la gente” (UNODC, 2009, p. 13).

Es así como las encuestas de victimización se concentran sobre todo en medir los delitos que más se relacionan con la experiencia vital de los ciudadanos. En efecto, delitos contra su propiedad y delitos o violencia contra su integridad física. De igual forma, suelen preguntar por la relación del ciudadano con algunos



aspectos clave de su seguridad, como su experiencia como víctima y sus efectos en asuntos como su percepción de seguridad; la confianza que tiene en las autoridades y los efectos que esto puede tener en su disposición a denunciar un delito; y aspectos socio demográfico básicos para efectos comparativos (UNODC, 2009, p. 23).

Las autoridades de todos los niveles territoriales, deben comprender que temas como la seguridad y la convivencia, donde el ciudadano corre el riesgo de ser victimizado, son hoy el terreno en el que los Estados se juegan la lealtad, obediencia y legitimidad de sus ciudadanos. En lugares como América Latina ese terreno está poblado de competidores y antagonistas que buscan erosionar las relaciones cívicas y democráticas para generar ordenes favorables a las lógicas oportunistas y violentas que son la base de la reproducción de su actividad criminal y de sus sistemas de relación autoritaria. En Antioquia, pese a los resultados positivos de la encuesta, este es un terreno aun por poblar institucionalmente para ganar mentes y corazones.

La última década ha significado una reducción sostenida en la tasa de homicidio de Antioquia, sin embargo, continúa siendo uno de los departamentos más violentos del país (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 129). Respecto a las tendencias en el homicidio –de entrada el indicador objeto más sensible en términos de medición de seguridad-, se puede establecer que el comportamiento del homicidio en los municipios del Valle de Aburrá comúnmente se asocia al de las demás subregiones del departamento. Sin embargo, “el comportamiento de las otras ocho regiones dista de ser homogéneo” (Giraldo, Casas, Méndez, & Eslava, 2013, pág. 130). En efecto, Antioquia supone un departamento duramente afectado por fenómenos como el desplazamiento forzado, el secuestro y los eventos con minas anti persona, viviendo bajo los rigores de todas las fases recientes del conflicto armado colombiano y los fenómenos de crimen organizado y violencia del país. Sin embargo, la encuesta permitió ver la transición en términos de estas dinámicas, lo cual llama a una extrema atención e interpretación

de estos datos en esa dirección, esto para evitar las espirales cada vez más complejas de violencias que el PNUD advierte en su informe.

De acuerdo a las dos hipótesis mencionadas en el capítulo anterior es posible concluir que el departamento de Antioquia presenta niveles menores de victimización y percepción de inseguridad que el promedio colombiano y latinoamericano.

Retomando la hipótesis 1: “Los niveles de victimización no son equivalentes a las percepciones ciudadanas en materia de seguridad”, se observa que en el departamento no aplica esta hipótesis. Es decir, mientras en la mayoría de los países del continente (e incluso Colombia en general) la percepción de inseguridad es mayor que el nivel de victimización, en Antioquia los dos porcentajes son muy similares, lo cual supone que la distancia entre lo objetivo y lo subjetivo es mínima. Esto puede ser muy útil para las autoridades públicas en tanto es muy probable que cualquier logro en la disminución de las cifras objetivas de la seguridad, pueden repercutir en menores niveles de inseguridad percibida.

Frente a la hipótesis 2: “La confianza hacia las instituciones del Estado no es homogénea y se relaciona con los niveles de percepción de seguridad de los ciudadanos”, cabe mencionar que la primera parte de esta proposición se cumple en tanto los niveles de confianza institucional son diferentes dependiendo del actor y esas variaciones también se reflejan en el nivel de contribución relativo al logro de la seguridad. Por ejemplo, las personas creen que la Policía y las Fuerzas Armadas contribuyen mucho más a la seguridad, mientras que la Alcaldía y la Gobernación lo hacen en menor medida.

No obstante, la segunda parte de la hipótesis relacionada con el eventual vínculo entre percepción de seguridad y confianza no pudo ser comprobada en las correlaciones. A pesar de esto, lo que sí se identificó con certeza es que el hecho de percibir una mayor frecuencia de hechos delictivos en el barrio, está correlacionado con menor confianza institucional.

Este esquema analítico para la comprensión integral de los fenómenos de seguridad y convivencia ciudadana basado en percepción de inseguridad, victimización y confianza institucional resulta bastante útil para entender que los modelos explicativos de seguridad son complejos y que parten no solo actitudes y predisposiciones en los ciudadanos; sino de las transformaciones comportamentales reflejadas en las prácticas cotidianas, y en decisiones que toman los individuos respecto a su vida, lugar de residencia, compra de bienes y en general, elementos que se relacionan con el nivel de bienestar percibido en sus entornos locales. Es importante repensar la relación entre bienestar percibido y temas asociados a la seguridad y la convivencia.

Adicionalmente, el esquema permite ver la importancia de las instituciones y el tipo de relaciones que se constituyen entre la ciudadanía y el Estado. Es vital reiterar que la naturaleza de esas relaciones puede generar que las acciones estatales tengan un mayor impacto en el corto, mediano y largo plazo, o por el contrario pueden constituir esfuerzos aislados, ineficaces y desprovistos de legitimidad entre las comunidad.

Como lo han recomendado especialistas como Felbab-Brown (2013, 259-262) pensar en la seguridad y la convivencia en América implica no olvidar que es un reto relacionado íntimamente con la construcción de Estado en el nivel subregional. Pensar en políticas de seguridad y convivencia en el nivel subnacional, implica pensar en “traer” al Estado a los territorios lo que requiere un compromiso de largo plazo, sobre todo en materia de seguridad. Dichas políticas deben concertarse a través de la coordinación institucional entre diversos niveles de gobierno, a través de las diferentes secretarías departamentales y en conexión con los gobiernos locales; con el fin de establecer lineamientos departamentales para desarrollar el Plan de desarrollo en materia de seguridad profundizando la aplicación de la Ley y Estado de Derecho, así como pensar en los ‘efectos cascada’ que en materia de seguridad tienen las políticas socioeconómicas.

Resultados y retos para la política pública en Antioquia

Finalmente, en el marco de la aplicación de la Encuesta, los principales hallazgos se pueden resumir en los siguientes:

Tabla 42. Resumen de hallazgos generales

Resumen de hallazgos
El 67% de los antioqueños encuestados se siente seguro en su barrio o vereda.
El 21% de los antioqueños encuestados considera que la seguridad mejoró en su barrio o vereda en el último año. El 10% que empeoró.
El 54% de los antioqueños encuestados se siente seguro en su municipio.
El 16% de los antioqueños encuestados considera que la seguridad mejoró en su municipio en el último año. El 18% que empeoró.
El 88% de los antioqueños encuestados conoce a la Policía. El 55% conoce a la Fiscalía.
El 47% de los antioqueños encuestados califica como buena la labor de la Policía, el 40% como regular y el 10% como mala.
El 54% de los antioqueños encuestados califica la labor de la Fiscalía como buena, el 30% como regular, el 8% como mala y el 8% no sabe.
El 11% de los antioqueños encuestados ha visto a un funcionario cometer un abuso. El 88% de los casos, fue un miembro de la Policía.
El 59% de los encuestados considera que la mejor opción para resolver un problema común es acudir a las autoridades.
El 85% de los antioqueños encuestados no sufrió ningún hecho victimizante o problema de convivencia en el último año.
El 3% de los antioqueños encuestados fue víctima de hurto personal en el último año. El 2% fue víctima de carterismo.
El 12% de los antioqueños encuestados conoce a alguien que fue víctima de hurto a personas en el último año. El 9% conoce a alguien que fue víctima de hurto de vehículo.
El 34% de los antioqueños encuestados que fueron víctimas de un delito lo denunciaron. El 75% de esas denuncias no tuvo ningún efecto.

El 42% de los antioqueños encuestados considera que la Policía contribuye mucho o bastante a la seguridad.

El 38% de los antioqueños encuestados se siente muy o bastante protegido por la Policía.

El 26% de los antioqueños encuestados se siente muy o bastante protegido por su alcaldía. El 24% se siente protegido por la Gobernación.

El 69% de los antioqueños encuestados ha oído de las actividades culturales que se adelantan en su municipio. El 43% ha participado de ellas.

El 35% de los antioqueños encuestados considera que un acuerdo de paz entre el Gobierno –Nacional y la guerrilla de las Farc mejoraría la seguridad e su municipio. El 11% que la empeoraría.

Fuente: Elaboración propia

Aunque ya se mencionaron en la sección de correlaciones y en la explicación de las hipótesis, los hallazgos en términos del análisis correlacional son los siguientes:

- A menor edad, menor nivel educativo y menores niveles de ingresos mensuales existe una correlación con mayores niveles de percepción de seguridad en el barrio. Esto posiblemente sugiere la mayor inconformidad de los segmentos socioeconómicamente altos.
- La misma tendencia se confirma al indagar por la percepción de seguridad en el barrio en relación a hace un año. En esta correlación, son el nivel de educación y los ingresos mensuales los que están correlacionados inversamente (mayor niveles de percepción de seguridad están asociados con menos educación y menores ingresos).
- En el caso de las percepciones asociadas con la seguridad en el municipio también se encontró una correlación significativa con ingresos mensuales y educación, exactamente en la misma dirección que las anteriores inferencias. Adicionalmente resultan significativas el tiempo de vivir en la ciudad y en el barrio, dado que a mayor tiempo de estar viviendo en el lugar de residencia se tiene una menor percepción de seguridad.

- En relación a la percepción de seguridad en el municipio de hace un año, las variables involucradas son las mismas (ingresos, educación y tiempo de estar viviendo) y presentan tendencias similares.
- En el caso de la relación entre frecuencia de un hecho delictivo, como los robos, con la confianza institucional se obtiene que una alta frecuencia de robos en el barrio se correlaciona con menores niveles de confianza en la Policía, las Fuerzas Militares, la Alcaldía y la Gobernación. Ninguna otra variable resulta significativa para este delito.
- La tendencia para la variable de venta de droga en la calle es igual a la anterior. Un mayor nivel de reporte en esta supone correlación con menores niveles de confianza en Policía, Fuerzas Militares, Alcaldía y Gobernación.
- Para la frecuencia del hecho delictivo de homicidios ocurre exactamente lo mismo que en la inferencia anterior: declarar que existe una alta frecuencia en homicidios en el barrio está correlacionado con menores niveles de confianza en la fuerza pública y las autoridades territoriales. Adicional a estas variables, fue significativa la edad lo que se traduce en que está correlacionado tener menos edad con decir que se presentan más homicidios en el barrio.
- Esta misma tendencia de baja confianza institucional se corrobora al indagar por la variable de frecuencia de consumo de alcohol en la calle. También fue significativa la edad por lo cual tener menos edad se correlaciona con decir que se presenta más consumo de alcohol en la calle. Esto supone que los jóvenes son los que están percibiendo (o al menos lo reportan más) mayores niveles de homicidio y consumo de alcohol.
- La interferencia policial solo se correlaciona significativamente con la edad, lo que supone que son las personas jóvenes quienes están reportando más este delito. El comportamiento racista también muestra esta tendencia.
- El aumento en la confianza en la Policía Nacional está correlacionada con mayor edad, menores niveles de ingresos y educación y menor tiempo de vivir en la ciudad.

- El aumento en la confianza en las Fuerzas Militares se correlaciona con mayor edad, menor educación y menor tiempo de vivir en el barrio y la ciudad.
- El aumento en la confianza en la Alcaldía y la Gobernación se correlaciona con mayor edad, menor educación e ingresos mensuales y menor tiempo de vivir en el barrio y la ciudad.
- El aumento de la confianza en milicias urbanas se correlaciona únicamente con tener menos edad. Esto supone cierto nivel de simpatía (aunque leve) de personas con menor edad con este tipo de grupos.
- La misma tendencia anterior se repite en la confianza a paramilitares, pandillas o combos y bandas. Cabe mencionar que la confianza en estos grupos es muy baja de todas formas. En el caso de las pandillas o combos también resultó significativa la variable educación, lo que significa que más confianza en estos grupos se correlaciona con tener menor educación.
- En términos de correlaciones entre confianza institucional y percepción de seguridad no se identificó ninguna significancia estadística.
- Aunque se relacionaron correlaciones que vinculaban los hechos victimizantes puntuales (riñas, corrupción, hurto a automotores, etc) con confianza institucional y percepción de seguridad, esta no son confiables desde el punto de vista estadístico, pues la base de observaciones de los hechos victimizantes es muy pequeña (por ejemplo en el caso de corrupción el número de observaciones es de 11 personas).

Otro de los aportes que se infiere de este análisis correlacional es que variables como la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos e incluso el tiempo que una persona lleva viviendo en un barrio o municipio, pueden ayudar a entender posibles simpatías frente a las instituciones y también disposiciones para identificar hechos delictivos. Esto se refleja por ejemplo en que los jóvenes son los que más identifican comportamientos asociados a consumo de alcohol y venta de droga en la calle, por razones que se deben estudiar más a fondo pero que cuya solución tenga en cuenta la distancia que frente a la institucionalidad formal

percibe y define al joven, sobre todo cuándo percibe que la presencia del estado se da a través de la interferencia con su vida cotidiana.

Finalmente y frente a los resultados de la Encuesta y los aprendizajes provenientes de la literatura internacional y las experiencias mundiales y regionales, se identificaron los siguientes retos de política pública agrupados por ejes temáticos:

Seguridad ciudadana

- Los retos de seguridad ciudadana son sobre todo urbanos, por lo cual la política debería ser sensible a la variación de mecanismos de intervención de acuerdo al ámbito urbano y rural.
- Las subregiones que han sufrido mayores dificultades en términos de seguridad pública (Bajo Cauca y Urabá, por ejemplo) cuentan con menores niveles de victimización y mayores grados de percepción ciudadana favorable. La reflexión frente a esto es que la mejoría, aunque mínima, de situaciones extremas de violencia (como en el caso de estas regiones), puede incrementar exponencialmente la percepción de seguridad.
- Metodológicamente las aparentes contradicciones entre los factores subjetivos (percepciones) y datos objetivos de este fenómeno corroboran la necesidad de una aproximación compleja y multivariada a las causas y efectos de la seguridad en la vida de los ciudadanos. La salida y el inicio de dicha aproximación yace en una fuerte estrategia de medios con impacto local en el que se muestren los avances y aciertos no solo en materia de seguridad y convivencia, sino además de otras políticas implementadas hasta el momento.
- En territorios rurales, las reglas informales (asociadas con las convenciones, las normas sociales y los órdenes morales de los pobladores) explican la gestión de la seguridad y la convivencia mientras en entornos urbanos lo hacen las reglas formales. En ambos escenarios cobra relevancia la confianza como un elemento fundamental, alimentado por la relación comunitaria y el respeto por la ley (como ya se dijo en lo rural, principalmente la confianza en las

personas y en lo urbano, principalmente en las instituciones). Por esta razón hay que seguir dirigiendo esfuerzos hacia la construcción de confianza interpersonal e institucional en todas las subregiones con énfasis en las interacciones locales. Un buen foco de reproducción de estos esfuerzos deben ser los Parques educativos y las actividades de Antioquia la más educada.

Victimización

- La encuesta refleja un bajo índice de victimización en Antioquia, en comparación con otras regiones, con Colombia y con otros países. En efecto, mientras el 18,5% de los colombianos encuestados en 2013 señalan victimización, el 15% de los antioqueños lo hacen.
- Los hechos victimizantes, aunque pocos, tienen un impacto exponencial en la percepción de inseguridad, por lo que la política debe generar estrategias que combatan las causas de la victimización en los barrios y municipios, pero a la vez pensar en dispositivos comunicativos (gubernamentales y comunitarios) que mitiguen el efecto perverso de la victimización sobre la percepción de inseguridad.
- Respecto al posible “subregistro” de los datos de extorsión, hay dos hipótesis que invitan a seguir reflexionando alrededor de este fenómeno: (1) las personas no asumen la extorsión como tal, sino como un servicio de seguridad o justicia y por tanto no lo reportan, o (2) la extorsión se concentra en ciertos miembros de una sociedad y sus negocios por lo que su incidencia podría medirse mejor en encuestas a empresarios y sus negocios.

Percepción de seguridad

- Entre más amplio el entorno es más difícil sentirse seguro, dado que la percepción de inseguridad es generalmente más alta respecto al municipio que el barrio. Los ciudadanos parecen sentirse más inseguros a la hora de señalar su percepción cuando se amplía el territorio de la pregunta. En últimas la



conclusión para esto es que a mayor densidad poblacional menor percepción de seguridad por lo cual la política debe ser también sensible de cómo generar ambientes perceptivos de “cercanía” en los ciudadanos que permitan que el entorno se vuelva más próximo y por ende aumenten la probabilidad de que las personas se sientan protegidas.

- La percepción ciudadana como elemento de estudio de la situación de seguridad es fundamentalmente urbana. Los municipios pequeños y las subregiones más rurales parecen escapar a las victimizaciones y los problemas de percepción de las zonas urbanas, lo cual refuerza la idea de estrategias diferenciadas entre el ámbito rural y urbano. De todas formas se sugiere continuar profundizando el perfil de las comunidades rurales de las 9 subregiones, las problemáticas y sus buenas prácticas en materia de seguridad y convivencia.
- La reflexión sobre el poco impacto que aparentemente tiene la operatividad de la policía en la percepción de seguridad de las personas introdujo en la discusión la pregunta por las estrategias de comunicación de las autoridades encargadas de la seguridad. En este sentido, se rescata además el enorme reto representado en “contener” la gran cantidad de noticias negativas que a nivel nacional se transmiten y que pueden afectar la percepción local, sin que necesariamente los fenómenos que se presenta en “Bogotá, Medellín y Cali, se puedan ver en El Bagre o Zaragoza”.
- Es necesario pensar en estrategias de blindaje frente a la corrupción en materia de seguridad ciudadana y de la actividad y gestión de los actores involucrados en el nivel local, en particular de los actores involucrados desde la rama judicial.

Confianza institucional

- Se evidencia un gran desconocimiento frente a la existencia de instituciones estatales y cuál es el rol de ellas en el tema de seguridad. Este hecho lleva a que la policía se vea desbordada en las percepciones que tienen los



ciudadanos sobre sus capacidades y competencias, afectando la percepción de efectividad de la institución y ayudando a mantener bajos niveles de confianza institucional general. Así, la policía se enfrenta a un reto en sus funciones, enfoque y capital humano. Vive una situación de “sobre-exigencia” que la hace más vulnerable y puede potencialmente generar una crisis de legitimidad. Por esta razón, se deben promover formas pedagógicas para que las personas sepan que, aparte que la policía, existen otras instituciones a cargo de la seguridad.

- Los datos muestran que la Policía es la cara de la estatalidad al menos en los temas de seguridad y justicia. Esto implica un reto organizacional de coordinación y acuerdo de estrategias de policía en el nivel local que afecten su lógica organizacional.
- Lo anterior lleva a expresar la necesidad de visibilizar y ampliar los roles y funciones de los organismos de justicia, para aclarar y garantizar el acceso y la respuesta con el fin de alterar el cálculo de probabilidad negativo asociado a la sanción de un acto delictivo o a la resolución de un conflicto interpersonal.
- A pesar del poco conocimiento y los desafíos de confianza, las personas mantienen como primera opción de resolución de conflictos a la institucionalidad y no sus propias alternativas de solución de problemas. Se reitera que una estrategia de seguridad que se enfoca únicamente en la Policía es una estrategia débil y vulnerable al poner todos sus esfuerzos en una sola institución, teniendo como punto de partida que la seguridad es un asunto que convoca a muchos actores y que requiere de altos grados de sinergia interinstitucional.
- Aunque la mayoría de los encuestados señalaron la “falta de policía” como una de las principales razones para sentirse seguros o inseguros en su barrio y municipio, datos complementarios a la Encuesta indican que en las subregiones antioqueñas la presencia policial es bastante elevada. En efecto, algunas de las subregiones que más “piden policía” en la Encuesta (como Oriente y Suroeste) cuentan con altos niveles de operatividad y efectividad

policial por lo cual resultaría pertinente un análisis más profundo de esta disonancia en las percepciones ciudadanas.

- A pesar de la baja incidencia de la venta y el consumo de drogas en la percepción de inseguridad y la victimización de los antioqueños encuestados, se deben tener en cuenta que en otros escenarios una de las problemáticas más comunes y por las cuales las personas exigen muchas más acciones, es el micro-tráfico y el consumo de drogas en lugares públicos. Es posible que en este reporte exista cierto sub-registro.
- Muchos antioqueños parecen inclinados a exigir efectividad en la provisión de justicia (preocupación por castigo al delincuente y devolución de objetos robados) y a desconfiar de las instituciones, lo cual sumado a la oferta de servicios ilegales de provisión de seguridad y justicia, puede instar a pensar en escenarios en los que las autoridades públicas representan “otro” actor más en la competencia por la lealtad y la satisfacción de necesidades de la población.
- Es muy alto el porcentaje de antioqueños que acude a autoridades públicas (59%) para resolver los problemas en comparación por defenderse como se pueda (13%). El 7% declara que las Pandillas/combos prestan seguridad en el barrio, mientras que en las bandas este porcentaje es del 6%. Solo el 1% de las personas que han sido víctimas declara que las bandas son de fácil acceso y que han acudido a ellas. El 71% de los antioqueños cree que las Bandas contribuyen en nada a la seguridad. En las Pandillas este porcentaje es del 72% y en la institucionalidad es del 22% en promedio.

Cabe decir que debe incorporarse dentro de la Política un lineamiento alrededor del tema de los jóvenes, pues son identificados como la población más involucrada en los riesgos a la seguridad ciudadana actual.

Un hallazgo relevante en perspectiva de los escenarios de discusión alrededor del posconflicto lo constituye el hecho que el 44% de los antioqueños cree que su situación seguiría igual tras un acuerdo de paz, mientras el 35% dice que mejoraría y el 11% empeoraría. Aunque no es mayoría, el decir que 1 de cada 3



antioqueños tiene optimismo sobre el proceso de paz es un dato fundamental para la reflexión alrededor de políticas públicas que den cuenta de un escenario de justicia transicional en donde deben ser incluidos víctimas y excombatientes.

Resulta también muy interesante que las subregiones más optimistas frente a esto sean el Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio que históricamente han sido bastante afectadas por la violencia política y el crimen organizado. Se destaca que el Valle de Aburrá tiene el menor nivel de optimismo frente al tema. Esto es consistente con los hallazgos sobre que entre mayor sea la densidad poblacional, menor es la confianza en que el acuerdo de paz mejorará la situación en materia de seguridad. Esto es inquietante pues invita a pensar en el papel de las instituciones, sobre todo en el de la Policía, cuya gestión a pesar de ser calificada como “entre buena y regular” sigue siendo el método percibido como más eficaz para los problemas de inseguridad.

Finalmente, y como se mencionó en la presentación de las correlaciones, el tema de la confianza institucional resulta clave para el análisis de la seguridad en el departamento. En general, estos y otros datos que se han presentado revelan la importancia de una institucionalidad fuerte no solo en su capacidad burocrática, sino más importante aún en su legitimidad frente a la ciudadanía de cara a un tránsito hacia el posconflicto.

Así mismo, y dado el papel relevante también de la confianza comunitaria, una comprensión más profunda del fenómeno supone identificar que existen mecanismos de trámite de los problemas derivados de la seguridad que no solo se circunscriben a los mecanismos formales sino a las prácticas cotidianas que las comunidades han desarrollado y que en ocasiones son percibidas y comprobadas como las más eficaces.

Valga la pena recordar en este punto la evidencia presentada sobre los estudios realizados por Juan Luis Londoño (1996) en los que se daba cuenta de la íntima



relación entre capital social, educación y reducción del comportamiento violento. La clave del éxito del posconflicto, y del dilema de seguridad (Cárdenas, Casas y Méndez, 2013) que lo subyace, está en generar incentivos que conduzcan a equilibrios sociales en los que los excombatientes, las víctimas y los ciudadanos no afectados generen mecanismos de confianza para evitar interacciones que promuevan la discriminación, la intolerancia o el aislamiento de los desmovilizados, en particular, y de quienes en el pasado fueron antagonistas en la guerra.

Bibliografía

- Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. (2012). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bogotá: DNP.
- Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. (2013). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bogotá: DNP.
- Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. (2011). Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- Banfield, E. C. (1958). The moral basis of a backward society. Glencoe: The free press.
- Cárdenas, J.C. Casas-Casas, A. Méndez, N. (2013) “¿The hidden face of justice? Fairness, Discrimination and Distribution in Transitional Justice Processes”. Peace Economics, Peace Science and Public Policy. Special Issue Conflict, Crime and Violence in Colombia.
- Centro de Análisis Político CAP - Universidad EAFIT. (2007). Análisis de Indicadores de Vida en el departamento de Antioquia, 2001-2007. Medellín: Universidad EAFIT - Gobernación de Antioquia.
- CEPAL. (2008). Juventud y cohesión social en Iberoamérica: Un modelo para armar. Santiago de Chile: CEPAL.
- Corpovisionarios. (2011). Diagnóstico de Cultura Ciudadana en Medellín 2011. Medellín: Alcaldía de Medellín - Corpovisionarios.
- DANE. (2013). Metodología General de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bogotá: DANE.
- Felbab-Brown, V. (2013) Lecciones clave para los esfuerzos del Estado para afrontar la violencia urbana y el crimen organizado en América Latina. En



- Niño, C. (2013) (ed) Seguridad regional en américa Latina y el Caribe: Anuario 2013. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- Gerber, E. (2006). Comunicación de las políticas públicas: la seguridad ciudadana en la agenda. FES.
- Giraldo, J., & Muñoz, J. C. (2012). Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia. Medellín: Universidad EAFIT y Proantioquia.
- Giraldo, J., Casas, A., Méndez, N., & Eslava, A. (2013). Valores, representaciones y capital social en Antioquia. Medellín: EAFIT - SURA - Gobernación de Antioquia.
- Gobernación de Antioquia. (2012). Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, "Antioquia la más educada". Medellín: Gobernación de Antioquia.
- Gobernación de Antioquia. (2012). Seguridad ciudadana en pequeñas ciudades de Antioquia. Medellín: Gobernación de Antioquia.
- Inter-American Development Bank . (2012). Citizen Security: Conceptual Framework and Empirical Evidence.
- Lahosa, J. M. (2000). Prevención de la inseguridad urbana: compromiso de las ciudades. En H. Acero, Conversaciones públicas para ciudades más seguras. Santiago de Chile: Ediciones Sur.
- Londoño, J.L. "Violencia, psique y capital social". En Leibovich, J. (Ed) "Obra selecta de Juan Luis Londoño de la Cuesta"
- Medellín Cómo Vamos. (2013). Encuesta de percepción ciudadana Medellín 2013. Medellín: MCV.
- Medellín como Vamos. (2013). Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2012. Medellín: MCV.
- Mockus, A., Murraín, H., & Villa, M. (2012). Antípodas de la violencia: Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad de América Latina. Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Niño, C. (2013) (ed) Seguridad regional en américa Latina y el Caribe: Anuario 2013. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- ONU-Habitat - Universidad EAFIT. (2011). Libro Blanco de la seguridad y la convivencia de Medellín. Medellín: Pregón.

- Organizaciones de Estados Americanos. (2012). Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas.
- PNUD. (2013). Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas.
- PNUD; IIDH. (2011). El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso.
- Red de ciudades cómo vamos. (2012). Comparación de la percepción ciudadana sobre la calidad de vida en 10 ciudades colombianas. Bogotá.
- Ríos Rincón, R. D. (2008). Medición de la Percepción de la Comunidad sobre la Seguridad Ciudadana. Medellín: Gobernación de Antioquia - Contactos y Productos.
- Timaná, C. F. (2014). Desde la percepción: los sentimientos para la formulación de la política pública de seguridad en Medellín. Bogotá.
- UNODC. (2009). Manual para encuestas de victimización. Ginebra: Organización de las Naciones Unidas.